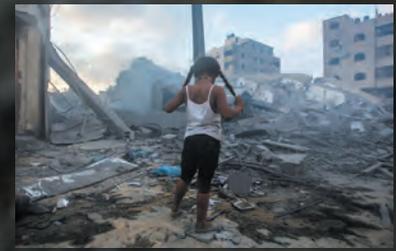


LOS DERECHOS HUMANOS EN 2019

**EDUCACIÓN
PARA LA PAZ**



*UNA DENUNCIA DE LAS
PRINCIPALES VULNERACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN 2019*



EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2019

Una visión del mundo desde la óptica de los derechos humanos y un llamamiento a nuestra conciencia

AUTOR: Kepa Pérez



Autor: Kepa Pérez

Diseño gráfico: ADDH

Colaboradores: Nekane Urrutia, Mikel Elgeta Sasiain, Jaione Rementería, Amaia Garigordobil, Andoni Iriarte, Nekane Urrutia, Xabier Arizeta.

Fuente: Agencias de noticias y prensa diaria. **Depósito legal:** SS-857

Hola amigos, un año más hemos realizado para todos vosotros esta guía de educación para la paz 2019 con la cual, a través de un recorrido por las atrocidades que la humanidad continúa cometiendo, pretendemos llegar hasta el fondo de las conciencias con el fin de poner freno a la injusticia y, por ende, a la violación de los derechos humanos.

2019 ha sido otro año más que se ha caracterizado por la venta de armas y por la violación sistemática de los más elementales derechos humanos. El gran negocio armamentístico continúa boyante con cuatro mil millones al día dedicados a las contiendas bélicas que sólo causan muerte, dolor, hambre y miseria. Parece que el mundo sigue sin aprender de los errores del pasado; parece que seguimos igual, a tenor de las escandalosas cifras de refugiados que aumentan de año en año, a tenor del hambre que sigue sin erradicarse, a tenor de la alarmante desigualdad mundial que aumenta día a día, y todo ello nos conduce a la consolidación de un mundo en el que unos pocos, atesoran las riquezas, mientras la inmensa mayoría a duras penas tiene para sobrevivir, o ni siquiera eso. Parece que la batalla por la igualdad está definitivamente perdida. Sin embargo, este año 2019 nos está empezando a demostrar que no es así. Las grandes protestas ciudadanas que se han producido en medio mundo, desde Sudamérica hasta Hong Kong, pasando por Oriente Medio, Rusia o el corazón de Europa, nos hablan de un mundo muy descontento que está al borde del estallido social, y que pretende dar un golpe de timón en la historia de la humanidad; nos habla de que los insignificantes ciudadanos, que no somos más que números para los poderosos, hemos perdido el miedo a manifestar públicamente nuestro descontento con un mundo tan desigual que impone las medidas que dicta el poder económico (FMI), que hunde países y trunca la vida a millones de personas condenándolas a la más absoluta pobreza, como por ejemplo Grecia. Un mundo dirigido por los más poderosos que pretende sustituir a los hombres por máquinas y digitalizarlo todo para seguir aumentando sus beneficios económicos.

A medida que más personas sigamos tomando conciencia de que se pueden cambiar las cosas, se podrá combatir al ejército de dictadores y corruptos y se podrá ir instaurando un nuevo orden mundial basado en la igualdad y en un mundo donde el comercio de armas sea testimonial.

Acompañamos este prólogo con la fotografía, a todas luces impactante, de una niña. Impactante no solamente por ser el vivo reflejo de una abrumadora y, por desgracia, constante violación de los derechos humanos, como es la falta de alimento provocado por la acción humana, la cual ha lacerado su cuerpo hasta el punto de impedir hasta su propia subsistencia. El verdadero impacto de esta fotografía, el motivo por el que nos turba profundamente nuestra mirada, es por su serenidad. Se encuentra al borde de la muerte por inanición y sin embargo su mirada es dulce y serena.

El mundo le ha negado lo más básico, pero su rostro, nos parece estar diciendo desde su humilde y clamoroso silencio: *“Allá vosotros con vuestra conciencia.”* *“Podéis seguir fabricando armas, conquistando riquezas, podéis quedaros con el mundo para vuestro beneficio exclusivo; podéis incluso eliminar a quienes no tenemos el más mínimo recurso para vivir porque nos habéis esquilado hasta la propia naturaleza que nos proporcionaba la vida, pero algún día vuestra riqueza será vuestra perdición y desde luego nunca llegaréis a conocer la felicidad.”* *“Yo ya no necesito nada, ahora sois vosotros quienes desesperadamente intentaréis lavar inútilmente vuestra conciencia.”*

Realmente las atrocidades que la humanidad está cometiendo, y ha cometido a lo largo de su triste periplo vital, el holocausto silencioso que supone que más de 800 millones de seres humanos pasen hambre y que la inmensa mayoría viva en la pobreza, muchos bajo regímenes dictatoriales regidos por auténticos sátrapas, mientras que una minoría que aglutina el poder solo piensa en ganar dinero, convierte al hombre en lo que ya dijo Tomas Hobbes (1588-1679) hace casi 400 años, un *“auténtico lobo para el hombre”*.

¡Dónde quedó el risueño de Rousseau!, que ingenuamente creía que el hombre era bueno por naturaleza, y que eran las circunstancias las que le envilecían...

Quizá las circunstancias sean el dinero y el poder que corrompe y envilece a la naturaleza humana hasta el extremo de convertirte en un auténtico camicero con su propia especie... Ahora es el momento de tomar conciencia, de tener la firme convicción de que es imprescindible forjar un nuevo orden mundial basado en la democracia real, un orden que ponga algún límite al desaforado enriquecimiento personal. El 1% de la población no puede poseer el doble que 6.900 millones. No sólo porque es obsceno e inmoral, sino porque su riqueza está impidiendo la vida y el desarrollo de sus semejantes.

Es hora de poner freno a sátrapas como King Jong de Corea, o a Teodoro Obiang de Guinea Ecuatorial, donde todos sus súbditos trabajan para ellos, con el beneplácito de los poderosos del mundo, a Daniel Ortega de Nicaragua, a Nicolás Maduro de Venezuela, que ha sumido el país en la pobreza y el éxodo de su población ha desestabilizado la región; o a Bashar Al Asad de Siria, que con el apoyo de Rusia, que también apoya a Maduro, continúa en el poder después de masacar literalmente a su pueblo y desestabilizar Europa. Y por supuesto a Vladimir Putin, el rey de los sátrapas, a Xi Jinping de China y a tantos mandatarios africanos que están saqueando a sus respectivos países. La toma de conciencia de todos y cada uno de nosotros puede ser la gota que colme el vaso y alumbre un nuevo orden mundial. Todo es cuestión de tiempo y decisión, aunque a veces no podamos verlo, pero queda la semilla que guarda la poderosa e imperecedera lección dada por esta niña desconocida.

Kepa Pérez
(Presidente de la ADDH)



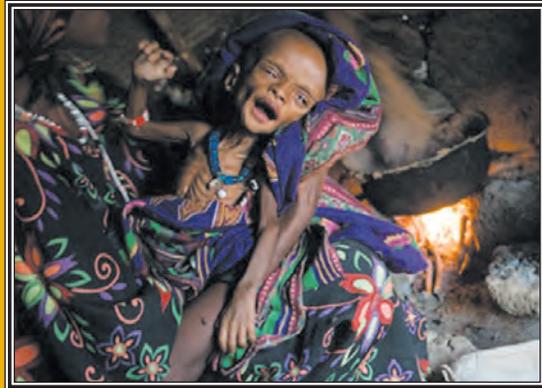
**EDUCANDO PARA ALCANZAR
UN MUNDO MÁS IGUALITARIO,
SIN HAMBRE Y SIN GUERRAS**

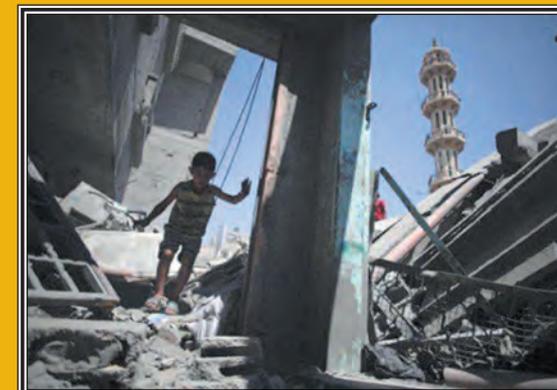
FOTOPALABRA- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA y LA DESIGUALDAD



Observa estas imágenes y escribe en un folio lo que te sugieren. Después realiza una puesta en común de tus conclusiones con tus compañeros.







LOS MENORES SE CONVIERTEN EN UN OBJETIVO DE GUERRA EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Save the Children recuerda que 420 millones de menores viven en zonas de guerra

Save the Children presentó el martes 15 de enero en Bilbao un informe donde aseguran que 420 millones de menores viven en países donde se está viviendo una guerra “cruel contra ellos”, de los cuales 142 millones de menores viven en zonas de alta intensidad de conflicto. Una cifra que en tan solo tres años se han visto afectados 30 millones de menores más que en 2016. “Los menores se han convertido en un objetivo de guerra en los conflictos armados”, aseguró Eva Silvan, directora de Save the Children en Euskadi. Este informe fue presentado de manera simultánea en diferentes países con el objetivo de que los Gobiernos que participaban en la conferencia sobre la seguridad, que se celebraba en Munich, tuviesen el informe en sus manos. “Las guerras han cambiado y ahora sitúa a la infancia donde nunca antes lo había hecho: en una terrorífica primera línea de fuego”, afirmó Silvan.



El informe revela que los 10 países en los que la infancia ha sido más castigada son Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Irak, Mali, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. En estos países, al menos 870.000 personas murieron entre 2013 y 2017 por las consecuencias indirectas de la guerra, como la desnutrición, las enfermedades o la falta de agua, saneamiento y atención sanitaria. Del total, 550.000 eran menores de cinco años.

LA FALTA DE AGUA POTABLE ES MÁS MORTAL QUE LAS BALAS PARA LOS NIÑOS EN LAS ZONAS DE CONFLICTO

Los niños menores de 15 años que viven en países afectados por la guerra tienen en promedio casi tres veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el agua y saneamiento que por la violencia directa, asegura UNICEF.

Se estima que unos 800 millones de niños viven en zonas vulnerables o afectadas por conflictos, y uno de cada diez habita en contextos extremadamente frágiles. Quienes viven en



estas condiciones tienen tres veces más probabilidades de defecar al aire libre; son cuatro veces más propensos a carecer de servicios básicos de saneamiento y ocho veces más propensos a carecer de agua potable.

El informe, publicado por el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), asegura que a pesar de que el derecho al agua potable y al saneamiento son parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con la alimentación y la atención médica, la realidad es que los conflictos están privándolos cada vez más de estas garantías.

En áreas frágiles y afectadas por conflictos el acceso al agua potable a menudo se ve comprometido debido a que la infraestructura se daña o deteriora, las tuberías están en mal estado y la recolección de agua a veces es peligrosa. Sin acceso al agua limpia, los niños se enferman, las escuelas y hospitales no funcionan y las enfermedades y la desnutrición se propagan.

El informe también explica que el declive y la destrucción de los sistemas de agua y saneamiento, y la falta de agua potable, son causas cada vez más generalizadas de inestabilidad social, económica y política, que amenazan la supervivencia, la salud y el desarrollo de los niños y sus comunidades, así como la paz y el desarrollo en todos los niveles.

En los conflictos, el agua contaminada puede ser tan mortal como las balas. En promedio, los niños menores de 15 años que viven en esos escenarios tienen casi tres veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento que por la violencia directa, mientras que los menores de cinco años tienen hasta 20



veces más de probabilidades.

Los ataques a los sistemas de agua impactan directamente a los niños. Cuando se detiene el flujo de agua limpia, estos se ven obligados a depender del agua insalubre, lo que los pone en riesgo de enfermedad. Es común que durante los conflictos haya ataques deliberados e indiscriminados para destruir la infraestructura del agua, herir al personal y cortar la energía que mantiene el sistema hidráulico.

De acuerdo con UNICEF, el 80% de los niños vivirá en países frágiles y afectados por conflictos para 2030.

“Las crisis relacionadas con conflictos son cada vez más frecuentes, afectan a más personas y duran más. En áreas extremadamente frágiles y afectadas por conflictos, la situación es grave para los niños. La asistencia humanitaria por sí sola no resolverá estos problemas, pero a través de alianzas intersectoriales podemos construir servicios sostenibles y resistentes de agua, saneamiento e higiene que puedan crear un futuro más estable y pacífico para los niños y sus familias”, señaló Kelly Ann Naylor, directora adjunta de UNICEF para Agua, Saneamiento e Higiene.

En los últimos años, más de 120 millones de personas han necesitado asistencia humanitaria urgente y protección cada año. Además, hay más crisis que afectan a más personas y que duran más que hace una década.

En 2018, 70,8 millones de personas, la mitad niños, tuvieron que desplazarse, principalmente por conflictos que son cada vez más prolongados.



SIRIA

LOS SIRIOS QUE HUYERON DURANTE LA GUERRA HAN EMPEZADO A REGRESAR, A ALGUNAS CIUDADES PERO SOLO ENCUENTRAN RUINAS

Pero al volver solo encuentran ruinas. Su hogar es un montón de escombros. En la región siria de Guta, un 70% de los edificios están destruidos. Sin embargo, sus habitantes están dispuestos a reconstruirlos.

"ES UN REGRESO AMARGO Y TAMBIÉN FELIZ"

"Nos marchamos a finales de 2012 y volvimos a mediados de febrero de 2019", explica Adnan Selleh mientras se sacude las manos, cubiertas de yeso. Junto con su hermano, su sobrino y uno de sus hijos trata de hacer habitable su vivienda en Harasta. "Repararla nos costará unos 4.000 dólares", asegura el hombre, que como muchos otros, agotó todos sus ahorros en su huida forzada. "Siento una mezcla de alegría por volver y tristeza por la destrucción. Mira cómo está todo".

"LOS CLIENTES ESTÁN EMPEZANDO A VOLVER"

Yassin Alghosh mata el tiempo mirando al tendido desde su puesto de dulces, encajado entre dos edificios destrozados. Él y su familia resistieron los 5 años de asedio que sufrió su ciudad: Zamalka. "Nunca me marché, pero vivíamos en un estado de terror". Con el fin de los bombardeos, la economía va mejor y hay más clientes, asegura. "La electricidad ha vuelto y, con ella, cada vez más gente". El joven, de 24 años, mira al futuro: "¿Que qué quiero hacer ahora? Volver a estudiar, me gustaría regresar a la escuela y



Adnan Selleh



Amal Taifur



Yassin Alghoshmata

terminar mi bachillerato".

"¿CÓMO EMPEZAR DE NUEVO?"

Amal Taifur, madre de cuatro hijos, de 9, 13, 16 y 18 años, perdió a su marido al comienzo de la guerra. Poco después hizo las maletas y abandonó su casa, como el 75% de la población de Zamalka. Tras estar 6 años desplazados, Amal y su familia regresado en septiembre de 2018. Su piso está cubierto de cascotes. La mayoría de sus muebles y objetos personales han sido saqueados. "De momento vivimos con los abuelos; todavía estamos viendo qué hacer, cómo empezar de nuevo", afirma.



SENTADO JUNTO A MIS RUINAS

"Todo este edificio pertenecía a mi familia", explica Mohammad Yusef Yamil señalando el inmueble vacío a sus espaldas. A finales de 2012 esta-

ba de vacaciones con sus hijos en Egipto cuando le telefonaron para alertarlo: habían empezado los bombardeos. Entonces tomó el primer vuelo que pudo, pero cuando regresó "todos se habían marchado ya", recuerda. Él también tuvo que huir. Ahora ha podido regresar, al menos para ver los restos de lo que fue su hogar.

CAE EN UN BOMBARDEO EN SIRIA 'LA VOZ FRANCESA' DEL ESTADO ISLÁMICO

Era el yihadista más buscado por los servicios de Inteligencia franceses, aquel que puso voz a la reivindicación de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, en los que murieron 130 personas.



Según los medios franceses, Fabien Clain murió en febrero en un bombardeo en la ciudad siria de Baghuz, el último bastión del Estado Islámico. Su hermano Jean-Michel fue gravemente herido en ese mismo ataque de la coalición internacional el miércoles 20 de febrero.

Los servicios de Inteligencia sabían desde hace un tiempo que los hermanos Clain se escondían en esta región situada a lo largo del Eúfrates, pero no habían conseguido dar con ellos. Hasta hace menos de una semana, cuando varias informaciones confirmaban que habían sido detectados en Baghuz. Tras cuatro días de vigilancia, la coalición ordenaba el ataque, que la emisora de radio France Info atribuye a un dron estadounidense. Baghuz, donde se atrincheran entre 300 y 500 combatientes, fue objeto de un encarnizado bombardeo por parte de la coalición internacional, mientras que los ejércitos sirio e iraquí, así como los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias, mantenían un cerco a la ciudad.

Francia conoció a Fabien Clain al día siguiente de los atroces atentados de París y Saint Denis. En un mensaje de cinco minutos colgado en internet, este normando confirmaba que los ataques en la «capital de las abominaciones y de la perversión» habían sido llevados a cabo por «soldados del califato», y afirmaba que «Francia es el principal objetivo del Estado Islámico». De fondo se escuchaba un 'nashid', un cántico musulmán tradicional que los yihadistas, a base de usarlos en sus videos, han dado a conocer en todo el mundo. El vocalista no era otro que su hermano Jean-Michel. El material para grabarlo lo compró en Toulouse poco después de los atentados contra el semanario 'Charlie Hebdo' y el supermercado kosher de París, en enero de 2015. En marzo de ese año se esfumó. Su destino: Raqqa, capital entonces del



califato.

La historia de los Clain no se ajusta al arquetipo de los yihadistas occidentales, que suelen pasar de la delincuencia común a la yihad. Nacido en 1978 en Normandía y procedente de una familia católica practicante, Fabien se convirtió en los años 90 al islam, con tan solo 18 años. Dio rápidamente el paso a la versión más rigorista de la fe musulmana, y convenció a su hermano y hasta a su madre, que era catequista, para que también se convirtieran. Se mudaron a Toulouse, donde ambos hermanos se relacionaron con la red en la que también estaba Mohamed Merah -autor de los atentados de marzo de 2012 contra varios militares y una escuela judía en Toulouse, en los que murieron 7 personas-. La filial yihadista fue desmantelada en 2007 y Fabien condenado a 5 años de cárcel, de los que cumplió 3. Desde Raqqa se sospecha que los hermanos dirigieron a Ahmed Ghlam, que mató a una mujer en 2015 pero que planeaba un atentado contra una iglesia de Villejuif, en la periferia de París.

Los Clain eran los últimos terroristas vinculados con los atroces atentados de París que aún no habían muerto o sido capturados. En un ataque coordinado, 130 personas murieron y cerca de 500 fueron heridas en varios atentados simultáneos en el Estado de Francia, varias terrazas del centro de París y la sala de conciertos Bataclan. La noticia de su muerte ha dejado un sentimiento ambivalente entre los familiares de las víctimas, que habrían preferido que fuera capturado con vida para presentarlo ante la justicia francesa.

LOS CIVILES QUEDAN ATRAPADOS EN EL ÚLTIMO REDUCTO DEL EI EN SIRIA

A merced del fuego cruzado, 16 civiles, siete de ellos niños, mueren por los bombardeos en Siria.

Los civiles del último reducto que controlaba el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el este de Siria estaban atrapados entre el fuego cruzado de la batalla final contra los terroristas en esa zona y, el lunes 7 de enero, al menos dieciséis de ellos perdieron la vida en bombardeos. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las muertes en la provincia de Deir al Zur de estos civiles, entre ellos siete niños, se produjeron en ataques de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que ofrece apoyo a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), integradas principalmente por milicias kurdas. El director del Observatorio, Rami Abderrahman, dijo que la situación de los civiles en ese reducto es desgraciada y que se había perdido el contacto con “muchos de ellos”, por lo que no se sabía si estaban vivos o no. La ONG detalló en un comunicado que las comunicaciones con la zona estaban interrumpidas y los familiares de los que se encontraban atrapados no podían ponerse en contacto con ellos. Fuentes consultadas por el Observatorio apuntaron que el EI es el que había cortado las comunicaciones.

Además, esta organización, con base en el Reino Unido, denunció reiteradamente que los civiles estaban siendo usados por los yihadistas como escudos humanos para evitar ser bombardeados por la coalición y atacados por las FSD.

Por su parte, el portavoz de relaciones exteriores del Movimiento para una Sociedad Democrática, perteneciente a las FSD, Kamal Akef, aseguró que la mayor parte de los habitantes de la zona había logrado escapar tras el comienzo de la ofensiva contra el EI en Deir al Zur.

De acuerdo con Akef, los civiles que permanecen en el área, de menos de 4 kilómetros cuadrados, son mayoritariamente “familiares de los yihadistas” y “extranjeros”.

Sin embargo, afirmó, las FSD intentan proseguir con las operaciones militares “sin causar daño” a



los civiles, lo cual ralentiza su avance. Recalcó que en los próximos días se producirá “el fin militar del EI” en esta región, puesto que sus combatientes se encuentran “sin ánimos y sin municiones”.

“Están en un espacio reducido donde reciben ataques de las FSD y la coalición, sin poder moverse, por lo que tendrán que rendirse”, consideró Akef el viernes 11 de enero. Los yihadistas respondieron con contraataques, mediante coches bomba y terroristas suicidas con cinturones explosivos, mientras las milicias kurdas y la coalición internacional lanzaron intensos ataques con artillería y misiles, según el Observatorio.

Los enfrentamientos se registraron de forma intermitente durante todo el día en los alrededores del área que aún controla el EI, de unos tres kilómetros cuadrados, precisó la ONG.

El Observatorio señaló que al menos diecinueve combatientes del EI y nueve miembros de las FSD murieron y que, entre los primeros, había siete terroristas que se inmolaron para frenar el avance del enemigo. La agencia de noticias estatal siria, SANA, citando fuentes locales, indicó que al menos cuatro civiles perdieron la vida en ataques de la coalición internacional en los alrededores de la población de Al Baguz.

Este medio destacó que las acciones tuvieron como objetivo “casas de civiles” en las afueras de la localidad, situada a orillas del río Éufrates a su paso por Deir al Zur.

LOS KURDOS ARRINCONAN AL ESTADO ISLÁMICO EN SU ÚLTIMO BASTIÓN SIRIO

Las milicias respaldadas por Trump arrebatan otras 41 posiciones al grupo terrorista en la batalla final en Baghu.

Unos 600 combatientes del grupo yihadista Estado Islámico (EI o Daesh), la mayoría de ellos extranjeros, defienden Baghuz, la última localidad bajo control yihadista que queda en Siria y que está situada en la provincia de Deir Ezzor, en plena frontera con Irak. Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdos y que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, lanzó a principios de febrero la «ofensiva final» para acabar con este bastión y durante el domingo 10 de febrero lograron «capturar 41 posiciones del Daesh y destruir fortificaciones», indicó en su cuenta de Twitter el portavoz de las FSD, Mustafa Bali.

Este asalto se produce en plena retirada de las tropas de Estados Unidos, que contaba con unos 2.000 hombres sobre el terreno, y con la incógnita de conocer el futuro de unos kurdos de Siria que, pese a liderar la lucha contra los seguidores del califa, son considerados «terroristas» por Turquía y negocian un acuerdo con las autoridades de Damasco. Las Unidades de Protección Popular (YPG) son la columna vertebral de las FSD y son también el brazo sirio del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), etiquetado como «organización terrorista separatista» por Turquía.

La ofensiva sobre Baghuz parece una orden directa del presidente estadounidense, Donald Trump,



quien el miércoles 6 de febrero adelantó que «en una semana» anunciaría el final del EI. El problema es que este grupo ha demostrado que es capaz de sobrevivir a la pérdida de lo que fue su califato y desde hace un año opera en la clandestinidad y a base de atentados, un terreno en el que tiene gran experiencia.

Muchos de los líderes del EI siguen en paradero desconocido, entre ellos el mismísimo califa, Abu Baker al-Bagdadi, a quien han dado varias veces por muerto, extremo nunca confirmado por el grupo. La victoria en Baghuz no supondrá el final de unos yihadistas que han logrado extenderse por el desierto de Badia y que han demostrado en los últimos meses su capacidad de golpear a los kurdos e incluso a las tropas de Estados Unidos.

Las FSD avanzan después de una semana en la que se ha mantenido en esa zona una especie de alto el fuego que ha servido para la salida de 20.000 civiles, muchos de ellos familiares directos de los combatientes, pero se estima que en la zona de los enfrentamientos podrían quedar aun más de mil, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).



TERMINA LA BATALLA CONTRA EL CALIFATO, SIGUE LA GUERRA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO

«En este día único hay que recordar a los miles de mártires que han hecho posible esta victoria», anunció Mustafa Bali, portavoz de las Fuerzas Democráticas

El califato ha terminado, pero la guerra contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), sigue adelante como explicó el sábado 23 de marzo en el discurso de la victoria el comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Kobani: «*Pedimos ayuda a nuestros aliados para empezar una nueva fase en la lucha contra los terroristas de EI y así eliminar por completo la amenaza local y mundial que suponen sus células durmientes*». 24 horas después de que lo adelantara Donald Trump, las FDS declararon «*la total eliminación del supuesto califato y una derrota territorial del Dáesh al cien por cien*», según un comunicado difundido por su portavoz, Mustafa Bali.

Tras una noche de explosiones y disparos, que sembraron dudas en torno al anuncio de Trump, a primera hora de la mañana los mandos kurdo árabes subieron al edificio más alto que queda en pie en Baghuz después de dos meses de combates e izaron la bandera amarilla de esta milicia que combate con apoyo de la coalición internacional que lidera Estados Unidos. Así comenzó una jornada de celebración por la victoria militar contra el último feudo que quedaba en manos del Dáesh, de duelo por los miles de combatientes caídos y de incertidumbre por el futuro que le depara a esta parte de Siria si Trump decide retirar sus tropas.



La enorme bandera amarilla ocupó el lugar de la enseña negra de los yihadistas en medio de un paisaje desolador. Los seguidores del califa pasaron de controlar ciudades enteras a vivir en un campamento miserable en el resistieron decenas de miles de personas los dos últimos meses de ofensiva.

Coches calcinados, tiendas y alfombras destrozadas, basura y barro formaban el paisaje final del califato. Desde enero más de 67.000 personas salieron de este reducto ahora muerto, entre ellas 5.000 yihadistas que fueron detenidos, según las cifras ofrecidas por las FDS. Los civiles, sobre todo familiares de yihadistas, fueron trasladados a campamentos, principalmente al de Al-Hol (nordeste). Muchos los combatientes detenidos y de sus familiares evacuados son extranjeros y ahora se espera que sus países de origen se hagan cargo de ellos.

Tras la celebración de un primer acto simbólico en las ruinas de Baghuz, la ceremonia se trasladó a la base de Al-Omar y arrancó con el himno nacional de Estados Unidos. En un acto televisado, el comandante Kobani demostró que está mirando al futuro desde este primer día post califato y tuvo mensajes directos para los gobiernos de Damasco y Ankara, que están atentos a la posible retirada militar estadounidense. Kobani pidió al presidente sirio, Bashar el-Asad, el reconocimiento de una administración regional autónoma kurda en la zona noreste del país y trasladó a Turquía, que



considera «terroristas» a las FDS, la necesidad de que abandone el territorio sirio, especialmente el cantón kurdo de Afrín. El comandante recordó que «*11.000 de nuestros combatientes han muerto y 21.000 han resultado heridos en esta guerra*».

Las banderas amarillas compartieron protagonismo con las barras y estrellas de la estadounidense y el enviado de la coalición internacional, William Roebuck, se dirigió a los presentes para «*felicitar a los sirios y en particular a las FDS por la destrucción del fraudulento califato del EI y la liberación del último lugar que controlaban en Siria*».

Cuatro años y ocho meses

El 29 de junio de 2014 fue la fecha elegida para informar al mundo del establecimiento del califato y el 23 de marzo de 2019 quedará marcado como el día del final del sueño de los yihadistas de establecer un Estado propio en el corazón de Oriente Medio. Cuatro años y ocho meses en los que han pasado de controlar una superficie equivalente a Reino Unido, con ciudades como Mosul o Raqqa, a



estar tirados en tiendas de campaña en una pequeña franja de tierra junto al Éufrates en Baghuz. Cuatro años y ocho meses que solo han supuesto un paréntesis en la trayectoria de un grupo nacido en Irak tras la invasión estadounidense de 2003 y que tras el colapso de su protoestado vuelve a la clandestinidad, el escenario que mejor controla

UNA SEMANA SANGRIENTA EN EL OLVIDADO CONFLICTO SIRIO

«Indiferencia» ante los ataques contra el último bastión rebelde y fracaso del acuerdo turco-ruso.

Más de una decena de civiles perdieron la vida el sábado 27 de julio en el noroeste de Siria y se suman al centenar de víctimas mortales de una semana especialmente sangrienta, que pone en duda la eficacia del acuerdo entre Rusia y Turquía, que desde octubre de 2018 había protegido el último bastión rebelde del país. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, once personas, incluidos dos niños, fallecieron el sábado 27 de julio por bombardeos de la aviación siria contra la población de Ariha, en el sur de la provincia de Idlib, controlada casi por completo por grupos armados opositores.

Otro niño murió por los ataques aéreos gubernamentales en las afueras de Kafr Auid, también en Idlib, donde en los pasados días se han concentrado las operaciones de la aviación siria y de su principal aliado, Rusia, que no han dejado de golpear



las poblaciones controladas por los rebeldes e islamistas.

La Defensa Civil Siria, que desarrolla labores de rescate en áreas que escapan al control de Damasco, difundió imágenes en las que se podía ver cómo una niña aún con vida era salvada de debajo de los escombros de un edificio que se había derrumbado por el impacto de las bombas.

LAS SANCIONES CASTIGAN A LOS ENFERMOS DE CÁNCER SIRIOS

El hospital Al-Bairouni, centro oncológico de referencia en el país, sorteando desde hace ocho años la guerra y la falta de material.

Durante los años de guerra, llegar al hospital Al-Bairouni era una tarea suicida. El principal centro de referencia público de Siria para tratar el cáncer se encuentra en Harasta, una de las localidades del cinturón rural de la capital donde más duros han sido los combates. Durante siete años, el personal y los enfermos debían atravesar una carretera tomada por los francotiradores, volaban entre disparos y bombardeos para llegar a un hospital que en múltiples ocasiones resultó dañado. «En todo este tiempo nunca hemos cerrado las puertas. Ha sido muy duro, nueve miembros de la plantilla han muerto, pero hemos conseguido seguir atendiendo a pacientes llegados de toda Siria», relata el doctor Ihab al-Nukari, director del centro desde hace cuatro años. Los combates han terminado en Damasco, pero ahora el hospital se enfrenta a la dureza de las sanciones que la comunidad internacional impone al Gobierno de Bashar el-Asad y que tienen un impacto directo en el sector de la salud.

El centro tiene 550 camas y en 2018 atendió a



8.000 personas, una cifra cada vez más próxima a los 12.000 casos que se atendían de media hasta el estallido de la guerra, en 2011. «La guerra lo cambió todo porque resultaba muy inseguro viajar y amplias zonas del país quedaron cortadas, por lo que puede que muchos enfermos hayan tenido que ir a tratarse a países vecinos como Turquía o Jordania», informa el director, quien asegura que «aquí recibimos a todos, vengan de donde vengan, de zonas opositoras o leales. El cáncer no hace distinciones». El de pecho, en mujeres, y los de pulmón y próstata, en hombres, son los tumores más habituales entre unos pacientes que no deben pagar por el tratamiento ya que todo está cubierto por la sanidad pública.

«Gracias a la ayuda de países amigos tenemos garantizados el 80% de los medicamentos, pero tenemos una necesidad urgente de importar cuatro equipos de aceleradores médicos lineales, básicos en la radioterapia. Por culpa de las sanciones no podemos renovar equipos desde 2011 y esto afecta directamente a la calidad de los tratamientos», lamenta el director, que muestra los impactos de proyectiles en su despacho, heridas de un pasado reciente visibles en varias zonas del edificio. La única ayuda recibida hasta ahora es un CT (un escáner) enviado por la Organización



Mundial de la Salud (OMS).

«Lo más peligroso era la zona alta, las habitaciones del último piso fueron las más afectadas», relata un enfermero mientras abre la puerta de la habitación número 5 de la cuarta planta. Las camas son un amasijo de hierros, paredes y techos están picadas por la metralla y la ventana es una enorme abertura en la pared, como un mordisco violento e irregular. «Aquí había una persona ingresada, pero en el momento del impacto del mortero estaba en la sala de rayos. Eso le salvó, pero fue solo temporal. El cáncer se lo llevó pocas semanas después», lamenta el enfermero.

Arrasada por la aviación

En la sala de quimioterapia un grupo de mujeres conversa mientras reciben el tratamiento. Unidas por la enfermedad, charlan de la posguerra, de las dificultades económicas, de los seres queridos muertos, heridos o que han viajado a otros países, del bloqueo. todo bajo el ronroneo de un ventilador que hace soportable las altas temperaturas del verano. Aida Mohamed llega desde Raqqa, la antigua capital del califato establecido por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), ahora en manos de las fuerzas kurdas y de Estados Unidos, «un camino de diez horas en autobús», señala esta mujer quien asegura que «en Raqqa no queda nada, es puro escombros y allí es imposible recibir tratamiento». Cihan Hakimi llega desde Sweida, ciudad drusa del sur, y pide «el final de la sanciones y del blo-



queo, porque en lugar de afectar al Gobierno y a los altos funcionarios, lo que hacen es castigar a los ciudadanos de a pie como yo, a los enfermos».

Tras ocho años de conflicto, «el sistema sirio de salud está devastado. Más de la mitad de los centros de salud y hospitales públicos están cerrados o funcionan solo parcialmente, y más de 11,3 millones de personas necesitan asistencia médica, entre ellos tres millones que sufren traumatismos y discapacidades graves», alerta la OMS. El hospital Al-Bairouni lucha contra esta situación en medio del paisaje apocalíptico de Harasta, zona arrasada por el efecto de la aviación y la artillería. Las armas han callado en Damasco, pero la lucha contra el cáncer nunca se ha detenido.

ERDOGAN INCENDIA EL NORTE DE SIRIA

Los civiles huyen de los bombardeos de Turquía contra las milicias kurdas, que frenan su lucha contra el Estado Islámico.

Turquía lanzó a principios de octubre su tercera operación militar en Siria desde el inicio de la guerra en su país vecino en 2011. Dos días después de obtener la luz verde de Donald Trump y de la retirada de las tropas de Estados Unidos de la zona, Recep Tayyip, Erdogan anunció en turco, inglés y árabe vía Twitter, que «las Fuerzas Armadas turcas han iniciado, junto con el Ejército Nacional Sirio, la operación 'Fuente de Paz' en el norte de Siria». De forma inmediata comenzaron los bombardeos aéreos y de artillería.



ría sobre posiciones de las milicias kurdas. Al menos dos civiles perdieron la vida en esos primeros momentos de la operación y miles de personas huyeron de las zonas afectadas por los bombardeos en busca de un lugar seguro.

Los mandos de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), alianza de la que forma parte las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdas que Erdogan considera «terroristas» por sus lazos con el PKK, pidieron a su ex aliado estadounidense como último favor la declaración de una zona de exclusión aérea, pero Trump ya dejó claro que no quiere entrometerse en esta lucha y más de 25 aviones turcos operaron sin problemas a lo largo de Rojava, el Kurdistán sirio. La respuesta kurda se redujo al lanzamiento de algunos proyectiles a localidades turcas próximas a la verja de separación que causaron daños materiales.

El jefe de Estado turco puso como doble objetivo de esta nueva operación acabar con el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y con las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG). Erdogan quiere reemplazar esta «zona terrorista en nuestra frontera sur» por «una zona de seguridad» en la que pretende realojar a buena parte de los más de tres millones de refugiados sirios que se encuentran en su país. Aunque el mandatario islamista insistió en que está decidido a «preservar la unidad territorial de Siria», si este movimiento se consolida supondrá redibujar la línea divisoria entre estos dos países. El diario turco Hurriyet adelantó que la primera fase de la ofensiva se centrará en tomar el control de una franja de territorio de 120 km de largo y unos 30 km de ancho, entre las



ciudades sirias de Tal Abyad y Ras al Ain y estos fueron dos de los puntos atacados.

También se registraron «intensos bombardeos» en las proximidades de Qamishli, ciudad en la que kurdos y Gobierno de Siria comparten administración, y Ain Issa, según el primer parte de guerra emitido por el Centro de Coordinación y Operaciones Militares de las FSD. La segunda etapa alcanzará la frontera con Irak, lo que estirará la «zona de seguridad» hasta los 500 kilómetros.

Incursión terrestre

El castigo aéreo busca en este tipo de situaciones preparar el camino para la entrada por tierra. Las milicias kurdas ya desmontaron sus defensas tras el acuerdo de seguridad que alcanzaron Washington y Ankara, que quedó en papel mojado tras la conversación telefónica que mantuvieron el domingo Trump y Erdogan, lo que juega a favor de los turcos. Las autoridades de Ankara han enviado refuerzos a toda la zona fronteriza y cuentan también con 14.000 combatientes del antiguo Ejército Sirio Libre, que Erdogan ha rebautizado como Ejército Nacional Sirio, paramilitares a los que ha entrenado, armado y pagado para combatir a sus órdenes.

«Hemos completado nuestros entrenamientos para despejar la región al este del Éufrates de las YPG. Estamos listos para la operación», señaló Sayf Abu Bakr, un comandante sirio del ENS, a la agencia turca Anadolu. La «puñalada por la espalda» a los kurdos, tal y como la calificaron los



mandos de la milicia, puede tener un impacto directo en la guerra contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y las FDS anunciaron que suspenderán todas sus operaciones contra los yihadistas para hacer frente a la ofensiva turca. Según expertos de seguridad consultados, el trabajo de las FDS en la etapa post califato estaba siendo clave para acabar con las células durmientes del grupo liderado por Abu Baker Al Bagdadi.



Estado de emergencia

«Proclamamos un estado de movilización general durante tres días», anunció en un comunicado la administración kurda, en el que instó a la población «a dirigirse hacia la zona fronteriza» para garantizar «la resistencia» y señaló a Estados Unidos y a toda la comunidad internacional como responsables en caso de «catástrofe humanitaria». Pero los civiles lo que hicieron fue alejarse todo lo posible de la zona de operaciones en busca de lugares seguros y muchos eligieron la provincia de Hasake.

El analista Eduard Soler Lecha recuerda que «esta es la tercera operación de Turquía en Siria, pero es la de mayor envergadura y riesgo y si se lanza es porque sintió que las otras dos le salieron mejor de lo que todo el mundo le decía». El investigador del Cidob se refiere a las operaciones «Escudo del Éufrates», puesta en marcha en la zona de Jarabulus para expulsar al EI en agosto de 2016, y a «Rama de Olivo», de enero de 2018, con la que los turcos y sus fuerzas sirias aliadas expulsaron a las YPG del cantón kurdo de Afrín y pusieron en marcha una ocupación que continúa.

ÉXODO DE 60.000 CIVILES SIRIOS PARA ALEJARSE DE LA FRONTERA CON TURQUÍA

La cifra de seis millones de desplazados que ya causaron ocho años de guerra crece con los bombardeos sobre localidades del norte.



Columnas de humo se levantan en la frontera entre Turquía y Siria. Los bombardeos son intensos, pero también la quema de neumáticos para intentar dificultar las operaciones de los aviones. Los kurdos volvieron a pedir a EE UU la declaración de una zona de exclusión aérea, pero no hubo respuesta y al menos 60 cazas turcos participaron durante el inicio de la ofensiva y penetraron unos 30 kilómetros en un territorio sirio del que salieron decenas de

miles de civiles.

Donald Trump no quiere interferir en la operación Manantial de paz lanzada el miércoles 9 de octubre por Turquía. Los combates se intensificaron a lo largo de toda la frontera y las milicias kurdas respondieron con el lanzamiento de cohetes y morteros contra cuatro poblaciones turcas próximas a la verja de separación que dejaron al menos seis civiles muertos

-entre ellos un bebé- y 70 heridos. El balance en el lado sirio es de al menos 23 combatientes y nueve civiles muertos, dos de ellos niños, por los bombardeos aéreos y disparos de artillería, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). Durante toda la jornada el Ejército se dedicó a retirar partes del muro de separación para facilitar el

acceso de las tropas, un movimiento que se suele producir al caer la noche. El Ministerio de Defensa en Ankara calificó la marcha de la operación como «un éxito» y aseguró que «solo se están atacando refugios, posiciones, armas y vehículos que pertenecen a las organizaciones terroristas», pero no fue así. La intensidad de los bombardeos sembró el pánico entre la población y más de 60.000 personas dejaron sus casas para buscar un lugar seguro en la provincia de Hasake, alejada de la frontera. La operación militar ordenada por Erdogan aumenta la cifra de seis millones desplazados internos que ya causaron los últimos ocho años de guerra en Siria, según datos de la ONU, y desde el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional advirtieron de que este movimiento turco «podría traer inseguridad, caos y el riesgo de un resurgimiento del Estado Islámico (EI)».

La preocupación por el futuro de la lucha con el EI se acentuó cuando los kurdos informaron de que se produjeron bombardeos en zonas muy próximas «a la prisión de Jarkin, en Qamichli, donde se hallan muchos terroristas del Daesh», indicaron



en un comunicado en el que especificaron que esta cárcel «alberga a los más peligrosos criminales originarios de 60 países». Según el acuerdo alcanzado entre Trump y Erdogan, Turquía se encargará de estos prisioneros una vez establezca su «zona de seguridad». Las fuerzas kurdas están solas y quieren negociar con el Gobierno de Damasco para tratar de frenar a Erdogan, pero el viceministro de Exteriores, Faysal Mekdad, se encargó de alejar esta opción. «En este momento no estamos preparados» para volver al diálogo con «los aliados de EE UU», zanjó.

EE UU DEJA EL NORTE DE SIRIA EN MANOS DE RUSIA

La medida, incluida en el acuerdo de tregua negociado por Washington, coincide con la salida de EEUU del norte del país.

Después de cinco días de ofensiva turca, Donald Trump ordenó el domingo 13 de octubre la retirada de todas sus fuerzas al norte de Siria, y Rusia y el Gobierno de Damasco comenzaron los preparativos para llenar ese vacío. La decisión de Trump la comunicó el secretario de Defensa, Mark Esper, en una entrevista en el programa dominical 'Face the Nation' de la cadena de televisión CBS en la que reveló que «hablé con el presidente después de conversar con el resto del equipo de seguridad nacional y me indicó que



comenzáramos a retirar deliberadamente las fuerzas del norte de Siria». El vacío estadounidense en lugares como Kobani o Manbij lo podrían llenar fuerzas sirias y rusas, según explicó Mohamed Shaheen, el vicepresidente de la región autónoma

del Éufrates a la agencia NPA, y los medios oficiales sirios lo ratificaron poco después al asegurar que el Ejército «desplaza unidades al norte para hacer frente a la agresión turca». Mark Esper, que 48 horas antes había dicho que «nunca abandonaremos a nuestros aliados», calificó la situación de sus tropas de «insostenible» y la justificó argumentando que «en las últimas 24 horas hemos entendido que Turquía pretende extender su operación más al sur de lo planeado originalmente y al oeste» y que sus exaliados de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), después de ser abandonados, «buscan un acuerdo con los sirios y rusos para contraatacar a los turcos». Estados Unidos retira a sus mil hombres del norte de Siria

Amenaza de sanciones

Donald Trump acompañó el anuncio de la retirada con una serie de tuits en los que defendió que «es de listos no involucrarse, por una vez, en los intensos combates que están ocurriendo en la frontera turca. Quienes nos provocan para seguir combatiendo son aquellos que nos metieron en las guerras en Oriente Próximo» y quiso zanjar cualquier debate diciendo que «otros pueden querer entrar y luchar a favor de un lado o de otro. ¡Que lo hagan! Estamos supervisando la situación». El presidente estadounidense anunció además «pode-



rosas sanciones» contra Turquía debido a la ofensiva 'Manantial de Paz', pero lo que le piden sus exaliados es la declaración de una zona de exclusión aérea, no castigos a la economía turca.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo un día más que las «amenazas de sancio-

nes no nos van a parar» y realizó un balance de los primeros días de ofensiva en los que precisó que el ejército turco ha puesto bajo su control «109 kilómetros cuadrados de la zona» y ha abatido 440 combatientes kurdos. El ministerio de Defensa anunció la toma de Tal Abiad, pero como ocurrió el sábado con Ras Al Ain, los kurdos negaron esta información y aseguraron que siguen los combates.

Las tropas turcas bombardearon, además, un «convoy humanitario que se dirigía a Ras Al Ain», según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) y al menos nueve personas perdieron la vida, entre ellas cinco civiles y un periodista de la agencia de noticias kurda Hawar, según confirmaron sus propios compañeros.

Familiares de yihadistas

La decisión de Estados Unidos eclipsó una nueva jornada de violencia en el norte de Siria, marcada por el anuncio de las autori-



dades kurdas de la fuga de 785 extranjeros vinculados al grupo yihadista Estado Islámico (EI), tras un ataque al campo de detención de Ain Issa, controlado por las FDS en el noreste del país. La operación turca obligó a los kurdos a reducir el personal que se encarga de la seguridad de los centros donde permanecen retenidos unos 12.000 yihadistas y alrededor de 70.000 familiares suyos.

El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel pidieron el cese de la ofensiva turca al considerar que puede crear «una situación humanitaria insoportable», además de «ayudar» al Estado Islámico. Un temor que también comparte el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, que se sumó a las voces de alarma y alertó de que «si no mantenemos la presión, el



Estado Islámico resurgirá». Fuentes oficiales estadounidenses consultadas por la cadena CNN, sin embargo, anunciaron que la guerra contra el EI «está terminada por el momento». Un anuncio del que seguro tomaron nota los yihadistas.

LOS KURDOS SIRIOS COMIENZAN LA RETIRADA DE LA FRONTERA CON TURQUÍA

La medida, incluida en el acuerdo de tregua negociado por Washington, coincide con la salida de EE UU del norte del país.



Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) se retiraron el domingo 20 de octubre de Ras

al-Aín, localidad fronteriza con Turquía que permanecía en disputa desde que el 9 de octubre el presidente Recep Tayyip Erdogan lanzara la operación 'Manantial de Paz'. El jefe de las FDS, Mazlum Abdi, adelantó el sábado que sus fuerzas se retirarían, en virtud de un acuerdo de tregua negociado por Estados Unidos, de una zona fronteriza con Turquía de 32 kilómetros, y la salida de Ras al-Aín fue la mejor prueba de la intención kurda de respetar el acuerdo.

Turquía confirmó el movimiento y el Ministerio de Defensa señaló que «un convoy de aproximadamente 55 vehículos entró en Ras al-Aín, y un convoy de 86 vehículos salió en dirección a Tal

declaró que «no existen impedimentos para la retirada» y «las actividades de salida y evacuación están firmemente coordinadas con la contraparte estadounidense».

Los kurdos comenzaron su repliegue el mismo día en el que Estados Unidos salió del norte de Siria. Un centenar de camiones, flanqueados por vehículos todoterreno, salieron desde el monte Jabal Abdul Aziz, a unos 45 kilómetros al suroeste de la ciudad de Hasaka, en dirección a Irak, país en el que se desplegarán las tropas, según adelantó el secretario de Defensa, Mark Esper. La misión de estos mil hombres tras abandonar a sus aliados kurdos en Siria consistirá en continuar la campa-

Tamer». Erdogan, que la víspera amenazó con «aplastar las cabezas» de los kurdos si para el lunes 21 de octubre, día en el que expira el ultimátum acordado con Washington, no se retiran a una distancia de 30 kilómetros de la frontera,

ña contra el grupo yihadista Daesh y «ayudar a defender» este país, en palabras de Esper.

Cumbre turco-rusa

Los movimientos sobre el terreno se aceleraban en vísperas de la reunión que Erdogan y el presidente ruso, Vladimir Putin, iban a mantener el martes 22 de octubre en Sochi y que será clave para el futuro de una operación turca que, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ha dejado 114 civiles muertos y más de 300.000 desplazados.

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, se mostró esperanzado en «acordar un pacto que sirva para el futuro» y clarifique la retirada de las milicias kurdas de ciudades estratégicas como Manbij o Kobane, donde ya se encuentran desplegados los Ejércitos de Siria y Rusia tras la retirada de Estados Unidos. Las autoridades turcas



planean enviar a dos millones de refugiados sirios a la 'zona segura' que pretenden establecer en su frontera. Ankara considera «terroristas» a las Unidades de Protección Populares (YPG) kurdas, la principal fuerza de las FDS que hasta el 9 de octubre fueron el principal apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el Daesh.

PACTO PARA QUE RUSIA Y SIRIA ECHEN A LOS KURDOS DE LA FRONTERA TURCA

Putin y Erdogan ratifican en Sochi la zona de seguridad en el noreste sirio y acuerdan patrullas conjuntas una vez acabe el desalojo kurdo.

Las diferencias de planteamiento entre Rusia y Turquía sobre la zona de seguridad en la frontera turco-siria; la cuestión kurda, y el régimen de Bashar el-Asad en su conjunto, venían planeando desde hacía tiempo sobre los múltiples encuentros habidos entre sus respectivos presidentes, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. El martes 22 de octubre, tras seis horas y media reunidos en Sochi, ciudad balneario rusa a orillas del mar Negro, y a escasas horas de que venciera la tregua de cinco días acordada el jueves 17 de octubre, Putin y Erdogan consensuaron un memorándum de 10 puntos que ratifica la continuación de la zona de seguridad turca en el noreste de Siria a partir de esta medianoche.

La franja, de 30 kilómetros desde la frontera con



Turquía y deberá ser liberada de las milicias kurdas por fuerzas guardafronteras sirias y la Policía Militar rusa en un plazo de 150 horas. Los destacamentos de las Unidades de Protección Popular (YPG) deben quedar a no menos de 32 kilómetros de la línea fronteriza. «Tras el final de las 150 horas, unidades conjuntas turcas y rusas empezarán a patrullar en una franja de 10 kilómetros a oeste y este del área de la Operación Manantial de Paz», aclaró Erdogan.

El acuerdo compromete además a Turquía a respetar la integridad territorial de Siria y a luchar junto con Rusia contra el terrorismo y el separatismo en el país árabe. Moscú y Ankara han dispuesto igualmente un mecanismo de monitorización de la aplicación del memorándum; el regreso de los refugiados sirios que viven ahora en Turquía, y facilitar el proceso político entre todas las facciones presentes en Siria y la labor del Comité Constitucional sobre la base de las conversaciones llevadas a cabo hasta la fecha en Astaná (Kazajstán). El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló que se implementará también el acuerdo de Adana, firmado por Ankara y Damasco en 1998 sobre la seguridad en la frontera común.



Retirada

Antes de volar a Sochi, el presidente turco dejó claro que la tregua de su ofensiva en Siria pactada con Washington estaba a punto de expirar y, si para ese momento las YPG, no se retiraban completamente del norte de Siria, «si las promesas que nos hicieron los estadounidenses no se respetan, la operación se reanudará con más fuerza aún». Erdogan declaró que este problema era el principal en su entrevista con Putin. De hecho las fuerzas kurdas están ya en retirada. Han abandonado, por ejemplo, la ciudad de Ras al-Ain. Se estima que, desde que Turquía comenzó su ofensiva, de la zona han salido un millar de combatientes de las YPG.

«*El mundo es hoy un lugar mucho más seguro*», ha añadido. «*El animal que trató de intimidar al resto ha terminado llorando y gimoteando, aterrado de ver que las fuerzas estadounidenses se le venían encima*».

EEU MATA AL LÍDER DEL ESTADO ISLÁMICO EN UNA OPERACIÓN EN SIRIA

El autoproclamado califa del Estado Islámico murió, según el presidente de EE UU, acorralado en un túnel al detonar el cinturón explosivo que llevaba.



Abubaker al Bagdadi.

«*Murió como un perro, murió como un cobarde. El mundo es hoy un lugar mucho más seguro*», ha añadido. «*El animal que trató de intimidar al resto ha terminado llorando y gimoteando, aterrado de ver que las fuerzas estadounidenses se le venían encima*».

El califa del terror

El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció el domingo 27 de octubre la muerte del sanguinario líder del Estado Islámico (ISIS), Abubaker al Bagdadi, en una operación militar en el noroeste de Siria. Al Bagdadi, uno de los terroristas más buscados del mundo, proclamó en 2014 el califato del ISIS que durante los siguientes tres años de apogeo se extendería por Irak y Siria, sembrando el terror con ejecuciones masivas e imponiendo su versión radical del islam. «*Era un hombre enfermo y depravado, y ya se fue*», dijo Trump, en un mensaje televisado a la nación.

El presidente aseguró que no ha habido bajas estadounidenses en la operación, que comenzó dos semanas antes y concluyó el sábado 26 de octubre con Al Bagdadi acorralado dentro de un túnel, detonando el cinturón explosivo que llevaba. Sí ha habido, en cambio, un «*buen número*» de bajas entre los compañeros del líder del ISIS. Las fuerzas especiales estadounidenses estuvieron dos horas sobre el terreno recolectando inteligencia, y se han incautado de numerosa información sensible relacionada con el grupo terrorista, explicó

el presidente, en una intervención abierta a preguntas. Fue un ataque aéreo nocturno, aseguró, en el que tres hijos de Bagdadi también murieron después de que su padre detonara su cinturón explosivo. Al cadáver, añadió Trump, ya se le ha realizado una prueba de ADN y coincide con el de Al Bagdadi. «*Su cuerpo fue mutilado por la explosión, pero los resultados de las pruebas dieron una identificación innegable y positiva*», aseguró el presidente.



La imagen del actual «guardián del mundo» no deja de ser cuando menos «inquietante». Un guardián que, desgraciadamente, solo actúa contra los sátrapas que incomodan su economía.

El asalto al complejo residencial en el que se encontraba Al Bagdadi, a menos de cinco kilómetros de la frontera con Turquía, fue ejecutado por entre 50 y 70 efectivos de la Fuerza Delta y los Rangers del Ejército de Estados Unidos. En la operación también participaron seis helicópteros de combate que partieron desde Erbil, capital de la región del Kurdistán iraquí. La caída de Al Bagdadi marca un hito en la lucha contra el ISIS. Con la operación, Trump se apuntó una indiscutible victoria en política exterior, justo cuando su estrategia en Siria estaba siendo duramente criticada incluso desde dentro de las propias filas republicanas. El presidente, inmerso en una importante crisis doméstica con un proceso de impeachment en marcha contra su persona, alcanzó uno de los objetivos más claros de su primer mandato. Al Bagdadi ha liderado el Estado Islámico desde

2010, cuando la agrupación terrorista aún era una rama clandestina de Al Qaeda en Irak. La caída en 2017 de Mosul y Raqa, las fortalezas del grupo terrorista en Irak y Siria, respectivamente, despojó a Al Bagdadi de su poder y lo convirtió en un fugitivo. Los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos mataron a la mayoría de los principales lugartenientes del ISIS y, antes de que publicara en abril un mensaje de vídeo en el que aparecía el líder terrorista, hubo informes contradictorios sobre si estaba vivo o no. A pesar de perder su último territorio significativo, se cree que el ISIS tiene células durmientes en todo el mundo y algunos combatientes operan desde las sombras en el desierto de Siria y en diversas localidades iraquíes.

La operación contra Al Bagdadi se produjo en un momento en que Estados Unidos mostraba titubeos en su estrategia en la región. La decisión del presidente Trump de retirar casi la totalidad del millar de tropas que tiene desplegadas en Siria, en medio de la ofensiva turca contra las fuerzas kurdas, que han sido aliadas de EE UU en la lucha contra el ISIS, fue corregida. Washington se plantea ahora mantener una presencia mayor de lo inicialmente estimado, para proteger del ISIS campos petrolíferos sirios.



El fugitivo más buscado del planeta

Al fugitivo más buscado del planeta, con una recompensa de 25 millones de dólares (22,5 millones de euros) ofrecida por EE UU por su cabeza, se le suponía oculto en alguna desértica guarida de la frontera entre Siria e Irak, donde las células durmientes del ISIS vagan a la espera de reactivarse mediante el terror. Pero también Osama bin Laden fue buscado en las montañas de Afganistán, cuando vivía plácidamente con su familia cerca de la principal academia militar de Pakistán.



La provincia de Idlib, último reducto de la rebelión contra el régimen de Bachar el Asad en el norte de Siria, parecía un refugio improbable para Al Bagdadi. El objetivo de los comandos de la Fuerza Delta, la aldea siria de Barisha situada cerca de la frontera de Turquía, se halla en el corazón de un territorio donde los grupos insurrectos islamistas se han hecho fuertes desde hace más de ocho años de guerra.

En la pugna por la hegemonía en la rebelión salafista y yihadista, los grupos herederos de Al Qaeda, de los que Al Bagdadi se escindió hace seis años para emprender la fundación del Califato, habían arrinconado finalmente al ISIS en Idlib desde hace un año. La poderosa milicia Hayat Tahrir al Sham controla la mayor parte de la provincia rebelde, cercada por las fuerzas sirias y rusas, y donde el Ejército turco ha establecido una docena de "puestos militares de observación". La presencia del fugitivo califa en Idlib es interpretada como un signo de la debilidad del Estado Islámico en la región del Éufrates ante el acoso del Ejército de Irak y los avances de las tropas

de Damasco y de las milicias kurdo-árabes del Frente Democrático Sirio.

El líder del Estado Islámico reapareció supuestamente el lunes 16 de septiembre en de una cinta de audio en la que exhortaba a sus seguidores a liberar a los prisioneros yihadistas en manos de las milicias kurdas en el noreste de Siria. Las grabaciones de sonido difundidas a través de portales digitales de propaganda yihadista fueron su medio habitual de comunicación. Desde que proclamó en 2014 el califato en la mezquita de Al Nuri de Mosul, Al Bagdadi no había vuelto ser visto. El pasado mes de abril, cuando se acababa de producir la caída de su último feudo territorial en la frontera siria del río Éufrates con Irak, volvió a aparecer en un vídeo.

La aniquilación del ISIS ha sido el único objetivo compartido por los contendientes enfrentados en el tablero global del conflicto sirio como Rusia e Irán, aliados de El Asad; Turquía, asociada a un sector de la rebelión islamista, o EE UU, que ha bombardeado las bases del califato durante más de cuatro años. Trump reconoció la cooperación de Moscú y Bagdad en la operación, así como, "en cierta medida", la de Siria por permitir sobrevolar sin incidentes su territorio. Las milicias kurdas de Siria, antiguos aliados desechados por Washington tras su repliegue en el conflicto, aseguraron que se habían sumado a la preparación de la acción de inteligencia cinco meses atrás, pese a que su presencia en el entorno de Idlib es muy limitada.

Una fuente del Gobierno turco se limitó a señalar que "Al Bagdadi llegó a la localización [Barisha] 48 horas antes del ataque". Turquía estuvo "coordinada" con EE UU, agregó, sin confirmar ni desmentir la eventual colabo-

ración de los servicios de espionaje turco. "Damos la bienvenida a lo sucedido; es un buen día para los buenos", señaló la fuente oficial turca, que pidió no ser identificada.

La intervención de un comando aerotransportado estadounidense desde Irak hasta el noroeste de Siria solo parece factible por la permisividad de Rusia y Siria, que dominan el espacio aéreo, además de la complicidad de la vecina Turquía. La base de Incirlik, en el cercano sureste de Anatolia, o un portaviones fondeado en el golfo de Alejandreta parecían, en principio, los puntos más previsibles para que las fuerzas especiales de EE UU lanzaran una operación encubierta en el avispero de Idlib, donde están atrincherados más de 30.000 insurgentes islamistas radicales con artillería y misiles tierra-aire.

Dado por desaparecido en varias ocasiones, Al Bagdadi era ante todo un símbolo político y religioso más que un jefe y estratega militar. Su muerte no tendrá un impacto trascendental sobre la amenaza yihadista global. El califa que llegó a reinar sobre 11 millones de personas en un territorio del tamaño del Reino



Unido representaba ya la imagen de la derrota la última vez que fue visto con vida. Rodeado por sus comandantes en el vídeo difundido, su presencia solo era una muestra de vida para las decenas de miles miembros y afiliados del ISIS en Oriente Próximo, Asia, África y Europa. Liquidados el califato y el califa, el ISIS todavía aspira a seguir golpeando con el terror a través de grupos de radicales y fanáticos que le rinden pleitesía en medio mundo.

EL ESTADO ISLÁMICO ANUNCIA NUEVO LÍDER

El grupo terrorista reconoce la muerte del califa Al-Bagdadi, aconseja a EE UU que «no se alegre» y recuerda que está «en el frente de Europa».



Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi es el nombre del nuevo califa del grupo yihadista Estado Islámico (EI). La agencia Amaq, medio habitual empleado por la organización terrorista, difundió el jueves 31 de octubre un mensaje de audio de ocho minutos a través de Telegram en el que reconoce la muerte de su líder Abu Bakr al Bagdadi.

El EI aprovechó la grabación para confirmar también la muerte del exportavoz y mano derecha del califa, Abu Hasan al-Muhayir, alcanzado apenas 24 horas después que Al-Bagdadi en Yarabulus, en el norte de Siria. El nuevo portavoz se presentó como Abu

Hamza al-Qurashi y, a su vez, será el nuevo máximo dirigente, además de descendiente del profeta porque ambos pertenecen a la tribu de los coraichitas o quraish, precisamente la de Mahoma.

El relevo de Al-Bagdadi recurre a un sobrenombre que, de momento, impide conocer su verdadera

identidad. Antes de saber el nombre del nuevo líder, diarios como 'The Washington Post' informaron sobre los posibles candidatos y en la terna del periódico estadounidense se encontraban el saudí Abu Saleh al-Jazrawi, el tunecino Abu Othman al-Tunisi y un iraquí, Al-Haj Abdulá Qardash, turcomeno de la ciudad iraquí de Tal Afar. Este último, según sus fuentes, era el principal aspirante a dirigir la organización.

Confirme al mensaje de voz del EI, con este relevo se cumple la voluntad expresada por Al-Bagdadi y el

nuevo califa cuenta con el respaldo del Consejo de la Shura. El portavoz del grupo se encaró también directamente con Estados Unidos para preguntarle: «¿No se da cuenta de que (el) El está ahora en el frente de Europa y África Occidental? Se extiende desde Oriente hasta Occidente», por lo que dijo a Washington que no se alegre por la muerte de la cúpula de la organización.



«Algún tipo de respuesta»

El mensaje del EI llegó el mismo día en el que el Pentágono mostró las primeras imágenes de la operación en la que las fuerzas especiales mataron a Al-Bagdadi en Barisha, a cinco kilómetros de la frontera turca. El general del Cuerpo de Marines Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de EE UU, fue menos expresivo que Donald Trump y sobre los últimos momentos del máximo líder yihadista afirmó que «se metió en un agujero con dos niños pequeños y se inmoló mientras su gente permanecía en la superficie». El mismo mando militar alertó de la posibilidad de que el grupo intente «algún tipo de respuesta» en represalia por perder a su dirigente.

La caza del 'terrorista más buscado' fue posible gra-

cias a las pistas que los servicios de Inteligencia recibieron de un informante que ahora podría percibir la totalidad o una parte de la recompensa de 25 millones de dólares (22,4 millones de euros) que ofrecía Estados Unidos, según 'The Washington Post'. El diario señaló que esta persona estaba bien situada en las filas del EI y fue quien entregó datos sobre los desplazamientos en Siria de su líder. El informante fue apresado por los kurdos, que lo entregaron de forma inmediata a los estadounidenses cuando comproba-

ron la credibilidad de los datos que facilitaba.

El que fue apodado como «califa invisible» logró esconderse en sus últimos meses de vida gracias al pago de suculentas cantidades a grupos islamistas sirios como Hurras al-Din, organización radical aliada de Al-Qaida y enemiga del EI.

'The New York Times' tuvo acceso a algunos de los recibos del EI en los que figuran cantidades de hasta 67.000 dólares (60.000 euros) a cambio de protección. Aunque el EI pagaba a Al-Qaida por su seguridad, fuentes estadounidenses apuntaron a este diario que el califa fue traicionado finalmente por una persona «muy, muy, muy cercana», que sería la misma que robó su ropa interior.

EL PENTÁGONO ADMITE QUE MANTIENE TROPAS EN SIRIA PARA QUEDARSE EL PETRÓLEO

El secretario de Defensa confirmó que la misión de los mil soldados es evitar que el oro negro caiga en manos sirias, rusas o del Estado Islámico.

Como comandante en jefe, los deseos de Donald Trump son órdenes para el Pentágono, por descabellados que sean. Coincidiendo con la muerte del líder del Estado Islámico (EI) Abu Baker al-Bagdadi y la retirada de las tropas de Siria por la invasión turca, el presidente de EE UU ha dicho en al menos dos ocasiones que pretende quedarse con el petróleo sirio, algo que el secretario de



Defensa, Mark Esper, ha confirmado.

A pregunta expresa de la CNN, el jefe del Pentágono admitió que la nueva misión de los aproximadamente mil soldados que quedan en Siria no consiste sólo en evitar que el oro negro caiga en manos del Estado Islámico u otros grupos terroristas que operen en la zona, sino «evitar que accedan a él las fuerzas rusas o sirias».



Trump había advertido de que «tal vez haya otro país que quiera el petróleo, en cuyo caso van a tener una lucha del demonio». Al presidente sirio, Bashar el-Asad, no le ha sorprendido. De hecho, el jueves 31 de octubre dijo en la televisión estatal que «al menos Trump es honesto al decir que quiere el petróleo», explicó. «Todos los presidente estadounidenses cometen crímenes y luego les dan el Nobel. Actúan como defensores de los derechos humanos y de los valores únicos de EE UU o de Occidente, pero son un grupo de criminales que trabajan en beneficio de los lobbies».

Los expertos creen que los generales estadouni-

denses ven en el interés del presidente por el preciado crudo el gancho para mantener tropas sobre el terreno con las que completar las operaciones en marcha y la colaboración con los kurdos. Trump había sido claro: «Nos quedamos con el petróleo»,

dijo el lunes 28 de octubre a los jefes de policía, pero Esper prefiere interpretarlo «como que hay que negarle al EI acceso a los pozos petroleros».

Apegado a los luchadores kurdos con los que sus hombres han luchado mano a mano en los últimos años para derrotar al EI, el Pentágono quiere asegurarse de que las Fuerzas Democráticas Sirias «tienen acceso a los recursos» que se derivan de los yacimientos de Deir Ezzor, al este del río Éufrates, «para que puedan continuar las operaciones» de combate. Con respecto al resto de los pozos petroleros más allá de esa zona, «todavía no se ha creado un grupo de trabajo», admitió el secretario de Defensa de EE UU.

EL TÍO DEL PRESIDENTE SIRIO BLANQUEÓ 600 MILLONES EN ESPAÑA DESDE LOS OCHENTA

El juez De la Mata procesa a Rifaat Al Assad por liderar una organización criminal integrada por su familia tras huir del país con 300 millones públicos.



El exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente sirio Bashar Al Assad, y otras 13 personas, entre ellas ocho de sus hijos y dos de sus esposas, formaban parte de una organización criminal que ha podido blanquear en España más de 600 millones de euros de dinero público procedente de su país.

Esta es la principal conclusión del extenso auto de procesamiento dictado el viernes 22 de noviembre por el juez de la Audiencia Nacional

José de la Mata. El instructor acusa a Rifaat de ser líder de un grupo criminal cuyas órdenes eran seguidas por su familia y testaferros, que se ha dedicado desde los años ochenta a ocultar, transformar y blanquear en distintos países

Europeos fondos ilícitamente «depredados» del Tesoro nacional sirio.

En su escrito de 142 páginas, el magistrado acordó continuar el procedimiento contra estas 14 personas por delitos de asociación ilícita u organización criminal y blanqueo de capitales. El principal encausado, hermano del fallecido presidente sirio Háfes Al Assad (1971-2000), se marchó del país en 1984 y se concertó con éste para llevarse alrededor de 300 millones de dólares.

Además de esas cantidades, el juez añade que en la década anterior Rifaat obtuvo también ingentes recursos ilícitos de múltiples actividades delictivas como la extorsión, amenazas, contrabando, expolio de riquezas arqueológicas, usurpación de inmuebles y tráfico de drogas.

Las primeras adquisiciones de los Assad en España se sitúan en 1986, con la compra de 244 plazas de garaje a través de una sociedad gibraltareña. El dinero apropiado de Siria se fue invirtiendo en inmuebles y negocios en la provincia de Málaga, especialmente en puntos estratégicos de la Costa del Sol. En la localidad de Benahavís, por ejemplo, adquirió una finca de 33 millones de metros cuadrados. La investigación le atribuye en España 507 propiedades por valor de 695 millones.



No fueron regalos saudíes

El juez De la Mata detalla el rol de cada una de estas personas dentro de la organización criminal, donde destaca el papel de los hijos y también «el apoyo determinante de legiones de asesores en todas las fases de su implementación, para la ocultación, transformación y blanqueo de todos esos capitales».

El instructor considera que las inversiones multimillonarias realizadas en España por el grupo carecen de justificación, con operativas presididas por la más «absoluta opacidad» y con una estructura de cientos de sociedades pantalla que tiene como única finalidad facilitar el blanqueo de capitales. El juez rechaza la justificación facilitada por los acusados, de que sus bienes proceden de regalos de la realeza de Arabia Saudí, porque la investigación ha acreditado que las adquisiciones inmobiliarias no tienen ese origen.

Además de la jurisdicción francesa, en donde ya se le ha abierto juicio, en Suiza se investiga a Assad por crímenes de lesa humanidad. De la Mata incluye otras jurisdicciones como Gibraltar, Suiza, Panamá o Jersey, donde existen «múltiples» indicios de que posee patrimonio (en Reino Unido tiene la residencia privada más grande después del Palacio de Buckingham). El auto también destaca su alto poder adquisitivo propio de «multimillonarios»: tres barcos de lujo, un Boeing 727 o varios coches blindados y de alta gama.



LA LLAMA DE AL-BAGDADI GUÍA AL YIHADISMO

El fallecido líder del Estado Islámico demostró que crear un califato es posible y al menos 14.000 combatientes activos lo volverán a intentar.

Abu Baker al-Bagdadi (Samarra, 1971-Barisha, 2019) es historia y con su muerte comienza la leyenda y la caza de su sucesor, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, que pasa a convertirse en el 'terrorista más buscado'. Donald Trump logró la victoria militar contra el califato establecido por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y se ha colgado la medalla de la muerte de su líder, pero la creciente inestabilidad en Siria e Irak ayuda al deseo del grupo de rehacerse, una situación que en el pasado resultó clave para su ascenso.

El sueño del califato duró apenas cinco años y este es el gran legado que deja Al-Bagdadi, una herencia que «se ensalzará y solemnizará ya que logró crear un marco de espacio, tiempo y libertad en el que el islamismo más radical llegó a ser capaz de autogestionarse, algo con lo que ni soñaron otros líderes como Osama bin Laden», opina el investigador del Real Instituto Elcano Sergio Altuna.

Gracias a Al-Bagdadi, el Estado Islámico pasó de grupo terrorista en sus comienzos en la insurgencia contra la ocupación de Estados Unidos en Irak, a liderar de forma temporal un protoestado del tamaño de Gran Bretaña en el corazón de



Oriente Próximo, para terminar convirtiéndose en una idea tangible en el imaginario yihadista. «Es una gran victoria religiosa que da argumentos a sus seguidores para luchar por volver a conseguirlo, porque saben que es posible», explica a 'Al-Yasira' el analista Ibrahim al-Marashi, profesor de Historia en la Universidad de California.

El Departamento de Estado de EE UU estima que al Estado Islámico le quedan entre 14.000 y 18.000 combatientes operativos, una cifra alejada de los 80.000 que pudo tener en sus mejores días según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), pero aún así supone una seria amenaza para la estabilidad regional. Ya no hay un territorio físico que defender, han vuelto a la clandestinidad -el medio donde crecieron y mejor se manejan- y funcionan como células independientes capaces de golpear con atentados cuando lo consideren oportuno, una estrategia que desarrollaron a la perfección en Irak hasta el establecimiento del califato.

A esta especie de 'ejército en la sombra' en Oriente Próximo hay que sumar las provincias extranjeras del califato, donde grupos yihadistas juraron lealtad al califa. Egipto, Somalia, Libia o Afganistán cuentan con brazos del Estado Islámico operativos. La otra cara de la amenaza internacional a corto plazo la ponen los 'lobos solitarios', seguidores animados por la propaganda del grupo para convertirse en «guerreros santos» con ataques que pueden llevar a cabo con un cuchillo o al volante de un vehículo. Es la yihad de 'házte lo tu mismo' pre-



dicada por el EI y sufrida en Europa o EE UU.

Cinco líderes en 16 años

Es la cuarta vez que Estados Unidos desca-beza a este grupo nacido como Al-Qaida en Irak durante la invasión post Saddam Hussein. Su fundador y primera bestia negra de Washington fue el jordano Abu Musab al-Zarqawi, muerto en un bombardeo selectivo en 2006. Su testigo lo recogió Abu Ayub al-Masri, un egipcio experto en explosivos que decidió ceder el puesto de líder de la insurgencia iraquí a un combatiente local como Abu Omar al-Bagdadi y cambiar el nombre del grupo a Estado Islámico de Irak. Ambos murieron en otra operación estadounidense en 2010 en Tikrit y entonces llegó el turno de un hasta entonces desconocido Abu Baker al-Bagdadi, que formaba parte de la 'shura' (consejo de mando) del grupo y que en solo cuatro años aprovechó el desconcierto en su país y la guerra en la vecina Siria para proclamar el califato y atraer a miles de combatientes de todo el



mundo a su causa. El Estado Islámico creció tan rápido gracias al caos imperante en Irak y en Siria y puede volver a aprovecharlo en el actual vacío de poder», advierte Seth Frantzman, analista del diario 'The Jerusalem Post' y autor del libro 'After ISIS', publicado este mismo año.

AFGANISTÁN

ATENTADOS TALIBANES PARA TENSAR LA NEGOCIACIÓN DE PAZ

Una explosión en Kabul causó 14 muertos y 145 heridos, la mayoría civiles.

Los talibanes volvieron a sacudir el miércoles 7 de agosto Kabul con un atentado con bomba contra una comisaría de Policía que dejó 14 muertos y 145 heri-



perdieron tejados y ventanas.

Mientras las autoridades afganas iban informando del número de heridos en el atentado, que iban aumentando a medida que pasaban las horas, no fue hasta primera hora de la tarde que en una rueda de prensa en Kabul el Gobierno reveló las cifras totales: 14 muer-

tos y 145 heridos, 92 de ellos civiles. El viceministro de Interior para la Seguridad, el general Khoshal Sadat, dedicó parte de su intervención a dejar claro que, a pesar de la magnitud del ataque, los talibanes están sufriendo numerosas bajas en la guerra, con 4.769 insurgentes muertos desde que éstos iniciaron la ofensiva de primavera en abril.

“Este atentado es un reflejo de vuestros crímenes diarios”, replicó el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, en un mensaje en Twitter, en el que respondía así a las preguntas planteadas por las autoridades afganas durante la rueda de prensa sobre qué empuja a los insurgentes a atentar en las grandes ciudades. El atentado, detallaron los insurgentes, fue llevado a cabo por el “héroe del Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) Jabbar Logari, que usó un camión cargado de explosivos”.

Este ataque coincidió con la octava ronda de negociaciones de paz entre representantes de Estados Unidos y de los talibanes en Catar, en busca de un acuerdo que ponga fin a dos décadas de guerra.

A pesar de las conversaciones, la violencia continúa en todo el país con constantes ataques, incluidos atentados, una situación que la ONU relacionó con el intento de las partes de lograr un mejor posicionamiento a la hora de negociar en



los términos más favorables un acuerdo de paz. “Con el objetivo de tomar ventaja en las conversaciones de paz, los talibanes llevan a cabo ataques terroristas contra instituciones públicas y civiles”, corroboró hoy también el presidente afgano, Ashraf Ghani, al tiempo que garantizó que los insurgentes nunca obtendrán dividendos por esa vía.

MATANZA YIHADISTA EN KABUL EN PLENO PROCESO DE PAZ CON LOS TALIBANES

El Estado Islámico reivindicó el atentado suicida que mató al menos a 63 personas en un salón de bodas.

Kabul llora a sus muertos. El grupo yihadista Estado Islámico (EI) perdió el califato que levantó en Siria e Irak, pero conserva su capacidad para generar terror, como demostró en la noche del sábado 17 de agosto en la capital afgana. Una operación suicida del Estado Islámico acabó con la vida de al menos 63 personas que habían acudido a celebrar una boda al salón Dubai City, situado en el oeste de Kabul, en un barrio de la minoría chií. Los talibanes, inmersos en un proceso de paz con Estados Unidos y que hace diez días atacaron una comisaría en la capital y mataron a 14 personas, condenaron de forma «rotunda» el atentado. Su portavoz, Zabiullah Mujahid, envió un mensaje a los medios en el que aseguró que «no hay justificación para semejante carnicería de mujeres y niños».

El ataque iba dirigido contra la población hazara, de la minoría chií, a los que el Estado Islámico considera



herejes

El brazo del Estado Islámico en Afganistán reivindicó la acción en la red Telegram con un breve texto en el que explicó que primero se inmoló un atacante suicida, identificado como Abu Asem al-Pakistani, y «cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar los muyahidines hicieron detonar un coche bomba aparcado». Los yihadistas identificaron su objetivo como «una gran concentración de los renegados politeís-

tas», forma de referirse a la minoría chii del islam a la que pertenecen los hazara, golpeados de forma sistemática por el EI que los considera herejes.

«Es doloroso ver cómo el mundo cierra los ojos» al sufrimiento del pueblo afgano, tuiteó el jefe de gabinete de los servicios secretos afganos, Rafi Fazil, en una jornada marcada por los funerales y las escenas de dolor de los familiares a las puertas de los hospitales. «Los talibanes no pueden exonerarse de la culpa, ya que proveen una plataforma para los terroristas», afirmó el presidente, Ashraf Ghani, antes de apuntar también a la comunidad internacional para advertir que «no debería quedar indiferente ante este tipo de actos inhumanos».

Este no es el primer ataque de este tipo. En noviembre de 2018, más de 50 personas murieron en el salón para bodas Uranus de Kabul, que ese día había sido alquilado para una celebración religiosa con motivo del cumpleaños de Mahoma. Aquel atentado llevó a los dueños de esta clase de establecimientos a quejarse ante las autoridades por la falta de seguridad. «O envían policías o al menos que accedan a sentarse para ver cómo podemos asegurar este tipo de eventos», declaró entonces a la cadena local Tolo Mohammad Nader Qarghayee, representante de los empresarios. Los responsables del gremio lamentaron que «vemos veinte guardias en torno a las casas de los políticos, pero el Gobierno no quiere enviar a nadie a custodiar unos salones donde pueden llegar a juntarse hasta 5.000 personas». Nueve meses después el terror les ha vuelto a golpear con la misma estrategia suicida y no confían demasiado en las promesas de unas autoridades superadas por la doble amenaza del EI y los talibanes.



El ataque se produjo la víspera del centenario de la independencia de Afganistán y volvió a demostrar la fragilidad de la situación de seguridad en el país asiático. EE UU cuenta los días para iniciar la retirada de sus 14.000 hombres tras una guerra de casi dos décadas y el propio Donald Trump tuiteó el viernes 16 de agosto, pocas horas antes del atentado, que «ambas partes buscamos llegar a un acuerdo», en referencia al proceso abierto en Doha, la capital de Catar, con los talibanes.

El punto clave del pacto es la salida de las fuerzas estadounidenses a cambio de que los talibanes se comprometían a no dar cobijo en el país a grupos extremistas que puedan luego atacar intereses de EE UU, como ocurrió en el pasado con Al-Qaida. En una segunda fase, los talibanes también se comprometerían a un alto el fuego temporal para iniciar conversaciones con el Gobierno de Kabul con el que ahora mismo no existe diálogo alguno porque le consideran un títere de Washington. Mientras las conversaciones siguen en Doha, la guerra no para en suelo afgano.

UN BOMBARDEO DE EE.UU. MATA A 25 AFGANOS QUE “RECOGÍAN PIÑONES”

La bombas equivocadas cayeron en una zona montañosa y de difícil acceso en plena época de recogida de piñones.

Al menos 25 afganos murieron y más de 30 resultaron heridos en un supuesto bombardeo estadounidense el miércoles 18 de septiembre en un área controlada por la insurgencia en el este de Afganistán, denunciaron autoridades locales.



El bombardeo “contra civiles que acampaban para la recogida de piñones” se produjo hacia la 1.30 hora local en el área de Wazir-Tangi en la provincia de Nangarhar, dijo el portavoz del gobernador regional, Attaullah Khogyani. “Hasta ahora han llevado nueve cadáveres y cuatro heridos al hospital provincial, todos son civiles”, añadió el portavoz, que dijo que el área donde ocurrió el bombardeo es “remota y montañosa” sin apenas comunicaciones.

Un miembro de la Asamblea provincial de Nangarhar, Ajmal Umar, afirmó que según la información recibida de vecinos de la zona y líderes tri-



bales el número de fallecidos en el “bombardeo estadounidense” es 25 y el de heridos “más de 30”, y aseguró que todos ellos son “pobres aldeanos” que se encontraban en el lugar para la recogida de piñones. Otro miembro de la Asamblea provincial, Zabihullah Zmarai, confirmó el incidente e insistió en que todas las víctimas eran “pobres granjeros y aldeanos que se encontraban en las montañas para la recolecta de piñones negros”.

La Misión de la ONU en Afganistán denunció el pasado julio que en la primera mitad del año se ha duplicado el número de muertos civiles en bombardeos aéreos.

AL MENOS 48 MUERTOS EN DOS ATENTADOS DE LOS TALIBANES EN AFGANISTÁN

Al menos 26 personas perdieron la vida en el primer ataque en el norte durante un mitin del presidente Ashraf Ghani y otras 22 murieron cuando una bomba estalló una hora después en Kabul, a 300 metros de la embajada de Estados Unidos



Ministerio de Defensa. El primer atentado, perpetrado por un atacante suicida, se produjo cuando estalló un artefacto adherido a un vehículo policial en una de las calles principales de Charikar, capital de la provincia de Parwan -justo al norte de Kabul-. El vehículo se dirigía al

mitin de Ghani, explicó la portavoz del gobernador regional, Wahida Shahkar.

Como mínimo, 26 personas perdieron la vida y 42 resultaron heridas, según confirmó Abdul Qasim Sangin, el director del hospital provincial de la zona. “Hay mujeres y niños entre las víctimas y la mayoría de ellos parecen ser civiles. Las ambulancias aún están realizando su labor y no podemos descartar que haya más víctimas”, lamentó el director. “Todos los miembros del equipo de campaña, en particular el presidente Ashraf Ghani y otros oficiales, se encuentran bien e ilesos” confir-

Dos atentados suicidas perpetrados por los talibanes sacudió el martes 17 de septiembre Afganistán con apenas una hora de diferencia. El primero tuvo lugar en el norte del país, cuando una bomba explotó en las cercanías de un recinto donde presidente afgano, Ashraf Ghani, estaba protagonizando un mitin en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales que se iban a celebrar el sábado 28 de septiembre. El segundo ataque ocurrió en una zona de Kabul cercana a la embajada estadounidense y de un edificio del

mó Jawid Faisal, un portavoz del equipo de campaña de Ghani. Menos de una hora más tarde, a sesenta kilómetros del primer ataque, una segunda bomba explotó en el centro de Kabul, cerca de la plaza Masood del distrito policial 9, a apenas 300 metros de la embajada de Estados Unidos, según informó el portavoz de la policía de la capital afgana, Firdaws Faramarz.

La policía y fuentes médicas comunicó 22 muertes y 38 heridos y continuaba la investigación para saber si "si se trata de un ataque suicida o de una bomba magnética adjunta a una motocicleta",



según hizo público el portavoz del ministerio del Interior, Nasrat Rahimi.

Los talibanes reivindicaron ambos ataques a través de un comunicado emitido por uno de los portavoces de los insurgentes, que indicó que los ataques iban dirigidos a las fuerzas de

seguridad. "La gente estaba advertida del ataque", aseguró. "No participéis de las elecciones de la administración títere, porque todos los encuentros de este tipo son nuestro objetivo militar", continuaba el comunicado, donde advertían que "si a pesar de las advertencias, alguien sale herido, ellos mismos serán los culpables".

IRÁN

EL TERROR SUNÍ VUELVE A GOLPEAR A LA GUARDIA REVOLUCIONARIA DE IRÁN

Al menos cuarenta miembros del cuerpo de elite del régimen de los ayatolás pierden la vida en un ataque suicida contra un autobús militar.

La Guardia Revolucionaria de Irán clamó venganza tras el atentado que el miércoles 13 de febrero costó la vida al menos a cuarenta de sus miembros en una operación suicida contra el autobús en el que viajaban en la provincia de Sistán y Baluchistán, en plena frontera con Pakistán. El ataque fue reivindicado de inmediato por Jaish al-Adl (nombre en árabe que significa 'Ejército de la Justicia'), grupo radical suní que desde hace siete años desafía a las autoridades de Teherán en esta parte del país con atentados y secuestros.

Los paramilitares del cuerpo de elite del régimen teocrático habían acabado su relevo y regresaban a sus hogares cuando fueron alcanzados por un kamikaze al volante de un coche cargado de explosivos en la carretera que une Zahedán con Khash, según el comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria, que calificó a los autores del atentado de «mercenarios de los servicios de



Inteligencia» de Estados Unidos.

Además de los problemas económicos y de la cada vez mayor tensión con Washington, Teherán mira con preocupación la inestabilidad en sus fronteras, donde milicias armados de las minorías kurda, baluchi y árabe amenazan al Gobierno. Las autoridades niegan que exista discriminación hacia estos grupos étnicos, pero ellos se quejan de la falta de derechos. En el noroeste (Kurdistán) y sureste (Baluchistán) se registran enfrentamientos armados

con frecuencia, aunque normalmente no trascienden a los medios, y la república islámica acusa abiertamente a Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y Arabia Saudí de financiar y respaldar a estos insurgentes para desestabilizar al sistema.

El Ejército de la Justicia ha incrementado sus acciones y se ha convertido en un motivo de fricción entre Irán y Pakistán. Los persas acusan al país vecino de no hacer lo suficiente para combatirlos y denuncian que es al otro lado de la frontera donde tienen sus santuarios. Esta banda terrorista tomó el relevo de Jondolá (Ejército de Dios) en 2012 al frente de la insurgencia de la minoría baluchi. En octubre de 2009 un ataque suicida de Jondolá acabó con la vida de al menos 29 personas e hirió a otras 28 en la zona de Pishin. Esta operación golpeó directamente a la cúpula de la Guardia Revolucionaria que asistía a una reunión con líderes tribales suníes y chiíes de la zona. Cinco altos oficiales del cuerpo paramilitar, entre ellos el vicecomandante de la Guardia, general Noor Alí Shooshtari, y el jefe de la delegación provincial, Rajab Alí Mohammadsadeh, perdieron la vida.



Los servicios de Inteligencia trabajan también para evitar nuevos golpes del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que ha atentado en dos ocasiones en el país. En septiembre de 2018 en Ahvaz, en el suroeste, 25 personas perdieron la vida y otras 60 resultaron heridas tras el ataque de un comando contra un desfile militar que conmemoraba el inicio de la guerra lanzada por Irak y que se libró entre los años 1980 y 1988. La Guardia Revolucionaria respondió con el lanzamiento de misiles contra posiciones del Estado Islámico en Siria.

Irán enterraba a sus muertos el mismo día en que en Polonia concluía la cumbre convocada por Estados Unidos para tratar de frenar la influencia de la república islámica en Oriente Próximo. Después de la primera de las dos jornadas, el primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, se mostró satisfecho porque «los israelíes y los Estados árabes avanzamos en nuestro interés común de guerra con Irán», recogió 'The Jerusalem Post'. Además del Estado hebreo, en Varsovia se encontraban otros aliados regionales de Washington como Arabia Saudí, Jordania, Kuwait o Egipto.

IRAK

LA ONU CONFIRMA 269 MUERTES EN IRAK

Más de 8.000 personas han resultado heridas durante la represión de las protestas.

La ONU confirmó el viernes 8 de noviembre que al menos 269 personas murieron en las protestas en Irak, salvajemente reprimidas por las fuerzas de seguridad y en medio de las cuales otros grupos armados perpetraron asesinatos deliberados. El viernes 8 de noviembre Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra fue informada de la muerte de cinco manifestantes asesinados duran-



te la noche frente al edificio de la Gobernación de Basora. Además de los muertos, se contabilizaron al menos 8.000 heridos, incluidos agentes de seguridad y militares, entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre.

«El número exacto de víctimas puede ser mucho mayor. La mayoría de ellas han sido impactadas por munición

real disparada por las fuerzas de seguridad y elementos armados, que muchos han descrito como milicias privadas», señaló el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Rupert Colville.

LOS IRAQUÍES DESAFÍAN LA BRUTALIDAD POLICIAL PARA PROTESTAR POR LA CORRUPCIÓN Y EL PARO

La represión del primer ministro, que ahora promete remodelar el Gobierno, provoca la muerte de 21 manifestantes y casi 1.800 sufren heridas.

Después de tres semanas de aparente calma, las protestas volvieron el viernes 25 de octubre a las calles de Irak y al menos 21 manifestantes perdieron la vida y casi 1.800 resultaron heridos en los choques con las fuerzas de seguridad. Bagdad volvió a ser el epicentro de unas movilizaciones que se extendieron a ciudades del sur como Basora o Nasiriya, donde miles de personas se concentraron para mostrar su hastío por la corrupción, el desempleo y el Ejecutivo de un primer ministro incapaz de adoptar medidas de choque.

Un nuevo desafío se le presenta a la oficina de Adel Abdul Mahdi, que ante la oleada de críticas declaró que «la dimisión del Gobierno sin una alternativa constitucional llevaría al país al caos» y prometió llevar a cabo una reforma del Gabinete.

Las movilizaciones volvieron a ser espontáneas y sin connotaciones partidistas o sectarias, aunque en esta ocasión el clérigo chií Moqtada al-Sader declaró que los ciudadanos tenían «derecho» a salir a las calles si así lo deseaban.

Las palabras del primer ministro no calmaron los ánimos de unos iraquíes que vuelven a las movilizaciones sabiendo que se juegan literalmente la vida, ya que en las primeras jornadas de protestas a principios de octubre 149 civiles y ocho agentes del orden murieron en las calles. Abdul Mahdi prometió entonces una serie de medidas como la apertura de una lista con cientos de puestos de funcionarios para jóvenes diplomados, concesión de pensiones a las familias de los manifestantes fallecidos, a quienes calificó de «mártires»... pero ninguna reforma de importancia que ayude a paliar la corrupción endémica que sufre Irak, duodécimo país más corrupto del mundo según la lista de Transparencia Internacional, encabezada por Somalia y Siria.



Llamada a la contención

La máxima autoridad chií del país, el clérigo Ali al-Sistani, dedicó su intervención en la oración del viernes 25 de octubre a pedir «contención» tanto a manifestantes como a fuerzas afines al Gobierno para evitar una escalada de la violencia y aprovechó para criticar a las autoridades después de conocer los resultados de una investigación oficial dirigida por el Comité Ministerial Supremo que refleja que «el 70% de los fallecidos presentaban disparos en la cabeza o en el pecho». Ese día, el lanzamiento de gases lacrimógenos provocó la muerte de una manifestante, a quien una lata le golpeó en la cabeza, así como cientos de heridos.

El ministro del Interior, Yasin Taher al-Yasiri, se desplazó a primera hora hasta la plaza Tahrir de Bagdad para reunirse con los activistas y decirles que las fuerzas de seguridad pretenden «proteger» a la ciudadanía y «no permitirán que nadie les ataque». De poco sirvió la intervención del político porque después del rezo miles de personas comenzaron a marchar hacia la Zona Verde, el lugar donde Saddam Husein tenía su palacio y donde desde 2003 se encuentran también el Parlamento y las embajadas de países como EE UU. Según fuentes policiales, varios incendios afectaron a una decena de sedes de partidos políticos en Samawa, en el sur del país.

UNA SANGRIENTA 'PRIMAVERA ÁRABE' IRAQUÍ

Casi 100 muertos y más de 3.000 heridos tras cinco días de protestas en Bagdad y en el sur del Iraq contra la corrupción y el paro.

El enemigo ya no es una secta. Ni el grupo yihadista Estado Islámico o las fuerzas estadounidenses. Las calles de Irak claman contra la corrupción y el desempleo, dos males que fortalecidos con el paso de los años en el sistema levantado tras la caída del régimen de Saddam Husein. Y la única respuesta del Gobierno es la represión. Al menos 93 personas han perdido la vida, según la comisión gubernamental de derechos humanos del Parlamento, y hay más de 3.000 heridos en las movilizaciones que empezaron el martes 1 de octubre en Bagdad y que pronto se extendieron a ciudades del sur como Amara, Diwaniya, Nasiriya o Hilla. Tras 48 horas de toque de queda, las autoridades lo levantaron para tratar de recuperar la normalidad, pero las protestas no cesaron. Se restringió Internet y las unidades antiterroristas de élite estaban desplegadas por Bagdad con luz verde para abrir fuego contra unos manifestantes que protestaban sin responder a órdenes de partidos o sectas y que pedían a gritos «la caída del régimen», el famoso eslogan de la 'primavera árabe' que recorrió Siria, Yemen, Egipto, Túnez o Libia en 2011. «No me gusta la expresión 'primavera árabe', ni establecer comparaciones, pero se podría considerar como tal ya que estamos ante un movimiento que surgió de forma espontánea por parte de jóvenes independientes, no afiliados a partidos. Jóvenes frustrados», piensa el abogado iraquí Hayder Al Shakeri. El primer ministro Adel Abdul Mahdi se enfrenta a su primera gran crisis desde que llegara al poder y el jueves 3 de octubre, por la noche, dirigió a la nación un mensaje televisado en el que



aseguró que «las demandas de la calle son un prioridad», pero fue sincero a la hora de admitir que «no podemos hacer milagros». Abdel Mahdi, un economista de 77 años que entre 2005 y 2011 fue vicepresidente del país, ha tenido un año para aplicar reformas para combatir una corrupción endémica, pero no lo ha hecho y la insatisfacción le ha explotado en las manos.

El ayatolá Sistani, máxima autoridad religiosa chií, se sumó a las críticas a un Gobierno que «debe mejorar los servicios públicos, suministrar empleos a los que no lo tienen, evitar el clientelismo en el sector público y terminar con la corrupción» y denunció los «ataques inaceptables contra manifestantes pacíficos y también contra policías». El religioso pidió la formación de «un comité de tecnócratas independientes» que puedan atender con rapidez las exigencias de la calle, pero los dirigentes políticos no han sido capaces ni de ponerse de acuerdo para una sesión de emergencia en el parlamento. Abdel Mahdi se queda solo y el clérigo chií Moqtada Al Sadr pidió su dimisión «para evitar nuevos derramamientos de sangre». El partido de Al Sadr forma parte del mismo Gobierno que quiere descabezar.

«Hasta 2003 la corrupción se concentraba en manos de la élite privilegiada del partido Baaz, pero desde



entonces el sistema coercitivo de corrupción se ha reemplazado por una forma más amplia de corrupción que en árabe llamamos muhassasa y que se basa en partidos y sectas. Irónicamente, la corrupción se ha democratizado», explica Sarwar Abdullah, académico de la Universidad de Suleymania, en un artículo sobre la lucha contra la corrupción que recoge 'The Washington Institute For Near East Policy'. En este tiempo tampoco ha sido capaz de generar un plan que abra una puerta a la esperanza a los jóvenes parados y la tasa de desempleo juvenil supera el 25 por ciento.

La chispa de la protesta

Irak no ha vivido un proceso como el de la 'primavera árabe' de 2011, pero son habituales las protestas y en mayo de 2016 un grupo de manifestantes llegó incluso a asaltar el parlamento, situado en la Zona Verde, en señal de protesta por los mismos motivos que ahora les llevan a las barricadas. En este caso, la chispa que encendió el enfado popular fue la destitución del general Abdul Wahab Al Saadi, considerado uno de los hombres clave en la derrota del grupo yihadista Estado Islámico, que fue relevado de su cargo al frente de las unidades antiterroristas de manera sorpresiva.

Al Saadi es chií, pero no está alineado con ninguno de los grandes partidos de esta secta y su destitución fue interpretada como una medida ordenada por Irán, que le veía como un oficial cercano a Estados Unidos. «Esta destitución fue la chispa que prendió un enfado que crece día a día. Los jóvenes son los protagonistas, jóvenes que quieren trabajar. De momento es absolutamente no sectario, pero desde



luego que hay países que intentarán usar las movilizaciones en su propio interés», explica el analista del canal kurdo Rudaw, Lawk Ghafari.

Desde la invasión estadounidense de 2003 el poder de Bagdad vive en equilibrio entre Washington y Teherán. La puesta en marcha de un sistema de voto democrático, llevó al poder a los partidos religiosos chiíes, secta mayoritaria en el país. Irán es la gran potencia regional chií, es el país que protegió a muchos de los actuales líderes durante la etapa de Sadam, y ha logrado una enorme influencia política, pero también militar. Teherán apoya a los grupos paramilitares que tiene cada partido, que en su momento se convirtieron en la columna vertebral de las fuerzas de seguridad nacionales tras la decisión de Estados Unidos de acabar con el Ejército y el Baaz, y en los últimos años esta cooperación se ha reforzado gracias a las Fuerzas de Movilización Popular, las milicias chiíes que se formaron para combatir al Estado Islámico.

UN MES DE PROTESTAS EN IRAK QUE DEJA MÁS DE 250 MUERTOS

Desde que comenzaron las protestas en Irak a principios de octubre han fallecido más de 250 personas

Los hombres de las milicias, muchas apoyadas por Irán, se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel fundamental en la represión

En el parque Al Umma del centro de Bagdad, un pequeño grupo de hombres en el que también había dos mujeres debate bajo los viejos eucaliptos. El tema de discusión es la forma de



expresar las demandas de los miles de manifestantes que este mes han salido a las calles de las ciudades iraquíes.

"Quemar los camiones del ejército no nos ayuda, sólo sirve para que el Gobierno nos acuse de vándalos", afirma un joven. "Si yo te doy 17 RPG (lanzagranadas) y quemas este edificio, ¿en qué medida puede eso ayudarnos con nuestras demandas?".

Otro hombre aboga por derrocar el Gobierno y se forma un corro de gente a su alrededor. "¿Quién ha dicho que puedes hablar por todos?", grita un tercero. En seguida, todos comienzan a corear 'nadie nos representa' y 'fuera, fuera, Irán', en referencia a los partidos islamistas que gobiernan Irak con el respaldo iraní.

Es un debate caótico, ruidoso y sin líder, igual que las manifestaciones que tienen lugar fuera del parque. Aunque en su mayoría son jóvenes de 20 años, en el grupo también hay dos viejos comunistas con boinas del Che Guevara.

Al final, la multitud se pone de acuerdo en una lista de demandas que un joven barbudo y con gafas lee desde los escalones del monumento a la Libertad de Bagdad: "Dimisión del Gobierno, nuevas elecciones, un cambio en la ley electoral y, lo que es más importante, que todas las autoridades del gobierno sean juzgadas". La multitud aplaude, levanta los teléfonos móviles y queda convocada la manifestación en la plaza Tahrir.

La última erupción de protestas de Irak estalló el 1 de octubre con un llamamiento por Facebook. La chispa fue el despido de un general muy popular por su trabajo en la guerra contra Estado Islámico, pero la razón de fondo es el profundo malestar que hay con una oligarquía religiosa corrupta, un régimen burocrático que no funciona y un primer ministro, Adil Abdul-Mahdi, que no



ha cumplido ninguna de las promesas de campaña después de un año en el poder.

En gran parte respaldados por Irán, los partidos religiosos dominan la escena política. Para la generación de jóvenes crecida en los 16 años posteriores al derrocamiento de Sadam Husein, las palabras elecciones y democracia representativa se han convertido en sinónimos de corrupción y de abuso de privilegios por parte de los diputados.

Rico en petróleo, Irak tiene ingresos de cientos de miles de millones de dólares pero la vida de muchos de sus ciudadanos es similar a la de los países árabes más pobres por el desempleo, el derrumbe del sistema de salud y la falta de servicios.

Bagdad pareció llegar al borde del abismo en las protestas del 5 de octubre. A menos de dos kilómetros de la plaza Tahrir, un adolescente de camiseta amarilla, pantalones cortos y chancas caminaba lentamente por un paso elevado mientras un policía con su Kalashnikov lo expulsaba del lugar.

Finas columnas negras de humo subían retorciéndose hacia el cielo mientras una multitud de jóvenes y adolescentes marchaba hacia la plaza. Los policías disparaban al aire pero la gente seguía adelante ondeando pancartas chiíes y banderas iraquíes.

Los neumáticos empezaban a arder y aumentaban los disparos hasta convertirse en un ruido ininterrumpido. El humo blanco de las bombas de gas lacrimógeno, cada vez más frecuentes, se mezclaba con la espiral negra del caucho en llamas. Los jóvenes iban y venían, obligados a retroceder por el fuego pesado de las ametralladoras y del gas lacrimógeno.

Decenas de pequeños 'tuk-tuks' hechos a partir de motocicletas de tres ruedas se mueven en



medio de la carnicería sacando de allí a los heridos. Un joven bajo y delgado con una cuidada barba pelirroja increpa a la gente. "¿Por qué os quedáis ahí detrás?", grita a unos hombres que se habían parapetado detrás de la barandilla del puente. "Los que no quieran avanzar, que vuelvan a casa".

El hombre de la barba pelirroja dice llamarse Jawdat y ser un excombatiente del grupo paramilitar Hashd al-Shaabi. Creado en 2014 a partir de grupos voluntarios de lucha contra el Estado Islámico, Hashd al-Shaabi ha recibido la capacitación y el apoyo de Irán.

Jawdat dice que su hermano, muerto en la guerra contra ISIS, también era un oficial del grupo. "Luché en el Hashd, incluso fui a luchar a Siria, pero ¿qué obtuve de este Gobierno? Nada, mientras que los políticos de la Zona Verde (el área más segura y fortificada de Bagdad) impiden cualquier intento de reformar el Estado".

Las ambulancias corren de un lado a otro transportando a heridos y muertos. Sólo en esas manifestaciones del 5 de octubre perdieron la vida 20 personas.

Durante seis días de protestas, el primer ministro, Abdul-Mahdi, apareció en la televisión todas las noches. Con voz suave, prometía crear puestos de trabajo, entregar viviendas baratas y terminar con la corrupción. Pero mientras él hablaba los jóvenes desarmados eran asesinados buscando refugio tras barreras de cemento o manifestándose en las calles con sus banderas al viento. En al menos un caso, hubo francotiradores apostados en edificios participando en las matanzas.

Los activistas y periodistas han sufrido múltiples intimi-



daciones, con decenas de ellos huyendo de Bagdad tras recibir amenazas por teléfono. Se han cerrado medios de comunicación y cadenas de televisión y es normal ver a oficiales vestidos de civil deambulando por las salas de los hospitales para arrestar a los manifestantes heridos.

"Los médicos acababan de curar mi herida, pero cuando los agentes entraron al hospital en busca de manifestantes me dijeron que me fuera rápidamente", cuenta un joven convaleciente en su cama. Tres días después de un balazo en una calle de las inmediaciones de la plaza Tahrir, la herida todavía sangraba. Hasta el día 7 de octubre se contabilizaron más de 106 personas muertas y 6.000 heridas.

"Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición"

A principios de octubre, el tamaño de las manifestaciones estaba dentro de lo normal. Lo sorprendente fue la virulencia de la respuesta. Según muchos analistas iraquíes, la violencia se debe a que el régimen se siente atacado. Según otros, la razón está en que a las milicias proiraníes les preocupa que el auténtico objetivo de la protesta sea socavar el poder de Teherán. "Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición aquí y por eso la reacción ha sido tan dura", explica un oficial de inteligencia del Ministerio de Interior.

Muchos de los partidos iraquíes tienen vínculos con Irán y con las milicias originadas en ese país. Una más de las secuelas de la guerra de 2003, cuando Teherán respaldó a la nueva y poderosa mayoría chií que antes había sido reprimida por el régimen baazista del gobierno suní de Sadam. Después de que un bloque de diputados vinculado al clérigo Moqtada al-Sadr anunciara que retiraba su apoyo al primer ministro, el partido que ha quedado como principal sustento de Abdul-Mahdi es precisamente Fatah, el brazo político de Hashd al-Shaabi. Los hombres de las milicias se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel funda-



mental en la represión. Los manifestantes dirigen su rabia especialmente contra esas milicias, que para ellos representan el control iraní sobre el Gobierno de Irak.

En una de las noches de protestas, un alto mando del ejército sin armas ni barba se detuvo frente a una multitud de jóvenes para pedirles que se dispersaran. "Puedo dejarles bajar y marchar hacia la plaza Tahrir", dijo señalando a las columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. "Pero juro por Alá que los milicianos y los francotiradores los matarán". La multitud le respondió con enfurecidos cánticos contra Irán.

"Nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti"

El viernes 25 de octubre comenzó la segunda ola de manifestaciones. La muchedumbre agitaba banderas iraquíes y cantaba "nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti, Irak". Al menos 74 personas murieron en dos días y cientos resultaron heridas. Contando con ellas, el número total de víctimas fatales desde principios de mes ya supera las 250.

Los manifestantes que se mantuvieron en la Plaza Tahrir, epicentro de las manifestaciones, se unieron a miles de estudiantes que se saltaron las clases de universidades e institutos. Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y granadas cegadoras para impedir que cruzaran un importante puente de comunicación con la Zona Verde, sede de las embajadas y las oficinas del Gobierno, y el ejército anunció que impondría el toque de queda en la capital.

También hubo marchas de jóvenes manifestantes en las ciudades sureñas de Nasiriyah, Hillah y Basora. Incluso en la ciudad sagrada de Najaf salieron a la calle decenas de jóvenes clérigos en formación. En Kut hubo que cerrar la mayoría de las oficinas gubernamentales



por falta de personal y en la ciudad sagrada chií de Karbala, un pistolero enmascarado abrió fuego contra los manifestantes.

"Hemos dado órdenes estrictas a nuestros hombres de ir desarmados y presentarse sin armas entre los civiles porque no queremos ser acusados de matar a los manifestantes", señala un joven y agotado agente de inteligencia sentado en un pequeño turismo japonés cerca de la Zona Verde. Es parte de la mesa de operaciones del Ministerio de Interior desde el comienzo de las manifestaciones.

"La gente que disparó a los manifestantes (a principios de octubre) formaba parte de las milicias Khorasani y Badr. Los comandantes de estas milicias los han controlado desde el principio", cuenta. "A finales de septiembre, antes del inicio de las manifestaciones, recibimos un telegrama urgente y secreto informándonos de la presencia dentro de la Zona Verde de pequeñas unidades de la Guardia Revolucionaria Iraní. El poderoso político iraquí Hadi al-Amiri y el jefe de la milicia Khorasani estaban con ellos".

Según el oficial de inteligencia, los comandantes de las milicias iraníes e iraquíes llevan dirigiendo la respuesta a las manifestaciones desde el 1 de octubre. "Estas milicias se han convertido en el instrumento para oprimir las manifestaciones y lo siguen siendo, esto ya es algo público que se hace a la luz del día", denuncia.

En un país donde se suceden las revoluciones, las guerras y las revueltas, el Gobierno, los partidos religiosos y las milicias apoyadas por Irán están obsesionadas con la posibilidad de un golpe de Estado. Acusan a los manifestantes de ser conspiradores y exmiembros baazistas.



EL LÍBANO E IRAK VIVEN SU PRIMAVERA ÁRABE EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN

En ambos países el sectarismo ha alimentado guerras y ha sido explotado por las élites.

Las calles y plazas de Irak y el Líbano son escenario de amplias protestas que recuerdan la Primavera Árabe, pero los ciudadanos de estos países que no vivieron las revueltas de 2011 piden ahora un cambio profundo del sistema de reparto del poder y de la riqueza, y no se van a conformar con reformas cosméticas. En ambos países el sectarismo ha alimentado guerras y ha sido explotado por las élites gobernantes y las diversas facciones políticas con sus milicias armadas, pero ahora los libaneses e iraquíes están mostrando un espíritu de unidad novedoso, portando por primera vez sólo la bandera nacional, y no símbolos religiosos o políticos.

Las protestas que dieron comienzo a principios de octubre en Irak y a mediados de este mes en el Líbano *"nacieron de la frustración de amplios sectores de la sociedad respecto a la clase política que ha fallado al ofrecer condiciones de vida dignas y es considerada corrupta"*, explica el encargado de Irak, Líbano y Siria para el laboratorio de ideas Crisis Group, Heiko Wimmen.

En el caso de Irak, *"la humillación es especialmente manifiesta debido a las enormes reservas del país, que sin embargo no llegan al pueblo"*, agrega Wimmen en referencia al petróleo, cuya producción



se duplicó en la última década situando al país árabe como el quinto productor a nivel mundial, según datos de la Agencia Internacional de Energía.

"Los motivos de las protestas son puramente sociales", afirma el experto, que detalla que gran parte de los manifestantes son chiíes porque estos representan la mayoría de la población iraquí, sobre todo en el sur rico en petróleo, donde desde el año pasado ha ido en aumento el descontento por la mala gestión de las autoridades. La crisis sanitaria y ambiental que se vivió en 2018 en Basora -donde se encuentra el principal puerto de Irak-, provocó unos 120.000 casos de intoxicación por agua contaminada y el 40% de los habitantes sigue sin tener acceso a agua potable este año.

Los cortes en el suministro de agua y luz que sufren a diario los libaneses han sido un factor importante en las actuales protestas, más chicas y menos violentas que las de Irak pero con el mismo trasfondo: el rechazo de los políticos de cualquier signo que se han enriquecido a costa de los ciudadanos dando lugar a unos Estados depauperados e ineficientes.

El centro de estudios Carnegie destaca en un reciente análisis que en 2011 los pueblos árabes arremetieron contra sus gobernantes, pero ahora desconfían de todos los líderes políticos, también los opositores, porque ninguno ha cumplido sus promesas de reformas políticas y económicas.

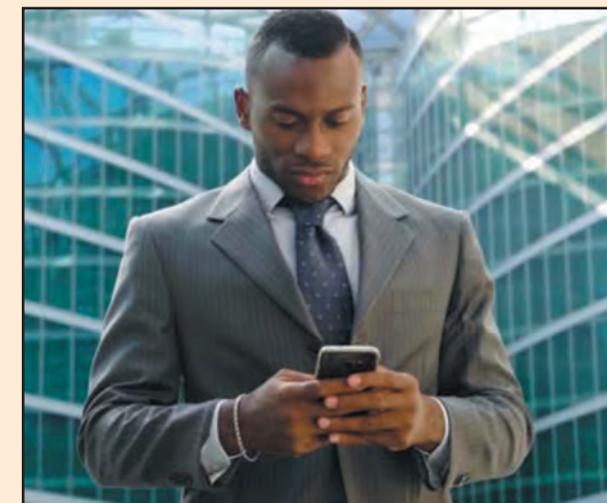


LOS PAÍSES AUTORITARIOS AFRICANOS PRIVAN DE INTERNET A SU POBLACIÓN PARA EVITAR LA CRÍTICA

Intentan desesperadamente evitar la crítica y la contestación política a sus desmanes, a su enorme corrupción y descarado autoritarismo.

A mediados del pasado mes de agosto, los residentes en Chad recobraron el uso de las redes tras seis meses de bloqueo gubernamental, situación que ha permanecido prácticamente ignorada más allá de sus fronteras. Un total de dieciocho países africanos han privado temporalmente a sus poblaciones del acceso a la red desde 2017. *«Es como estar separado del mundo»*, compara la ONG Asociación para el Progreso para las Comunicaciones. El problema es político. Los cibernautas africanos son aislados cuando constituyen un problema para sus respectivos gobiernos.

Los regímenes autoritarios del continente negro temen la fluidez con la que circula la información en internet y, sobre todo, la capacidad de convocatoria que ofrecen los nuevos medios. La represión de los espacios reales, tan habitual en el pasado, se ha trasladado a los virtuales porque se han convertido en plataformas de comunicación que burlan la censura de los medios tradicionales. Tal es el caso de Túnez, donde el blog Nawaat (Núcleo) cubrió la



explosión de la Primavera Árabe y, además, contextualizó los hechos. La conciencia de la injusticia movilizó aún más a la población.

La propagación de las convocatorias a través de Facebook y Twitter resulta determinante. Las famosas redes sociales también han servido de mecanismo de divulgación para las manifestaciones populares en Argelia y Sudán, países que ejercen un férreo control sobre las organizaciones civiles, y fueron determinantes en la rebelión popular que desembocó en la caída del dictador burkinés Blaise Compaoré.

La brecha digital influye sobremedida en ese eco social. La escasa repercusión de la desconexión digital en Chad no resulta ajena al hecho de que solo el 5% de sus habitantes disponga de acceso regular a la red. África tiene el índice de penetración de internet más bajo del planeta, aunque existen enormes diferencias internas. En el año 2000, menos del 1% de los argelinos se hallaban conectados, y ahora alcanza al 40%, mientras que Ruanda ha extendido la conexión de alta velocidad a todo su territorio. Eritrea cuenta con menos de 100.000 usuarios, que representan en torno al 1,3% de la población, pero, aún así, también aplica periódicas restricciones del uso. Pero su influencia se acrecienta, a pesar de su baja incidencia. La reciente expansión de las líneas wifi a través de *'hotspots'* o lugares de conexión gratuita permite

CENSURA EN LA RED

Una evolución negativa

En los 65 países testados por Freedom House en 2018, 19 han experimentado un acceso más libre a internet y 26 sufren mayores restricciones.

El 20% de los usuarios de la Red en el mundo se benefician de un uso completamente libre. El resto sufre restricciones en su uso o su actividad es vigilada o censurada.

El 42% de los cibernautas del mundo viven bajo regí-

menes que desconectan internet por razones políticas.

29 países africanos aplican restricciones sobre sitios web, y siete censuran abiertamente los accesos a internet: Sudán, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Marruecos, Tanzania y Gambia. En Asia, 23 países censuran todo tipo de contenidos. En Europa, los estados más restrictivos son Bielorrusia y Turquía.

nuevas posibilidades a usuarios incapaces de abonarse al servicio regular.

La relativa expansión de los servicios cibernéticos ha alentado a la oposición colectiva e individual. En algunos estados, la labor de francotiradores digitales alienta la libertad de expresión y la protesta que no tienen cabida en la escena política. Pero su posición resulta sumamente frágil frente a la autoridad. Tras seis años de reclusión, en julio fue liberado el bloguero mauritano Mohamed Cheikh Ould Mohamed Mkhaitir, acusado de apostasía por criticar el uso de la religión para justificar el sistema de castas que rige en su país.

Pero hay formas más sibilinas de sofocar la oposición virtual. Los regímenes autoritarios en África, como en otras regiones del mundo, se valen del control público de las empresas que proveen el servicio de internet y del bloqueo arbitrario de la red Tor, una forma de conexión que permite navegar de forma anónima e, incluso, acceder a webs bloqueadas. La lucha contra el colectivo bloguero Zona 9 constituyó uno de los episodios más conocidos de la represión en Etiopía, una dictadura hasta el pasado año, cuando el nombramiento del primer ministro Abiy Ahmed propició reformas democráticas.

La detención en 2014 de los nueve componentes de este grupo impulsó una campaña global para su liberación, un fenómeno también inédito tanto por las características específicas como por las dimensiones que obtuvo la lucha en Twitter en torno al 'hashtag' FreeZone9Bloggers. Su defensa demostró la posibilidad de nuevas vías para la contestación e impulsó la aparición de organizaciones que tomaban el relevo en el ciberespacio a



las entidades tradicionales que luchan en pro de los derechos humanos. Desde entonces, Artículo 19, Electronic Frontier Foundation o Global Voices Advocacy se han sumado a los esfuerzos de Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

La libertad de expresión a través de la Red fluctúa según los designios gubernamentales. Tampoco su utilización se reduce a movimientos progresistas. Los cibernautas pakistaníes más conservadores han lanzado una campaña para la retirada de un anuncio televisivo de detergentes con mensaje feminista aduciendo que contiene un velado ataque al Corán. Los grupos yihadistas han sido también sorprendentemente modernos en su utilización del espacio virtual para fomentar sus prédicas y afanes proselitistas.

La lucha contra ese enemigo radical también ha proporcionado argumentos para ahogar las protestas en la red. Las leyes antiterroristas han incluido medidas punitivas y restricciones en el ámbito de internet y África, uno de los continentes más afectados por la expansión del salafismo violento, sufre sus efectos.

Pero también la aparición de las 'fake news' o noticias falsas ha servido para introducir normativas censoras. El último informe de la ONG Freedom House menciona la Ley del Ciberdelito aprobada en el Parlamento keniano, que imponía penas de diez años de cárcel por publicar información falsa y que fue combatida por una asociación de blogueros. Su suspensión por el Tribunal Constitucional del país no anticipa necesariamente su definitiva supresión.

El ciberespacio nigeriano también ha sido un campo de batalla. La milicia Boko Haram lo utilizó para expandir sus amenazas, aliña-



das con vídeos de asaltos a bases gubernamentales e imágenes de adolescentes raptadas. La llegada al poder del general Muhammadu Buhari dio lugar a una respuesta expeditiva. El Gobierno se decantó por una estrategia de tierra quemada y quebró el sistema de telecomunicaciones en el noreste del país. La medida impedía la difusión de los vídeos de la banda, pero también la cobertura informativa de la actuación del Ejército y condenaba al silencio a la región.

La ofensiva para controlar las redes no se quedó ahí y en 2015 se aprobó una ley contra la cibercriminalidad, el recurso habitual para implementar una censura efectiva. El videoclip de la canción 'This is Nigeria' fue prohibido tras alcanzar los 13 millones de reproducciones. El rapero Falz, autor de la letra, hacía alusión a la corrupción policial, la violencia intracomunitaria o los abusos sexuales



protagonizados por varios pastores evangélicos. Pero la retirada se debió, formalmente, a una protesta de una organización musulmana por la inclusión de bailarinas que portaban el hiyab y daban el 'shaku shaku', un ritmo local. Ante la advertencia de que la grabación iba a provocar «un conflicto religioso sin precedentes», y en aras de la convivencia, el Gobierno se apresuró a eliminarlo.

ÁFRICA SE ESTANCA EN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

La corrupción política, la ignorancia social y el fanatismo religioso impiden al continente avanzar en el respeto a los derechos humanos. Los tímidos progresos de Sudáfrica aportan un rayo de esperanza.

Lo llaman derechos humanos, pero suele ser una cuestión de mera supervivencia. Las calles africanas se llenan de individuos que protestan, fundamentalmente, por medidas que amenazan la subsistencia de la población. Las marchas semanales que amenazan al Gobierno sudanés estuvieron motivadas, en su inicio, por la subida de la barra de pan de una a tres libras, unos seis céntimos de euro, mientras que las revueltas sociales en Zimbabue remiten a una subida del carburante y el aceite doméstico. No olvidemos que



la requisita de las mercancías de un vendedor ambulante desencadenó la caída del régimen tunecino y el fenómeno de la Primavera Árabe.

La precariedad condiciona tanto la conducta de las masas como de sus dirigentes. La última reforma del Código Penal en Angola, recientemente aprobada, acaba de despenalizar la homosexualidad y ampliar los supuestos necesarios para acceder al aborto legal, incluyendo la violación. El cambio político de la antigua colonia

portuguesa evidencia algo más que un talante progresista. El rumbo del nuevo presidente Joao Lourenço parece íntimamente ligado a su necesidad de acceder a las líneas de crédito de los países occidentales.

La lucha por las libertades civiles goza de mayor recorrido allí donde las condiciones económicas y

educativas han impulsado el tejido social. Las clases medias han impulsado las demandas políticas y, a menudo, han liderado y reconducido protestas populares que, como en el caso de Sudán, han surgido como respuesta inmediata a medidas impopulares.

La realidad política africana es convulsa porque, a menudo, la fachada institucional tan sólo maquilla un escenario complejo. La democracia formal de muchos de sus Estados no se corresponde con realidades autoritarias donde una elite acapara el poder y se resiste a compartirlo. En este sistema, las reformas legislativas se convierten en papel mojado ante la escasa capacidad para hacerlas efectivas. La corrupción, la falta de una Administración que llegue hasta el ciudadano, las trabas de la burocracia y la ignorancia lastran su plasmación efectiva y el progreso.

El aborto, la despenalización de las relaciones homosexuales o la igualdad de género, además, se enfrentan a la animadversión de la opinión pública, que los considera valores occidentales ajenos a su cultura e, incluso, los rechaza abiertamente. El conservadurismo social se ha convertido en una herramienta de enganche para cultos de procedencia cristiana y musulmana, que suelen condenar a quienes se enfrentan a la corriente mayoritaria. Las minorías religiosas, tribales o sexuales suelen ser las víctimas de esta falta de tolerancia, tan útil para las clases dirigentes.

La educación resulta la clave para la transformación social. Unos noventa millones de jóvenes -la mitad de



los menores africanos- no asisten a una escuela, según datos del Banco Mundial, y otros 40 millones la abandonarán en próxima década. La falta de formación mediatizará no sólo su futuro personal, sino también el de los Estados que habitan. Su escasa capacidad crítica no facilitará el cambio de mentalidad y la demanda de un sistema mejor de derechos y libertades.

El análisis de la situación en seis países nos muestra las lacras y carencias habituales en todo el continente. Algunas son específicas, relacionadas con su turbulento pasado, pero otras son compartidas y hablan del mantenimiento de la violencia como instrumento de dominación, la intolerancia y el sometimiento de la mujer.

Costa de Marfil, Cicatrices abiertas

El crecimiento económico favorece la cicatrización de las heridas de la guerra y aplaca la sed de justicia que aún experimenta Costa de Marfil. Porque el país del golfo de Guinea, uno de los más prósperos de la región, ejemplifica la incapacidad de muchos Estados africanos para dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos que causa un conflicto interno. No se han dirimido responsabilidades por la guerra civil de 2011, que provocó masacres y desplazamiento de civiles. Las consecuencias, además, se proyectan en la actualidad, con la proliferación de bandas armadas que extorsionan a la población. El país también es un modelo de



desarrollo legislativo ineficaz, con medias contra la violencia sexual que no resultan prácticas por la pervivencia del estigma social y el difícil acceso a los tribunales. La modernidad de esta potencia emergente también contrasta con la pervivencia de tradiciones como la mutilación genital femenina, que afecta al 88% de las mujeres de la zona septentrional, la poligamia, soportada por el 28% de las esposas, y el matrimonio levirato, que implica el casamiento forzado de la viuda con el hermano del difunto.

Mauritania La tiranía de la 'zina'

Los caminos de la justicia mauritana son inescrutables y una mujer de aquel país que denuncie una violación corre el riesgo de acabar en prisión. Esta república islámica prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio y una interpretación restrictiva de este delito, conocido como 'zina', puede convertir a la víctima en culpable. Existe un proyecto de ley contra la violencia y el acoso, pero aún se halla pendiente de aprobación parlamentaria.

A este país, donde convergen poblaciones de origen árabe y otras subsaharianas, se le achaca un importante déficit en el capítulo de los derechos humanos. A la discriminación social, económica y política de las comunidades de origen meridional y piel oscura se suma la pervivencia de formas de esclavitud, derogadas por la ley, pero que permanecen vigentes y afectan a decenas de miles de personas. Además, las prácticas homosexuales, la blasfemia, el sacrilegio y la apostasía son merecedoras de la pena capital. El



bloguero Mohammed Mkhaitir permanece en prisión desde hace cinco años tras criticar el uso que, a su juicio, realiza el Gobierno islámico para discriminar a las minorías.

Egipto La primavera marchita

La Primavera Árabe supuso un soplo de libertad en un país hasta entonces férreamente controlado por el Ejército, un poderoso aparato político, social y económico. Pero la apertura no cristalizó. El triunfo de los islamistas provocó la reacción militar y el golpe del general Al Sisi se tradujo en un regreso a las viejas fórmulas. Amnistía Internacional denuncia prácticas frecuentes como la detención arbitraria, la tortura, las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

La población sufre la presión de los cuerpos de seguridad y la no menos violenta del Estado Islámico, responsable de matanzas de policías y civiles. Junto a los problemas políticos, existen otros de tipo social ampliamente arraigados. Los problemas de seguridad se ceban con las mujeres; no en vano El Cairo es considerada la capital mundial del acoso sexual. La Administración ha llegado a culpabilizar a las víctimas, acusándolas de provocar su propia desdicha. La mutilación genital femenina es ilegal, pero su índice del 90% de afectadas tan sólo resulta superado por Guinea y Somalia. La falta de libertad religiosa se ceba con la minoría cristiana copta, objetivo de terroristas y de la discriminación de una Constitución que confiere al islam la condición de religión de Estado.



Kenia La excusa yihadista

La potencia de África Oriental, dotada con una variedad de culturas e importante desarrollo asociativo, no escapa a las carencias habituales. La presión del yihadismo radical coarta la libertad de prensa, sometida a la censura por motivos de seguridad, y acentúa la autonomía de los cuerpos policiales, sospechosos de perpetrar todo tipo de abusos con absoluta impunidad. Oscar Kamau y John Paul Oulu, dos activistas de los derechos humanos empeñados en dar a conocer esta guerra sucia, fueron asesinados en 2009, y tales crímenes aún no han sido resueltos.

El derecho a la vida aparece condicionado por la frágil situación de las comunidades del norte, afectadas por la sequía y el hambre. Uno de cada tres kenianos sufre desnutrición. Este escenario resulta ideal para que Uhuru Kenyatta, su presidente, arguya que la abolición de la ley que penaliza el sexo gay no constituye una cuestión de derechos humanos. Al parecer, la emergencia humanitaria también impide que él mismo y su partido sean juzgados por las atrocidades cometidas tras las elecciones de 2007.

Uganda La homofobia más feroz

La celebración de elecciones periódicas y la concurrencia de partidos suele dar lugar a una democracia formal, que no necesariamente implica ser real. Uganda mantiene ese carácter y, al mismo tiempo, mantiene limitaciones a la libertad de prensa, y las fuerzas de seguridad son criticadas por acosar a la oposición. La república ribereña de los Grandes Lagos también sufre problemas comunes a buena parte del continente, como el trabajo infantil, lacra



que afecta al 36% de los niños entre 5 y 14 años. El espíritu conservador de la sociedad, a menudo rentabilizado por las sectas carismáticas, se manifiesta en iniciativas políticas como una ley contra la homosexualidad, aprobada en 2014, que criminalizaba tanto estas relaciones sexuales como a las ONG que apoyaran al colectivo. Estados Unidos y varios países europeos amenazaron con retirar sus ayudas y el Tribunal Constitucional invalidó la norma. Pero la homofobia se ha exacerbado en el país y los medios locales han llegado a publicar cientos de fotos de presuntos gays.

Sudáfrica Salir del 'apartheid'

El país más rico del continente es también el más avanzado en materia de protección del individuo, con una regulación excepcional dentro del continente. La Constitución, aprobada en 1994, incluye una Comisión de Derechos Humanos, obligada a abordar todas las denuncias en este ámbito y establecer reparaciones, pero también a investigar de forma proactiva cualquier tipo de atentado contra la libertad y llevar a cabo una acción educativa. El fin del régimen del 'apartheid', que discriminaba en función del color de la piel, dio lugar a un nuevo marco normativo con talante progresista. Sudáfrica es el único país del continente que ha legalizado el matrimonio gay. Pero el país del arco iris tampoco escapa a males comunes, como son la inseguridad ciudadana, la brutalidad policial y el clientelismo o la capacidad de la burocracia para distribuir subvenciones en función de afinidades políticas. Además, la violencia sexual adquiere dimensiones alarmantes. Uno de cada cuatro varones adultos reconoce haber cometido abusos contra mujeres, incluida la habitual 'violación correctiva' de lesbianas.



MARRUECOS

EL VERGONZOSO E INMORAL MURO MARROQUÍ DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Hace 40 años la ONU reconoció al Frente Polisario legítimo representante del pueblo saharauí y declaró a Marruecos potencia ocupante.

Marruecos, el ocupante de los territorios tras la firma de los Acuerdos Tripartitos entre las potencias colonizadoras, España, Marruecos y Mauritania, comenzó arrasando con la población saharauí con intensos bombardeos de napalm y fósforo blanco, como en las masacres de Smara y Um Draiga en 1976, haciendo que miles de saharauis huyeran hacia el este, hacia Argelia, refugiándose en unos campamentos que levantaron en la zona de Tinduf. La respuesta del Frente Polisario fue llevar la guerra a Marruecos y a territorio mauritano atacando la capital, Nuakchot. Prosiguieron los ataques contra Mauritania, logrando el 5 de agosto de 1979 que Mauritania cediese su parte del Sáhara Occidental al Frente Polisario, pero esto no fue reconocido por Marruecos, que se anexionó esa zona el 11 de agosto. A raíz de dicha anexión, la ONU aprobó una



resolución en la que se reconocía al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharauí, mientras que consideraba a Marruecos una potencia ocupante.

1980: el muro de la vergüenza

En 1980, Hassan II inició la construcción del llamado Muro del Sahara Occidental, también llamado Muro de la vergüenza, una construcción hecha con arena y piedras, Al Yidar, lo llaman los saharauis, con una extensión superior a los 2.720 kilómetros y una media de tres metros de altura. Es una construcción militar con vallas, torres de vigilancia, búnqueres, piezas de artillería, más de cien mil soldados...

y millones de minas antipersona. De hecho, es el campo minado más largo y vulnerable del mundo con más de siete millones de minas. El muro construido en el desierto divide el Sáhara Occidental en dos partes asimétricas; dos tercios, los ricos, donde están las minas de fosfatos de Bucraa, bolsas de petróleo, las pesquerías y el banco de pesca, uno de los más importantes del mundo, controlados por el



gobierno marroquí; y los llamados Territorios Liberados, un tercio, donde no hay nada de riqueza, salvo arena y piedras, que controla el Frente Polisario.

Unamuno decía que a veces, el silencio es la peor mentira. ¿Por qué no se habla de ese muro? ¿Por qué se silencia todo lo que ocurre en el Sáhara Occidental?

En aquel año, como respuesta a las victorias del Polisario en el campo de batalla, con Mauritania ya retirada del territorio y Marruecos arrinconado en el norte, Rabat diseñó una nueva estrategia para ampliar su poder en la región: la construcción de seis muros militares con los que progresivamente fue ampliando su control sobre porciones mayores del desierto. En la actualidad son ocho los muros. Con ayuda de ingenieros israelíes y financiación saudí, el ejército marroquí comenzó a construir un muro inspirado en la Línea Bar Lev, construida por Israel a lo largo del Canal de Suez.

La guerra entre Marruecos y el Frente Polisario proseguía mientras tanto, pero el agotamiento militar llevó a ambas partes a iniciar las negociaciones y el 30 de agosto de 1988 aceptaron por separado la propuesta de la OUA y la ONU para el cese del fuego y celebración de



un referéndum con dos propuestas: o independencia o integración en Marruecos. Del resultado de las negociaciones resultó el Plan de Arreglo que se materializó en las resoluciones 658 (1990) y 690 (1991), por las que establecía el poner fin al conflicto con un cese del fuego -que se estableció posteriormente para el 6 de septiembre de 1991-, la realización de un referéndum de autodeterminación para elegir "entre la independencia y la integración con Marruecos" tomando como base el censo realizado por

España en 1974, y la creación de la Misión para la Organización de un Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) con el cometido de actualizar el censo de votantes, vigilar la reducción de las tropas marroquíes del territorio y llevar a cabo la realización del referéndum para enero de 1992.

Pero el muro siguió creciendo sin que ningún avance se produjera.

Conforme han ido pasando los años, la comunidad internacional se ha ido olvidando de este conflicto y Marruecos ha variado su posición: "Libre autodeterminación, sí, pero sin referéndum"; es



decir, está dispuesto a negociar la autonomía de la región del Sáhara Occidental, no su independencia.

El principio de libre determinación, según los marroquíes, no presupone la creación de un estado independiente. La postura del Gobierno marroquí es que esta obra militar no es "un muro de separación porque hay un punto de paso operacional abierto a las poblaciones. El muro defensivo de arena ha sido construido para garantizar el derecho de Marruecos a la preservación de su seguridad y para luchar contra el uso del Sáhara como paso de las redes terroristas, el tráfico de seres humanos y de la droga".

Desde el Frente Polisario, sin embargo, se afirma que no existe ningún paso que permita a la población saharauí acceder al Sáhara Occidental a través del muro, y que esta obra es "la mayor barrera creada por el hombre después de la muralla china".

miles de saharauis separados 2018. Horst Kohler, enviado Especial del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas para la situación del Sáhara Occidental, ha conseguido organizar dos encuen-



tros entre representantes de Marruecos y el Frente Polisario después de varios años de silencio.

En noviembre y diciembre de 2018 fue la primera; el 21 y 22 de marzo de 2019 se realizó la segunda Mesa. El objetivo de esta segunda reunión, donde Argelia y Mauritania tuvieron el rol de observadores, fue comprometer a

las dos partes para que se empezasen negociaciones concretas. Sin embargo, el señor Kohler, debido a la férrea oposición de Francia a solucionar este conflicto -y a su estado de salud-, dimitió su cargo a mediados de mayo de 2019.

A pesar de las conversaciones entre las partes en Ginebra, la realidad es que miles de saharauis están separados de su propia tierra por la presión militar en los territorios ocupados y la construcción del muro. Miles de familias no se pueden reencontrar desde que se separaron en 1976.

Y no hay visos de solución a corto plazo; muchos jóvenes saharauis de los campos de Tinduf exigen cambios, incluso la vuelta a las armas.



LA GRAN DICTADURA MARROQUÍ

Marruecos ha expulsó en 2019 a 19 españoles del Sahara por motivos políticos. No quiere periodistas ni observadores. La censura oculta las torturas, palizas y detenciones arbitrarias que sufre la población saharauí, mientras la Comunidad internacional mira para otro lado. La historia ya tiene preparado su veredicto



En El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, existe un grupo de ciudadanos que des cansa por el día y se moviliza por la noche. Las casas familiares en las que se dan cita se han convertido en refugios contra las intervenciones policiales. Bajo techo y en la clandestinidad, la comunidad saharauí se organiza para que su identidad sobreviva a las vejaciones.

En 1975, Marruecos invadió la entonces provincia española con la Marcha Verde y estalló una guerra sin cuartel contra el Frente Polisario. La expansión, que incluía Ceuta y Melilla, se enmarcó en el sueño del 'Gran Marruecos'. Los niveles de violencia siguen intactos en la actualidad. Un combinado de torturas descabelladas, penas de cárcel desorbitadas, prohibiciones de moverse libremente y el muro minado convierten al Sahara en un correccional a cielo abierto. Las organizaciones saharauíes de derechos humanos combaten pacíficamente por el referéndum de independencia. Una votación reconocida por las Naciones Unidas y que fue prometida por España cuando ejercía como potencia administradora de su entonces colonia. Los colectivos están vigilados constantemente por las autoridades marroquíes y la violencia es su herramienta para disuadir sus protestas o asambleas. Sus acciones quieren evitar la censura. Denuncian la brutalidad policial incluso ante agentes de la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el referendo.

El bloqueo mediático es total y 19 españoles han sido expulsados del territorio en 2019. Sus intenciones políticas fueron la causa. Diez de ellos eran juristas que



acudían como observadores internacionales a diversos juicios que se desarrollaban contra activistas locales. Reporteros sin Fronteras denuncia frecuentemente que Rabat obstaculiza deliberadamente el trabajo de los periodistas. Consideran que informar en el Sahara es un inconveniente crítico. Dos profesionales españolas fueron forzadas a abandonar El Aaiún en los pasados meses de febrero y junio. Una muestra de la inexistente libertad de prensa que padece el Sahara Occidental. Las expulsiones suelen ser poco difundidas en los medios españoles, y tampoco se aprecia interés por el seguimiento del conflicto.

Patricia e Irati inauguraron la serie de expulsiones a principios de enero. Fueron acusadas de promover la independencia de la región. Les siguió el jurista aragonés Luis Mangrane, interceptado tras aterrizar en El Aaiún y a quien se prohibió la entrada por ser «una persona non grata para Marruecos». Ni siquiera llegó a salir del aeropuerto.

En febrero, tres activistas navarros fueron expulsados tras permanecer varios días en El Aaiún. María, Iratxo y Alberto, miembros de la Asociación Navarra de Amigos del Sahara, conversaron con la comunidad de forma clandestina durante su estancia. Su relato de la expulsión coincide con el patrón habitual en estas circunstancias. Fueron vigilados por la Policía y los servicios de inteligencia, detenidos y agredidos durante los interrogatorios. Finalmente, viajaron hasta la urbe marroquí más cercana, Agadir, donde nadie habla de la

represión y el turismo hace caja.

«Cada país tiene sus límites», sentenciaba un agente de Policía con cigarrillo en la boca durante el interrogatorio a esta redactora, quien fue expulsada semanas más tarde. Para los cuerpos de seguridad de Rabat, reunir información política en el Sahara rompe todas las reglas. En marzo, se siguió el mismo procedimiento con una joven gallega y en abril se produjo la sexta salida forzosa. Se trataba de dos activistas vascas que se habían reunido con militantes saharauíes. Las personas con las que se encontraron fueron golpeadas, según el medio local 'Equipe Media'. A mediados de mayo les tocó el turno a cinco abogados españoles que llegaron a El Aaiún para asistir al juicio de Nazha El Khalidi. Fueron retenidos en el aeropuerto de la capital y después trasladados al de Casablanca. Un mes más tarde expulsaron a Judith Prat, fotoperiodista oscense premiada a escala internacional. La Policía marroquí fue a buscarla dos horas después de recalar en la zona. De nuevo en junio, tres observadores del Consejo General de la Abogacía fueron obligados a volver a España nada más aterrizar.

El singular urbanismo de las casas saharauíes suele sorprender al viajero que las visita por vez primera.



Las ventanas de los inmuebles pueden contarse con los dedos de una mano y los muros de las azoteas llegan a medir dos metros de alto sin apenas vanos. La comunidad sólo se siente libre a cubierto, entre paredes de hormigón.

La región saharauí fue dividida de norte a sur con un muro minado. Oculta entre 10 y 40 millones de minas terrestres, según la ONU. Las costas, las ciudades principales y los yacimientos de fosfatos quedan al oeste del muro, bajo poder marroquí. Al este se constituyó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Una zona liberada, pero yerma y desértica.

TESTIMONIOS DE LA GRAN REPRESION MARROQUÍ

MOHAMMED MAYARA/ HISTORIADOR

«SE LLEVARON A MI PADRE A COMISARÍA Y NUNCA VOLVIÓ»

Pese a sus méritos, Mohammed Mayara engrosa la lista de parados saharauíes desde hace diez años. A sus 44, es uno de los activistas más acosados por las autoridades marroquíes. Desde que era joven, motivado por el asesinato de su padre durante la Marcha Verde (la invasión marroquí del Sahara español), se convirtió en un diligente defensor de los derechos humanos. A su progenitor se lo llevaron a comisaría en su ciudad natal, Tan Tan, y no regresó. Está oficialmente desaparecido, porque no se



ha encontrado su cuerpo. Fue profesor de Historia en aulas de secundaria a finales de los 90. Perdió su puesto seis años más tarde porque no explicaba «la propaganda marroquí». Una de las consignas que el régimen de Rabat enseña en sus libros de texto y que justifica la ocupación es que el Sahara Occidental tenía conexiones históricas y geográficas con Marruecos. Como historiador, Mayara asegura que no es cierto y lanza una simple pregunta: «Si el Sahara fuese o hubiese sido en algún tiempo de Marruecos, ¿por qué en un primer momento se dividió el

pastel con Mauritania?». La soberanía marroquí no es reconocida por ningún Estado ni organización internacional. Sin embargo, la ONU tampoco considera la región como país. El resultado es que el Sahara es el último territorio de África por descolonizar.

Con serenidad y dulzura, la voz de Mayara atrapa al espectador en el cortometraje *'Tres cámaras robadas'*. Las imágenes muestran protestas pacíficas en El Aaiún y su disolución por las autoridades marroquíes. La fuerza bruta es la protagonista. La mayor parte de los participantes son mujeres, pues, gracias al movimiento feminista, la

detención de una de ellas genera más controversia que la de un hombre. Todas las tomas están grabadas desde las azoteas de las casas. También denuncia que la seguridad marroquí requisa las cámaras en las manifestaciones y las usa para filmar a sus dueños en otras revueltas. Cuando era niño tuvo que enfrentarse a insultos y burlas en la escuela. Como adulto, encara palizas y detenciones. La última fue en el aeropuerto de la capital, al regresar de los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia. La agresión ha sido denunciada por la Organización Mundial Contra la Tortura.

NAZHA EL KHALIDI /PERIODISTA

«DIJERON QUE NOS VIOLARÍAN Y CON QUÉ OBJETOS LO HARÍAN»

Los tribunales de El Aaiún condenaron a Nazha El Khalidi con una multa de casi 400 euros por ejercer como reportera sin la autorización estatal. El Khalidi es una ciudadana saharauí de 27 años que se convirtió en periodista para contar la situación de su pueblo. La vista se celebró en junio y se enfrentaba a una posible pena de hasta dos años de prisión. Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2018 y fue detenida cuando emitía una manifestación en directo a través de sus redes sociales. En el vídeo, de cuatro minutos, se observa una protesta pacífica repleta de mujeres. En los últimos segundos, un policía la persigue y se abalanza sobre ella cortando la emisión.



Habla de *«un día en el infierno»* para referirse a su primera tortura. Tenía 13 años. Participaba en una concentración contra la soberanía marroquí en las calles de la capital cuando comenzaron las cargas policiales. *«Pedí ayuda en una casa que tenía la puerta abierta y estuve segura hasta que las autoridades empezaron a registrar los edificios»*, recuerda. Los agentes sacaron a decenas

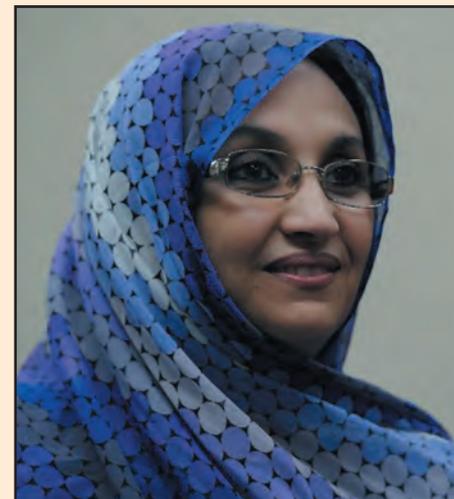
de personas de sus viviendas y buscaron entre ellas a los manifestantes. *«Aprovecharon para lanzar televisores, vajillas y comida por las ventanas»*, relata. Nazha fue localizada rápidamente y la colocaron en fila con el resto de mujeres sospechosas. *«Nos amenazaron con violarnos y nos dijeron los objetos que utilizarían»*, asegura. Llegaron los golpes y los jirones de ropa en plena calle. Muchas quedaron desprovistas de su melfa y todas ellas fueron trasladadas a un cuartel. Esposada y con los ojos vendados, lloró toda la noche sentada sobre un suelo mojado. *«Quién se puso detrás me preguntaba y, si no contestaba lo que ellos querían oír, me abofeteaban»*, prosigue. A su edad, ni siquiera entendió

cada uno de los insultos que escuchó. Su familia está dividida por el muro minado. La mayor parte de sus tíos viven en los campos de refugiados de Tinduf, donde la comunidad se mantiene gracias a la ayuda humanitaria internacional. De sus familiares en El Aaiún, nadie trabaja. Sus ocho hermanos han sido torturados y uno de ellos también pasó año y medio en prisión por manifestarse.

AMINATOU HAIDAR/ACTIVISTA

«NO HAY UNA SOLUCIÓN POR FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA»

El rostro más conocido de la revolución dicta su sentencia: *«He sacrificado todo en la vida»*. Aminatou Haidar llegó a las televisiones en 2009 por su huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote tras ser expulsada del Sahara Occidental. Para regresar debía pedir disculpas al rey Mohammed VI y anunciar públicamente que era marroquí. Se levantó el veto después de 32 días.



A los 20 años fue encarcelada en una de las prisiones secretas marroquíes por manifestarse a favor de la autodeterminación. No se presentaron cargos contra ella, ni se celebró un juicio; pero pasó cuatro años retenida y con los ojos vendados. Vivió hacinada con una decena de mujeres más en un pequeño habitáculo. *«El techo era de chapa y el calor, insostenible; sobre todo, cuando dormíamos. Era una lata de sardinas»*, cuenta. Su familia nunca conoció su paradero. Por aquel entonces, en pleno conflicto armado, era la actuación habitual de Marruecos y el Frente Polisario. El alto el fuego de 1991 supuso la liberación de los presos de ambos bandos. Recuerda con mucho dolor varios episodios que sufrieron sus compañe-

ros. *«Mohamed Jalil Ayach tendría más o menos mi edad cuando lo encontré muerto en los baños, era un niño»*, dice. Su delito fue no reconocer al entonces ocupante del trono, Hassan II, como su rey. En el patio practicaban *'El avión'* o *'El pollo'*. Los agentes ataban los pies de los reclusos a una grúa y le hacían girar con ella. *«Se lo hicieron al que sería el padre de mis hijos»*, explica pausadamente.

Aminatou abandonó sus estudios, pero preside el Colectivo Saharauí de los

Derechos Humanos. En enero, recibió a una delegación política interesada en la autodeterminación del Sahara, visitas que se suceden con frecuencia. Se les prohibió la salida de la ciudad y fue agredida ante agentes de la MINURSO (la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental). A su juicio, no tiene sentido el trabajo de la ONU en el Sahara. Para Aminatou, el conflicto no se ha resuelto todavía porque *«la comunidad internacional no tiene voluntad política»*. Ella se define libre cuando llega al desierto, donde se evade de la atenta mirada de los centinelas que vigilan su casa día y noche.

AHMED ETTANJI / FILÓLOGO ESPAÑOL

«PERDÍ EL MIEDO LA PRIMERA VEZ QUE ME TORTURARON»

Cuando era más joven, Ahmed Ettanji temía a la Policía. Había oído muchas historias sobre las comisarías de El Aaiún. A sus 30 años, no duda en responder a las provocaciones. *«Cuando los agentes me amenazan con llevarme a una, insisto en que lo hagan; perdí el miedo cuando fui torturado por primera vez»*, asegura tranquilo.

Cada noche que pasó retenido llenaba su estómago con un mendrugo de pan. *«Me daban lo justo para que no me desmayara»*, recuerda. Ettanji permaneció cuatro días en un centro policial de la capital, sometido a interrogatorios constantes. Su familia desconocía su paradero. De nuevo, los ojos vendados. Atado de pies y manos, obligado a gol-

pes a quedarse quieto. También estuvo mucho tiempo desnudo. Cuando pensaba que no había nadie, movía el cuerpo y sentía los puños por todas partes. No sabía cuántos hombres había en la celda, pero siempre solía haber vigilancia. Ettanji se ha encontrado en numerosas ocasiones con los policías que lo torturaron. No los identifica por sus rostros, pero sus voces se le quedaron grabadas.



Ahmed fue cuestionado por su papel en organizaciones que apoyan la independencia. A la Policía le interesaba cómo contactaban, sus puntos de reunión y nombres completos. Por aquel entonces formaba parte de un colectivo que repartía folletos sobre la causa saharauí y coordinaba protestas. Suele viajar por Europa, especialmente por España, para informar sobre el

sufrimiento en su hogar. Este año 2019 ha organizado entrevistas y conferencias en Madrid, Pamplona, Valencia o Vitoria. «No me planteo vivir aquí -confiesa-, el trabajo está en las zonas ocupadas». Quiere dejar un legado a las generaciones futuras por medio de la lucha pacífica.

Domina el castellano, pues estudió Filología Española en la Universidad de Agadir. En el Sahara no hay ningún centro de estudios superiores, el más cercano de la capital está allí, a 640 kilómetros. Esto favorece la diáspora del pueblo. Ettanji nunca ha trabajado, aunque es licenciado y habla tres idiomas con fluidez. Con triste calma, habla de su vida plagada de marginaciones. Lo que más le pesa es sentirse sitiado y la sensación constante de ser perseguido.

EXPULSADOS DEL SAHARA CUATRO PARLAMENTARIOS VASCOS

Rabat impide la entrada a El Aaiún a los delgados del PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP.



El PNV denunció el domingo 1 de diciembre los intentos de “secuestrar la realidad del pueblo saharauí” después de que las autoridades marroquíes impidieran la entrada a El Aaiún de una delegación de parlamentarios vascos. Rabat negó la entrada a cuatro parlamentarios vascos del Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui en el territorio del Sahara Occidental, donde tenían pensado desarrollar una semana de visitas. Las autoridades marroquíes no dejaron bajar del avión a los diputados Eva Juez (PNV), Josu Estarrona (EH Bildu), Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos) y Carmelo Barrio (PP). En un comunicado, el PNV calificó de “poco transparente la actitud del Gobierno de Marruecos” al que acusó de “limitar las libertades del pueblo saharauí y ocultar las violaciones de derechos humanos”. La parlamentaria jeltzale de la delegación, Eva Juez, señaló que “el trabajo de las misiones parlamentarias

en territorio saharauí es determinante para denunciar las graves vulneraciones de derechos elementales en los territorios ocupados”. “Exigimos que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y que el pueblo saharauí pueda ejercer el derecho de autodeterminación”, manifestó.

Según Carmelo Barrio, del Partido Popular, el avión de la compañía Binter aterrizó en El Aaiún procedente de Las Palmas, pero nada más aterrizar un representante del gobierno marroquí les comunicó verbalmente que no podrían bajar a tierra y que debían regresar en el mismo avión a Canarias. Barrio señaló que la intención de los parlamentarios era “tomar contacto con los representantes del pueblo saharauí” y hablar con las organizaciones pro derechos humanos.

No es la primera vez que un grupo de políticos se ve obligado a dar media vuelta sin pisar siquiera el territorio saharauí. En el año 2016, último del que se disponen de cifras oficiales, las autoridades marroquíes expulsaron a 93 personas en total cuando trataban de entrar al Sahara o cuando ya habían entrado.

AMINATOU HAIDAR/ACTIVISTA SAHARAHUI

“LA UE DEBE HACER ALGO PARA EVITAR LA GUERRA EN EL SAHARA”

La activista critica la alerta terrorista “falsa” de Madrid para que no vayan españoles a Tinduf.



La activista saharauí Aminetu Haidar, una de las ganadoras en 2019 del denominado Nobel Alternativo, alerta de que las nuevas generaciones ya no creen en la resistencia pacífica tras décadas de conflicto y cree que si no hay presión internacional sobre Marruecos, la guerra será inevitable. “Es muy probable, lo lamento mucho, no espero verlo de verdad, de corazón, por eso mando un mensaje de paz. La Unión Europea tiene que hacer algo para evitar la guerra, para mantener una vía democrática pacífica”, afirma. Haidar, quien el martes 2 de diciembre recogía en Estocolmo uno de los premios de la fundación sueca Right Livelihood Award. Aminatou defiende que se obligue a Rabat a respetar los derechos humanos, ampliar las competencias de la Misión de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental (Minurso) y frenar el “expolio ilegal” de los recursos naturales del Sahara. “Los jóvenes saharauis ya no creen en la resistencia pacífica, están ejerciendo presiones al Frente Polisario para retomar las armas”, lamenta Haidar, que habla de generación “decepcionada, frustrada y reprimida” que no ve un futuro y solo la “complicidad” de la comunidad internacional con el régimen marroquí.

Marruecos y el Polisario firmaron en 1991 un acuerdo de alto el fuego que puso un punto y aparte a la guerra iniciada en 1975 después de que las tropas marroquíes ocuparan los territorios de la antigua colonia española del Sahara Occidental.

El acuerdo incluía la convocatoria de un referéndum de autodeterminación que no se ha celebrado aún, en gran parte por los obstáculos que pone Marruecos respecto al censo.

Rabat usa “cartas de presión” para forzar a Europa a “cerrar los ojos hacia una situación flagrante y grave”, entre las que menciona el terrorismo y la inmigración ilegal, un arma a la que el régimen marroquí recurrió en 2009 para “presionar” al Gobierno español.

La fundadora y presidenta del Colectivo de los Defensores Saharauis de Derechos Humanos

(CODESA), llevó a cabo entonces una huelga de hambre de más de un mes en el aeropuerto de la isla de Lanzarote para protestar por su expulsión de El Aaiún (Sahara Occidental) y la retirada de su pasaporte por Marruecos.

Aunque la activista saharauí señala a Francia como el “gran obstáculo” al proceso de paz por sus lazos con Rabat, cree que España también tiene su responsabilidad y cede a las presiones de Marruecos, como sucedió a finales de noviembre.

El Gobierno español lanzó una alerta, que dijo sostenida en información de servicios secretos extranjeros, en la que sugería a los ciudadanos de su país que no viajaran a los campamentos de refugiados saharauis, ya que según la misma eran objetivo preferente de los grupos yihadistas que actúan en el sur de Argelia. Haidar relaciona esa alerta, que considera “falsa”, con la visita ese día a Madrid del ministro de Exteriores marroquí, y cree que el objetivo era “aterrorizar” a los simpatizantes españoles para que no asistieran al congreso del Polisario el día 19 de diciembre en las zonas liberadas.

Tras décadas de activismo, que la ha llevado a la cárcel, Haidar destaca que la lucha y los sacrificios han permitido avances como que se les permita viajar al exterior, negociaciones entre el Polisario y Marruecos y fallos favorables de las cortes europeas, que niegan la soberanía de Rabat.

CAMERÚN

BOKO HARAM CORTA LAS OREJAS A OCHO MUJERES DE UNA ALDEA DE CAMERÚN

El ataque tuvo como objetivo enviar un mensaje a los ganaderos locales que han tratado de armarse para poder defenderse del grupo terrorista

El 29 de julio un grupo de 40 hombres llegaron a la aldea cristiana de Gakara, en Camerún. Tras perseguir y disparar al grupo encargado de defender el pueblo, entraron en las cabañas y capturaron a ocho mujeres. Las pusieron en fila, de rodillas en la arena y una a una, les fueron cortando las orejas. Una barbarie para anunciar el regreso de Boko Haram.

A Miaramou le cortaron la oreja izquierda para que no pudiera escuchar las conversaciones de los terroristas. Ella es una de las ocho víctimas, todas mujeres, veinteañeras y madres que fueron trasladadas a la enfermería de la ciudad de Kerawa. Con gestos y palabras sueltas tratan de explicar lo ocurrido a los soldados del Batallón de Intervención Rápida (BIR) que las custodian para protegerlas. Durante el ataque también murieron dos hombres, víctimas de un artefacto que hicieron explotar los terroristas.

Gakara no era objeto de los ataques del Boko Haram desde hacía dos años. En 2017, asesinaron a quince hombres de la aldea y secuestraron a ocho mujeres. Nunca más se supo de ellas. Los soldados cameruneses tratan ahora de ver qué hay detrás de



este ataque, ya que el grupo terrorista nunca había actuado de este modo. Según se cree, podría tratarse de una advertencia a los ganaderos locales, que habían tratado de organizarse y armarse con arcos y flechas para proteger su territorio y a sus familias.

Uno de los soldados que atendió a las víctimas difundió la fotografía de tres de las mujeres mutiladas con la mirada vacía y abrazando a sus bebés. Además de Miaramou, de 32 años, también aparecen Djera Brahim, de 30, y Abba Moussa. Días después del ataque aún les cuesta recordar lo ocurrido y siguen paralizadas de miedo. El canal francés 24jours entrevistó a varios combatientes de Boko Haram para preguntarles por el ataque. «Cortamos las orejas a las mujeres para hacerlas sordas y tontas», fue lo único que les dijeron. Un nuevo acto de violencia sin sentido.

TÚNEZ

EL TERROR VUELVE PARA DESESTABILIZAR TÚNEZ

Dos ataques suicidas se cobran la vida de un policía cuando comienza la temporada turística y se conoce que el presidente está grave.

La todavía joven democracia tunecina, única experiencia exitosa surgida de la 'primavera árabe', vivió el jueves 17 de junio una jornada que la puso a prueba. Un doble atentado suicida en la capital se cobró la vida de un policía y causó una decena de heridos, además de sembrar el pánico en el concurrido centro de la ciudad. El ataque llegó

cuando se iniciaba la temporada alta turística entre expectativas muy favorables del sector. Y se produjo en la misma jornada en que trascendió que el presidente del país, el nonagenario Beji Caib Essebsi, se encontraba hospitalizado «en estado crítico».

La principal arteria de Túnez, la avenida Habib Burgiba, se vio sacudida hacia las 11:00 horas por el ataque de un kamikaze a un vehículo policial. La explosión hirió a tres civiles y dos agentes, uno de los cuales falleció después de llegar al hospital. Restos del terrorista salpicaban la calzada alrededor del coche atacado, en una zona muy próxima a la hiperprotegida Embajada de Francia. Desde Osaka, donde participaba en la cumbre del G-20, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó «firmemente» la violencia.

Apenas diez minutos después, también en la capital, se produjo un segundo atentado contra un complejo de seguridad en la periferia. Cuatro agentes resultaron heridos, según el Ministerio del Interior. De nuevo un suicida hizo estallar su cinturón explosivo delante de la puerta trasera de las instalaciones de seguridad en el barrio de Gorjani, donde se concentran los servicios de la Guardia Nacional, la Policía jurídica y los equipos de investigación antiterrorista.

«Es un acto cobarde» que «apunta a desestabilizar a los tunecinos, la economía y la transición democrática en un momento en que comienza la temporada turística y a unos meses de las elecciones», aseguró el jefe del Gobierno, Yousef Chahed, al que se pudo ver en la



avenida Burgiba después del primer ataque. «Estos grupos terroristas no tienen lugar en Túnez y nuestra guerra contra ellos es una guerra por la existencia, una cuestión de vida o muerte», añadió. En los dos atentados, los autores -dos varones- utilizaron un cinturón explosivo, según el portavoz del departamento antiterrorista, Sofiene Sliti. «No se sabe si eran de fabricación artesanal. Las investigaciones continúan para determinar la identidad de los dos kamikazes».

Túnez está en estado de emergencia desde noviembre de 2015, cuando se produjo el atentado contra un autobús de la Guardia Presidencial. Aquel mismo año, la violencia terrorista ya había golpeado contra objetivos turísticos como el Museo del Bardo de la capital, en marzo, y una playa en Susa tres meses después.

Jóvenes sin futuro

Además del terrible coste en vidas humanas, aquella ofensiva atribuida a una rama salafista local vinculada al Estado Islámico asustó a turistas e inversores, con evidente repercusión negativa en la débil economía de un país que sigue teniendo dificultades para ofrecer expectativas de futuro a sus jóvenes. Túnez es el cuarto país del mundo en número de ciudadanos que viajaron a Libia y Siria para sumarse a organizaciones yihadistas. Los ataques de la capital -los primeros desde que en octubre una mujer hirió a quince personas al hacer estallar la carga explosiva de un bolso, también en la avenida Habib Burgiba- se produjeron a sólo unos meses de las cruciales elecciones presidenciales..



NIGERIA

RESCATAN A 300 JÓVENES TORTURADOS EN UN REFORMATARIO ISLÁMICO EN NIGERIA

La institución recibía a niños delincuentes y drogadictos que después eran violados y privados de alimentos por sus maestros.

La Policía del Estado nigeriano de Kaduna Rescató a finales de septiembre a más de 300 jóvenes de diversas nacionalidades que habían sido torturados, violados y privados de alimento en un centro de acogida islámica de esta ciudad, situada en el norte del país africano. Los portavoces de los cuerpos de seguridad aseguraron que más de cien, incluidos niños de cinco años, fueron hallados encadenados en un habitáculo. La institución era un reformatorio religioso en el que se recibía a jóvenes delincuentes o drogadictos, y, teóricamente, se les enseñaba el Corán y proporcionaba recursos para su reintegración en la sociedad. Al menos, nueve personas, presuntamente maestros de la entidad, fueron arrestadas. Algunos de los muchachos permanecían juntos, anillados por los tobillos, mientras que otros se hallaban encadenados a ruedas. Las imágenes difundidas muestran las heridas abiertas en la espalda de un niño que parece haber sido objeto de latigazos y a otros hacinados en un patio. Los liberados afirman que varios compañeros murieron, víctimas de las torturas y problemas de salud. Bello Hamza, un hombre de 42 años que llevaba tres meses recluido tras ser engañado por su fami-



lia, explicó que los intentos de huida eran castigados severamente. «Atan a la gente y la cuelgan del techo», señaló. Los jóvenes recluidos proceden del norte del país, una región mayoritariamente musulmana, pero también de las repúblicas vecinas de Burkina Faso y Mali. El propietario del lugar, detenido por las autoridades, negó todas las acusaciones y aseguró que el objetivo de su proyecto era enseñar el Islam y que los que portaban grilletes eran «los más obstinados, los que intentaron escapar».

Los padres, horrorizados

Los padres de los jóvenes, convocados por la Policía, se declararon «sorpresa y horrorizados», al ver el estado en el que se encontraban sus hijos y que todos, al parecer, desconocían. Según sus testimonios, tenían autorización para llevarles comida de vez en cuando y visitarlos una vez cada tres meses, pero carecían de permiso para entrar en la casa. Los encuentros se realizaban en el exterior y eran breves. Las 'casas de corrección' y las escuelas islámicas son objeto de debate en Nigeria ya que constituyen un sistema de enseñanza paralelo al oficial y que resulta la única opción para aquellas familias sin acceso a las estructuras educativas públicas. Las estadísticas oficiales apuntan la existencia de 7 millones de estudiantes en estos centros, conocidos como 'almajiris', y que proliferan en la mitad septentrional, la más pobre del vasto territorio. La colonización hundió el sistema, antes depen-



diente de los emires locales, figuras que fueron despojados de buena parte de su poder y recursos económicos. A menudo, los centros obligan a los pupilos a practicar la mendicidad, una práctica que también se lleva a cabo en otros países de la región. Además, estos colegios son objeto de críticas por la escasa preparación de sus maestros, la precariedad de las instalaciones y la insuficiencia de medios materiales. La memorización del Corán es el fin principal de su plan de estudios, lo que impide a sus alumnos acceder a graduaciones de la enseñanza reglada y conseguir empleos dignos.



KENIA

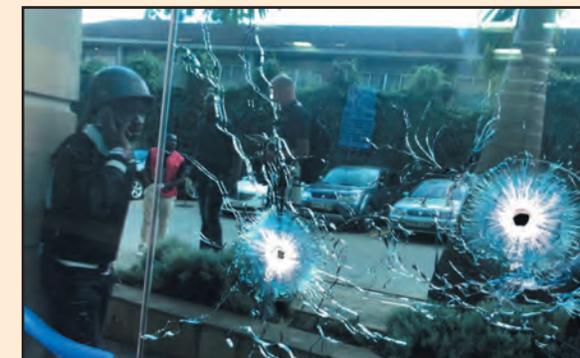
LOS YIHADISTAS DE AL-SHABAB VUELVEN A GOLPEAR EL CORAZÓN DE NAIROBI

Al menos 15 muertos y varios heridos en un ataque yihadista de Al Shabab en un complejo hotelero en Kenia

Al menos 15 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque perpetrado el martes 15 de enero contra el lujoso complejo hotelero 14 Riverside, en el barrio de Westlands, en el norte de Nairobi (Kenia), según ha confirmado el presidente del país, Uhuru Kenyatta. "Catorce vidas inocentes se perdieron y otros resultaron heridos", subrayó Kenyatta, en un mensaje televisado dirigido a la nación.

Entre los heridos había un ciudadano español fuera de peligro, según confirmó el Ministerio de Exteriores.

Previamente, el ministro keniano de Interior, Fred Matiangi, afirmó, casi ocho horas después del inicio del asalto, que la situación estaba "bajo control" y que el país se hallaba "seguro", tras una operación para reducir a cuatro supuestos terroristas -captados por



cámaras de seguridad- que se cree que cometieron la matanza.

De hecho, según aseguró el presidente keniano en el mensaje televisado, "todos los terroristas fueron eliminados" durante la operación llevada a cabo. Además, añadió que más de 700 personas tuvieron que ser evacuadas del complejo hotelero.

Fuentes de la morgue de Chiromo, próxima al complejo hotelero, indicaron que habían recibido 15 cadáveres y que se esperaban más.

El Servicio Nacional de Policía de Kenia advirtió al día siguiente, miércoles 16 de enero, de que el lugar del suceso era aún "una escena de crimen bajo una activa operación de seguridad".

"Hasta que no se declare segura, cualquiera que no esté activamente implicado en la operación debería evitar la zona", añadió la Policía en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El grupo yihadista somalí Al Shabab reivindicó la autoría del ataque -a través de su portavoz Ali Dheere- en un mensaje emitido en su radio



Andalus, en el que declaró: "Los no musulmanes son nuestro objetivo y vamos a matarlos allá donde se escondan de nosotros".

Al Shabab, activo en Kenia desde 2011

La mayoría de los atentados de Al Shabab en Kenia en los últimos años se han producido en la frontera entre Somalia y Kenia como represalia por la presencia en Somalia del Ejército keniano, desde octubre de 2011, para combatir a los yihadistas. El peor atentado ocurrió en abril de 2015, cuando 148 personas murieron en el asalto a la Universidad de Garissa (norte de Kenia), cuyas instalaciones mantuvieron bajo su control durante 16 horas. Al Shabab, la rama de Al Qaeda en el cuerno de África. En septiembre de 2013, al menos 4 terroristas de Al Shabab asaltaron el centro comercial Westgate en Nairobi, muy frecuentado por extranjeros, y mataron a 67 personas durante los cuatro días que estuvieron dentro del edificio, asediados por las fuerzas de seguridad. La peor acción terrorista que ha sufrido Kenia fue el



atentado de 1998 contra la Embajada de Estados Unidos en Nairobi, que causó más de 200 muertos. Al Shabab, que anunció en 2012 su adhesión formal a la red Al Qaeda, controla parte del territorio en el centro y el sur del país y aspira a instaurar en Somalia un Estado islámico de corte wahabí. Somalia vive en estado de guerra y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

SOMALIA

LA MILICIA ISLAMISTA PROVOCA UNA NUEVA MASACRE EN SOMALIA

Un doble atentado de Al-Shabaab en Mogadiscio acaba con la vida de 32 personas y certifica la incapacidad del Gobierno para frenar el terrorismo.

El vehículo estacionado mantenía las luces encendidas y esa anomalía alertó a algunos viandantes que dieron la voz de alarma. Pero la deflagración fue inmediata y, según los testigos, la mayor de los últimos tiempos en Mogadiscio. El ataque, a última hora de la tarde del jueves 28 de febrero, destruyó las cuatro plantas del Hotel Maka al-Mukarama y afectó a las tiendas y restaurantes adyacentes en la calle más transitada de la capital somalí. Poco después de esta primera explosión tuvo lugar la segunda, en el Nasa Hablood, otro establecimiento hostelero situado en el cruce K4, a un kilómetro de distancia. Causó 32 muertos y 80 heridos. La milicia de Al-Shabaab se adjudicó la autoría del atentado. La bomba provocó la destrucción de las cuatro plantas



del primer edificio, que los terroristas pretendían asaltar, y dio lugar a grandes incendios en las inmediaciones. Los cuerpos de seguridad locales aseguraron que tres guerrilleros resultaron abatidos y los cinco restantes se atrincheraron en un inmueble cercano, al parecer, con rehenes. Fuentes de la Policía anunciaron que, tras veinte horas de intercambio de disparos y granadas, había finalizado el asedio sin informar sobre las posibles vícti-

mas. La indignación por este nuevo golpe islamista se propagó por las redes sociales, que achacaban la atmósfera de terror a la incapacidad gubernamental. Los usuarios de internet difundieron una imagen de Abukar Hassan Islow, ministro de Seguridad, disfrutando de la retransmisión de un partido de la NBA en el interior de su lujoso vehículo blindado. La corrupción y la ineficacia de las autoridades lastran el desarrollo de Mogadiscio, convertido en un pujante centro de negocios. El atentado ha vuelto a poner de

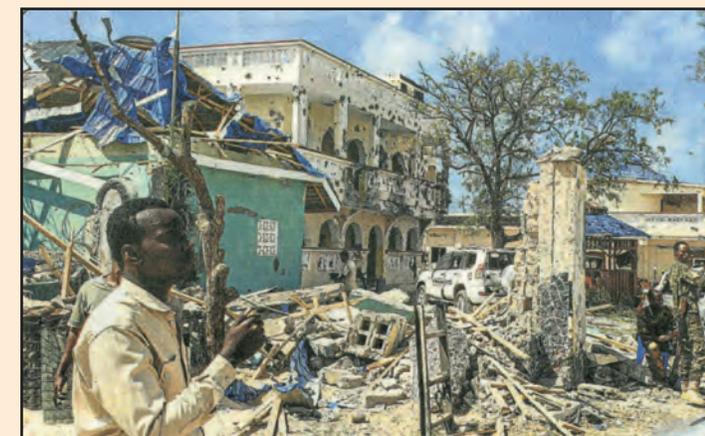
manifiesto la vulnerabilidad de los hoteles, habitual centro de reunión de políticos y empresarios. Los dos blancos ya habían sido objeto de ataques anteriores. Hace cuatro años, otro ataque también afectó al Maka al-Mukarama y se saldó con una veintena de muertos. Pero el peor desastre tuvo lugar en octubre de 2017, cuando la voladura de un camión lleno de explosivos devastó el Kilómetro 5, una de las arterias fundamentales de la ciudad. El ataque provocó 587 muertos y está calificado como el segundo atentado más letal de la historia.

EL TERROR DE AL-QAIDA REAPARECE EN SOMALIA

Al menos 26 personas murieron el viernes 12 de julio en un ataque con un coche bomba perpetrado el viernes por el grupo yihadista Al Shabab contra un hotel en la ciudad de Kismayo (Somalia).

El presidente de la región de Jubalandia, Ahmed Madobe, fue quien ha dio el balance de víctimas y ha señaló que entre ellas estaban el exministro regional Farid Yama, el candidato a las próximas presidenciales en Jubalandia Mohamed Ismael Shakur, el activista Deq Isse Abdulle y los periodistas Mohamed Sahal Ghadmahire y Hodan Nalayeh.

En cuanto a las víctimas mortales extranjeras, figuraban dos estadounidenses, un británico, un canadiense, tres kenianos y tres tanzanos. Los heridos sumaban 56, entre ellos dos ciudadanos chinos de poca gravedad, según declaraciones de Madobe recogidas por el medio local Radio Dalsan. El ataque se inició con la explosión de un coche bomba frente al hotel en el que se celebraba un encuentro entre parlamentarios y líderes políticos. Tras ello, varios hombres armados irrumpieron en las instalaciones donde se produjo un tiroteo durante más de 14 horas. El grupo yihadista Al Shabaab reivindicó la autoría del ataque según recogió SITE Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas. El grupo, que se adhirió formalmente a la red terrorista Al Qaeda en 2012, controla parte del centro y el sur de Somalia y aspira a instaurar un Estado islámico de corte wahabí en ese país. Por su parte, el presidente de Somalia, Mohamed



Abdullahi Mohamed, conocido popularmente como Farmajo, mostró sus condolencias a los familiares de las víctimas. "Este ataque terrorista en la ciudad de Kismayo refleja a los enemigos de los somalíes que tratan de desestabilizar a toda nuestra nación", afirmó el mandatario, quien describió el ataque como "brutal". Además, el presidente aseguró que las fuerzas de seguridad federales y a nivel regional habían alertado de la seguridad antes. Este fue el primer gran ataque de este tipo en Kismayo, pero los analistas locales culpan al Gobierno federal y a la administración local por descuidar la protección a consecuencia de las escaramuzas políticas en vista de unas próximas elecciones regionales. La nación africana vive en un estado de guerra y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin un gobierno efectivo y en manos de milicias radicales islámicas, señores de la guerra y bandas de delincuentes armados.

AL MENOS 92 MUERTOS EN UN ATAQUE CON COCHE BOMBA EN MOGADISCIO

Entre los fallecidos había al menos 17 estudiantes de la universidad privada de Benadir. La explosión, que tuvo lugar en una concurrida zona de la capital somalí, dejó cientos de heridos

Al menos 92 personas murieron y 128 resultaron heridas el sábado 28 de diciembre por la explosión de un vehículo bomba en un puesto de control a las afueras de Mogadiscio, en la concurrida intersección que conecta la capital de Somalia con la localidad de Afgoye. Las cifras fueron proporcionadas por el doctor Nasra Ali, del Hospital Medina, quien advirtió de que muchos de los heridos se estaban muriendo por la escasez de bolsas de sangre. El atentado fue reivindicado por el grupo yihadista Al Shabab que ya había manifestado su rechazo a la construcción de una carretera en la zona de la explosión. Entre los muertos había 17 estudiantes de la Universidad privada de Benadir, quienes atravesaban en ese momento el cruce en minibus.

El atentado tuvo lugar a las 8.00 hora local cuando un presunto suicida hizo estallar una furgoneta cerca de una oficina de impuestos. Era la hora punta de una jornada laboral, con un gran bullicio de ciudadanos yendo de un sitio a otro. Decenas de familias aguardaba a las afueras



de los hospitales Erdogan, Medina y la clínica especializada Kalkaal con la intención de conocer el estado de sus familiares. Todos los centros sanitarios hicieron un llamamiento desesperado para que la población acudiera a donar sangre.

«No recuerdo una tragedia semejante desde el ataque en la intersección de Zoobe (en Mogadiscio)», explicaba un sanitario, en referencia al doble atentado con camión bomba en un mercado de la capital que causó 587 muertos en octubre del 2017. «Mando mis más profundas condolencias a las familias y amigos que han perdido a seres queridos», declaró en una rueda de prensa el presidente somalí Mohamed Abdulahi Farmajo.

Este atentado era el tercero más mortífero en la historia reciente de Mogadiscio, solo superado por el de Zoobe y por la explosión de un terrorista suicida de Al Shabab, en el 2011, que mató a más de cien personas. Este ataque pone una vez más en entredicho la capacidad del Ejército somalí para asumir la seguridad de este convulso país del Cuerno de África, al ir reduciéndose año tras año los contingentes de soldados que la misión de paz de la Unión Africana (UA), conocida como AMISOM, mantiene en Somalia. EEUU también cuenta con cerca de 500 efectivos en territorio somalí, y solo este año ha llevado a cabo más de 60 ataques con drones (aviones no tripulados) contra supuestos objetivos de Al Shabab, si bien en alguno de ellos también han fallecido agricultores. Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.



MALI

CASI CIENTO MUERTOS POR UNA VENGANZA ENTRE ETNIAS EN MALÍ

Los asaltantes rodearon un pueblo, atacaron a los residentes con armas de fuego y quemaron las chozas en las que dormían 300 personas

Al menos 95 residentes de la aldea de Sobane-Kou, en la región central de Malí, fueron asesinados el lunes 10 de junio.

Los asaltantes rodearon la localidad, de unos trescientos habitantes, sobre las tres de la madrugada y atacaron a los residentes con armas de fuego mientras incendiaban las chozas en las que pernoctaban. Además del casi centenar de fallecidos, 19 personas estaban en paradero desconocido. Los pobladores son campesinos de la etnia dogon y existe la sospecha de que la raza es la venganza por una masacre cometida hace tres meses contra los poblados de Ogossagou y Welingara, adscritos a la etnia fulani, y en la que perecieron 130 vecinos. Entonces, los milicianos llevaban la vestimenta tradicional de los cazadores dogon.

La situación en la región central de Malí se ha deteriorado desde que, hace siete años, el país sufrió una insurrección islamista que llegó a controlar su mitad septentrional. El apoyo de las tropas francesas aplastó la rebelión pero la violencia permanece en la zona y se ha extendido a las vecinas repúblicas de Níger y Burkina Faso. Los ataques yihadistas contra las fuerzas armadas locales y del comando regional G5 se alternan con otros de carácter interétnico, aunque existe la sospecha de connivencia entre los islamistas y determinados grupos tribales.

Las disputas por el agua y los pastos han constituido la fuente de conflictos ancestrales en el país. Como sucede en el resto del Sahel, las poblaciones campesinas achacan este ambiente de inseguridad a los fulani, también conocidos como fula o peul, una comunidad formada por 38 millones de miembros, muchos dedicados a la ganadería y que practican la trashumancia de largo recorrido.

Autodefensas civiles

Los conflictos locales entre los agricultores y los pastores son ancestrales pero se han incrementado en número y devastación. La mayor disponibilidad de



armas, que siguió a la caída del régimen de Gadafi en Libia, y la aparición de autodefensas civiles han propiciado un clima de enfrentamientos. Sólo en los tres últimos años, los choques han provocado 3.000 muertos y miles de desplazados. El Gatia, formado por tuaregs, se enfrenta a las milicias Ganda Izo y Ganda Koy, ligadas a los shongai y los fula, también rivales de los Dan Na Ambassogou, los combatientes vinculados al pueblo dogon.

La masacres de marzo impulsaron manifestaciones de protesta en la capital, Bamako, y el Gobierno respondió con la sustitución de dos generales y el anuncio de un programa para la desmovilización de los grupos armados, pero los resultados han sido escasos y la situación está lejos de apaciguarse. Antes de la degradación del orden público, la región de Mopti fue uno de los grandes reclamos del turismo cultural en África gracias a atractivos como la gran mezquita de Djenné o los acantilados de Bandiagara, hogar del pueblo dogon y su rico patrimonio de ritos y costumbres. Ahora bien, la inestabilidad de Malí no se circunscribe a una zona determinada. A mediados de febrero, el Consejo de Ministros prorrogó un año más el mandato de los parlamentarios aludiendo a la imposibilidad de llevar a cabo las elecciones planeadas este año. El clima de inestabilidad, que ya ha generado dos prórrogas, impide la consulta popular mientras crece la atmósfera de desconfianza hacia el poder central.

BURKINA FASO

SEIS MUERTOS EN UN ATENTADO CONTRA UNA IGLESIA CATÓLICA EN BURKINA FASO

El sacerdote y cinco fieles perdieron la vida después de que varios individuos armados irrumpieran durante la misa

Seis personas, incluido un sacerdote, fueron asesinadas el domingo 12 de mayo por la mañana en un ataque a una iglesia católica en Dablo, una ciudad en la provincia de Sanmatenga, en el norte de Burkina Faso.

"Alrededor de las nueve de la mañana, durante la misa, individuos armados irrumpieron en la iglesia católica y comenzaron a disparar mientras los fieles intentaban huir", relató el alcalde de Dablo, Ousmane.

Entre 20 y 30 individuos armados atacaron la iglesia. Los atacantes "pudieron inmovilizar a algunos de los fieles, mataron a cinco personas y el sacerdote que celebraba la misa fue asesinado, lo que elevó la cifra de muertos a seis". Según una fuente de seguridad, el ataque fue llevado a cabo por un "grupo de hombres armados estimado entre veinte y treinta".

"Quemaron la iglesia, luego las tiendas y un maquis (pequeño restaurante o bar) antes de ir al centro de salud donde registraron las instalaciones y quemaron el vehículo de la enfermera jefe". "En la ciudad hay un clima de pánico, la gente está encerrada en su casa, no hay



actividad, las tiendas están cerradas, es prácticamente una ciudad muerta", explicaba el alcalde. Por su parte, una fuente de seguridad confirmó que "se dio la alerta alrededor de las diez de la mañana y se desplegaron refuerzos desde Barsalogo", una comuna ubicada a 45 km al sur de Dablo.

Este ataque se produjo dos días después de la liberación en el norte de Burkina Faso de cuatro rehenes por las fuerzas especiales francesas. Burkina Faso se ha enfrentado durante los últimos cuatro años por ataques cada vez más frecuentes y letales atribuidos a grupos yihadistas, entre ellos Ansarul Islam, el Grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (GSIM) y la Organización Estatal Islámica en Gran Sáhara (EIGS).

LA MISERIA ALIMENTA EL AUJE YIHADISTA EN BURKINA FASO

El país sufre una terrible ofensiva terrorista de grupos vinculados a Al-Qaida y el Estado Islámico.

El mensaje yihadista es rotundo. No más lengua occidental ni aprendizajes ajenos a las tradicionales costumbres de la aldea, sólo se estudia el árabe y nada más que el Corán. El primer aviso llega a través de las mezquitas y el segundo se convierte en represalia. Entonces, las columnas motorizadas de guerrilleros irrumpen en el centro del pueblo disparando al aire, allanan las escuelas, secuestran o ejecutan a los profesores en sus aulas y castigan a la comunidad quemando mercados.

No hablamos de los modos de Boko Haram en el torturado noreste de Nigeria, sino de la realidad cotidiana en Burkina Faso, a más de 1.600 kilómetros de distancia.



Pero no caben comparaciones, según Hamed Ouattara, el artista más internacional del país y receptor del premio al mejor diseñador africano. «En absoluto», asegura

desde Uagadugu, la capital. «No hablamos de un problema similar porque los pueblos no son los mismos ni en el plano cultural ni en el mental. Aquí contamos con una cohesión nacional y patriótica para hacer frente a la división».

La realidad, sin embargo, cuestiona su interpretación. El territorio, que marca la transición entre el Sahel y el golfo de Guinea, sufre una devastadora ofensiva terrorista por parte de grupos vinculados a Al-Qaida y el Estado Islámico que se ha agudizado en los últimos meses. El Gobierno aduce que los milicianos provienen de Níger y Malí, pero Ansarul Islam, uno de los más activos, tiene sus orígenes en las provincias del norte y este. En 2017, el imán local Malam Ibrahim Dicko fundó esta organización, que aplica 'manu militari' una visión rigorista de la fe musulmana y denuncia la situación de privilegio que gozan las familias de los morabitus, los líderes religiosos nativos.

La expansión de los radicales en África Occidental se favorece de la miseria. El 45% de sus 20 millones de habitantes vive bajo el umbral de la pobreza y el desafortunado crecimiento demográfico agrava la penuria general. Las diferencias étnicas también complican el escenario. Como sucede en otras áreas de la región subsahariana, las comunidades ganaderas y agrícolas mantienen enquistados conflictos por el control del agua y las tierras. A los peul o fulani, poseedores de rebaños, se les achaca su colaboración con los integrantes y esta posición ha dado lugar a enfrentamientos intertribales tras la comisión de algunas razias.

La violencia se ha agravado en los últimos cinco años, desde que Burkina Faso se sacudió la dictadura del presidente Blaise Compaoré. El alzamiento popular acabó con tres décadas de poder opresivo. Lamentablemente, como sucedió en otros países, la caída de un régimen autoritario también se acompañó



de la desarticulación del aparato militar y de los servicios de Inteligencia afines al tirano, circunstancias que han favorecido la expansión yihadista. El JNIM, el Frente de Apoyo al Islam y los musulmanes, es una coalición de fuerzas de diversa procedencia que han aprovechado esa debilidad para introducirse en el interior.

La concentración de incidentes en la franja septentrional no puede esconder la vulnerabilidad de todo el país. La desestabilización de este Estado sin salida al mar supone un salto cualitativo dentro de la estrategia africana ya que permite su expansión hacia los países ribereños del golfo de Guinea. La operación llevada cabo por comandos franceses hace quince días pretendía rescatar a dos turistas raptados en un parque forestal del último país y que iban a ser conducidos a Malí, mientras que el salesiano español Antonio César Fernández fue asesinado cerca de la frontera con Togo.

El perfil social también responde a esa condición mixta, geográfica y socialmente. Aunque la mayoría de su población es musulmana, el 25% profesa la fe cristiana y los radicales han asumido una virulenta campaña contra las iglesias que anticipa la voluntad de emprender una limpieza religiosa. La ruptura de la convivencia, modélica hasta ahora, parece otro de sus fines.

LA CRISIS EN CIFRAS

La violencia. Desde enero de 2018 hasta junio de 2019 se han contabilizado 332 incidentes, con un saldo de 376 muertos, según datos de Unicef.

Personas sin hogar. Los ataques generaron 136.000 desplazados dentro del propio país y 11.000 refugiados.

La enseñanza. Al menos 119.000 alumnos se ven afectados por el cierre de 954 escuelas.

Inseguridad alimentaria. Casi un millón de burkinabeses no saben si podrán comer al día siguiente.



LA VIOLENCIA EN BURKINA FASO DEJA CASI 270.000 DESPLAZADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES

La creciente violencia armada que viene experimentando el norte y el centro de Burkina Faso ha empujado a 267.000 personas a abandonar sus hogares entre los meses de agosto y octubre, mientras que en el último año más de 500 civiles han muerto en 472 ataques y operaciones militares, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).



La creciente violencia armada está provocando una emergencia humanitaria sin precedentes en el Sahel", advirtió a principios del pasado mes de octubre Andrew Mbogori, portavoz de la agencia de la ONU. En total, en el país hay unos 486.000 desplazados internos, mientras que otros 16.000 burkineses se han refugiado en los países vecinos. "Miles de personas están en movimiento, agotadas e intentando encontrar un lugar seguro con familias de acogida o en lugares de tránsito u oficiales", explicó el portavoz, subrayando que muchos se han visto desplazados más de una vez. "Las perspectivas para su inmediato retorno a sus lugares de origen son escasas", reconoció. Por ello, tanto sus necesidades como las de las comunidades de acogida, ya de por sí vulnerables por la falta de alimentos en la región, "van en aumento", en un contexto en el que mujeres y adolescentes están particularmente amenazadas y en el que servicios básicos como la salud y la educación, así como la liber-

tad de movimiento, se han visto "gravemente afectados por los ataques y la inseguridad generalizada". En la actualidad, las trece regiones del país acogen a desplazados por la violencia, mientras que 1,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente, al igual que los 31.000 refugiados malienses, que también se están viendo afectados por la situación, ha indicado Mbogori. En este sentido, llamó a reforzar la respuesta en materia de "alimentos, agua, cobijo y atención sanitaria" con el fin de "evitar otra tragedia dentro de una tragedia". "La desnutrición y la hambruna son una amenaza real", señaló. "Necesitamos recursos urgentes para lanzar una respuesta humanitaria coordinada ante la necesidad de salvar vidas", insistió el portavoz.

LA VIOLENCIA INTERCOMUNITARIA SE ADUEÑA DE BURKINA FASO

Al menos 16 personas fallecieron el viernes 11 de octubre en un ataque contra una mezquita de la ciudad septentrional de Salmossi

Al menos 16 personas murieron el viernes 11 de octubre en un ataque contra una mezquita de la ciudad de Sarmossi, en el malhadado norte del país. La violencia se está cebando con el Estado africano de apenas 20 millones de personas. El goteo de ataques intercomunitarios es continuo. El terrorismo yihadista, con diversos grupos operando, se extiende cada vez



por más zona del país. La inestabilidad es el mejor aliado para el establecimiento de un corredor estable para los fundamentalistas islámicos desde el Sahel al golfo de Guinea.

Esta vez fue un varón armado el que irrumpió en un espacio público, en este caso un lugar de culto musulmán, para provocar una nueva masacre. Ocurrió en plena oración en la Gran Mezquita de la pequeña localidad de Salmossi, en la región de Oudalan. La población comenzó a huir de la localidad ante el temor de que se sigan produciendo nuevos episodios de violencia de manera inminente.

Al día siguiente, sábado 12 de octubre, un millar de personas marcharon en la capital, Uagadugú, para denunciar el terrorismo y también la presencia de bases militares extranjeras, que una parte de la población cree que no ayuda en nada a resolver el creciente problema de la violencia. En los últimos meses Burkina Faso ha registrado ataques constantes. Más de una veintena de cristianos fueron víctimas de acciones similares a manos de grupos yihadistas. Ahora le ha tocado a los musulmanes. En torno al 60% de la población es musulmana, el 25% es cristiana y el resto profesa religiones indígenas. "Frente a un Gobierno que se ha mostrado incapaz de hacer frente a esta amenaza, los terroristas han escogido un nuevo foco de tensión: la religión. La convivencia pacífica entre distintos cultos ha sido la tónica general de Burkina Faso a lo largo de toda su historia, pero los recientes ataques contra cristianos pretenden sembrar la división", escribía en El País el periodista español José Naranjo.

Entre enero y julio de 2019 se registraron 321 ataques en Burkina Faso, lo que contrasta con los 194 que se



produjeron en el conjunto de 2018, según datos de la firma especializada en seguridad Max Security. Desde noviembre de 2018 hasta marzo de 2019 casi 500 personas murieron en episodios de violencia. Los ataques son casi diarios.

Asimismo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que unas 300.000 personas se han visto obligadas a desplazarse como consecuencia de la violencia en 2019. A la actividad de estos grupos armados hay que sumar la violencia de las fuerzas armadas locales, con asesinatos extrajudiciales incluidos. Las bajas en el seno del Ejército de Burkina son también cuantiosas: a finales de agosto una veintena de soldados murió a manos de grupos armados en lo que fue calificado como "el mayor ataque perpetrado por terroristas" por las autoridades locales.

En diciembre de 2018 el Gobierno declaró el estado de emergencia en varias provincias limítrofes con Mali, base de algunos de los grupos que operan en Burkina

Faso como el Estado Islámico del Gran Sahara. Las entidades más importantes son el autóctono Ansarul Islam y el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM). Grupos yihadistas se hicieron en 2012 con el control del norte de Mali. Francia cuenta con más de 4.000 soldados en Mali, Burkina Faso, Níger y Chad con el objetivo de ayudar a las fuerzas locales a combatir a los grupos yihadistas.

La violencia se está cebando especialmente con el norte del país. A finales del pasado mes de septiembre casi 20 personas fueron abatidas en la septentrional provincia de Bam. Otras 20 personas



fallecieron a principios de octubre en una mina de oro también del norte de Burkina, según informó la BBC. El 8 de octubre casi 40 terroristas fueron ejecutados tras el ataque a una Gendarmería. Burkina Faso tiene frontera con seis países africanos: Níger, Mali, Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana. En Mali y en Níger el terrorismo es una realidad consolidada. Y el riesgo de que la violencia terrorista se extienda por los vecinos, especialmente por Benín y Togo —la región oriental de Burkina Faso es un bastión yihadista—, es cada vez más alto.



El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore.

La caída del expresidente Blaise Compaoré en 2014, que mantenía acuerdos con los yihadistas del norte, ha venido empeorando la situación. Hay zonas del país fuera de control del Estado. *“Cuando se produjo la insurrección de octubre de 2013, y cuando la transición militar tuvo lugar en 2015, cada vez era más difícil que Burkina y los grupos*

terroristas llegaran a acuerdos, y estos empezaron a operar en el país”, explicaba Rinaldo Depagne, director para África occidental del International Crisis Group, a la web VOA News.

LIBIA

LA GUERRA DE LIBIA SE CEBA CON LOS MIGRANTES

Un bombardeo contra un centro de detención mata al menos a cuarenta personas y confirma que el país norteafricano no es un puerto seguro.

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó el miércoles 3 de julio una reunión de urgencia para discutir el ataque aéreo sobre un centro de detención de migrantes en Trípoli que horas antes había dejado al menos 44 personas muertas y cien heridas. Fue el segundo bombardeo que sufría la instalación situada en Tajura, donde se hacían más de 600 detenidos desde que el general opositor y líder del Ejército Nacional Libio (ENL), Jalifa Haftar, lanzara en abril una operación militar para hacerse con el control de la capital. Estas 44 víctimas se suman a las más de 650 personas que han muerto en Trípoli desde el estallido de los combates, según los datos de Naciones Unidas. *«Esta matanza innoce y sangrienta» es «una consecuencia de las más horribles y trágicas» de la «absurdidad de esta guerra»,* condenó el enviado del organismo internacional para Libia, Ghasán Salamé, quien pidió *«sanciones apropiadas a los autores de esta operación en flagrante violación»* que *«podría claramente constituir un crimen de guerra»*. Las agencias de la ONU y las organizaciones de derechos humanos volvieron a clamar



contra la política migratoria de la UE e insistieron en que Libia no es puerto seguro para los migrantes. Mientras familiares y amigos despedían a sus seres queridos, no se pudo desvelar la autoría del ataque. El Gobierno de Unidad Nacional (GNA), basado en Trípoli y reconocido por Naciones Unidas, lo atribuyó *«al criminal de guerra Jalifa Haftar»*. El coronel Jalid al-Mahjoub, portavoz del ENL rebelde, reconoció que bombardearon un almacén de armas cercano, pero en una conversación telefónica con 'The New York Times' aseguró que esta vez no han sido ellos. El militar acusó a la milicia encargada del centro de detención de *«usar a los migrantes como escudos humanos»* e incluso de obligarles a ayudarles en las labores de defensa de la capi-

tal. La versión de los medios leales a Haftar es que el proyectil lo lanzaron desde Trípoli en su intento de alcanzar a sus aviones. El bombardeo contra el centro se produjo pocas horas después de que las fuerzas de Haftar anunciaran el inicio de una campaña de ataques aéreos para tratar de reconducir su campaña militar, que la semana pasada sufrió un duro revés tras perder la localidad de Gharian, situada al sur de Trípoli.

Denuncia de la ONU

Los cuerpos metidos en bolsas de plástico de color negro a la espera de ser enterrados dieron la razón a la ONU y las organizaciones no gubernamentales que llevan la contraria a la Unión Europea e insisten en que Libia no es un puerto seguro para devolver a los migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), unos 3.300 migrantes y refugiados, incluidos los 600 en Tajura, se encuentran *«arbitrariamente detenidos»* en Trípoli y sus alrededores *«en condiciones que sólo pueden ser calificadas de inhumanas»* y que podrían exacerbarse ante la aproximación de los combates, por lo que defendió su cierre. El máximo responsable de esta agencia, Filippo Grandi,



advirtió en Twitter sobre *«tres mensajes claves: los migrantes y refugiados NO tienen que estar detenidos, los civiles NO tienen que ser objetivos, Libia NO es un lugar seguro para devolver a los migrantes»*. El jefe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Antonio Vitorino, insistió en la misma idea y denunció

que Libia *«no es un puerto seguro, ya que los enfrentamientos siguen intensificándose»*. Frente a la contundencia de la ONU, la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, se limitó a reclamar *«una investigación inmediata»* del bombardeo *«escandaloso»*, pero en ningún momento puso sobre la mesa la posibilidad de cambiar la actual política migratoria comunitaria. *«Por cada persona evacuada o reasentada desde Libia en 2019, más de dos han sido devueltas por la fuerza por la Guardia Costera, a la que la UE apoya»,* recordó el coordinador médico de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Libia, Prince Alfani, en un comunicado en el que lamentó que el bombardeo *«es una tragedia terrible que podría haberse evitado fácilmente»*. MSF informó de que en la celda que sufrió el ataque había en esos momentos 126 personas recluidas.

EGIPTO

EL TERROR VUELVE A GOLPEAR A EGIPTO

Catorce turistas de Sudáfrica resultan heridos leves por la explosión de un artefacto cuando su autobús pasaba junto al futuro Gran Museo Egipto.

El terror golpeó de nuevo Egipto el domingo 19 de mayo y lo hizo en el mejor escaparate posible para convertir un ataque en noticia a nivel mundial. Catorce viajeros sudafricanos resultaron heridos leves tras la explosión de un artefacto al paso de un autobús turístico cerca del nuevo Gran Museo Egipto, cuya inauguración estaba prevista en el plazo de un año y que está ubicado al lado de las pirámides de Guiza, a las afueras de El Cairo. Es el cuarto incidente terrorista en los últimos seis meses en el lugar más visitado del país. Tres de los turistas fueron hospitalizados por *«precaución»* aunque solo sufrieron *«heridas leves»*, informó en



Twitter la ministra de Turismo, Rania al-Mashat. El terror busca publicidad y logró su objetivo gracias a las imágenes del autobús dañado con las pirámides de fondo, una de las siete maravillas del mundo antiguo y la única que perdura.

«La explosión de un objeto rompió las ventanas de un autobús que transportaba a 25 personas de Sudáfrica y un coche en el que circulaban cuatro egipcios. Algunos pasajeros de los dos vehículos resultaron heridos leves debido a los cristales rotos y recibieron atención médica», indicó una fuente de seguridad. En diciembre de 2018, tres turistas vietnamitas y un guía local murieron en un ataque similar contra un autobús que fue alcanzado por una bomba de fabricación casera. Ningún grupo reivindicó esta acción.



El turismo es un sector que en sus mejores años representaba más del 10% del PIB de Egipto y empleaba a un 13% de su mano de obra. Tras recuperarse parcialmente después de la revolución que derrocó a Hosni Mubarak en 2011, la irrupción del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el Sinaí se ha convertido en un freno clave para este sector.

De 14,7 millones de turistas en 2010, el ejercicio referencial, se pasó a apenas 5,3 millones en 2016. Un año después se registró una mejoría y ya se alcanzaron los 8,3 millones de visitantes. El golpe más sangriento contra este sector se produjo en octubre de 2015, cuando 224 personas perdieron la vida tras la explosión en pleno vuelo del Airbus 321 de la compañía rusa Metrojet que cubría la ruta entre Sharm el-Sheij y San Petersburgo.

El peligro viene del Sinaí

Las fuerzas de seguridad, la minoría cristiana copta, los sufíes y el turismo son los objetivos de los atentados que golpean de forma regular al país. Una serie de ataques contra iglesias en el delta del Nilo llevó a declarar el estado de emergencia en abril de 2017 y aún no se ha levantado. La gran amenaza tiene su epicentro en la península del Sinaí, donde en septiembre de 2014 el

califato autoproclamado por el EI fijó su primera provincia alejada de Siria e Irak. Ansar Bait al-Maqdis, el grupo yihadista más importante de la península, adoptó el nombre de Wilaya Sinai (Provincia del Sinaí), para convertirse en el brazo local del Estado Islámico.

Cuando el califa aceptó la lealtad de su filial egipcia, el portavoz del grupo, Abu Mohamed al-Adnani, pidió directamente a los yihadistas egipcios intensificar su guerra contra los militares y «minar sus caminos, atacar sus cuarteles y viviendas, cortar sus cuellos, no dejarles sentirse seguros y convertir sus vidas en un terror e infierno». El portavoz yihadista alabó a los combatientes del Sinaí porque sus acciones son un golpe directo a «los protectores de los judíos» dirigidos por «el nuevo faraón», en referencia al presidente Abdelفتاح el-Sisi.

La estrategia del Gobierno consiste en grandes despliegues militares en la zona y bombardeos, incapaces de frenar la amenaza. Las autoridades acusan al Estado Islámico y a sus grupos afines de estar detrás de los atentados contra el sector turístico para fomentar la sensación de inestabilidad en Egipto.

UN COCHE BOMBA CAUSA 20 MUERTOS EN EL CAIRO

Egipto volvió a vivir una jornada negra bajo la sombra del terrorismo después de que un vehículo, supuestamente cargado de explosivos, y que iba a ser utilizado en otro lugar, volara por los aires frente a un hospital en el centro de El Cairo causando decenas de muertos y heridos.

El suceso tuvo lugar a medianoche del domingo 4 de agosto cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario en una céntrica avenida junto al río Nilo hizo



explosión al chocar contra otros automóviles, dejando 20 muertos, 47 heridos y a la capital egipcia conmocionada. Inicialmente se habló de una bomba de oxígeno en el Instituto Nacional del Cáncer, luego de una colisión a gran velocidad y finalmente el Ministerio de Interior informó de que el vehículo portaba «varios explosivos» en el momento del incidente.

Según las primeras investigaciones, «el coche estaba siendo trasladado a un lugar para ser utilizado en una operación terrorista», por lo que el Ministerio descartó que el lugar del incidente fuera el elegido para llevar a cabo el atentado, aunque no dio más detalles. La nota apunta a que el automóvil fue robado en la provincia de Munufiya, al norte de El Cairo, en el Delta del Nilo, hace unos meses, y llevaba «explosivos que al chocar estalló».

Las autoridades responsabilizan del suceso a la formación armada Movimiento de los Brazos de Egipto-Hasam, al que el Gobierno relaciona con los depuestos Hermanos Musulmanes y que no ha tenido actividad últimamente. Hasam se dio a conocer en 2016 y ha reivindicado varios ataques, como el intento de asesinato del ayudante del fiscal general egipcio, Zakaria Abdelaziz, y el del antiguo mufti de Egipto, máxima autoridad religiosa musulmana del país, Ali Gomaa. Sin embargo, recientemente no ha anunciado ninguna acción armada.

Interior señaló que continuaban las investigaciones para identificar a los «miembros terroristas» implicados, con el



fin de «tomar las medidas legales contra ellos». Según el balance oficial, difundido por la ministra egipcia de Sanidad, Hala Zayed, el número de fallecidos es de 20, entre ellos cuatro no han podido ser identificados, y el de heridos se sitúa en 47 personas. La situación de los heridos es «estable», salvo tres de ellos en «estado grave» que están hospitalizados en «cuidados intensivos».

En el lugar de la explosión, decenas de operarios trabajaban tras la explosión para tratar de restablecer rápidamente las instalaciones del centro médico, visiblemente afectado por el estallido pero que pudo seguir con parte de su actividad. «Tenemos algunos sectores que funcionan, casi todo funciona, la clínica, la sala de radiografías, de quimioterapia», indicó el director del Instituto Nacional del Cáncer, Hatem Abualkasim. Agregó que las operaciones de cirugía estaban suspendidas y varios pacientes habían sido llevados a otros hospitales hasta que se retiraran los escombros de las instalaciones.

Soher Almusulmani, vecina del Instituto sintió la explosión y salió hacia el lugar en el que se produjo, donde vio escenas dantescas. «El edificio tembló fuertemente y escuchamos tatata, pensamos que las bombonas de oxígeno del instituto habían explotado y acudimos rápidamente al hospital, y encontramos llamas como si fuera un sol», declaró Almusulmani. «Vi a una persona corriendo con el brazo y la pierna ardiendo, diciéndonos: iros lejos del Instituto porque otra bomba va a explotar», atestiguó.



RUANDA

RUANDA CONMEMORA LOS 25 AÑOS DEL GENOCIDIO TUTSI

Ruanda, con el presidente Paul Kagame a la cabeza, conmemoró oficialmente el domingo 7 de abril el vigésimo quinto aniversario de la matanza con numerosos actos para recordar a las víctimas y evitar que caigan en el olvido. *"Ruanda es ahora una familia, por ello seguimos existiendo, a pesar de todo lo que hemos pasado"*, subrayó el presidente ruandés en su discurso de conmemoración.



También instó a las jóvenes ruandesas a que tomen el relevo y transformen su país, además de honrar a las víctimas del intento de exterminio de la etnia tutsi que conmocionó al mundo en 1994. En la actualidad, tres cuartas parte de los casi 12 millones de ruandeses tienen menos de 30 años y el 60% de la población no ha vivido el genocidio, en el que fueron asesinadas más de 800.000 personas.

"Es imposible comprender en su totalidad la soledad y el enfado de los supervivientes, y sin embargo, una y otra vez, les hemos pedido hacer los sacrificios necesarios para dar a nuestra nación una nueva vida", remarcó el mandatario en un abarrotado Centro de Convenciones de Kigali. Momentos antes hablaron en este solemne acto el primer ministro etíope, Abiy Ahmed y los presidentes de las comisiones de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, y de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, quienes manifestaron su solidaridad y admiración por la resiliencia del pueblo ruandés.

Mahamat hizo hincapié en la necesidad de *"seguir luchando contra las ideologías negacionistas y revisionistas"*, mientras que Juncker recalcó la obligación de

recordar lo sucedido como *"un imperativo moral y político"*, además de felicitar a Ruanda por su *"capacidad para renacer"*. También asistieron a este acto los mandatarios de Chad, la República del Congo, Yibuti y Níger -entre otras autoridades africanas-, además de diversos líderes europeos, como el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, quien aprovechó la ocasión para recordar la responsabilidad compartida en esta tragedia.

Entierro 25 años después

Según reveló la asociación de supervivientes Ibuka, un total de 80.931 cadáveres recuperados de fosas comunes excavadas durante el genocidio de 1994 serán enterrados de forma digna el 1 de mayo en el Monumento al Genocidio en Nyanza, al sureste de Kigali. *"Descubrimos las fosas comunes en los distritos de Rusororo y Masaka, en el extrarradio de Kigali, el pasado abril de 2018"*, explicó el coordinador de esta entidad en el distrito de Gasabo, Theogene Kabagambire.

En el último año *"se han exhumado 30.923 cuerpos solo en el municipio de Kabuga, parte del distrito de Rusororo"*, adelantó Kabagambire, sin poder especificar el número total de fosas comunes encontradas en esta área a hasta 25 metros de profundidad, ya que se suman *"por cientos"*. En el vecino barrio de Masaka, en el distrito de Kicukiro que alberga el Monumento al Genocidio de Nyanza, otros 50.158 cuerpos han sido exhumados, según el jefe de excavaciones, Innocent Gasinzigwa, de un total de *"128 fosas comunes"*.



SUDÁN

LA JUSTICIA DE SUDÁN GOLPEA POR PRIMERA VEZ CONTRA AL BASHIR

El expresidente dictador ha sido condenado a dos años de confinamiento por tenencia ilegal de divisas y corrupción.



La Justicia de Sudán dictó el lunes 16 de diciembre la primera sentencia condenatoria contra el expresidente Omar al-Bashir tras su derrocamiento el pasado mes de abril, al encontrarle culpable de un delito de tráfico ilegal de divisas y corrupción.

Al-Bashir, de 75 años, fue condenado a dos años de confinamiento en un centro de rehabilitación por un tribunal especial de Jartum en una causa relacionada con la tenencia de más de siete millones de euros en divisas y libras sudanesas en su domicilio.

El hombre que gobernó con puño de hierro Sudán desde 1989 hasta abril de 2019, entró en la sala de la vista en medio de un gran despliegue policial. Allí, metido dentro de una jaula escuchó cómo el tribunal le encontraba culpable de tenencia ilegal de divisas, pero no le aplicaba la máxima pena para estos casos, que es de 10 años.

El juez Al-Sadeq Abdelrahman consideró probado el delito de tráfico de divisas y de vulnerar las leyes contra el blanqueo de capitales, de los que se le acusó tras una redada en su domicilio pocos días después de su derrocamiento el 11 de abril, operación en la que se le

incautaron 6,9 millones de euros, 351.000 dólares y 5 millones de libras sudanesas (80.000 dólares). Al-Bashir argumentó que era parte de una donación de 25 millones de dólares otorgada por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, para ayudar a Sudán y que el resto de ese monto se gastó en asuntos de interés público. Tras dar por probado el delito, el magistrado emitió sentencia recordando que el sistema legal sudanés no permite la condena a prisión de mayores de 70 años, por lo que dictó reclusión de dos años en un centro social.

'TERMINATOR' NTAGANDA ES HALLADO CULPABLE POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El señor de la guerra de Congo deberá cumplir una condena todavía sin determinar por esclavismo sexual, asesinatos, violaciones y reclutar niños soldados.



Bosco Ntaganda permaneció el lunes 8 de julio imperturbable mientras se sucedían los veredictos de culpabilidad. Como ha sucedido con otros señores de la guerra en situación similar, el reo congoleño no mostró ningún tipo de emoción ante el hecho de que tenga que responder con una larga pena de cárcel por la

comisión de dieciocho delitos considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad. El veterano miliciano, también conocido como *'Terminator'*, ha sido condenado por la Corte Penal Internacional de La Haya, donde permanece recluido desde su entrega voluntaria en marzo de 2013. El reo conocerá la duración de su pena en una audiencia posterior y contará con treinta días para recurrir.

El asesinato, la violación, el reclutamiento de niños soldados, la esclavitud sexual o el saqueo son algunas de las prácticas que el acusado llevó a cabo en la región de Ituri, al noreste de Congo. Sorprendentemente,

todas estas acciones se corresponden con un breve lapso de tiempo en la trayectoria bélica de este individuo, de 46 años. Los hechos fueron llevados a cabo entre 2002 y 2003, y entre los más graves se encuentran masacres como la del campo de bananos de Kobou, en la que perecieron hombres, mujeres y niños.



La condena de Ntaganda sucede a las de Thomas Lubanga y Germain Katanga, otros dos señores de la guerra también implicados en un conflicto regional incentivado por la ancestral rivalidad entre dos comunidades locales, los hema y los lendu. Diversos caudillos se valieron de su ascendiente para organizar milicias étnicas que se disputaron el control de las minas de oro y diamantes. La vertiente militar tan sólo fue una cortina de humo para hacerse con las explotaciones y el tráfico ilícito de los recursos naturales.

La peripecia de 'Terminator' resulta más compleja que la de sus predecesores en el tribunal holandés. El prisionero se unió al Frente Patriótico Ruandés, la guerrilla que, desde Uganda, hostigaba al régimen hutu, y tras la victoria de los suyos, inició una trayectoria mercenaria que incluyó su participación en la Unión de Patriotas Congoleños, una de las facciones implicadas en el saqueo de Ituri.

Su incursión en la zona septentrional le reportó grandes beneficios, ya que los informes periciales le adjudican el control de tres minas. Además, los acuerdos

de paz en la zona le proporcionaron el cargo de general, que rechazó. En 2006 regresó a Kivu Norte, su provincia natal y se sumó a la fuerzas de Laurent Nkunda, un caudillo tutsi que se enfrentó al Gobierno central de Kinshasha. Como en el caso anterior, los tratados de paz supusieron la integración de la guerrilla en el Ejército y la conversión de los caudillos en oficiales de rango superior. En 2012, abandonó su cargo y encabezó una rebelión protagonizada por 300 anti-guerrilleros.

La caída en desgracia de Ntaganda no parece ajena a las complejas relaciones entre Congo y Ruanda, árbitro en la vida política de los Grandes Lagos. 'Terminator' vivía en una hacienda cercana a Goma, muy cerca de la frontera, y el presidente, Joseph Kabila, reclamó su arresto. Como en el caso de Nkunda, cruzó la aduana, pero, en vez de entregarse a las fuerzas de seguridad locales, se dirigió a la Embajada estadounidense en Kigali y pidió ser entregado al Tribunal Penal Internacional.

La condena de 'Terminator' ha sido motivo de júbilo en Ituri, donde es bien conocida su trayectoria criminal. A lo largo del juicio, han sido mostrados los testimonios de 2.200 víctimas que poseen el derecho a una indemnización por los daños ocasionados. Desgraciadamente, los juicios de sus predecesores se saldaron sin que se haya producido ningún tipo de reparación económica.

VENEZUELA

AI CULPA A MADURO POR LA EJECUCIÓN SELECTIVA DE MANIFESTANTES EN VENEZUELA

Amnistía Internacional (AI) responsabilizó el miércoles 20 de febrero al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las ejecuciones selectivas de manifestantes que, según la organización, se registraron en enero durante las protestas antigubernamentales.

La directora para las Américas de AI, Érika Guevara Rosas, presentó el miércoles 20 de febrero en Caracas los resultados de una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela,



durante la que se obtuvieron testimonios sobre detenciones arbitrarias, abusos policiales y acciones extrajudiciales, entre otras irregularidades. El informe concluye que las fuerzas de seguridad venezolanas "bajo la línea de mando de Nicolás Maduro ejecutaron a personas, usaron fuerza excesiva y detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, incluidos adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana".

Entre el 21 y el 25 de enero, cuando comenzaron las protestas callejeras que denuncian a Maduro como mandatario ilegítimo, al menos 41 personas fallecieron, "todas por herida de arma de fuego", y más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, detalló Guevara.

"Autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas", subraya el informe. Amnistía Internacional acusa a la fuerza pública de haber manipulado las escenas de crimen para presentar a las víctimas como delincuentes. Señala también que al menos 137 menores fueron detenidos durante el mes de enero en el contexto de las protes-



tas y "las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de 'guarimberos' (manifestantes violentos) y 'terroristas', los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte". Por ello anterior, Guevara pidió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la "impunidad total" que prevalece en el país petrolero.

Advirtió además, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos, y de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.

UNOS 5.000 VENEZOLANOS ABANDONAN CADA DÍA SU PAÍS

El informe sobre migración fue presentado en la asamblea de la OEA, y exigió al Gobierno de Maduro la convocatoria de elecciones.

La restauración pacífica del sistema democrático, elecciones libres y transparentes, y el reconocimiento de su compromiso con el pueblo de Venezuela con su libertad, los derechos humanos y con «los refugiados que huyen de la dictadura usurpadora» fueron los acuerdos más importantes aprobados en la 49ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Medellín el pasado mes de junio. La organización también convino dar un ultimátum al Gobierno de Nicaragua para que en el plazo de 75 días libere pre-



tos políticos y permita el retorno al país de organizaciones internacionales de derechos humanos.

Las dos resoluciones obtuvieron el voto a favor de veinte naciones de las 35 que integran la Organización de Estados Americanos. En las medidas adoptadas para intentar resolver la grave situación por la que atraviesa Venezuela ocho países votaron en contra, seis se abstuvieron y uno -Uruguay- había abandonado la Asamblea al estar en contra de la asistencia del representante enviado por Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. Varios países del Caribe y México, Nicaragua y Bolivia mostraron su contrariedad porque la organización estuviera reconociendo a un opositor a Nicolás Maduro.

Pese a que el comunicado final de la asamblea habla de una reunión exitosa, lo cierto es que en la misma se produjeron discusiones tensas sobre Venezuela, que acabó siendo el tema en el que se concentraron la mayoría de discusiones. Alarmante, sin embargo, resultó el informe sobre la migración que experimenta el pueblo venezolano y que afecta principalmente a los países fronterizos de Colombia, Perú, Chile y Ecuador. «Si no se llega a una solución política, económica y social la cifra de migrantes podría duplicarse en el 2020», reza el documento aportado por David Smolansky, coordinador del grupo de trabajo de la OEA y opositor al régimen de Maduro.

Según el experto independiente Danny Bahar, unas 5.000 personas huyen a diario de Venezuela, con lo que se calcula que desde el 2014 han salido del país 4 millones de personas, que podrían llegar a los 8 millones el próximo año, sin que esté padeciendo un conflicto bélico o una tragedia natural. Solo Siria, que lleva ocho años sumergida en una guerra, supera estas cifras. Basados en estos datos, el Gobierno



colombiano, que ha recibido a más 1,3 millones de venezolanos, solicitó a la OEA mayor cooperación económica. La asamblea fue más dura con el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, al que la OEA ha pedido que en 75 días libere los presos políticos y restablezca las libertades básicas de los nicaragüenses. En este país la OEA tiene datos de que han sido asesinadas 326 personas, mientras que el gobierno local habla de 200. En este sentido, el ex diputado y jefe de la delegación de Venezuela en la Asamblea General comparó la situación de Nicaragua con la de su país, y recriminó las palabras de la representante nica que calificó de injerencia de la OEA en su territorio. La Asamblea, eso sí, pasó en silencio sobre los asesinatos de líderes sociales que vive Colombia

EL RÉGIMEN DE MADURO ASESINA A UN MILITAR CONTRARIO A ÉL

El capitán, que fue detenido por supuesta vinculación con un plan para eliminar al líder chavista, falleció en un hospital con claros indicios de haber sido torturado

Ami esposo me lo mataron. Lo torturaron y se les fue la mano».

Quien pronuncia estas palabras es Waleska Pérez, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el viernes 21 de junio por estar supuestamente implicado en un plan para eliminar a Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello, y que falleció al día siguiente en un hospital tras presentar claros indicios de haber sido torturado. Waleska denunció el presunto asesinato de su esposo en una entrevista a través de la cuenta de Instagram de la periodista Carla Angola.

Todas las acusaciones sobre la muerte del joven capitán del Ejército venezolano, que deja dos hijos pequeños, recaen sobre la Dirección General de la Contrainteligencia Militar (Dgcm) del Gobierno de Maduro. Desde el líder opositor al régimen chavista, Juan Guaidó, que calificó la muerte de «abominable» y culpó directamente de la misma al presidente del Gobierno oficial de Venezuela. También el abogado de la víctima, Alonso Madina Roa; la activista de Derechos Humanos, Tamara Sujú; y la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunciaron el



fallecimiento de Rafael Acosta después de ser torturado por la Dgcm. Según la denuncia del abogado, Acosta Arévalo reapareció después de su detención ante un tribunal en silla de ruedas. No se podía poner de pie. No podía hablar y escuchaba mal. Solo asentía con la cabeza a las preguntas de la juez. La última vez que su esposa habló con

él fue el 21 de junio. Según explica Waleska Pérez, su marido se encontraba en una reunión personal, en Guatire (Miranda), donde fue detenido. Después ella denunció su desaparición al no tener ningún contacto. «Mi esposo estuvo veinte años como militar, siempre fue fiel a la Constitución, lamentablemente no estaba de acuerdo con lo que está pasando en el país, como muchos venezolanos. Pero él murió como un héroe. Él no fue ningún terrorista, ni narcotraficante. Él estaba por la unión y la libertad de Venezuela», manifestó Waleska Pérez, que reveló que en el Ejército de Maduro hay divisiones, pero que también hay miedo y temor a las represalias.

Delsa Solórzano, que preside la Comisión Especial de Justicia y Paz, envió un documento a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, en el que le pide que aplique el protocolo de Minnesota, que consiste en que en la investigación de este presunto asesinato no intervengan funcionarios del Estado. En este sentido, la primera reacción de Maduro fue la de encargar la investigación al fiscal general, Tarek William Saab.

Guaidó aprovechó para volver a enviar un mensaje a las Fuerzas Armadas para que defiendan la Constitución y se unan al pueblo que sufre las represalias del régimen. Más fuerte fue el mensaje de María Corina Machado, líder de Vente Venezuela: «¡Criminales! Asesinan a punta de torturas a un joven oficial por cumplir su deber patrio!». Y se dirigió a Bachelet: «Mientras usted se reunía con el criminal Maduro, el régimen secuestraba a militares y miembros de sus familias. Los están torturando hasta la muerte. ¿Cuántos muertos más hacen falta?».



LA ONU ATRIBUYE A MADURO ¡7.000 ASESINATOS!

El informe de Bachelet fuerza al Gobierno venezolano a poner en libertad a 22 presos, entre ellos una juez y un periodista.

Una parte de Venezuela celebró el viernes 5 de julio doblemente el día de su independencia. Salió a la calle como había pedido Juan Guaidó, pero con más ganas que en otras ocasiones porque había que festejar principalmente que, por fin, un organismo internacional de la talla de la ONU había dejado escrito lo que muchos sabían y denunciaban sin ningún efecto: el Gobierno de Nicolás Maduro erosiona el Estado de Derecho, amenaza, reprime, secuestra, tortura y mata. Unas 7.000 personas han sido asesinadas en año y medio, según Michelle Bachelet.

El documento, presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, obligó al régimen chavista a liberar a emblemáticos presos políticos como la jueza María Lourdes Afiuni, al periodista Braulio Jatar y una veintena de estudiantes.

Para la otra parte de Venezuela, que lidera Maduro, el informe de Bachelet supuso un duro mazazo. El Gobierno oficial está acusado de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, mantener al país en una grave crisis económica, de violaciones del derecho a la salud, de atentar contra la libertad de expresión y de perseguir a los líderes opositores. El presidente reclamó 70 correcciones al texto que considera «distorsionado» y «parcial», al tiempo que culpa al Ejecutivo de EE UU de su crisis.



Muchos analistas, críticos con la pasividad de Guaidó, dudaban de que la nueva llamada a la movilización tuviera éxito. Sin embargo, el documento de Bachelet y sus datos demoledores sobre el régimen de Maduro invitó a que el pueblo saliera a la calle y convirtiera su protesta en una manifestación contra la tortura. Después de su discurso en la avenida Francisco de Miranda, Guaidó encabezó una marcha hacia la sede de la Dirección General del Centro de Inteligencia Militar (Dgcim), máximo responsable de las torturas y la represión. Antes, el presidente reconocido por 50 países advirtió de que seguramente se encontrarían con algún piquete pero que no era día de confrontación. «Vamos a decirles que militares cubanos matan a sus hermanos de armas».

El escalofriante documento de Bachelet habla de una cifra de 7.000 asesinatos en el último año y medio, cometidos por las fuerzas de seguridad del Gobierno de Maduro. Entre enero y mayo de 2019 se han producido 1.569 asesinatos, según estadísticas del propio Gobierno. Bachelet exige disolver los llamados 'colectivos' y especialmente las FAES (Fuerzas Especiales) a las que achaca la muerte de 5.287 personas en ejecuciones extrajudiciales, todas porque supuestamente presentaron «resistencia a la autoridad». Entre enero y julio han sido detenidas 2.091 personas por motivos políticos y 66 han fallecido en manifestaciones.

«Criminalizar a opositores»

Bachelet habla de una estructura violadora de los derechos humanos, donde el sistema judicial -fiscales, tribunales y jueces- colabora en el fomento de la



impunidad y el bloqueo de la justicia. «La oposición política, los/as activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de 'traidores' y 'agentes desestabilizadores'», reseña la Alta Comisionada.

Según el documento, en los últimos años el Gobierno aplica leyes y políticas que aceleran el desmantelamiento de instituciones democráticas, entre las que incluye la Asamblea Nacional. «Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y críticas al Gobierno. Esta tendencia ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños». Dentro de la grave crisis económica que atraviesa Venezuela, Bachelet resalta que el salario y los subsidios apenas



cubren cuatro días del mes.

En su discurso de presentación del documento, después de la visita realizada entre el 19 y 21 de junio pasados, Bachelet dijo: «El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política».

Maduro, mientras tanto, celebraba los 208 años de la independencia y el día de las fuerzas armadas en el Paseo Monumental de los Próceres, donde lanzaba un discurso de ánimo a los militares y civiles asistentes: «Preparémonos para las batallas que estamos dando. No tengamos ni un segundo de descanso. Estamos del lado correcto de la historia, de los verdaderos venezolanos». Al discurso siguió un desfile militar.

OSCENO DESPILFARRO EN UNA BODA DEL CHAVISMO

La hija del 'número dos' de Maduro, Diosdado Cabello, se casa con un reguetonero en una fiesta de 14 millones y dos días en el idílico archipiélago venezolano de Los Roques.



Acedo en una macroboda que ha costado la friolera de 16 millones de dólares. Al cambio, algo más de 14,1 millones de euros, una fortuna especialmente desorbitada en una nación que tiene fijado su salario mínimo en 18.000 bolívares, el equivalente a 18,43 euros. Es así desde que, el pasado mes de enero, el sucesor de Chávez decidió incrementar esa remuneración en un 300%.

El dispendio perpetrado por el 'número dos' de la Cancillería de la República Bolivariana fue denuncia-

do por el escritor y general retirado Carlos Peñázola a través de su cuenta personal de Twitter. El ahora escritor, analista y conferenciante, residente en Miami, ofrece algunos otros detalles del enlace. Como que el aeropuerto de Los Roques estaba repleto de aviones privados y helicópteros. Se refiere al paradisíaco archipiélago venezolano, y parque nacional a la vez,

do por el escritor y general retirado Carlos Peñázola a través de su cuenta personal de Twitter. El ahora escritor, analista y conferenciante, residente en Miami, ofrece algunos otros detalles del enlace. Como que el aeropuerto de Los Roques estaba repleto de aviones privados y helicópteros. Se refiere al paradisíaco archipiélago venezolano, y parque nacional a la vez,

situado en el mar Caribe, a unos 160 kilómetros de Caracas. Para la ceremonia de sus esponsales y la posterior celebración, la pareja se fijó en este idílico paraje protegido, compuesto por más de 300 islas y cayos alrededor de una laguna de 400 kilómetros cuadrados donde se funde toda la paleta de azules. Su arrecife de coral es enormemente popular entre



los amantes del buceo y sus aislados arenales blancos, entre los amantes de las playas de postal.

La hija del hombre fuerte de Maduro y el reguetonero citaron allí a las más altas esferas de la sociedad venezolana -todos ellos, eso sí, afines a la llamada revolución bolivariana- durante dos intensas jornadas de banquetes, música y sol. Aunque Peñazola no informa de la fecha en que se ofició el enlace, sí revela la identidad de alguno de los invitados. Menciona, en concreto, la de Rosinés Chávez, la hija menor del ex dirigente venezolano Hugo Chávez, quien se desplazó para la ocasión junto a su novio cubano desde París, donde tiene fijada su residencia en la actualidad.

La convidada de campanillas podría haber sobrevolado el Golfo de México en paralelo con Angelina Jolie. Y es que la actriz estadounidense acaba de viajar a Venezuela en calidad de embajadora de buena voluntad de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) Angelina Jolie para visitar la región fronteriza con Colombia. El propósito de su desplaza-

miento tenía por objeto «evaluar la respuesta humanitaria al éxodo». Más de cuatro millones de venezolanos han huido de sus casas y de su país desde 2015, incluido el millón que se ha autoexiliado desde el pasado mes de noviembre, según los datos de Naciones Unidas. «El ritmo de la

salida de Venezuela ha sido asombroso», valoran con preocupación desde ACNUR y desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Ambas organizaciones calculan que 695.000 personas ya habían salido del país a finales de 2015. A partir del 1 de enero de 2016 el ritmo se aceleró y, desde entonces, no ha decaído. Los países latinoamericanos se están ocupando de acoger a los protagonistas de este penoso éxodo. Colombia va en cabeza, al recibir a casi 1,3 millones. Le sigue Perú, con 768.000; Chile, con 288.000; Ecuador, con 263.000; Brasil, con 168.000 y Argentina, con 130.000.

Inmune a la sangría de su país, la bella Daniela proclama que «nosotros los chavistas maduristas somos alegría; la oposición venezolana son unos amargados, esa es la gran diferencia. Juntos somos indestructibles. Maduro viva el Amor». Lo hace en su retuit de su cuenta oficial, donde se presenta con una frase de El Che: «Hay que endurecerse sin perder jamás la ternura...»

“LAS SANCIONES DE EEUU VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA”

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet considera el bloqueo “extremadamente amplio”.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, censuró



el jueves 8 de agosto las medidas anunciadas por EEUU contra Nicolás Maduro, que en su opinión podrían tener “un impacto potencialmente severo en los derechos humanos” de los venezolanos.

“Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para miti-

gar el impacto en los sectores de la población más vulnerables”, indicó en un comunicado la responsable de derechos humanos, que expresó al temor a que estas medidas afecten al acceso de venezolanos a la sanidad o los alimentos.

La expresidenta chilena también afirmó que anteriores sanciones impuestas por Estados Unidos en agosto de 2017 y enero de 2019 “han exacerbado los efectos de la grave crisis y por extensión de la situación humanitaria”, al afectar entre otros sectores a la exportación de petróleo al mercado norteamericano, durante años una importante fuente de divisas para Venezuela.

Las nuevas medidas, añadió, podrían causar que compañías e instituciones financieras opten por detener toda transacción relacionada con el Gobierno de Venezuela, por miedo a ser penalizadas por EEUU. “Las sanciones unilaterales con efectos amplios pueden terminar afectando negativamente los derechos fundamentales de las personas, incluyendo sus derechos económicos, así como sus derechos a la alimentación y salud, y pueden implicar obstáculos para el acceso a la asistencia humanitaria”, opinó Bachelet. EEUU impuso el lunes 5 de agosto más sanciones económicas a Venezuela, que implican el bloqueo de todos los bienes del Gobierno venezolano en territorio estadounidense. Esta decisión motivó también las protestas de la Unión Europea (UE), que mostró su oposición a la aplicación extraterritorial de este tipo de medidas restrictivas

Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, insistió en denunciar la retención en Panamá de una embarcación cargada de alimentos que se dirige hacia su país y que, aseguró, no ha podi-



do continuar su ruta debido al bloqueo económico impuesto por EEUU. “El barco con las tortas de soja para producción de alimentos en Venezuela sigue en el Canal de Panamá sin autorización de la empresa aseguradora para trasladar la carga a nuestro país”, indicó la funcionaria chavista en Twitter.

También exigió, en la misma red social, “el cese inmediato del bloqueo” decretado por el presidente Trump, que congela los bienes estatales venezolanos en suelo estadounidense. “Liberen los alimentos para el pueblo”, agregó Rodríguez.

Esta denuncia fue replicada por los más altos dirigentes de la llamada revolución bolivariana incluso después de que las autoridades panameñas negaran la retención de ninguna embarcación con destino a Venezuela. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) negó que ningún barco cargado de soja con destino a Venezuela se encontraba retenido en la vía interoceánica.

“El Canal de Panamá informa que todos los tránsitos programados se realizan con absoluta normalidad y sin contratiempos. Ningún buque se encuentra retenido como ha circulado en redes sociales durante el día de hoy”, dijo la ACP en un escueto mensaje en Twitter.

Más tarde, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que prohibió que zarpara un pesquero de bandera venezolana debido a que la nave incumple normas internacionales de seguridad.

Se trata de la nave de pesca de nombre Aleta azul, número OMI 8030245 de nacionalidad venezolana, que “fue objeto de una detención (impedimento para zarpar) producto de una inspección realizada por el esquema del Estado Rector de Puerto, atendiendo al cumplimiento bajo el Memorandum de Entendimiento de Viña del Mar”.



LA REVOLUCIÓN PERDIDA DE NICARAGUA

Daniel Ortega se aferra al poder instalado en una represión salvaje cuando se cumple un año de las protestas para desalojarlo del Gobierno.

Hay días que parecen años y años que parecen días. Con esa cita de 'Del tiempo y el destiempo' resume Douglas Castro el año que cambió para siempre su vida y la de toda una generación de nicaragüenses. El 17 de abril de 2018 salieron a las calles a defender las pensiones de sus mayores, sin imaginar que cuando despertasen el dinosaurio seguiría allí. Para el 20 de abril se contaban ya 25 muertos. Al final del verano, entre 300 y 500.

El alzamiento de 2018 en Nicaragua no fue armado, sino espontáneo y desigual. La generación de este joven profesor de la Universidad Centro-americana (UCA) que hoy vaga como alma en pena entre Costa Rica y EE UU decidió en esos días de represión romper con la historia sangrienta del país y enfrentarse a los paramilitares de Daniel Ortega con la fuerza de sus convicciones y la creatividad del 'nica'.

Desde las azoteas los francotiradores disparaban arbitrariamente contra los manifestantes, que huían a refugiarse en colegios, iglesias y catedrales. Los curas recogían los cadáveres



Familiares de manifestantes detenidos durante las protestas contra Ortega exigen su puesta en libertad en Managua.



que quedaban tirados en las calles y eran zarandeados por las turbas sandinistas. Los chicos construían trincheras para evitar la entrada de los paramilitares en sus barrios o universidades, como las que les oyeron contar a sus mayores de la lucha contra Somoza.

El eurodiputado español Javier Nart reconoce que la fotografía de Nicaragua hoy es «horrorosa y extraordinariamente parecida a la del somocismo, fundamentada en la represión». Y lo sabe bien porque él mismo

luchó contra Somoza desde las trincheras. Nunca pensó que hoy tendría que defender a los jóvenes de un comandante sandinista convertido en tirano. A pesar de la sangre, o precisamente por la indignación de la sangre derramada, durante unos meses creyeron que lograrían que el régimen de Ortega cediese el poder y adelantase elecciones para restablecer la normalidad. «Entre abril y julio trabajábamos pero no bajábamos, estudiábamos pero no estudiábamos», recuerda Castro. «Pasamos de ser estudiantes a ser el rostro de la oposición y a estar en contacto con la parte más desgarradora de lo que estaba ocurriendo».

Esos, ahora lo saben, eran los buenos tiempos. En los que prevalecía el optimismo y se oía el miedo del dictador, al que se veía replegarse a su mansión presidencial de El Carmen, convertida en jaula de oro, junto



a su mujer, nombrada vicepresidenta. «Las calles son del pueblo», gritaban los jóvenes en las manifestaciones. Sin la ayuda del Ejército, como tiene Maduro en Venezuela, Ortega aprovechó la pausa de un diálogo ficticio para reclutar a paramilitares y organizar la ofensiva que acabó con lujo de fuerza bruta el 19 de julio, tras limpiar las calles con bulldozers, ametralladoras y lanzacohetes. A partir de ahí, el silencio de la represión que intentó imponer la normalidad a la fuerza. Los paramilitares y la Policía, que actúan con impunidad y sin órdenes judiciales, buscaron a los revoltosos casa por casa. Decenas de miles salieron huyendo campo a través con lo puesto. Según el último informe de la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), 55.000 se refugiaron en la vecina Costa Rica, aunque la organización reconoce que deben de ser muchos más, dado que no salen por puestos fronterizos sino por puntos ciegos de la frontera para evadir la implacable persecución.

Nicaragua sólo tiene 6 millones de habitantes. Más de medio millón se quedó sin trabajo. En la purga el Gobierno despidió hasta a los médicos que curaron a los heridos. Amplió las licencias de bares y restaurantes pero los turistas no volvieron. La economía se contrajo un 4% en 2018 y para este año se prevé una caída de entre el 7% y el 11%. Cuando Ortega vio que Maduro se tambaleaba en el poder, acosado por el Gobierno de Trump, decidió aceptar la oferta de la UE para un diálogo que, una vez más, utiliza para ganar tiempo.

«Estamos asistiendo a una ceremonia de la simulación», reconoce Ramón Jáuregui, que lideró la delega-



ción de eurodiputados que visitó el país a finales de enero. Entre las muchas «comunicaciones propagandísticas» con las que el Gobierno de Ortega ha intentado evitar las sanciones, la última ilustra el cinismo del régimen. «Recibimos un comunicado absolutamente pomposo de que liberaban a 636 presos y nos hacían creer que ya no quedaba ningún preso político en las cárceles, y ahora resulta que eran presos comunes que liberan siempre en Semana Santa».

Esa burla le costó a Ortega el que la delegación pidiera a la vicepresidenta de la UE Federica Mogherini que pasara de las palabras a la acción e impusiera sanciones a Nicaragua «en este momento altamente simbólico en el que se cumple un año del comienzo de la crisis», decía la carta, a la que en persona Jáuregui añadió con pasión. «Se nos ha agotado la paciencia. Hay un pueblo que está sufriendo enormemente por una represión de una crueldad inaudita en nuestros tiempos. Los presos son periodistas, estudiantes, dueños de medios de comunicación...».

Tras visitarlos en prisión, el eurodiputado portugués José Inacio Faria contó escandalizado que los presos políticos «viven en condiciones peores que las que tienen los cerdos en mi país», recordó en conferencia de prensa. Se despidió con un llamada que rompe el corazón de Douglas y cuantos nicaragüenses añoran su tierra. «Por favor, no regresen, pondrán en peligro sus vidas. No se fíen del señor Ortega. Es un dictador sanguinario, peor que lo que ocurre en los otros sistemas de América Latina». Según el informe de Acnur, 55.000 nicaragüenses se refugiaron en Costa Rica, aunque la organización cree que deben de ser más



COLOMBIA

21 MUERTOS EN UN ATAQUE EN COLOMBIA CONTRA UNA ACADEMIA DE POLICÍA

Elevan a 21 el número de muertos en el ataque con coche bomba contra una escuela de policías, el peor sufrido en la capital colombiana desde 2003.

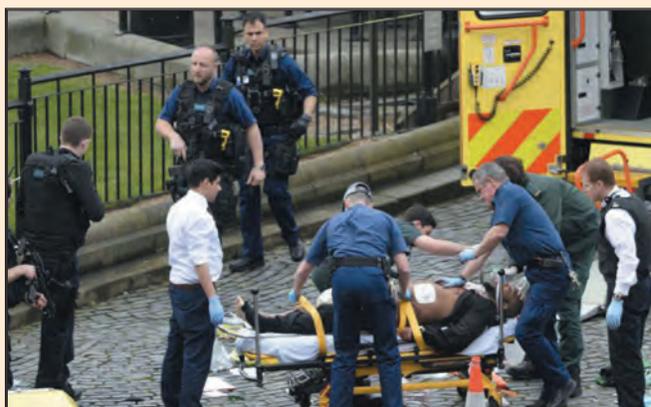
El Gobierno de Colombia atribuyó el viernes 18 de enero a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la autoría del atentado terrorista con coche bomba contra una escuela de formación de la policía en Bogotá que el día anterior mató a 21 personas, incluido el atacante, y dejó 68 heridos. Las víctimas mortales «eran cadetes de la policía, con unas edades de entre 17 y tal vez 22 años», dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Las autoridades confirmaron la vinculación con el ELN del conductor del vehículo, identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez. Además, detuvieron en Bogotá a un hombre, Ricardo Andrés Carvajal, a quien interceptaron una conversación telefónica en la que reconocía su implicación en el ataque. El presidente Iván Duque decretó tres días de luto y apeló a la unidad nacional. «Al terrorismo irracional se le derrota con la respuesta de todos los colombianos, sin distinción alguno», dijo en un mensaje televisado el jueves 17 de enero por la noche. Duque ordenó reforzar los controles en las fronteras y en los accesos de las ciudades tras el



que ya es considerado el peor atentado en la capital colombiana desde el coche bomba detonado por la disuelta guerrilla FARC en el exclusivo club social El Nogal, que dejó 36 muertos y decenas de heridos en febrero de 2003.

El atentado fue perpetrado con un coche bomba cargado con 80 kilos de explosivo. Según los datos de la investigación, Rojas Rodríguez, de 56 años y nacionalidad colombiana, accedió «de manera violenta» a la escuela General Francisco de Paula Santander a bordo de una camioneta Nissan Patrol gris. El guerrillero intentó esquivar un control dentro de las instalaciones y finalmente el vehículo explotó tras chocar contra los dormitorios de mujeres. «No existe ningún elemento que nos permita concluir que esta persona se suicidó», aseguró Botero. Según el ministro, aunque «son muchas las hipótesis que se están barajando», el plan original podía consistir en activar los explosivos mediante «dispositivo electrónico».

El ministro confirmó que Rojas Rodríguez pertenecía desde hace más de 25 años al ELN, donde era conocido con el alias de 'Mocho Kiko' porque entre 2008 y 2010 perdió su mano derecha al manipular explosivos. «Desde 1994 se desempeñó como miliciano del ELN en Puerto Nuevo, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela», y en la actualidad era jefe



de inteligencia dentro del «frente Domingo Laín Sáenz» que opera en Arauca. Botero aseguró también que 'Mocho Kiko' estuvo en Venezuela en 2011 «enseñando el manejo de explosivos a rebeldes refugiados» en ese país, aunque precisó «con total y absoluta claridad» que no hay indicios de participación en el atentado de funcionarios de esa nación.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, adelantó que imputará «responsabilidades a título de determinadores a los miembros del COCE (Comando Central) del ELN».

El Gobierno y el ELN iniciaron en febrero de 2017 un diálogo que actualmente estaba suspendido. El alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, reiteró la postura del presidente Duque de que no habrá negociaciones con ese grupo mientras persista en su actividad criminal. Según insistió el funcio-



nario, «es importante en este momento que el país entienda que el ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz».

EL ACUERDO DE PAZ DE COLOMBIA EN PELIGRO

Los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC ponen en peligro el acuerdo de paz en el país latinoamericano.

La imagen es propia de una película de terror. Un niño lanza un grito desgarrador, punzante, que penetra en la mente y llena el corazón de dolor. El niño golpea puertas, pateaba basura que hay en el suelo, y sigue gritando, nadie lo abraza, nadie se acerca a él, pero hay alguien grabando desde su celular y el vídeo recoge a otras personas cercanas que permanecen quietas, impávidas como si no pasara absolutamente nada, como si no escucharan el alarido del niño. En el suelo hay una mujer tendida, es su madre. Está muerta. La acaban de matar. A los asesinos no les importó que el pequeño viera como le quitaban la vida, como lo privaban de su mamá.

Es el realismo no mágico de Colombia. Sucedió el viernes 21 de junio en Tierralta (Córdoba), uno de los departamentos en los que se ha instalado la violencia y la muerte desde hace muchos años. Quien habita en esas tierras calientes sabe que la muerte es su sombra. Por esos lares concurren guerrilla, paramilitares y narcotraficantes. Un trío venenoso y mortal. No son malos. Son peores. Amenazan y matan.



La fallecida es María del Pilar Hurtado. Tenía 34 años y deja cuatro hijos; uno de 5 años, mellizos de 12 y uno de 14. La investigación sobre su muerte está abierta y el Gobierno puso a sus verdugos: 20 millones de pesos colombianos (unos 5.500 euros). Eso vale una vida en Colombia.

Un miembro de la Fundación Defensora de derechos humanos llamada Cordoberxia sostiene que María del Pilar era una líder social, que llegó al sitio donde perdió la vida hace un año con su marido y sus hijos después de ser amenazada en su Cauca natal. La zona cordobesa está plagada de los llamados desplazados (exguerrilleros perseguidos por paramilitares) y en el último año han llegado emigrantes venezolanos. Buscan un terreno donde aco-

modarse y construir su casita, y ganarse la vida en paz.

En la zona hay muchos terrenos vacíos que son invadidos. Ella y su familia tomaron un trozo de terreno como invasores, negociaron con el alcalde, abandonaron voluntariamente tras un acuerdo que no se cumplió y volvieron a invadir. Pronto María del Pilar recibió un panfleto en el que un grupo, que se esconde bajo las siglas AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), la amenazaba de muerte. Algunas fuentes aseguran que este grupo pertenece a una estructura armada ilegal que controla la zona después del proceso de paz y que ocupó los espacios abandonados por tres frentes de las FARC.

El alcalde de Tierralta, a cuyo hijo pertenecen los terrenos invadidos, niega que la asesinada fuera una líder comunitaria, el esposo de la víctima también dice que en el panfleto no figuraba su mujer. Iván Duque, presidente de Colombia al que el asesinato le cogió de visita por Londres, condenó «el atroz crimen» y solicitó a las autoridades acciones inmediatas «para dar con los responsables de este repudiable hecho».

El partido de las FARC responsabilizó al Gobierno del aumento de asesinatos de líderes sociales. El expresidente Álvaro Uribe, el más beligerante con el proceso de paz, escribió en su cuenta de Twitter:



«Lo que faltaba, estos asesinos acusando al Gobierno en el que se han disminuido estos crímenes, con Santos que fueron desbordados no decían nada», e invitó a la exguerrilla a aclarar «por qué la mayoría de asesinatos de líderes sociales se dan en zonas cocaleras».

Gustavo Petro, líder de la oposición, convocó a la ciudadanía a una movilización general para el 7 de agosto, justo cuando se cumpliría un año de la posesión del presidente Duque, para protestar «ante el homicidio de líderes sociales, ante el Gobierno de las águilas negras, ante la brutalidad de quienes quieren hacer trizas la paz».

DEMASIADAS MUERTES DE COLOMBIA

Desde que las Farc entregaron las armas, un centenar de sus exmilitantes han sido asesinados. El presidente del país y su bando político deben proteger a quienes abandonaron la lucha armada y siguen comprometidos con la paz.

Alexander Parra, un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), se convirtió en gestor de paz cuando ese grupo dejó los fusiles para involucrarse en la vida política. La noche del 24 de octubre, a las afueras de Mesetas, un pueblo ubicado en los Llanos Orientales de este país, Parra jugaba ajedrez cuando varios hombres encapuchados interrumpieron la partida a balazos. Durante muchos años sobrevivió a la guerra, para morir tiroteado en supuestos tiempos pacíficos.



Su muerte confirma que Colombia aún no supera el conflicto y revela el enorme riesgo que corre la construcción de la paz.

Hay algo de ironía en el asesinato de Parra. Fue ahí mismo, en Mesetas, en junio de 2017, donde las Farc entregaron sus armas. Pero ahora, en el territorio donde la convivencia fue formulada como una promesa para el futuro, la violencia nos recuerda una vez más cuán lejana es su conquista.

El escenario para Colombia es amargo. Después de varios intentos fallidos, por fin el país logró desarmar a la guerrilla más antigua del hemisferio y desactivó en gran medida una guerra prolongada que produjo 218.094 muertos y millones de desplazados entre 1958 y 2012. El saldo de esta época, además de

un duelo nacional, es una fractura y una desigualdad que todavía mantiene escindidos al país rural y al urbano. En muchos pueblos de esta geografía intrincada millones de colombianos sobreviven como ciudadanos de segunda clase. Para ellos urge la atención del presidente Iván Duque y de su gobierno. Pero también de la oposición política y de la sociedad.

No es la primera vez que Colombia consigue una paz momentánea antes de volver a la guerra. Después de una pacificación acordada con el gobierno de Belisario Betancur en los años ochenta, las Farc fundaron un partido político, la Unión Patriótica. Pero una ola de asesinatos atribuidos a paramilitares y agentes del Estado dejó más de 4000 víctimas entre las filas de esa organización. En 2006, tras la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, se desarmaron 30.688 combatientes; y al menos 2202 fueron asesinados.

Estos precedentes estimulan la incertidumbre en torno al escenario actual. Entre los 13.202 desmovili-



zados de las antiguas Farc, Naciones Unidas ha verificado 158 muertes violentas desde 2016, cuando la guerrilla y el gobierno firmaron la paz. Estamos ante la posibilidad de un desenlace cruento que no puede permitirse de nuevo este país.

Una falsa pacificación impuesta a fuego puede germinar la semilla de una nueva guerra.

Esta cacería ha puesto a los exguerrilleros frente a un nuevo dilema. O retoman las armas y se unen a los grupos disidentes, financiados por el narcotráfico, que rechazaron la

paz y siguen reclutando a hombres y mujeres para mantener el control de distintos territorios; o continúan desarmados frente a múltiples amenazas y sin la protección del Estado.

El caso de Parra es paradigmático. Su homicidio es el primero que ocurre en uno de los espacios construidos para acoger a los excombatientes, los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación: campamentos con casas de yeso y zinc donde esperaban vivir seguros, custodiados por la policía y el ejército. Pero no ha sido así.

Y la labor de protección se hace más difícil porque la antigua tropa de las Farc vive ahora dispersa. Solo 3.038 excombatientes permanecen en los espacios donde fueron reunidos; mientras 9138 se han alejado hacia el campo. Uno de los mayores retos para el nuevo gobierno es protegerlos donde estén. Y no solo a ellos.

A los homicidios de excombatientes se suma una masacre mayor. Durante los últimos tres años han

asesinado en Colombia a 627 líderes sociales y activistas de derechos humanos. Solo en los últimos catorce meses, desde que Iván Duque asumió el gobierno, 120 indígenas corrieron la misma suerte. Duque y su partido, el Centro Democrático, se opusieron al Acuerdo de Paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos porque consideraron que el arreglo otorgaba a la antigua guerrilla una dosis intolerable de impunidad. Pero ahora que la implementación del acuerdo ha quedado en sus manos, deben hacer política en grande; pensar en su legado y en el futuro del país. El gobierno debe atender el sistema de alertas tempranas y dejar de actuar como un bombero negligente, que busca la manguera cuando solo quedan cenizas para apagar.

El Estado colombiano debe ir más allá de la reacción policial cada vez que matan a un exguerrillero (aunque es un rubro en donde también deben mejorar: menos de la mitad de los asesinatos han sido resueltos). Es preciso solventar las causas objetivas que los llevaron a las armas: una mezcla persistente de pobreza y desatención. Urge ofrecer a esos miles de hombres y mujeres oportunidades de estudio y trabajo que los saquen de la vulnerabilidad, la causa original de su participación en el conflicto armado. Se trata de crear



condiciones de independencia y desarrollo personal que ayuden a interrumpir nuestro prolongado ciclo de violencia.

En una entrevista reciente, Humberto de la Calle, exjefe negociador del Acuerdo de Paz, resumió la compleja base del problema colombiano: *“Tenemos más territorio que soberanía”*, dijo. Por eso el país debe fortalecer las instituciones locales en las zonas de conflicto - el 80% de los asesinatos ha ocurrido en solo cinco departamentos del país, donde la economía del narcotráfico aún domina: Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Arauca-, y ayudar a reconstruir las relaciones sociales que la guerra destruyó.

En las elecciones regionales del 27 de octubre, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, fundado por exguerrilleros después de la pacificación, participó por primera vez en política con decenas de candidatos a distintos cargos. Solo dos de ellos lograron ganar alcaldías, pero la victoria electoral no es aquí el logro más relevante. La verdadera conquista es la inclusión en la vida democrática colombiana de excombatientes que antes hacían la guerra. Este país, con sus diversos actores en pugna, necesita entender de una vez y para siempre que hay formas válidas de relacionarse sin el concurso de las balas.



DIMITE EL MINISTRO DE DEFENSA DE COLOMBIA POR OCULTAR LA MUERTE DE OCHO MENORES EN UN BOMBARDEO

Una moción de censura acaba con el ministro de Defensa que no dijo toda la verdad sobre la operación militar contra un guerrillero en la que perdieron la vida ocho niños.

La muerte de ocho menores de edad en un bombardeo al campamento donde se encontraba Giraldo Cucho, uno de los guerrilleros más buscados por el Ejército de Colombia, llevó a la dimisión del ministro de Defensa, Guillermo Botero, al que la oposición al Gobierno de Iván Duque planteó una



moción de censura por haber ocultado esta información.

Guillermo Botero, presentó su renuncia el miércoles 6 de noviembre al cargo tras desvelarse la víspera que ocultó al país un bombardeo militar contra disidentes de las FARC en el que murieron al menos ocho menores.

«El día de hoy en reunión con el señor presidente de la República para analizar la actual coyuntura política se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa nacional», señaló Botero en un comunicado oficial.

La renuncia de Botero se produjo un día después de que se le hiciera un debate en el Senado por una moción de censura presentada en su contra por los fallos de su política de seguridad y defensa.

Durante el debate parlamentario, el senador Roy Barreras, del partido de la U que fue sustento fundamental del expresidente Juan Manuel Santos, desveló que en un bombardeo a comienzos de septiembre contra un campamento de disidentes en el departamento del Caquetá, fallecieron siete menores de edad, entre ellos una niña de doce años.

La Fiscalía elevó a ocho la cifra de menores muertos en la operación, un dato que las autoridades no habían divulgado pese a que tras la operación informaron acerca del número de muertos.

«Más coca es menos paz, más coca es menos vida, más coca es menos bosque, más coca es menos juventud, más coca es menos trabajo, más coca es menos empresa, más coca es menos democracia», aseguraba en la carta que hizo pública y en la que no había ninguna referencia al polémico bombardeo.

LA MUERTE DE DILAN TRAE OTRA JORNADA DE PARO NACIONAL

Las protestas contra las políticas económicas y sociales del Gobierno de Colombia se acentúan.

El estudiante herido por la Policía, y convertido en el rostro de la represión, moría el lunes 25 de noviembre.

La muerte del estudiante colombiano Dilan Cruz, de 18 años, herido el sábado 23 de noviembre por la Policía durante una manifestación pacífica en Bogotá, conmocionó a su país que llevó a cabo numerosas movilizaciones y protestas contra el presidente Iván Duque.

Cruz falleció en el Hospital San Ignacio, en el barrio de Chapinero, donde había sido ingresado después de que una bomba aturdidora disparada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía lo hiriera de gravedad en la cabeza. Dilan Cruz se convirtió en la



primera víctima mortal de la violencia policial en Colombia desde que se iniciaron las protestas y se suma a otras tres personas que murieron en disturbios el jueves 21 de noviembre en las ciudades de Buenaventura y Candelaria, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste).

Después de conocerse la muerte de Dilan Cruz, decenas de ciudadanos llegaron a las inmediaciones del Hospital San Ignacio para rechazar la violencia policial y exigir justicia. Con una pancarta en la que se leía “Esmad asesino” y cacerolas en mano, bloquearon la Carrera Séptima tumbándose en el suelo y guardando un minuto de silencio como homenaje a la víctima.



Las redes sociales se incendiaron con mensajes de apoyo a su familia y en rechazo a los ataques del Esmad contra la protesta pacífica con tendencias como “Dilan”, “Lo mataron”, “Asesino”, “El 26-N el paro sigue”, “Desmonte del Esmad ya” y “Ni perdón ni olvido”. La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la

ONU para los Derechos Humanos pidió a la Fiscalía esclarecer las responsabilidades por la muerte del joven. “Pedimos que sean esclarecidas las responsabilidades por la muerte de Dilan Cruz por parte de la Fiscalía. No debe haber impunidad”, señaló la oficina en un mensaje publicado en sus redes sociales. La representación de esa dependencia en Colombia también

rechazó el “presunto uso excesivo de fuerza por parte del Esmad que arrebató prematuramente su vida”. También la Defensoría del Pueblo se sumó a las voces de condolencias y en su cuenta de Twitter lamentó “profundamente la muerte del joven. Por su memoria, que sea la última persona que muera en estas circunstancias”, declararon.

EL CAUCA, TIERRA MINADA PARA LOS LÍDERES SOCIALES EN COLOMBIA

El Cauca es el departamento donde más se ha recrudecido el conflicto tras la firma de la paz

El departamento colombiano del Cauca, donde a finales de octubre fueron asesinadas nueve personas en dos matanzas, es un campo minado para los defensores de derechos humanos. El Cauca, situado en el suroeste, entre la costa del Pacífico y la cordillera de los Andes, es quizás el departamento donde más se ha recrudecido el conflicto armado tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, que en noviembre cumplió tres años, y los defensores de derechos humanos han quedado en medio de las balas de los diferentes grupos que operan en la zona y que se disputan tierras para el narcotráfico. Esa realidad la constata el Informe Semestral Enero-



Junio 2019 del Programa Somos Defensores, según el cual 59 personas -10 de ellas en el Cauca- han sido asesinadas en el país en los primeros seis meses de este año por su defensa de los derechos humanos y por “las resistencias que adelantaban por sus comunidades y territorios”. El Programa Somos Defensores comenzó a contabilizar en enero de

2009 los ataques de todo tipo que sufren quienes luchan por los derechos humanos en el país y desde entonces ha registrado un total de 746 asesinatos en Colombia. De los 59 asesinados entre enero y junio pasado, 21 eran líderes comunitarios, 18 comunales, ocho campesinos, seis indígenas y tres afrocolombianos, mientras que los tres restantes eran del movimiento sindical, de la comunidad LGTBI y de las víctimas del conflicto armado.

Impunidad

Como suele suceder, en la mayoría de los casos, 49 en total, se desconoce el responsable de estos asesinatos. A los paramilitares y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) se les responsabiliza de cuatro a cada uno, seguidos de las disidencias de las FARC, con dos. Uno de los crímenes contabilizados en el documento es el de la líder comunitaria María del Pilar Hurtado, que conmovió al país el viernes 21 de junio. Ese día, presuntos paramilitares asesinaron en el departamento caribeño de Córdoba a Hurtado, de 34 años, madre de cuatro hijos y originaria del Cauca.

La volatilidad social y política de esta zona colombiana

se manifiesta también en el número de agresiones, que pone a ese departamento como el peor para los defensores de derechos humanos. Durante el primer semestre de este año, el Programa Somos Defensores registró un total de 591 agresiones, cifra que le permite concluir que “es el período con más agresiones registradas” desde su creación hace diez años.

“El departamento del Cauca es el territorio con mayor aumento en las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, pues pasó de registrar 73 casos en el primer semestre de 2018 a 115 casos en el mismo período del 2019. “Significa que continúa siendo el departamento más peligroso para el liderazgo social”, apunta la investigación de Somos Defensores.

MÉXICO

MÉXICO REGISTRA EL NIVEL MÁS ALTO DE VIOLENCIA EN 21 AÑOS CON 20.135 HOMICIDIOS EN 6 MESES

El mes de julio fue el más violento del país con 2.599 homicidios dolosos y entre enero y julio se han contabilizado 20.135 homicidios.

La violencia en México no se detiene. El pasado mes de julio se convirtió en el mes más violento en 21 años. En los 31 días del mes se registraron 2.599 homicidios dolosos, de acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

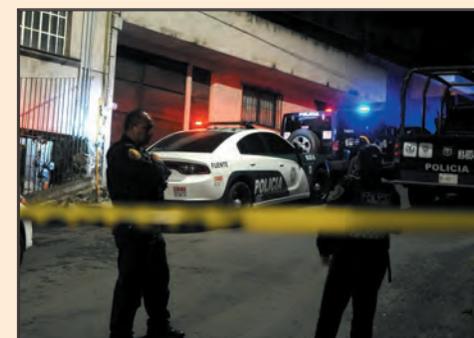
El mes de mayo había alcanzado el máximo nivel de violencia registrada con 2.535 asesinatos desde 1997, año en que el Gobierno mexicano inició el registro de homicidios dolosos. En ese año se contabilizaron 46 homicidios al día. Hasta ahora, el año más mortífero para México había sido 2011, en el plano enfrentamiento abierto entre las autoridades y los capos de la droga. De enero a julio de 2018 se han contado más de 16.000 asesinatos.

El Instituto Nacional de Estadística informó que cada día mueren asesinadas más de 85 personas. El 2017 fue el año más sangriento en la historia de México con 31.174 personas asesinadas, la gran mayoría por arma de fuego. La tasa de homicidios fue



de 25 por cada 100.000 habitantes por encima de Colombia y Nicaragua. La tendencia de homicidios no ha dejado de crecer desde inicios de 2015 y todo apunta a que en 2018 las cifras vayan a superar a las de este último año.

La estrategia de pacificación del país anunciada por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, espera reducir notablemente estos índices. “Perseguir el dinero del crimen organizado es más importante que detener capos porque es en la fortaleza económica donde ellos tienen capacidad de corromper y operar”, señaló Alfonso Durazo, quien tendrá a su cargo la secretaría de Seguridad Pública.



LA DETENCIÓN DE UN HIJO DE 'EL CHAPO' DESATA EL CAOS EN CULIACÁN

Las autoridades mexicanas se han visto obligadas a liberar al arrestado para frenar la violencia.

La detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán, que fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, desató el caos en la ciudad de Culiacán, en el noroeste del país, después de que se registraran fuertes detonaciones y ráfagas de armas de fuego. Durazo explicó que una patrulla de 30 miembros de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaban realizando labores de patrulla en Culiacán, que se encuentra en el estado de Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. Los agentes tomaron el control de la vivienda y detuvieron en su interior a cuatro personas, entre ellos al hijo del narcotraficante mexicano, según ha detallado Durazo.

Dicha detención hizo que varios grupos de delincuentes organizados «rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla». Asimismo, otros grupos llevaron a cabo «acciones violentas» en varios puntos de la ciudad, algo que el secretario mexicano afirmó que generaron una «situación de pánico».

«Tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Culiacán para conducir personalmente las acciones



fuga de reos en la prisión de Culiacán tras los tiroteos registrados en la ciudad.

Guzmán, liberado

Más tarde, fuentes militares informaron que el hijo del narcotraficante había sido liberado después para pacificar la ciudad. Además, Durazo señaló que ante las acciones violentas de los seguidores de Ovidio Guzmán, el Ejército había suspendido su operación para «proteger vidas».

Por su parte, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz, llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y a mantener la calma. «Estamos trabajando en recuperar la seguridad de la ciudad de Culiacán. Les pido mantenerse a salvo y estar atentos a las cuentas oficiales del Gobierno del estado. Estaremos dando información puntual. Aquí estoy pendiente y trabajando con ustedes», indicó Ordaz a través de su cuenta en la red social Twitter.

En varios vídeos publicados en las redes sociales se observan a varias personas armadas en coches por las calles de Culiacán, así como tiroteos en diferentes partes de la ciudad y vehículos incendiados. Tras los tiroteos registrados en varios puntos de la ciudad, la Universidad Autónoma de Sinaloa anunció que había suspendido sus actividades para «salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios».

Ovidio Guzmán, de 28 años y conocido como 'El Ratón' o 'Ratón Nuevo', ha sido identificado como miembro del cártel de Sinaloa y se enfrenta a cargos en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana de México.

correspondientes», recalcó Durazo. «El Gobierno ratifica su compromiso de continuar su lucha contra la criminalidad hasta alcanzar la paz y la seguridad de todos los mexicanos», detalló. Además, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa advirtió de que se había producido una



CUBA

CUBA, OTRA REVOLUCIÓN FRACASADA

Sesenta años después de la llegada al poder de Fidel Castro para «construir una nación más democrática, próspera y justa», la dictadura cubana malvive presa de una ilusión atrofada, pero al menos nos deja una valiosa lección.

Las gentes salieron a la calle a recibir a los barburdos. Era el 1 de enero de 1959 y Fidel Castro entraba victorioso en Santiago de Cuba al frente de sus hombres. El dictador Fulgencio Batista había huido con su dinero y el pueblo aclamaba en masa a los libertadores. Después de casi seis años de lucha, habían alcanzado el paraíso y ahora se lo ofrecían a los cubanos. Siete días más tarde, Fidel pronunció en La Habana un discurso memorable. «Queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil; quizás en lo adelante todo sea más difícil», proclamó ante una multitud entusiasmada. Sesenta años después, esas palabras se mantienen vigentes como una profecía cumplida. Con Fidel Castro ya fallecido, el régimen que él creó continúa en pie prometiendo aquellos paraísos que traían los barburdos a manos llenas pero que nunca terminaron de cumplirse. Desde que triunfó la revolución todo fue más difícil y las

La lección que la revolución cubana ofrece indubitativamente a la historia de la humanidad, es que el poder absoluto y sempiterno conduce irremediablemente a la corrupción.



dificultades aún pueden ir a más. «Cuba dista mucho de ser la patria de la felicidad que habían prometido», afirma Carlos Malamud, investigador para América Latina del Instituto Elcano.

En 2006 Fidel delegó el poder en su hermano Raúl, que en abril de 2018, año y medio después de la muerte del líder de la revolución, cedió su cargo a Miguel Díaz-Canel. Por primera vez en seis décadas, el poder en Cuba no está en manos de un Castro ni de un militar, aunque hay quien no está muy seguro de ello. «Sus apoyos en el Ejército y en los sectores más conservadores son limitados, por lo que se ve obligado a estar en negociaciones perma-

nentales», argumenta Malamud.

El Gobierno de Díaz-Canel se enfrenta a los mismos problemas económicos, políticos y sociales que hace más de medio siglo. Es como si por él no pasara el tiempo, como si jamás hubiera comenzado a caminar. «Acabo de volver de Cuba y no veo muchos cambios. Lo que percibo es una especie de parálisis y un retroceso. Hay más restricciones incluso en la cultura, que había sido tolerada conscientemente para que la sociedad tuviera una vía de escape», afirma Susanne Gratius, profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. El economista Carmelo Mesa-Lagos sostiene en un estudio sobre la revolución cubana que su política económica «se ha caracterizado por ciclos ideológicos y pragmáticos que han resultado en un deterioro en los primeros y mejoría moderada en los segundos». Ambos ciclos han dependido de la ayuda que recibía del exterior un país que siempre ha hecho gala de ser independiente pero nunca ha llegado a serlo.

Desde la década de los sesenta del siglo pasado, y después de que Estados Unidos ordenara un embargo de las exportaciones cubanas, el régimen de Castro comenzó un acercamiento a la Unión Soviética que le convirtió en un país subvencionado. Hasta finales de los años ochenta, la URSS sostuvo a Cuba, cuyos dirigen-



tes alternaban ruinosos programas económicos, como la 'Zafra de los cien millones', con aciertos como la extensión de la Sanidad y la Educación.

«El país se acostumbró a ser un parásito, a vivir de ayudas de la URSS, pero cuando dejaron de llegar fue un desastre», explica el periodista Alejandro González-Raga, actual director ejecutivo del Observatorio cubano de Derechos Humanos. Él tenía un año y vivía en la isla cuando Fidel advirtió a su pueblo de las dificultades a las que debería enfrentarse. En su caso, esta advertencia se cumplió con creces. Entre marzo de 2003 y febrero de 2008, permaneció encarcelado por oponerse al régimen castri-
trista. Su resumen de estos sesenta años de revolución es contundente. «Ha sido un sacrificio. Durante seis décadas han pedido esfuerzos al pueblo y ahora está en la miseria, no ha salido del marasmo. Llevan más de medio siglo persiguiendo una quimera».

«Hasta finales de los ochenta -recuerda Susanne Gratius- Cuba vivió una época de oro. Había un bienestar relativo y se extendieron los beneficios sociales». El país exhibía orgulloso al resto del mundo las bondades de su sistema educativo y de salud, que «funcionaban bastante bien y siguen relativamente bien». Pero la URSS comenzó a dar síntomas de agotamiento y la ayuda dejó de llegar. Cuando en 1991 cayó el régimen soviético, Cuba se quedó sola.

La crisis económica fue brutal. Entre 1989 y 1995, el PIB cayó un 35% y el régimen abrió oficialmente lo que llamó 'Período especial en tiempo de paz'. Fue una época en la que la ideología quedó relegada y se impuso el pragmatismo. Fidel autorizó reformas de emergencia en el sistema económico y permitió por primera vez la apertura de negocios particulares e impulsó la creación de empresas mixtas con aportación de capital extranjero.

Los cambios y la entrada de fondos del sector turístico



trajeron consigo una parcial recuperación económica y social, pero entonces apareció la Venezuela de Hugo Chávez y Cuba se echó en sus brazos para volver a ser un país subsidiado. Con la cartera a salvo gracias al petróleo venezolano, Fidel olvidó de nuevo el pragmatismo y regresó a la ideología. En 2003 relanzó 'La batalla de las ideas', una campaña que había nacido en 1999 para traer a Cuba al niño Elián González, que había sido trasladado en una balsa a Miami por su madre, fallecida en el viaje. Era, según los medios de comunicación de la isla, «una nueva etapa en la lucha de los cubanos» que reflejaba «la indetenible determinación del pueblo por consolidar el socialismo y la revolución».

El régimen mostraba otra vez el paraíso al final del camino. Había que seguir luchando contra el imperialismo para mantener la independencia y soberanía de la isla y no se podía dar ni un paso atrás, aunque las que sí retrocedieron fueron las reformas. Fidel, a quien le quedaba poco tiempo en el poder, adoptó medidas de recentralización económica y redujo el sector privado.

El pragmatismo se hizo de nuevo presente cuando, en julio de 2006, Raúl sucedió a su hermano Fidel. Según Carmelo Mesa-Lago, el nuevo líder «prometió reformas estructurales y estimuló el debate sobre cambios económicos y sociales más amplio y profundo desde la revolución». Algo se hizo, pero no lo suficiente, y tampoco hubo mucho tiempo. Los huracanes de 2008, que causaron daños equivalentes al 20% del PIB, y la recesión mundial afectaron gravemente a la economía de la isla.

Mirando a China

Para empeorar las cosas, Venezuela, que durante más de una década había entregado a sus amigos revolucionarios unos 100.000 barriles de petróleo diarios en condiciones preferentes, empezó a tener dificultades. Se calcula que, entre 2000 y 2017, Cuba ha recibido de su aliado 40.000 millones en



'oro negro' y dólares, aunque, a partir de 2014, el Gobierno de Nicolás Maduro, asfixiado por sus propios problemas económicos, ya había reducido esta aportación hasta en un 40%. Hoy, el grifo ya casi se ha cerrado.

El Ejecutivo cubano se enfrenta de nuevo a la búsqueda de otro amigo con el que caminar codo a codo hacia el paraíso. Está China, pero aún queda por ver el alcance de la relación con un gigante que está tendiendo sus tentáculos por todo el mundo. No hay mucho más donde elegir. «Las dificultades económicas de Cuba están a la vista. Se había salido del período especial gracias a Venezuela, pero, con la crisis, la situación se ha complicado», resume Carlos Malamud.

Nadie sabe el camino que emprenderá Miguel Díaz-Canel con permiso de los sectores que le tutelan. «Ahora hay una nueva fase. Puede ser el final o un paso hacia un nuevo autoritarismo. La situación económica no es buena y los salarios son bajísimos. Los gobernantes se están poniendo nerviosos porque ven que está aumentando la fractura entre el régimen y la sociedad civil», asegura Susanne Gratius.

Como elemento de cohesión queda el bloqueo de EEUU, que ha afectado económicamente a Cuba durante décadas, pero que también le ha servido al castri-
trismo para justificar sus errores y mantener vivo el espíritu de lucha entre sus adeptos. Para Gratius, «Estados Unidos ha contribuido con el embargo a mantener al régimen y a que haya buscado otros aliados», pero Alejandro González-Raga no está de acuerdo. A su juicio, «la dictadura habría durado lo mismo sin el bloqueo, porque habría buscado otro pretexto para mantenerse». Recorrer un camino tan largo para llegar a un lugar sos-



pechosamente similar al anterior no parece un bagaje positivo para un buen revolucionario, pero algo de eso es lo que ha ocurrido. El punto de partida no es tan diferente al de llegada. «El régimen de Batista era dictatorial, pero las condiciones socioeconómicas de Cuba eran elevadas. Los ratios de alfabetización y sanidad eran homologables a los países de alrededor», señala Malamud. «En 1959 -recalca González-Raga- teníamos mejores estándares que España e Italia, y mire dónde estamos ahora». Y también insiste en que, si Batista «violó muchos derechos y se le fue la mano con la represión», cuando llegó Castro «fue mucho peor». «Están documentados 8.000 fusilamientos», enfatiza.

Al final de este viaje en la vida de los cubanos lo que queda es, según el disidente, una sociedad formada por «hombres nuevos pero peores que los de antes, seres humanos sin valores ni arraigo que lo primero que piensan es en huir de su país». Es un pueblo que creyó en «un magnífico guión con una pésima puesta en escena», una gente que cayó «en el señuelo de unos expertos vendedores de crepepelos». «Todos querían tener una casa y un salario dignos y por eso los apoyaron», expone González-Raga.

«El sistema no funciona. ¿Por qué siguen empecinados en mantenerlo?», se pregunta el periodista cubano. «Por ese camino no se llega al paraíso, es un camino equivocado», sostiene. La cuestión es si a estas alturas queda otro. «Si todo se mantiene según los parámetros actuales, nada indica que la situación vaya a mejorar. Las cosas seguirán más o menos igual, pero siempre puede empeorar. Yo creo que el proceso reformista económico va a seguir estancado y tampoco va a haber una apertura política amplia», augura Malamud. Susanne Gratius no es tan pesimista y aprecia un resquicio en una puerta no cerrada del todo. «Aparentemente no hay cambios, pero existe otro liderazgo y dicen que en febrero habrá una consulta popular para reformar la Constitución». Lo que aún está por ver, añade, es si «los militares



apoyan al presidente».

Nada fuera de lo común. Desde que el 1 de enero de 1959 los barbudos entraron triunfantes en Santiago y La Habana, el régimen ha dado repetidamente un paso adelante y otro hacia atrás, como si no acabara de encontrar la senda hacia el éxito tantas veces prometido. Carlos Malamud recurre a una canción del trovero Ray Fernández para explicar lo que ha sucedido en Cuba estos últimos sesenta años. Es esa que se titula 'El bucanero'. Dice: «*Olvidense del tesoro porque perdimos el mapa*». «*El mapa lo perdieron casi desde el principio*», afirma Malamud.



HONDURAS

DOS MATANZAS EN CÁRCELES HONDUREÑAS DEJAN 37 MUERTOS

Honduras hace frente a una grave crisis en su sistema penitenciario después de que enfrentamientos en dos cárceles del país dejaran 37 muertos y una veintena de heridos durante los días 20 y 21 de diciembre, hechos que las autoridades atribuyen a grupos criminales.



Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario a través de Fusina (Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional) imponga los controles necesarios en los centros penitenciarios del país", indicaron autoridades de la junta en un comunicado. Reiteró también su compromiso de "corregir las fallas que han generado la problemática en el sistema penitenciario y realizar los correctivos necesarios en el marco de la ley".

Al menos 19 reclusos fallecieron el domingo 22 de diciembre en una pelea entre bandas rivales en la cárcel del municipio de El Porvenir, departamento central de Francisco Morazán, que se suman a otros 18 presos muertos el viernes 20 de diciembre en un tiroteo en otra prisión del Caribe del país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que "observa con alarma la violencia dentro de los centros penitenciarios" del país centroamericano, que albergan a unos 22.000 presos, de los que más de la mitad no han sido condenados. Instó, asimismo, al Estado de Honduras a "garantizar la vida y respeto de los derechos humanos de los privados de libertad y a proceder a una investigación pronta, eficaz y transparente" para esclarecer los hechos. Las dos matanzas en las cárceles es el reflejo de una "escalada" de grupos criminales que buscan evitar que las autoridades tomen control de los presidios, argumentó por su parte la Comisión Interventora del sistema penitenciario de Honduras. "Que estas acciones violentas son una escalada del mundo criminal para tratar de evitar que la

La portavoz del Hospital Escuela de Tegucigalpa, Julieth Chavarría, elevó a 19 reos el número de reos fallecidos en la cárcel de El Porvenir. La matanza ocurrió pese a que el control de seguridad del presidio fuera sumido hacia una semana por una Comisión Interventora nombrada el martes 17 de diciembre por el poder Ejecutivo. El Gobierno hondureño inició en 2017 una transformación del obsoleto sistema penitenciario, al que declaró a finales de diciembre en emergencia y nombró una Comisión Interventora para tomar el control de las cárceles. Esta comisión tomó el control de cinco de una treintena de prisiones, que albergan a unos 22.000 reclusos, cuando su capacidad máxima es de 8.000. En la mayoría de las cárceles impera la superpoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones adecuadas, de condiciones de higiene y salubridad, lo que han reconocido las autoridades hondureñas. "Ya basta de tanta muerte" en el sistema penitenciario, pidió el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado.

CHILE PROTESTAS EN CHILE: 4 CLAVES PARA ENTENDER LA FURIA Y EL ESTALLIDO SOCIAL EN EL PAÍS SUDAMERICANO

La crisis en Chile se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos.

Amodo de protesta, los estudiantes comenzaron a realizar "evasiones masivas" en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar.

La situación fue agravándose cuando la violencia tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con la quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas.

El gobierno, entonces, decretó el estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes, además, ordenaron toque de queda. El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció el sábado 19 de octubre la suspensión del alza en la tarifa del metro afirmando que había escuchado "con humildad la voz de la gente".

Sin embargo, ninguna de estas medidas y anuncios atenuó la furia de los chilenos. Al día siguiente, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera.



Las autoridades extendieron el toque de queda en la Región Metropolitana de Santiago, desde las 19:00 hora local hasta las 6:00 del lunes; y en las regiones de Concepción y Valparaíso, desde las 20:00 hasta las 6:00 del lunes 21 de octubre.

Además, se suspendieron las clases en Concepción y en 43 comunas de Santiago. Poco después, el ejército de Chile también anunció toque de queda desde las 20:00 del domingo 20 hasta las 6:00 del lunes 21 de octubre en las ciudades de Coquimbo y La Serena, ubicadas a unos 470 km al norte de Santiago; y en Rancagua, unos 90 km al sur de la capital.

Pese a todo, las manifestaciones no parecían apaciguarse.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible", dijo Piñera en un mensaje televisado el domingo 20 de octubre.

El gobierno chileno confirmó la muerte de al menos 18 personas durante las protestas. Y el presidente Chileno pidió perdón por la respuesta de su Ejecutivo a las protestas.

"Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos



gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud", señaló el mandatario.

Piñera anunció una serie de reformas para tratar de responder al estallido social y aseguró que el gobierno había escuchado "las legítimas demandas" de la ciudadanía.

El "milagro económico" de este país, acuñado por el economista estadounidense Milton Friedman durante el gobierno militar, parece haber ignorado las demandas de una sociedad que dice sentirse abusada. ¿A qué se debe esta violencia y qué hay detrás de lo que está pasando en Chile?

Exponemos cuatro claves que ayudan a entender el conflicto:

¿Tan desigual es Chile?

Políticos y expertos consideran que el alza de la tarifa del metro es solo la "punta del iceberg" de los problemas que están aquejando a los chilenos.

La palabra "desigualdad" se apoderó del debate con cientos de manifestantes insistiendo en que la brecha social en el país sudamericano es desmedida.

Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.

Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (423 dólares) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a



400.000 pesos (562 dólares) al mes. Con este salario, los manifestantes alegan que un alza en el pasaje del metro es inconcebible.

Más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio.

Así lo determinó un reciente estudio de la Universidad Diego Portales, de un total de 56 países alrededor del mundo, Chile es el noveno más caro.

Hay familias de bajos recursos que pueden gastar casi un 30% de su sueldo en transportarse, mientras que dentro del nivel socioeconómico más rico, el porcentaje de gasto puede ser menos de un 2%. De esa manera, la sensación entre los ciudadanos chilenos es que no ha habido respuesta de los gobiernos de turno a una problemática que se arrastra hace décadas.

Cristóbal Bellolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, asegura que "este es ciertamente un problema estructural del sistema socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a pesar de que hay mucho menos pobreza que antes".

"La situación de aquellos que salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se percibe que hay una clase de ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas", agrega.

Para Bellolio, el alza en el pasaje del metro finalmente se suma al incremento en el costo de la luz, del agua y a la crisis en el sistema público de salud.

También tiene que ver con las pensiones: hace bastantes años que Chile está discutiendo una reforma al sistema de pen-



siones privado que, para muchos, tiene importantes deficiencias.

"Es un cóctel que no provee de esperanzas de que vayan a ver tiempos mejores, que es justamente la promesa del gobierno de Piñera. Por el contrario, creo que la gente percibe que los tiempos son peores", explica.

Una opinión similar tiene Claudio Fuentes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. "Hubo un gran crecimiento de la clase media pero es una clase media precarizada, que tiene bajas pensiones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. Es una situación donde el día a día es precario, que vive con incertidumbre", señala.

¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Sebastián Piñera en todo esto?

Tanto la oposición política al gobierno de Sebastián Piñera como algunos de sus propios partidarios han coincidido en que la actual administración reaccionó tardíamente a las manifestaciones.

Se ha dicho que no hubo explicaciones claras sobre el alza de la tarifa y que se demostró una "falta de empatía" con los problemas de la gente.

De hecho, ante las primeras protestas, ministros del gobierno de Piñera sugirieron tomar el metro más tem-



prano, a las 7 de la mañana, para evitar pagar el alza, lo que ha sido blanco de críticas.

Además, se ha cuestionado que las autoridades se limitaron a amenazar con la Ley de Seguridad del Estado, sin abordar el fondo de la petición, y calificando a los manifestantes de "delincuentes" en repetidas ocasiones.

"Fue una protesta lenta, que subió en intensidad gradualmente, con muchos momentos para reaccionar. Pero no hubo más que dos respuestas: la tecnocracia y la represión. El panel de expertos define la tarifa, las Fuerzas Especiales la hacen cumplir. En particular, el presidente Piñera ha sido fuertemente cuestionado luego de que el viernes 18 de octubre -mientras se incendiaban varias estaciones de metro- se le vio cenando en un restaurante de Vitacura (una de las zonas más ricas de Santiago), donde le estaba celebrando el cumpleaños a uno de sus nietos. Así, los líderes de coaliciones políticas de oposición, como el Frente Amplio, salieron a criticar al mandatario y sus ministros.

"El Gobierno insiste concentrar su discurso en criticar la violencia, pero con sus acciones hasta ahora solo ha contribuido a ella. Indolencia ("levántense más temprano"), incomprensión ("escolares no tienen motivos para protestar") y represión (militares en la calle). Así no!", señaló el diputado Gabriel Boric a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, indicó: "Solo queda pensar qué distinto sería Chile si los gobiernos escucharan antes a la gente".

Incluso, un exministro del primer gobierno de Piñera, Harald Beyer, señaló que este episodio "demostró la falta de habilidad y



destrezas que ha exhibido el Gobierno para enfrentar situaciones como ésta".

De todas maneras, la oposición tampoco se ha librado de las críticas: también se ha dicho que reaccionaron tarde y que no han hecho nada para mejorar la calidad de vida de los chilenos, además de apoyar la violencia en estas manifestaciones.

"La oposición cometió un gran error: validó la violencia. Ellos no lo han dicho explícitamente pero se desgastaron en contextualizar la violencia como parte del descontento. Y en ese sentido, el partido comunista y el Frente Amplio han remado para el otro lado y han azuzado el fuego", dice Cristóbal Bellolio.

¿Cómo influyen las expectativas de una mejora social en el malestar de la gente?

Hace años que la clase política chilena viene prometiendo mejoras en la calidad de vida de la gente en Chile. Se han anunciado reformas educacionales, constitucionales, tributarias y a la salud pero muchas de ellas no han logrado cumplir con las expectativas de la sociedad.

El descontento social se ha traducido en este estallido que ha provocado la destrucción de un centenar de espacios públicos en distintas ciudades de Chile.

Las expectativas generadas por los dos gobiernos de Michelle Bachelet (de 2006 a 2010, y luego de 2014 a 2018), y posteriormente por los de Sebastián Piñera (quien también lideró el país en un período anterior, entre 2010 y 2014), son una causa importante que puede explicar esta "furia".

"Si Bachelet y Piñera fueron símbolos de cambio (la igualdad de géneros, la alternancia en el poder), ambos agotaron el stock de esperanzas. Enterrada la retroexcavadora y sepultados los tiempos mejores, hace tiem-



po se incubaba el ruido sordo de la falta de un proyecto país, de un camino al desarrollo, de una meta compartida que dé sentido a las penurias cotidianas", dice Matamala. Es importante recordar que Piñera ha sido reconocido por su capacidad para generar empleos y mejorar la economía. Durante su primer gobierno, de hecho, ése fue su gran logro.

Esta vez, la gente esperaba lo mismo y, hasta el momento, la realidad económica ha estado por debajo de las expectativas que tenía la sociedad chilena.

"Aquí habían dos promesas: la mejora económica y la paz ciudadana. Esas eran las claves de este gobierno", explica Claudio Fuentes. El académico agrega que "el crecimiento económico ha sido menor, les ha costado mucho. Y en seguridad ciudadana, acaba de salir un informe que muestra un incremento de la percepción de inseguridad en la población. Todo esto afecta este clima de no cumplimiento".

¿Cuál es el rol de los estudiantes en las movilizaciones?

Las protestas y manifestaciones han sido lideradas, principalmente, por estudiantes.

La primera "evasión masiva" se produjo el lunes 7 de octubre, liderada por estudiantes de liceos emblemáticos, principalmente del Instituto Nacional. Este instituto fundado en 1813, ha protagonizado violentas protestas en los últimos meses.

Las quejas tienen que ver con la "falta de recursos" en la educación chilena y la falta de cuidado en las aulas de clases.

Según asegura el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, los desmanes ocurridos en Chile son resultado, en parte, a la aparición de una nueva generación "que se manifiesta cada vez con mayor intensidad". "No es casualidad que todas esas formas de protesta violenta sean protagoniza-



das por jóvenes", agrega.

Una de las manifestaciones más importantes en Chile desde el retorno a la democracia también fue liderada por estudiantes. La llamada "revolución pingüina", ocurrida en 2006, generó un importante precedente respecto a la demanda social de mejorar la educación en el país sudamericano. Posteriormente, en 2011, esta

petición se incrementó con un movimiento estudiantil que también generó grandes manifestaciones y que tuvo al primer gobierno de Sebastián Piñera en jaque. Y aunque no se sabe cuál será la verdadera dimensión de estas últimas manifestaciones, sí está claro que las protestas del pasado mes de octubre han sido las más violentas que ha vivido Chile en décadas.

LA ONU CORROBORA LOS ABUSOS POLICIALES EN CHILE

Acusa a policía y ejército de asesinatos, torturas y violencia sexual indiscriminada durante las protestas. 26 personas han muerto y 4.900 resultaron heridas.

La ONU corroboró el lunes 16 de diciembre que, en su intento por sofocar las protestas en Chile, el cuerpo policial de Carabineros violó varios derechos humanos de los manifestantes y reclamó que, ante la continuación del movimiento ciudadano en ese país, se ponga fin "al uso indiscriminado" de escopetas antidisturbios.

Una misión enviada por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Chile para investigar la violencia en torno a las manifestaciones presentó las conclusiones de su trabajo, que confirma que hubo uso "excesivo o innecesario" de la fuerza que provocó lesiones y muertes. Un total de 26 personas murieron en el contexto de las protestas y "en cuatro de esos casos estuvieron involucrados agentes del Estado", mientras que los heridos han sido unos 4.900, según cifras del Ministerio de Justicia.

Otras violaciones que se constataron fueron torturas y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias,



con un total de 28.000 personas que llegaron a pasar por lugares de detención y de las cuales 1.610 siguen privadas de su libertad. "Los carabineros ha incumplido de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y pacíficos", lo que provocó que cargaran con todos sin distinguir entre ellos e incluso con transeúntes que nada tenían que ver con la protesta, según el informe de la ONU.

El documento propone "reformas estructurales" de Carabineros, de modo que haya una supervisión civil e independiente de sus actividades. "Y en vista de que las protestas no han finalizado se deben tomar medidas preventivas inmediatas para que no se cometan más abusos, ya que continuamos recibiendo denuncias de violaciones por parte de las fuerzas policiales", sostuvo la misión Imma Guerras-Delgado.

Las fuerzas armadas también tienen parte de responsabilidad, sostuvo. "Graves violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, muertes ilícitas y tortura, fueron cometidas por personal militar, en particular durante el estado de emergencia", recaló la especialista de la Oficina de Derechos Humanos que dirige la alta comisionada y expresidenta chilena, Michelle Bachelet.



ARABIA SAUDÍ

EL PLAN SECRETO DE BIN SALMÁN PARA ACABAR CON LA DISIDENCIA

El príncipe heredero saudí creó un operativo para detener a críticos del régimen, entre los que figuraba el periodista Jamal Khashoggi.

La campaña autorizada por el príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman, incluía la vigilancia, el secuestro, la detención y prácticas de tortura de disidentes, según el informe publicado el domingo 17 de abril por el diario estadounidense The New York Times, que cita testimonios de funcionarios de EE.UU. con acceso a informes de inteligencia clasificados sobre dicha campaña secreta. Algunas de esas operaciones consistieron en repatriar por la fuerza a saudíes de otros países árabes y detener y abusar de prisioneros en palacios pertenecientes al príncipe heredero y a su padre, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, según las fuentes. Para ejecutar su plan el heredero del trono saudí creó un Grupo de Intervención Rápida que estuvo involucrado en al menos 12 operaciones a partir de 2017, incluido el asesinato de Khashoggi -acaecido el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Riad en Estambul



(Turquía)-, que desató el escándalo y generó una ola de protestas a nivel mundial.

Conforme al rotativo, el grupo era supervisado por Saud al-Qahtani, un asesor de Bin Salman, despedido por su implicación en el caso Khashoggi.

Las fuentes, asimismo, indican que el grupo criminal también habría estado involucrado en la detención de una decena de activistas defensores de los derechos de la mujer. The New York Times publicó otro informe en octubre, en el que infor-

mó de la creación de un ejército online por parte de Riad para reprimir a sus críticos y dirigir a la opinión pública contra los periodistas con influencia en el país. A principios del pasado mes de marzo (2019), y en un acto sin precedentes, 36 países del mundo condenaron la crítica situación de los derechos humanos en Arabia Saudí. Además, diferentes organizaciones y oenegés pro derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), denunciaron el aumento exponencial de la represión, el arresto y la encarcelación de activistas por el régimen de Riad y las torturas brutales, agresiones sexuales a las que son sometidos.

ARABIA SAUDÍ EJECUTA A 37 ACUSADOS DE "TERRORISMO", UNO DE ELLOS CRUCIFICADO

Las autoridades saudíes informaron el martes 23 de abril de la ejecución de 37 personas acusadas de "terrorismo", uno de ellos fue crucificado, dos días después de un ataque frustrado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) al norte de Riad.

El Ministerio del Interior anunció el pasado mes de abril en un comunicado difundido por la agen-



cia SPA que las ejecuciones se produjeron después de que el Tribunal de Apelación, el Tribunal Supremo y un decreto real ratificaran la pena contra los condenados.

Según la nota, los ejecutados fueron sentenciados por "adoptar ideología terrorista extremista, formación de células terroristas, corromper y desestabilizar la seguridad, expandir el caso, provocar la sedición sectaria, dañar la paz y seguridad social, atacar sedes de seguridad con el uso de artefactos

explosivos, matar varios efectivos de seguridad y por traición por colaborar con entidades hostiles" al reino.

Interior señaló que las ejecuciones se llevaron a cabo en las ciudades de Riad, Meca, Medina, Al Sharqia, Al Qasim y Asir. El Gobierno indicó que todos los ejecutados, que fueron identificados eran de nacionalidad saudí.

Asimismo, señaló que el saudí Khaled Abdelkarim al Tuegri fue crucificado, un tipo de ejecución no muy común en los últimos años.

Las ejecuciones se produjeron dos días después de que las fuerzas de seguridad saudíes informaran de un supuesto ataque "terrorista" frustrado en el que fallecieron cuatro presuntos atacantes, que tenían como objetivo un centro de interrogaciones en la provincia de Al Zulfi, a 260 kilómetros al norte de Riad.

La agencia de noticias Amaq, afiliada a los yihadistas, aseguró en un breve comunicado, que los atacantes, que fueron identificados, pertenecían al Estado Islámico. Además, detalló que el blanco del ataque fue una sede de la Seguridad Nacional saudí en Al Zulfi.

En julio de 2018 el EI reivindicó un ataque contra un



puesto de control en la ciudad de Al Burayda, en la región de Al Qasim, a unos 330 kilómetros al norte de Riad, que provocó la muerte de un policía saudí y un ciudadano bangladés.

En 2018 las autoridades ejecutaron a 149 presos, tres más respecto al año precedente pese a las promesas del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, de "minimizar" la pena capital en el reino.

ARABIA SAUDÍ PRETENDE CRUCIFICAR A UN JOVEN QUE SE MANIFESTÓ CONTRA EL GOBIERNO CON 10 AÑOS

Murtaja Quereiris, que ahora tiene 18, lleva desde el 2014 en el corredor de la muerte condenado por pertenencia a organización terrorista.



Los supuestos delitos cometidos cuando tenía

entre 10 y 14 años le pueden costar la muerte a Murtaja Quereiris, que ahora cuenta con 18. No será el primer saudí ejecutado en estas circunstancias, que suponen «una violación de las leyes domésticas e internacionales», según la European Saudi Organization For Human Rights (Esohr), pero sí marca una especie de récord macabro porque a ninguno le habían imputado cargos a tan temprana edad y se convierte en el preso político más joven del reino.

Dos meses después de la decapitación de Abdulkareem al Hawaj, Murtaja puede ser el siguiente en la lista de ejecuciones, aunque en su caso la Fiscalía pidió la muerte por crucifixión, según denunció Esohr. Abdulkareem y Murtaja tienen en común que ambos

pertenecen a la minoría chií y que fueron condenados a muerte por supuestos delitos que cometieron cuando eran menores de edad. El primero tenía 16 años cuando participó, según la acusación, en «manifestaciones contra el Gobierno». El segundo, apenas había cumplido los 10 cuando se le acusó de «per-

tendencia a organización terrorista» y «ataques contra las fuerzas de seguridad». Para Amnistía Internacional (AI), «el uso de la pena de muerte siempre es terrible, pero es aún más escandaloso cuando se aplica después de juicios injustos o contra personas que tenían menos de 18 años en el momento del delito, en flagrante violación del derecho internacional», según declaraciones de la responsable de Oriente Próximo, Lynn Maalouf.

Familia de activistas

La cadena CNN difundió imágenes en las que se veía a un Murtaja de 10 años con su bicicleta al frente de un

grupo de amigos en una manifestación. Nacido en el seno de una familia de activistas de la oposición en la provincia de Qatif, al este del país, el joven fue detenido con 14 años y al cumplir 17 fue trasladado a una prisión de la Mabahith, la Policía secreta del reino. Pasó cuatro años sin ningún tipo de acceso a un abogado hasta que compareció ante el juez en agosto del 2018. Las organizaciones de derechos humanos no conocen la fecha de la próxima sesión, pero esperan «que la presión internacional sirva para evitar una nueva ejecución», apunta Dana Ahmed, investigadora de AI especializada en Arabia Saudí.

En el 2018 los saudíes ejecutaron a 149 reos, este año la cifra ya alcanza los 110. Tan solo en abril ajusticiaron

a 37 presos en un solo día. Desde Amnistía Internacional explican que no se ha producido ningún cambio especial en la legislación del reino que explique este aumento de la pena capital «sin precedentes». Al contrario, destacan que «es irónico que jóvenes como Murtaja puedan ser condenados a muerte después de que se aprobara una ley que restringía el castigo capital para menores», apunta Ahmed. Alí al Nimr, Dawood al Marhoon y Abdullah al Zaher, también de la minoría chií y que tenían menos de 18 años en el momento del delito, están también en el corredor de la muerte. El pulso sectario es cada vez más duro dentro del reino y las autoridades acusan a la minoría chií de estar al servicio de su gran enemigo: Irán.

UN AÑO SIN RESPUESTAS SOBRE EL DESTINO DEL CUERPO DE KHASHOGGI

El caso sigue abierto después de demostrarse que agentes saudíes desuartizaron al periodista en Turquía.

El reloj se detuvo a las 13:14, horas del miércoles 2 de octubre de 2019 en Turquía, a las puertas del Consulado de Arabia Saudí en Estambul para conmemorar el último momento en el que se vio con vida a Jamal Khashoggi el martes 2 de octubre de 2018, hace justo un año. A esa hora, el periodista crítico con la casa real y columnista de 'The Washington Post', cruzó el umbral de la legación para recoger unos documentos que necesitaba para casarse con su novia turca, Hatice Cengiz, y nunca salió vivo de allí.

Doce meses después el cuerpo sigue sin aparecer, doce meses que ha necesitado Mohamed Bin Salman (MBS), príncipe heredero de Arabia Saudí y persona a la que la CIA apunta como cerebro de la operación, para admitir al menos su «responsabilidad por ser el líder del país», aunque aseguró que «no sabía nada» de lo que calificó de «crimen horrible», en una entrevista concedida esta a la cadena CBS.

La imagen de quien a sus 34 años es el heredero a la corona y hombre fuerte del país ha sufrido un grave deterioro tras conocerse los detalles del asesinato y descuartizamiento de Khashoggi a través de diferentes informaciones reveladas por la prensa y partes implicadas en la investigación.

Los esfuerzos de Bin Salman por mostrarse aperturista y modernizador, con la vuelta de los cines, la concesión de visados a turistas o de permisos de conducción a muje-



res, han quedado eclipsados por el crimen cometido por sus agentes de seguridad en Estambul, algunos muy cercanos a él. Pese al clamor internacional, la Justicia saudí le eximió de cualquier responsabilidad y la fiscalía acusó a once personas del asesinato.

Tras las muestras de apoyo de Donald Trump a lo largo de estos meses, Salah, hijo primogénito del periodista asesinado residente en Yeda, también acudió al auxilio del príncipe con motivo del aniversario y en su cuenta de Twitter escribió que «un año pasó de la muerte de mi querido padre, los oponentes de la patria y sus enemigos en el este y el oeste han explotado su caso para destruir mi patria y a mis líderes». Una situación ante la que aseguró que «no voy a aceptar que se explote su memoria y su caso para lograr esto».

Según publicó 'The Washington Post' en abril, las autoridades del reino habrían comprado el silencio de la familia con la entrega de viviendas, valoradas en 4 millones de dólares, y «pagos mensuales superiores a 10.000

dólares por hijo» como una primera parte de un acuerdo a largo plazo para evitar declaraciones críticas de la familia sobre el asesinato a manos de agentes de seguridad enviados por el propio reino. Otros tres hijos del columnista residen en Estados Unidos, donde su padre se había auto-exiliado para evitar problemas por sus artículos. Salah Khashoggi negó cualquier tipo de acuerdo.

En la concentración del miércoles 2 de octubre en Estambul estuvieron presentes la relatora de la ONU sobre ejecuciones arbitrarias, Agnes Callamard, autora de un informe en el que apunta directamente a la responsabilidad de Mohamed Bin Salman, la premio Nobel yemení, Tawakkol Karman, y representantes de Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, organismos que siguen pidiendo que se haga justicia.

Callamard tuvo acceso a la grabación de 45 minutos sobre lo ocurrido en el interior del Consulado que Turquía entregó a la ONU. La experta del organismo internacional reveló al programa de investigación 'Panorama', de la BBC, que Khashoggi preguntó a sus verdugos: «¿Me



van a poner una inyección?», a lo que ellos respondieron «sí». Estas fueron sus últimas palabras porque «lo que se oye después muestra que lo asfixian, probablemente con una bolsa de plástico sobre la cabeza», apuntó Callamard. La abogada Helena Kennedy, que participó también en la investigación del organismo inter-

nacional, declaró a la cadena británica que los asesinos calificaron al periodista de un «animal destinado al sacrificio» y, una vez muerto, bromearon a la hora de despedirlo porque «ni un carnicero lo haría en el suelo».

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considera este suceso como el «más debatido y más polémico del siglo XXI, aparte del 11-S» y publicó una columna en 'The Washington Post' en la que detalló que el equipo de 15 sicarios que voló desde Arabia Saudí para matar a Khashoggi «cortó su cuerpo en trozos» y formuló varias preguntas que Riad debe responder como: «¿dónde están los restos?», «quién firmó la sentencia de muerte del periodista» y «quién envió a los 15 asesinos, incluyendo a un experto forense, en dos aviones privados a Estambul». El caso dista mucho de estar cerrado.

LA JUSTICIA SAUDITA ABSUELVE A LOS PRINCIPALES ACUSADOS DEL 'CASO KHASHOGGI'

El veredicto considera que el crimen no fue premeditado sino "accidental".

La Justicia saudí absolvió el martes 24 de diciembre a los principales procesados por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, entre ellos Saud al Qahtani, asesor personal del príncipe Mohamed bin Salman, en una sentencia que condena a cinco personas a la pena capital y que cierra en falso en primera instancia este escabroso crimen. Poco más de un año después de que Khashoggi fuera asesinado en el consulado saudí en Estambul y de que su cuerpo -aún no encontrado- desapareciera, la Fiscalía General saudí anunció el veredicto, que considera que el crimen no fue premeditado sino accidental.

La sentencia del caso Khashoggi aportó un nuevo capítulo a la secuencia de explicaciones dadas por el reino para aclarar el asesinato de este



periodista saudí crítico moderado del régimen y columnista del diario The Washington Post el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí. Las autoridades saudíes negaron inicialmente la muerte,

después dijeron que había sido accidental y luego admitieron que fue premeditada y que el cadáver fue incluso troceado, pero que el príncipe heredero no estaba al tanto.

el martes 24 de diciembre un juez volvió a la casilla de la versión del crimen casual argumentando que los acusados y la víctima no estaban "enemistados", en un fallo que no indaga en el paradero del cadáver ni depura responsabilidades del Estado, pese a cometerse en un consulado. No es la línea más controvertida de una sentencia que, según informó el portavoz de la fiscalía general saudí, Shalaan al Shalaan, exonera a Saud al Qahtani, asesor de Bin Salman, y al subdirector de los servicios secretos saudíes, Ahmed Asiri, las dos principales figuras procesadas.

El tribunal no vio pruebas suficientes ni contra ellos ni contra el cónsul saudí en Estambul, Mohamed Al Otaibi, cuyo despacho ofició de matadero para un crimen. "El Tribunal de Sanciones condenó a muerte a cinco personas como castigo por complicidad y participación en el asesinato de Khashoggi", indicó Al Shalaan, sin dar nombres, como ha venido siendo habitual. Tampoco desveló las identidades de otros tres condenados a penas que en su totalidad suman 24 años por encubrimiento, ni las sanciones individuales.

Las reacciones no se hicieron esperar y en su mayoría consideran, lógicamente, que el proceso judicial ha sido una farsa. "Los ejecutores son culpables, condenados a muerte. Los autores intelectuales no solo se van libres, apenas han sido tocados por la investigación y el juicio. Esto es la antítesis de Justicia, esto es una farsa", denunció en Twitter la relatora especial de la ONU para las Ejecuciones



Extrajudiciales, Agnes Callamard. Callamard, que encabezó una investigación de seis meses sobre el caso que concluyó en junio responsabilizando a Bin Salman por el crimen, indicó que los "acusados han declarado repetidamente que ellos obedecían órdenes".

Además, recordó que el fiscal general saudí afirmó en noviembre de 2018 que Al Qahtani había pedido el secuestro de Jamal Khashoggi por motivos de seguridad nacional. Añadió que, según sus fuentes, "el fiscal había alegado que el asesinato de Khashoggi había sido premeditado. El príncipe heredero había defendido que fue un accidente, en contra de las pruebas. Adivinen a quién hizo caso el juez".

El director de la organización de derechos humanos saudí ALQST, Yahia Assiri, rechazó la sentencia y pidió "un juicio internacional" para el caso. "Pedimos un juicio internacional, y no saudí, porque consideramos que Mohamed bin Salman está implicado en el crimen y la Justicia saudí no es independiente", señaló el director de la ONG, con sede en Londres. El Gobierno turco afirmó que la sentencia está "lejos de cumplir las expectativas de hacer justicia tanto de nuestro país como de la comunidad internacional, de que se aclaren todos los aspectos del crimen y se haga justicia".

Quien sí se dio por satisfecho fue Salah Khashoggi, hijo de Jamal, quien ya en el pasado había aparecido públicamente junto al príncipe heredero para respaldar la actuación de las autoridades en el caso de su padre. "La Justicia se basa en dos principios: lograr la justicia y la rapidez del procesamiento, y con eso no hay injusticia ni dilación. Hoy, el poder judicial nos dio justicia a nosotros, los hijos del fallecido Jamal Khashoggi. Manifestamos nuestra confianza en el poder judicial saudí a todos los niveles", escribió en Twitter.



ISRAEL

LA ONU CREE QUE LA REPRESIÓN ISRAELÍ EN GAZA PODRÍA CONSTITUIR UN CRIMEN DE GUERRA

El Consejo de Derechos Humanos ha investigado 189 muertes, 35 de ellas de niños, ocurridas en protestas entre marzo y diciembre de 2018

Los militares israelíes cometieron violaciones de derechos humanos y del derecho internacional en las protestas de la Gran Marcha del Retorno investigadas por la ONU entre el 30 de marzo y diciembre de 2018. Tres investigadores bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos investigaron caso por caso 189 muertes, 35 de ellas de niños, y las heridas sufridas por más de 6.000 manifestantes y concluyeron que la respuesta israelí «podría constituir crímenes de guerra o contra la Humanidad», afirmó el responsable del grupo de expertos, el argentino Santiago Cantón. Aunque Israel no les dio permiso para trabajar sobre el terreno, realizaron cientos de entrevistas y analizaron videos para poder extraer una conclusiones que vuelven a poner sobre la mesa los excesos del Ejército. Israel rechazó la validez de la investigación y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, consideró que «marca nuevos récords de hipocresía y mentiras por el odio obsesivo a Israel» e insistió en que «los soldados del Ejército seguirán defendiendo a los israelíes contra los ataques». Los convenios internacionales reconocen el derecho a la legítima defensa, pero el disparar directamente a un civil desarmado está considerado crimen de guerra y «no cabe justificación alguna para asesinar o herir a periodistas, médicos y personas que no suponen una amenaza inminente», según Sara Hossain, experta del grupo internacional que calificó de «especialmente alarmantes» los ataques contra «niños, periodistas y personas con discapacidad».

El informe subraya el carácter civil de unas movilizaciones multitudinarias en la que «había violencia por parte de una minoría que lanzaba piedras y quemaba ruedas», pero donde la inmensa mayoría «era pacífica, eran mujeres y niños», según Hossain. Tras la publicación de la investigación el



organismo de derechos humanos israelí Betselem reiteró su llamamiento a los soldados «para que no cumplan con órdenes manifiestamente ilegales» de «disparar contra manifestantes desarmados que no representan una amenaza para nadie», un llamamiento que realizan sin éxito desde hace casi un año junto a otros grupos como Breaking The Silence.

Justicia internacional

No es la primera vez que el organismo internacional documenta los excesos de las fuerzas israelíes y los investigadores adelantaron que enviarán la «información relevante» a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos para que pueda ser utilizada en posibles procesamientos judiciales.

La Presidencia palestina anunció a través de un comunicado que es el momento de que «la Corte Penal Internacional (CPI) abra inmediatamente una investigación sobre estos delitos» para lograr «responsabilizar a Israel» por estos crímenes y aplaudió el trabajo de los investigadores. Todo lo contrario que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Emanuel Nahsón, que consideró al organismo de la ONU «un cómplice de facto de Hamás», grupo islamista que controla la Franja y a quien Israel acusa de promover la violencia en las marchas semanales.



ISRAEL LEVANTA UN NUEVO MURO EN LA FRANJA DE GAZA

Seis metros de altura de hormigón sustituirán a la actual valla fronteriza.

Israel aprieta aún más si cabe a la población de Gaza, donde ha empezado ya a construir una nueva barrera entre su territorio y la franja palestina que se encuentra bajo un larguísimo asedio, con el fin de sellar la frontera y evitar infiltraciones. Así lo anunció el jueves 3 de enero la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Durante el fin de semana comenzamos a construir la barrera por encima del nivel del suelo a lo largo de la frontera de Gaza que evitará que los terroristas de Gaza penetren en nuestro territorio”, señaló Netanyahu en la reunión semanal de su gabinete de gobierno, según un comunicado. Según el diario Jerusalem Post, el nuevo muro, construido con cemento y de unos seis metros de altura, reemplazará a la actual valla fronteriza con la Franja, que se encuentra bajo bloqueo israelí después de que en el partido islamista ganara la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2016 y tras los posteriores duros enfrentamientos armado entre las milicias palestinas de Al Fatah y Hamas a lo largo de 2007.

El Jueves 3 de enero, cinco palestinos procedentes de Gaza, algunos de ellos armados con cuchillos y alicates, fueron arrestados por el Ejército israelí en las inmediaciones del perímetro del enclave, según informó el medio israelí Times of Israel.



Además del muro de separación terrestre, Israel cuenta con otras dos: una marítima de unos 200 metros de largo, 50 de ancho y seis de alto que está construyendo y otra subterránea de algunas docenas de metros - el Ejército no ha especificado cuántos- con el objetivo de detectar y destruir túneles que pretendan penetrar en territorio israelí. “Si no se mantiene la calma en Gaza, tomaremos las decisiones incluso en el período electoral y no dudaremos en actuar”, advirtió Netanyahu en referencia a los comicios que se iban a celebrar el 9 de abril. La frontera entre Israel y la franja ha sido el escenario de la Gran Marcha del Retorno, en protestar por el bloqueo y por el derecho al retorno de los refugiados palestinos.

VIOLENCIA CONTENIDA EN EL ANIVERSARIO DE LA GRAN MARCHA DEL RETORNO EN GAZA

Tres palestinos perdieron la vida y cientos resultaron heridos en una jornada de protesta que reunió a 40.000 manifestantes.

La Gran Marcha del Retorno cumplió un año el sábado 30 de marzo, en una jornada en la que otros tres manifestantes, dos de ellos menores de edad, perdieron la vida por disparos de los soldados de Israel y cientos resultaron heridos. Decenas de miles de palestinos -40.000, según las cifras reveladas por el Ejército- respondieron a la llamada de los organizadores de estas movi-



lizaciones que reivindican, por un lado, el derecho de los refugiados a regresar a las tierras de las que fueron expulsados tras la creación del Estado judío y, por otro, el levantamiento del bloqueo.

Tras una semana marcada por la enésima escalada de tensión debido al lanzamiento de cohetes

palestinos y a los bombardeos israelíes, la mediación de Egipto logró que ambas partes se contuvieran en el aniversario de las protestas. A diferencia de lo ocurrido en anteriores manifestaciones, el Ejército empleó más gas que balas y Hamás desplegó a sus fuerzas de seguridad para contener en la medida de lo posible las ansias de los más impulsivos de asaltar la verja de separación.

La afluencia de manifestantes comenzó a primera hora de un día en el que los colegios cerraron sus puertas y en el que se decretó huelga general en Gaza. Familias enteras, muchas de ellas gracias a los medios de transporte fletados por Hamás, se desplazaron a alguno de los cinco puntos de protesta para conmemorar el aniversario y recordar a los casi doscientos muertos por disparos de Israel desde el inicio de la Gran Marcha.

Una comisión de la ONU investigó recientemente estas muertes y concluyó en un informe que «hay bases razonables» para creer que los soldados «cometieron violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria, en algunos casos constitutivas de crímenes de guerra o contra la humanidad». La Policía controlaba los accesos y, una vez dentro, personal con chalecos de color naranja advertía de la peligrosidad de acercarse a la verja, allí donde solo llegaban reducidos grupos

de jóvenes para desafiar a los soldados con piedras y «cuchillos, explosivos y granadas», según informaron las fuerzas israelíes.

«La contención demostrada el sábado 30 de marzo por Hamás no la hemos visto en todo el año. Esto pone de manifiesto que son ellos quienes controlan las movilizaciones y determinan lo



calientes que pueden ser». Son palabras del portavoz del Ejército, general Ronen Manelis. Otra de las medidas de precaución adoptadas por los organizadores fue la de alejar los campamentos de protesta a una distancia de setecientos metros de la verja. A esta distancia permanecieron la inmensa mayoría de manifestantes que vivie-

ron un día festivo entre discursos y la música patriótica que atronaba desde los altavoces.

En una fecha tan señalada como la Gran Marcha del Retorno no faltaron en la protesta los líderes de Hamás. El máximo responsable de los islamistas, Yehya Sinwar, declaró a los medios de comunicación que «en los próximos días esperamos terminar las negociaciones y alcanzar medidas concretas para aliviar el bloqueo». Esta es la prioridad de la facción palestina que manda en la Franja y que, como ocurre con Israel, no parece que esté dispuesta a afrontar una nueva guerra en estos momentos. La otra reivindicación de la Gran Marcha es el regreso de los refugiados a sus tierras, pero está fuera de cualquier mesa de diálogo a corto plazo aunque sea un derecho reconocido por la resolución 194 de Naciones Unidas.

El aparente entendimiento entre israelíes e islamistas no significa que las movilizaciones en la frontera vayan a finalizar porque «se trata de derechos a los que no podemos renunciar y por eso debemos seguir apostando por esta vía pacífica de presión a Israel», apuntó Istiklal, miembro del comité organizador.

A las cinco de la tarde, los móviles de miles de gazatíes recibieron un mensaje de texto de Hamás para recordar que debían manifestarse «de forma pacífica».

Poco después se anunció por megafonía el final de las protestas y el personal de seguridad comenzó a desalojar las acampadas. Fue el epílogo del primer aniversario de una Gran Marcha del Retorno en la que ambos lados de la verja demostraron que pueden hacer mucho más para evitar tantos muertos y heridos.



ISRAEL ARRASA DECENAS DE VIVIENDAS PALESTINAS TUTELADAS POR LA ANP

Las máquinas demolieron doce edificios, con más de 70 hogares, en un barrio de Jerusalén Este.

La casa adonde el palestino Akran Yawahda iba a mudarse con su familia se convirtió el martes 23 de julio ante sus ojos en una montaña de escombros, cuando Israel inició la primera demolición masiva que lleva a cabo en un barrio bajo jurisdicción exclusivamente palestina.

Yawahda comenzó a construirla en 2014 con los permisos de edificación pertinentes de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gestiona el vecindario de Wadi Humus, con una compleja administración, ya que, aunque linda con Jerusalén Este, no quedó anexionado en 1980 como el resto de la ciudad.

El derribo de doce edificios con más de 70 viviendas "es algo muy peligroso", valora Walid Ashaf, jefe de la Comisión de Resistencia del Muro y los Asentamientos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), por los precedentes que, asegura, establecen.



Se trata de la primera demolición que Israel ejecuta en zonas declaradas A y B, cuya planificación y Administración Civil, según los Acuerdos de Oslo, recaen en la ANP -excluyendo las que se llevaron a cabo en operaciones militares como en la Segunda Intifada (2000-2005) y las demoliciones de represalia de viviendas de atacantes palestinos-, explicó Ashaf.

CONDENAS A LA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS PALESTINAS

Seis países de la UE denunciaron la violación de los Acuerdos de Oslo por parte de Israel.

Naciones Unidas- Los países de la Unión Europea en el Consejo de Seguridad de la ONU condenaron el martes 23 de julio "enérgicamente" la demolición por parte de Israel de edificios palestinos en el distrito de Wadi Humus, en Jerusalén, y aseguraron que viola los Acuerdos de Oslo y contradice las resoluciones del Consejo.

Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania, Polonia y Estonia -que en enero de 2020 se convertirá en miembro temporal del Consejo de Seguridad- formalizaron esta condena en un comunicado conjunto que leyeron tras la conclusión de una reunión del máximo órgano de la ONU para discutir la situación en Palestina e Israel.

"Estamos seriamente preocupados por la continua demolición de propiedad palestina por parte de las



autoridades israelíes", aseguró la embajadora del Reino Unido ante la ONU, Karen Pierce, quien insistió en que "la demolición en territorios ocupados es contraria a la ley humanitaria internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad".

ISRAEL PROMUEVE 2.300 CASAS Y LEGALIZA COLONIAS EN CISJORDANIA

Junto a las más de 1.000 casas autorizadas el lunes 5 de agosto, son 2.304 residencias y tres asentamientos legalizados.

Las autoridades militares israelíes promovieron el martes 6 de agosto nuevos planes para la construcción de colonias judías en el territorio palestino de Cisjordania que, junto a las más de mil casas autorizadas el lunes 5 de agosto, ascienden a un total de 2.304 residencias y la legalización de tres asentamientos que no contaban todavía con permisos.

La Administración Civil (organismo militar israelí que gestiona la ocupación) dio luz verde entre en los días 5 y 6 de agosto, a diversos proyectos que incluyen 838 viviendas en fase de validación y 1.466 en fase de depósito, según informó la ONG israelí Paz Ahora (Shalom Ajshav).

Además, el organismo regularizó los asentamientos de Guivat Salit, en el Valle del Jordán, el de Ibei Hanahal, al sureste de Belén, y el de Haroeh Haivri, al este de la ciudad de Jerusalén, que habían sido construidos sin autorización del Gobierno aunque con su connivencia. El 88% de las casas aprobadas están localizadas en



colonias israelíes que deberían ser evacuadas si se llegase a un acuerdo con la solución de dos Estados, según Paz Ahora. "La aprobación de los planes es parte de una desastrosa política del Gobierno diseñada para impedir la posibilidad de paz y la solución de dos Estados y anexionar parte o toda

Cisjordania", señaló la ONG en un comunicado.

La primera semana de agosto, el Gabinete israelí aprobó un plan para 6.000 viviendas de colonias judías de Cisjordania, en la misma sesión en la que dio luz verde a un inusual proyecto de 700 casas para palestinos en la llamada Área C de ese territorio ocupado, controlado por Israel. Estas últimas fueron aprobadas días después de que las autoridades israelíes derribaran -por primera vez al margen de operaciones militares- edificios palestinos en una zona de Jerusalén Este que está bajo jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), conforme a los Acuerdos de Oslo. Para la comunidad internacional, las colonias asentadas en territorio ocupado no tienen base legal y constituyen una violación del derecho internacional y un obstáculo para una paz justa y duradera.

LOS BOMBARDEOS ISRAELÍES MATAN A 16 PALESTINOS, ENTRE ELLOS UN BEBÉ DE 14 MESES

El primer fin de semana de mayo fue especialmente dramático en la Franja de Gaza. El viernes 3 de mayo dos oficiales israelíes resultaron heridos por proyectiles disparados desde Gaza, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó "ataques masivos contra la Franja" lo que causó la muerte de 16 palestinos y 3 israelíes, entre ellos una niña palestina de 14 meses.

El sábado 4 de mayo murieron cuatro palestinos por los bombardeos israelíes,



dos milicianos, una mujer embarazada y su bebé de 14 meses. Hoy, Israel aseguró que estas últimas no perdieron la vida por uno de sus misiles, sino por un cohete disparado por Hamás, que lo negó tajantemente. Al día siguiente domingo 5 de mayo, se celebró el funeral por estas víctimas en medio de grandes muestras de dolor.

Ese mismo día murieron al menos 12 palestinos en ataques de la aviación israelí: siete miembros de las milicias armadas, dos personas en el campo de refugiados de Al Bureij y otro en los bombardeos en Rafah, al sur de Gaza.

Además, tres miembros de una familia, entre las que había una mujer embarazada, perdieron la vida por bombardeos en el norte de la ciudad.



Las alarmas antiaéreas continuaron sonando en las comunidades israelíes adyacentes a la Franja en el peor repunte de violencia desde 2014, en el que las milicias lanzaron más de 600 cohetes, que fueron sido respondidos por bombardeos de Israel contra más de 250 objetivos militares en el enclave. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que controla la Franja de Gaza solicitó a Israel a través de los mediadores egipcios una tregua en los ataques de ambas partes en este enclave palestino, según los medios de comunicación israelíes. Los mediadores egipcios empezaron a trabajar para lograr una tregua, junto a representantes de la ONU implicados en las negociaciones.



ISRAEL TRASLADA A GAZA SU PULSO CON IRÁN

El asesinato de un comandante de Yihad Islámica y su esposa en la Franja provoca una lluvia de cohetes palestinos contra territorio hebreo.

La violencia volvió a Gaza después de meses de relativa calma en los que se había respetado el último acuerdo de alto el fuego alcanzado



de este modo comenzó una jornada en la que el grupo

con la mediación de Egipto. El Ejército de Israel retomó lo que denomina asesinatos selectivos y su objetivo fue Baha Abu al Ata, líder del brazo militar de Yihad Islámica, facción palestina próxima a Irán. El comandante, de 42 años, y su esposa, Alma, de 39, fallecieron el martes 12 de noviembre en un ataque contra su vivienda en la ciudad de Gaza. Y

palestino clamó venganza y lanzó más de 160 cohetes, algunos de los cuales alcanzaron Tel Aviv. Al menos otros cinco palestinos, dos de ellos milicianos de Yihad Islámica, murieron en las tres oleadas de bombardeos de respuesta de los israelíes por tierra y aire a lo largo del día. Según portavoces militares, los blancos alcanzados fueron instalaciones subterráneas, almacenes y campos de entrenamiento del brazo armado de esta facción palestina.

El golpe contra el grupo armado próximo a Teherán fue doble, porque al mismo tiempo que Israel anunciaba su operación en Gaza la agencia oficial Sana informó del ataque sufrido por Akram al Jouri, alto mando de Yihad Islámica refugiado en Siria, donde la organización tiene su cuartel general. Tres misiles impactaron en su vivienda en Damasco, situada en el barrio de Mezze, pero el dirigente logró salir con vida. No tuvieron la misma fortuna uno de sus hijos y otro civil, según apuntó Sana.

Abu al Ata era considerado «una bomba de relojería», según la definición ofrecida de Benjamín Netanyahu, que alertó a sus ciudadanos de que la inestabilidad provocada por esta operación «puede durar tiempo». El primer ministro en funciones insistió en que Israel no busca «una escalada, pero haremos lo que sea necesario para defendernos».

En el 2012, el asesinato de Ahmed Yabari, líder del ala militar de Hamás, marcó el inicio de la operación Pilar Defensivo. Netanyahu ofreció una rueda de prensa conjunta con el jefe del Ejército, teniente general Aviv Kochavi, y el del Shin Bet, Nadav Argaman, en la que señaló que «los terroristas se creen que pueden atacar a civiles y esconderse detrás de civiles». Israel responsabilizó a Abu al Ata «de varios ataques terroristas y de disparos de cohetes contra el Estado de Israel», según Netanyahu, y en los medios israelíes le señalaron como el culpable de que no se consolide un alto el fuego estable con Hamás. Kochavi aseguró además que «en los últimos días estaba trabajando para perpetrar nuevos ataques». El político ultranacionalista Naftali Bennet estrenó su cargo de ministro de Defensa con esta crisis, ante la que decidió decretar el estado de «zona especial» por 48 horas para el área dentro del perímetro de 80 kilómetros de la Franja.

Yihad Islámica es un grupo independiente de Hamás y aunque ambas facciones han marchado de la mano en



las últimas ofensivas de Israel, sus estrategias son diferentes y, sobre todo, sus responsabilidades, ya que en el caso de Hamás sus miembros son los encargados de gobernar en una Franja donde no se han curado aún las heridas de las tres guerras libradas con los israelíes desde el 2008. En las horas posteriores al asesinato del comandante Al Ata, fue Yihad Islámica la que lanzó cohetes y anoche seguía en el aire la decisión final de Hamás de unirse a la respuesta a la ofensiva de Israel o no.

El portavoz de Yihad Islámica, Musab al Brain, clamó venganza y, ante las informaciones que apuntaban a que Egipto estaba tratando de mediar contrarreloj para evitar una mayor escalada de violencia, declaró que «es prematuro hablar de mediación antes de que se haya secado la sangre de nuestros mártires». Khaled al Batsh, alto mando del grupo en Gaza, calificó el asesinato de su comandante de «declaración de guerra» y adelantó que «no permitiremos que Israel cambie las normas de enfrentamiento, Netanyahu pagará el precio y volverá a fallar».

Al Batsh recordó que Yihad Islámica dispone de combatientes y cohetes suficientes para continuar con la lucha y «defender los objetivos de la resistencia». Una forma de sacar músculo ante el enemigo y ante los gazatíes, acostumbrados a que sea Hamás quien esté al frente de las grandes operaciones contra Israel.

El asesinato de Abu al Ata pilló a todos por sorpresa e Ismael Haniya, ex primer ministro palestino y dirigente de Hamás, acusó a los israelíes de «intentar crear confusión» para romper «la unidad» entre palestinos en la Franja. Desde mediados de 2018 son diez los picos de violencia entre las facciones palestinas de Gaza e Isra, incluido el de ayer. Los repuntes anteriores se lograron contener con frágiles treguas con la mediación de Catar, las Naciones Unidas y Egipto.

ISRAEL “INVESTIGA” LA MUERTE DE OCHO CIVILES EN UN BOMBARDEO EN GAZA DE SU EJÉRCITO

El Ejército admite que el ataque, como respuesta a los cohetes de la Yihad Islámica, produjo «víctimas inesperadas» al matar a una familia entera de palestinos.

Ni era un almacén de armas, ni Rasmi Abu Malhus era un comandante de Yihad Islámica, como informó el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, que incluso difundió una foto en las redes sociales del supuesto comandante, al que nadie conocía. La aviación de Israel bombardeó el miércoles 13 de diciembre la casa en la que vivían los hermanos Rasmi y Mohamed en el campo de refugiados de Dir Al Balah, en el centro de Gaza, y mató a ocho miembros de la familia Sawarka, entre ellos a Wasim de 13 años, Mohamed de 12, Moath de 7, Salem de 3 y Feras de 2 años. Israel reconoció que se trata de víctimas civiles “inesperadas” y en una declaración señaló que “según las informaciones que poseía el ejército en el momento del ataque, no estaba previsto que causara víctimas civiles”. Ante la gravedad de los hechos “las fuerzas armadas israelíes investigan el daño causado a civiles”.

El edificio atacado estaba en la lista de “objetivos potenciales del Ejército”, pero fuentes militares consultadas por el diario Haaretz revelaron que “llevaba un año sin ser revisado y nadie lo inspeccionó antes del ataque”. Al contrario de lo que se declaró a los medios en un primer momento, estas mismas fuentes confir-



maron que el lugar del ataque era un “complejo de chabolas sin mayor importancia” y mostraron su “frustración” por lo sucedido y por cómo se informó a los medios.

El bombardeo de Dir Al Balah fue el más sangriento de las 48 horas de violencia que estallaron en la Franja tras la muerte de Bahaa Abu Al Ata, jefe militar de Yihad Islámica, en un asesinato selectivo israelí en la madrugada del martes 12 de noviembre. La respuesta del grupo consistió en el lanzamiento de más de 400 cohetes. Los aviones y tanques de Israel bombardearon y 34 personas palestinos la vida, entre ellas los ocho miembros de la tribu Sawarka, pero también varios milicianos de Yihad Islámica, como hizo público este movimiento que tiene una estrecha conexión con Irán.

El jueves 14 de noviembre se hizo público un acuerdo para el cese de las hostilidades, volvieron a disparearse cohetes de forma esporádica de Gaza e Israel también bombardeó de manera puntual, lo que muestra la fragilidad de un pacto logrado gracias a la mediación de Egipto y Naciones Unidas. En esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido en las tres ofensivas lanzadas por Israel desde 2008, Hamás no entró en el combate y fue Yihad Islámica la que combatió a base de cohetes. La tregua no fue bien recibida en algunas partes de la Franja donde grupos de manifestantes se echaron a las calles para criticar la decisión de Hamás de no unirse a los combates. El grupo islamista gobierna en Gaza desde 2007 y ha demostrado que no está dispuesto a afrontar una nueva guerra.



ISRAEL, LA PRIMERA “DEMOCRACIA” EN EXPULSAR AL REPRESENTANTE DE HUMAN RIGHTS WATCH

Israel expulsó el lunes 25 de noviembre al director de la organización Human Rights Watch (HRW) en Israel y los Territorios Palestinos, Omar Shakir, que se convierte en la primera persona en ser expulsada de Israel, en el marco de una serie de medidas contra una campaña de boicot al Estado hebreo.



democracia israelí”, añadió. Omar Shakir continuará ocupándose de Israel y de los Territorios Palestinos pero desde el extranjero, indicó la ONG. “Israel, como cualquier país tiene la potestad de decidir quien tiene el derecho de entrar y trabajar en el interior de sus fronteras” justificó el ministerio de

Desde 2017, Israel prohíbe la entrada a su territorio a cualquier extranjero que esté acusado de apoyar la campaña BDS (boicot, desinversión, sanciones) contra el país. Pero, según el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, el director de Human Rights Watch, Omar Shakir, que tiene nacionalidad estadounidense, es el primero en ser expulsado en virtud de esta medida.

Israel rehusó renovar su visado a finales de 2018, acusándolo de apoyar el BDS, lo que Omar Shakir desmintió. Tras una serie de recursos, el Tribunal Supremo israelí aprobó a principios de noviembre su expulsión.

“Espero que en un día mejor, vengan a acogerme aquí. Un día en el que, todos, israelíes y palestinos, verán respetados sus derechos humanos y que la igualdad para todos sea la norma” afirmó Shakir en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

Una veintena de personas, con pancartas en las que se podía leer “No pueden esconder la ocupación”, estaban presentes para expresar su apoyo al responsable de HRW, una ONG de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York.

El vuelo despegó rumbo a Múnich el lunes 25 de noviembre por la noche.

Democracia “restringida”

“No recuerdo ninguna otra democracia que haya bloqueado el acceso a un investigador de Human Rights Watch”, declaró Kenneth Roth, director de HRW. “Esto demuestra el carácter cada vez más restringido de la

Asuntos Estratégicos, punta de lanza de la campaña israelí contra el BDS.

La Unión Europea expresó su oposición a la decisión de Israel, y la ONU ya advirtió en el mes de mayo que los activistas por los derechos humanos cada vez tendrían menos margen para actuar en Israel. Por su parte, Estados Unidos declaró su “fuerte oposición a la campaña BDS contra el Estado de Israel” pero también recalco su apego a la libertad de expresión.

Esta expulsión “es un acto desesperado y despota coherente con las prácticas ilegales de ese régimen de ocupación”, denunció Hanane Ashraui, una responsable de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

En el centro del conflicto entre Israel y HRW se esconde la guerra que libra el Estado hebreo contra la campaña mundial BDS.

Esta campaña insta al boicot económico, cultural o científico de Israel para que termine la ocupación y la colonización de los Territorios Palestinos. Quienes lo defienden se apoyan en casos como el de Sudáfrica, cuyo boicot permitió que se pusiera fin al régimen del apartheid, aseguran.

Israel acusa al BDS de antisemitismo, algo que los partidarios de la campaña desmienten.

En un primer momento, para justificar la expulsión, el Estado hebreo recurrió a unos comentarios de Omar Shakir en los que defendía el boicot a Israel, antes de que asumiera sus funciones en Israel, en 2017.

Además, las autoridades israelíes reprocharon a HRW su crítica a las colonias israelíes en Cisjordania ocupada, ilegales según el derecho internacional.

“Todos los que actúan contra Israel deben saber que no les permitiremos vivir ni trabajar aquí”, declaró tras el fallo del Tribunal Supremo el ministro israelí de Interior, Aryeh Deri, que citó a Shakir como “uno de los dirigentes del movimiento BDS”.

“Ni Human Rights Watch ni yo como representante suyo instamos nunca al boicot a Israel”, se defendió Shakir.

Tal y como hace con los gobiernos, HRW pide a las empresas que operan en las colonias de Cisjordania ocupada que dejen de hacerlo, al considerar que estarían contribuyendo a que se violen los derechos humanos, explicó el responsable.

Más de 600.000 israelíes viven en colonias de Cisjordania y de Jerusalén Este, unos territorios ocupados por Israel desde 1967 donde viven alrededor de tres millones de palestinos. Estas colonias carecen “de base en el derecho” y constituyen una “violación flagrante del



El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth y Omar Shakir, director de la ONG para Israel y los Territorios Palestinos en un hotel de Jerusalén Este el 24 de noviembre de 2019

derecho internacional”, según la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU.

UN NIÑO DE 11 AÑOS, SUPERVIVIENTE DE UNA FAMILIA PALESTINA BOMBARDEADA POR ISRAEL

Diaa es un niño de 11 años, supervivientes del bombardeo de Israel que mató a ocho miembros de su familia en Gaza.

Diaa camina como un sonámbulo entre los escombros. El pequeño de rostro moreno y pelo negro y duro es diminuto en la inmensidad del cráter con el que un misil destrozó su familia, su casa y su vida en el campo de refugiados de Dir Al Balah, en el centro de Gaza. Rebusca entre la chatarra. Saca ropa vieja, libros, un peine... «busco unas chancletas, las últimas que me compró mi madre. Las necesito de verdad porque las que llevo ahora me quedan muy grandes. ¿Dónde pueden estar?», se pregunta a sí mismo este niño de 11 años. Habla solo. Su mirada está clavada en la arena y habla y habla con su pasado. Su vida se detuvo el miércoles 13 de noviembre cuando Israel atacó la choza en la que vivía y mató a ocho miembros de su familia, entre ellos sus padres y tres hermanos. Diaa se ha quedado huérfano por culpa de



un ataque en el que los israelíes aseguraron en un primer momento haber matado a un destacado comandante de Yihad Islámica. Mintieron.

Su padre era Rami Abu Malhus, tenía 46 años y vivía gracias al sueldo de prejubilado que recibía del Gobierno de Ramala y lo que podía ganar de sus cultivos y cabras. Pertenecen a la tribu Sawarka, son beduinos, y Rami tenía tres mujeres y catorce hijos. «Somos una familia tan grande como humilde, que no tiene nada que ver con la política o con las facciones armadas», explica Ahmed, primo del cabeza de familia fallecido que da la bienvenida a quienes se acercan al vela-

torio, situado en una casa a solo unos minutos a pie del lugar del ataque. Una gran foto del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abás, preside la tienda donde la familia recibe a las visitas. Esta foto y unos colchones son la ayuda que recibieron de las instituciones.

Este bombardeo fue el más sangriento de los que realizó Israel en las 48 horas de violencia que siguieron al asesinato selectivo de Bahaa Abu Al Ata, jefe del brazo militar de Yihad Islámica. Esta facción palestina próxima a Irán vengó su muerte con el lanzamiento de más de 400 cohetes, pero acabó acordando un alto el fuego tras dos días de combates en los que no participó Hamás. Los israelíes mataron a 34 personas, entre ellas los ocho miembros de la familia Sawarka, seis de ellos niños, y varios milicianos de Yihad Islámica, como admitió el propio movimiento.

Investigación abierta

El Ejército de Israel reconoció que se trata de víctimas civiles «inesperadas» y en una declaración señaló que «según las informaciones que poseíamos en el momento del ataque, no estaba previsto que causara víctimas civiles». Ante la gravedad de los hechos «las fuerzas armadas israelíes investigan el daño causado a civiles», informó el Ejército. La vivienda atacada estaba en la lista de «objetivos potenciales», pero fuentes militares consultadas por el diario Haaretz revelaron que «llevaba un año sin ser revisado y nadie lo inspeccionó antes del ataque». Al contrario de lo que se declaró a los medios



en un primer momento, estas mismas fuentes confirmaron que el lugar del ataque era un «complejo de chabolas sin mayor importancia» y mostraron su «frustración» por lo sucedido y por cómo se informó a los medios.

El hogar de Diaa era una vivienda irregular levantada en uno de los terrenos que quedó vacío tras el desmantelamiento de los asentamientos israelíes en 2005, junto al lado de lo que era el puesto de control Abu Holy. «Estábamos dormidos y de pronto todo saltó por los aires. Yo salí despedido y me encontré fuera de la casa, metido en la arena hasta las rodillas. Logré salir y vi a mi hermano Mohanad al lado, solo las piernas sobresalían de la arena. Estaba muerto», recuerda Diaa desde lo alto del cráter. Su nombre significa ‘luz’ en árabe, pero su mirada y, sobre todo su voz, están apagadas. Está sin estar. Además de sus padres y tres hermanos, el pequeño perdió también a tres primos. Su tío, Mohamed, permanece en estado crítico en el hospital.

«Hemos recibido la visita de personas de organizaciones de derechos humanos que recopilan información sobre el caso para poder presentarlo ante la justicia internacional... pero eso lleva tiempo, seguro, y a nosotros lo que nos preocupa es la situación presente estos niños huérfanos», comenta Ahmed entre abrazo y abrazo. Sabe que los israelíes reconocen el error y que el Ejército ha abierto una investigación, pero considera que «es solo propaganda para los medios, nada cambiará para nosotros». Diaa sigue inmerso en su búsqueda de la chancleta. Una búsqueda que, después de cuatro días, finaliza. Sale del cráter con una sandalia de plástico chamuscado en la mano. Nada cambiará para Diaa.



CANADÁ ABANDONA A ISRAEL EN LA ONU PARA APOYAR A LOS PALESTINOS JUNTO A OTROS 165 PAÍSES

El Estado hebreo solo mantiene el apoyo de EE UU y algunas pequeñas islas, mientras Reino Unido, Alemania y Francia le conminan a «terminar con los asentamientos».



Israel se va quedando sin amigos y sin apoyos en la ONU. Sólo Estados Unidos y algunas islas diminutas -Micronesia, Nauru y Marshalls - votaron el miércoles 20 de noviembre en contra de la resolución que reconoce el derecho a la autodeterminación palestina, dos días después de que EE UU conmoviera a la comunidad internacional al declarar legítima la ocupación de esos territorios con asentamientos judíos.

En total, 165 países votaron a favor de la resolución de la Asamblea General, mientras que nueve aliados de EE UU, como Australia, Guatemala y Ruanda, prefirieron abstenerse. El cambio más notable vino de Canadá, que desde 2006 había votado en contra de esa resolución que demanda a Israel acabar con «la ocupación que comenzó en 1967».

La decisión de EE UU provocó este cambio de posición que revierte la postura canadiense en 14 votaciones consecutivas. Fuentes diplomáticas canadienses dijeron expresamente que su gobierno no está de acuerdo con la decisión estadounidense, que consideran «inconsistente con la legislación internacional», por lo que pretendían enviar «un mensaje» a Israel. La política anunciada por el secretario de Estado Mike

Pompeo el lunes 18 de noviembre recibió también un fuerte rechazo de los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio la calificó de «flagrante violación de la legislación internacional». Nickolay Mladenov advirtió de que «estos movimientos unilaterales socavan significativamente las perspectivas de establecer un estado palestino contiguo», pero para el representante palestino en la ONU, Riyad Mansour, no es casualidad. El objetivo es «sabotear cualquier posibilidad de alcanzar paz, seguridad y estabilidad», dijo.

Por su parte, el Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y Polonia hicieron pública una declaración conjunta en la que conminan a Israel a «terminar todas las actividades de los asentamientos, de acuerdo con sus obligaciones como poder ocupante».

YEMEN

LA ONU PIDE A RIAD QUE ACLARE EL ATAQUE MÁS SANGRIENTO DEL AÑO EN YEMEN

Más de cien personas murieron en el bombardeo del domingo 1 de septiembre contra un centro de detención de los rebeldes hutíes.



Naciones Unidas pidió a la coalición que lidera Arabia Saudí una investigación para aclarar lo

ocurrido en el bombardeo del domingo 1 de septiembre contra un centro de detención de los rebeldes hutíes en el que murieron más de cien personas, el más sangriento de lo que llevamos de 2019. «Espero que la coalición ponga en marcha una investigación sobre este incidente, debe prevalecer la responsa-

bilidad», apuntó el enviado a Yemen del organismo internacional, Martin Griffiths, que lamentó esta nueva «tragedia». El Gobierno de los rebeldes chífes acusó a los aviones de Riad de atacar una universidad reconvertida en prisión en la ciudad de Dhamar, a unos 100 kilómetros al sur de la capital, Saná. El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) acudió de manera inmediata al lugar y Franz Rauchenstein, responsable del organismo en Yemen, declaró que «ser testigo de este daño masivo, ver los cuerpos tendidos entre los escombros fue un verdadero shock. La ira y la tristeza fueron reacciones naturales. Las personas que no participan activamente en el combate no deberían morir de esa manera». La coalición confirmó el ataque contra «almacenes útiles de drones y misiles en Dhamar», apuntó a que «el objetivo era legítimo» debido a la presencia de baterías antiaéreas en su tejado y lo consideraron en todo caso una «prisión secreta» e ilegal del enemigo de la que no tenían sus coordenadas. Este punto fue rebatido por los hutíes, que aclararon que se trataba de un lugar visitado con frecuencia por el CICR para poder ver el estado en el que se encontraban los presos. La guerra en Yemen estalló en 2015 y desde entonces han muerto más de 70.000 personas, según estima-



ciones de la ONU, que califica la situación en el país como «el peor desastre humanitario del mundo». Los rebeldes hutíes, alineados con Irán, se enfrentan a una coalición internacional respaldada por Occidente y liderada por Riad. En agosto esta alianza quedó al borde de la ruptura después de que la milicia separatista apoyada por Emiratos Árabes Unidos se hiciera con el control de Aden tras enfrentarse a las fuerzas leales a Arabia Saudí.

UN INFORME DE LA ONU ACUSA A EEUU, FRANCIA Y REINO UNIDO DE SER CÓMPLICES DE POSIBLES CRÍMENES EN LA GUERRA DE YEMEN

Estados Unidos, Reino Unido y Francia podrían ser cómplices de crímenes de guerra en Yemen por su respaldo a Arabia Saudita, según Naciones Unidas.



La guerra de Yemen está considerada como la mayor crisis humanitaria del mundo.

Un informe de la ONU presentado el martes 3 de septiembre carga contra los países que suministran armas y apoyo logístico a la coalición liderada por el gobierno de Riad por contribuir así al sufrimiento y hambruna de la población civil que vive en guerra desde hace cinco años. «Está claro que el continuo suministro de armas a las partes en conflicto está perpetuando el enfrentamiento y prolongando el sufrimiento del pueblo yemení», dijo ante la prensa la experta independiente del panel de la ONU Melissa Parke.

Por ello, el organismo internacional recomendó que todos los Estados prohíban la transferencia de

armas a las partes involucradas para evitar que sean utilizadas en violaciones graves de derechos humanos.

EEUU, Reino Unido y Francia son los mayores vendedores de armas a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU), líderes de la coalición que lucha contra el movimiento hutí que controla la capital yemení.

El rol de la comunidad internacional

Para elaborar su informe, un grupo de expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó más de 600 entrevistas a víctimas y testigos, examinó documentos e investigó casos representativos.

Tras su análisis, los expertos denunciaron una serie de posibles crímenes cometidos durante los cinco años de guerra en el país árabe y violaciones de derechos humanos como bombardeos indiscriminados, asesinatos y detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y de género, y bloqueo al acceso a la ayuda humanitaria.

"Las violaciones contra civiles yemeníes continúan sin cesar tras cinco años de conflicto, con un total despreciable por la difícil situación de la población y la falta de acción internacional para exigir responsabilidades a las partes en el conflicto", señaló el presidente del grupo de expertos de la ONU, Kamel Jendoubi.

De hecho, la ONU pone de relieve en su informe la importancia del rol de los países occidentales que apoyan a los Estados árabes y el de Irán al respaldar a los hutíes.

"La comunidad internacional tiene que dejar de hacer la vista gorda ante estas violaciones y la intolerable situación humanitaria", dijo Kamel Jendoubi.



El informe recuerda que los terceros países están obligados "a adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el respeto del derecho internacional humanitario por todas las partes en el conflicto".

Violaciones en ambos bandos

El informe identifica violaciones de los derechos humanos en ambos bandos del

conflicto y acusa de una "falta de responsabilidad generalizada" tanto a los gobiernos de Yemen, Arabia Saudita y EAU, como a los hutíes y comités populares afiliados. A la coalición internacional la responsabiliza de matar a civiles en ataques aéreos y negarles alimentos de forma deliberada en un país que enfrenta una de las peores hambrunas del último siglo en el mundo.

A los hutíes, por su parte, lo señala por haber bombardeado ciudades, utilizado niños soldados y recurrido a una estrategia de guerra similar al asedio.

El grupo de expertos identificó a un número indeterminado de "individuos que podrían ser responsables de crímenes internacionales" y presentaron una lista confidencial a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"Esta impunidad endémica no puede tolerarse más. Las investigaciones imparciales e independientes deben habilitarse para exigir responsabilidad a quienes no respeten los derechos del pueblo yemení", dijo Jendoubi, quien calificó de "inhumana" la falta de acceso a medicinas, agua y alimentación que sufre la población.

"La supervivencia de los 24 millones de personas necesitadas debería ser la prioridad", agregó.

La guerra de Yemen está considerada como la mayor crisis humanitaria del mundo. Según datos publicados por ACNUR en marzo, solo en 2018 se reportaron más de 4.800 civiles muertos o heridos en el país. La quinta parte eran niños.

El conflicto ha obligado a casi el 15% de la población (alrededor de 4,3 millones de personas) a huir de sus hogares. Esto incluye a 3,3 millones de personas que permanecen desplazadas en todo el país.



TIMOR ORIENTAL

EEUU FUE TESTIGO PASIVO DE LAS ATROCIDADES EN TIMOR ORIENTAL

Documentos desclasificados dejan en evidencia el papel de Washington en la independencia de Timor oriental.

Documentos estadounidenses hasta ahora clasificados muestran la pasividad de Washington ante la violencia, por parte de las Fuerzas Armadas indonesias y milicias antiseparatistas timorenses, en torno al referéndum de independencia de Timor Oriental, del que mañana se cumplen veinte años.

Los más de 200 documentos revelan la política de Washington en los meses previos y posteriores al plebiscito del 30 de agosto de 1999, que puso fin a la sangrienta ocupación militar indonesia que comenzó en 1975 bajo la dictadura de Suharto, al retirarse de Timor Oriental la potencia colonial portuguesa. Durante los meses posteriores al referéndum, el territorio se vio sumido en una espiral de violencia en la que murieron más de 1.500 timorenses y unos 250.000 fueron desplazados.

Los telegramas diplomáticos y comunicaciones de inteligencia y gubernamentales fueron desclasificados a petición de la iniciativa del Archivo de Seguridad Nacional de la universidad George Washington. El académico Bradley Simpson, que dirige el equipo que publicó los documentos desclasificados, consideró que el entonces Gobierno del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, debió haber cortado antes sus relaciones militares con Indonesia y haber presionado para una intervención de tropas de la ONU. Según



Simpson, los documentos evidencian "la negativa general de Estados Unidos a hacer algo al respecto hasta que Timor Oriental fue destruida en septiembre", tras la ola de violencia que siguió al referéndum favorable a la independencia.

El documento más antiguo, un informe del Departamento de Estado del 28 de enero de 1999, analiza la decisión tomada aquel mes por el entonces presidente de Indonesia, Yusuf Habibie, de permitir el plebiscito. En el mismo también se advierte sobre la intención del Ejército indonesio de "armar a milicias a favor de la integración".

Desde que se anunció la consulta popular, grupos paramilitares antiseparatistas creados, armados y dirigidos por el Ejército indonesio iniciaron una campaña de violencia e intimidación contra el voto independentista, mientras que el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Wiranto, negaba cualquier participación.

Tras la masacre perpetrada en abril por las milicias en Liquica, en la que fueron asesinados 50 civiles que se refugiaban en una iglesia, otro memorando estadounidense alertaba de que "hay altas probabilidades de que el ciclo de intimidación y terror se intensifique". Dos meses después, cuando la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET), que buscaba garantizar el referéndum, ya se encontraba sobre el terreno con 12.000 efectivos, las milicias habían ampliado sus amenazas a periodistas y observadores internacionales. La inestabilidad continuó hasta el 30 de agosto, mientras las embajadas prepa-



raban la evacuación.

Horas después de hacerse públicos los resultados, las represalias de las Fuerzas Armadas indonesias y las milicias no se hicieron esperar y comenzó una oleada de violencia, que incluyó asesinatos y la quema de edificios y arrasó muchas de las poblaciones de Timor Oriental.

Finalmente, el 9 de septiembre, la administración Clinton suspendió las relaciones militares con Indonesia ante el aumento de la presión internacional, que también forzó, a finales de aquel mes, a Indonesia a aceptar la llegada de nuevas tropas para el mantenimiento de la paz. En total, cerca de 200.000 personas fallecieron a causa de asesinatos y enfermedades durante el cuarto de siglo de ocupación militar indonesia de Timor Oriental.



RUSIA

EL KREMLIN DESACTIVA EL APOYO AL PERIODISTA GOLUNOV PARA EVITAR UNA PROTESTA PERMANENTE

La Policía lo impidió cortando calles enteras, aislando y atomizando a los manifestantes y, sobre todo, practicando más de 400 detenciones.

La manifestación convocada para el jueves 13 de junio en Moscú exigiendo la libertad de todos los presos políticos en Rusia y castigos ejemplares para los policías corruptos que pretendían haber amañado una causa criminal contra el periodista de investigación ruso, Iván Golunov, presentándole como un vulgar traficante de estupefacientes, no logró ser una gran concentración de masas. Pese a que participaron varios miles de personas.

La Policía lo impidió cortando calles enteras, aislando y atomizando a los manifestantes y, sobre todo, practicando más de 400 detenciones, entre ellas las de varios periodistas rusos y extranjeros y la del opositor número uno de Rusia, Alexéi Navalni.

También hubo alguna que otra carga policial violenta y varios aporreamientos gratuitos de personas que no ofrecían ninguna resistencia y que incluso parecía que simplemente pasaban por allí sin haber dado muestras visibles de estar protestando.

De hecho, en la manifestación del jueves 13 de junio no hubo pancartas. Más bien algún pequeño cartel que repetía varias de las consignas más coreadas: «¡Abajo el Estado policial!», «¡Libertad para los presos políticos!», «¡Somos Iván Golunov!», pala-



bras que también figuraban en algunas camisetas según el modelo de las portadas solidarias con las que aparecieron el lunes 10 de junio los rotativos rusos Vedomosti, Kommersant y RBK.

El gran impulso que adquirió el movimiento de solidaridad con Golunov, que terminó siendo puesto en libertad el miércoles 12 de junio, y tras retirarse los cargos por «tráfico de drogas», pretendía haberse convertido en una protesta permanente y multitudinaria para arrancar otras concesiones al Kremlin y avanzar hacia una Rusia más «libre y democrática», según palabras del antiguo patrón de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski, ahora exiliado y creador de la ONG Rusia Abierta.

Pero las autoridades rusas desactivaron la amenaza que sobre ellas se cernía. Con los índices de popularidad del presidente Vladimir Putin en descenso, la eco-

nomía en franco deterioro, protestas puntuales por la escasez de vertederos de basura y tras el éxito en Ekaterimburgo de la movilización ciudadana para impedir la construcción de una iglesia en mitad de uno de los principales parques de asueto de la ciudad, lo que ya no se podían permitir es que aumentara todavía más la indignación popular ante un claro caso de abuso y arbitrariedad policial del que todo el mundo se ha percatado.

La primera medida para evitar que la manifestación hubiera sido masiva fue cerrar el caso a Golunov y, tras autorizar en un primer momento la celebración del acto, se prohibió después al no haberse alcanzado un acuerdo sobre el itinerario de la marcha. Los organizadores insistieron en finalizar la manifestación frente al departamento moscovita del Ministerio del Interior, en la calle Petrovka, 38, en donde estuvo Golunov detenido antes de ser confinado en arresto domiciliario y en donde se llevaron a cabo las diligencias contra él.

Pese al aluvión de arrestos y los abundantes casos de violencia policial injustificada, los antidisturbios no se



emplearon a fondo como suelen hacerlo habitualmente. Se intentó dar un imagen de firmeza ante la oposición, pero sin excesos que puedan atizar de nuevo las críticas contra las fuerzas de seguridad. Muchos de los detenidos empezaron a salir de las comisarías. Mientras, Putin felicitaba a la Nación con motivo del Día de Rusia y llamaba una vez más a fortalecer el patriotismo.

LA INTERFERENCIA RUSA EN LAS ELECCIONES DE EEUU FUE DIRIGIDA A LOS AFROAMERICANOS

Piratas rusos se colaron en los censos electorales de EEUU. Dos informes encargados por el Senado estadounidense señalan que las actividades de desinformación de Rusia en el país todavía continúan.

La campaña que llevó a cabo Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016 en las redes sociales se centró en dirigir los esfuerzos hacia usuarios afroamericanos, como parte de sus tácticas para favorecer el voto del candidato republicano, el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado un informe elaborado para el Comité de Inteligencia del Senado.

El documento, a cargo de la empresa de ciberseguridad New Knowledge, es uno de los dos informes elaborados por grupos independientes de investigadores que ha solicitado el Comité bipartidista de inteligencia del Senado. El otro análisis, llevado a cabo por un



grupo de la Universidad de Oxford y la empresa de análisis de redes sociales Graphika, ha sido filtrado a The Washington Post. Ambos textos concluyeron que las publicaciones de cuentas falsas desde Rusia en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube generaron más de 300 millones de interacciones de los internautas estadounidenses entre 2015 y 2017. Las publicaciones de cuentas falsas desde Rusia generaron más de 300 millones de interacciones

En concreto, los investigadores analizaron más de 10 millones de publicaciones en Twitter de miles de cuentas falsas rusas, más de 116.000 publicaciones en Instagram y 61.000 en Facebook así como más de 1.000 videos de YouTube. La plataforma de fotografías se descubre como la principal herramienta empleada en la campaña.



Entre los principales objetivos de la Agencia de Investigación de Internet (IRA), la compañía vinculada al Kremlin que se encargó de llevar a cabo la campaña de desinformación, se encuentran la comunidad afroamericana.

Los investigadores han hallado un esfuerzo multiplataforma dirigido a los estadounidenses de raza negra, a menudo con memes sobre la brutalidad policial, para después proporcionarles mensajes que les desanimaba a ir a votar. Entre las narraciones compartidas con las audiencias negras había un meme que decía: "No votaré, ¿quieres?"; mientras otro rezaba: "Todos chupan, estamos jodidos 2016". Otros instaban a los negros a votar por Jill Stein, la candidata del Partido Verde.

Según detalla el NYT en base al informe, de las 81 páginas de Facebook creadas por la IRA, 30 son diseñadas para un público afroamericano, que suman 1,2 millones de seguidores. Por el otro lado, unas 25 páginas iban dirigidas a captar al votante de la derecha y contaban con 1,4 millones de seguidores. En cambio, solo

siete páginas se centraron en ideologías de izquierda (con 689.045 seguidores).

La desinformación continúa

Muchas de las cuentas rusas escrutadas han sido suspendidas desde entonces, pero los investigadores alertaron de que algunas cuentas relacionadas con la Agencia siguen acechando en las

redes sociales, a menudo inactivas pero que pueden ser activadas nuevamente, y predijeron que se producirán más ataques en 2020.

Los informes revelan un patrón de búsqueda constante para dividir a los estadounidenses, particularmente por motivos raciales, al tiempo que ensalza a Trump (con mensajes que relaciona al republicano con Jesús) y lastima a la demócrata Hillary Clinton (vinculada a imágenes de Satán). Pero al margen de los candidatos, los investigadores encontraron que muchas de las publicaciones no se referían específicamente a Trump o Clinton, sino a temas que generaban división en general.

"Estos datos recién publicados demuestran cuán agresivamente Rusia buscó dividir a los estadounidenses por raza, religión e ideología, y cómo la IRA trabajó activamente para erosionar la confianza en nuestras instituciones democráticas", señaló el presidente del Servicio de Inteligencia del Senado, Richard Burr, un republicano de Carolina del Norte. "Lo más preocupante es que muestra que estas actividades no se han detenido", añadió.

MÁS DE 1.300 DETENIDOS EN LAS PROTESTAS POR UNAS ELECCIONES LIBRES EN MOSCÚ

Las autoridades reprimen con fuerza la manifestación no autorizada contra el veto a candidatos independientes en las municipales.

Por unas elecciones justas y libres y una democracia real. Miles de personas protestaron el sábado 7 de julio en Moscú para exigir que los candidatos opositores puedan participar en los comicios locales de otoño. "Esta es nuestra ciudad!", clamaban los ciudadanos. "¡Rusia será libre!", gritaban en una manifestación no



autorizada en el centro de la capital rusa, sitiada por cientos de policías y antidisturbios, que trataban de evitar el acceso al Ayuntamiento, el punto clave. Las autoridades detuvieron a 1.377 personas, según la ONG OVD-Info. Ya antes de la protesta, y para evitar grandes discursos, las autoridades detuvieron en sus casas o en sus oficinas a los principales aspirantes independientes.



El Servicio Federal de Seguridad (FSB, la antigua KGB) investiga ahora el vínculo de los principales líderes de la oposición extraparlamentaria -Liubov Sóbol, del equipo del bloguero anticorrupción Alexéi Navalni; Dmitri Gudkov, exdiputado; Iliá Yashin y Serguéi Mitrojin, dirigentes del partido liberal Yábloko- con organizaciones extranjeras. Algo que, además de costarles una gran multa, les apearía definitivamente de la campaña electoral. Los aspirantes independientes que se postulan al consejo local de Moscú denuncian que las autoridades tratan de evitar que participen para seguir controlando políticamente la capital de Rusia.

"Es triste que no dejen participar a los candidatos independientes en las elecciones. No hay libertad de expresión. No hay democracia, sino autoritarismo", lamenta Andrei Morózov, estudiante de 18 años, que acudió con su amigo Mijail a la protesta, cuya convocatoria se fue difundiendo durante los últimos días a través de las redes sociales. "Todos los aspirantes opositores merecen un escaño en la Duma de Moscú", añadía, rodeado de policías fuertemente equipados que cargaron con fuerza contra los grupos de manifestantes en una protesta que duró hasta bien entrada la noche.

Fueron las protestas políticas más importantes desde

las grandes manifestaciones de 2011 en respuesta al resultado de las elecciones parlamentarias que muchos consideraron fraudulentas, apunta Andrei Pértsev, analista del think tank Carnegie de Moscú.

Mientras los manifestantes, en pequeños grupos rodeados por la policía, inundaban las cercanías del Kremlin, el presidente ruso, Vladímir Putin, se sumergía en un nuevo minisubmarino en el Golfo de Finlandia. Después, se reunió con familiares de los militares fallecidos en la catástrofe del submarino Losharik. "¡Putin, ladrón!", "¡Vergüenza!", gritaba la ciudadanía entre palmas, reunida en la plaza Trubnaya, al noroeste de Moscú. "¡Rusia sin Putin!", seguían desafiantes. Y cada vez que coreaban algún lema o mostraban alguna pequeña pancarta -"Basta de que nos mientan", decía una- los antidisturbios cargaban con fuerza y se llevaban a varios detenidos; entre ellos María Alióijina, una de las integrantes del grupo Pussy Riot.

"Estamos ante una irregularidad repugnante. Un día todos los que están actuando así responderán ante la ley", clamaba el aspirante opositor Konstantín Yankauskasfrente al Ayuntamiento de Moscú, justo antes de ser arrestado. Además, el líder de la oposición extraparlamentaria y conocido bloguero opositor Alexéi Navalni fue condenado a 30 días de prisión por animar a acudir a protestas no autorizadas.

Hace años, las elecciones locales eran un asunto más bien "familiar" que interesaba a poca gente, apunta la profesora asociada en la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública (RANEPA), Ekaterina Schulmann. Eso ha cambiado. Solo un 21% de los moscovitas participó en las anteriores elecciones locales, en 2014. Y a mediados de julio, solo un 5% de la ciudadanía se había mostrado interesada en los comicios que se iban a celebrar el 8 de septiembre.

Sin embargo, la negativa de la Comisión Electoral a



inscribir a los principales opositores extraparlamentarios despertó una ola de indignación. Ahora, el 50% de los moscovitas está al tanto de la polémica. El 36% está seguro de que van a ser irregulares, según la fundación de análisis político de San Petersburgo, y el 16,3% señala que no solo va a haber irregularidades sino, directamente, un fraude. *“Las protestas por los comicios moscovitas aumentan la presión sobre el Gobierno y sobre el Kremlin en un momento delicado para su popularidad. Conforme va pasando los días, la indignación ciudadana aumenta. Y lo que esta ocurriendo con las elecciones locales de septiembre estaba actuando como una espita para el descontento de los rusos”,* señala Schulmann. La crisis económica, la caída del nivel de vida y el malestar por la gestión del Ejecutivo están llevando a los ciudadanos a salir a la calle para reclamar derechos sociales.

Ha habido protestas en distintos puntos de Rusia por los problemas con la basura, el bajo salario de los médicos, por el aumento en la edad de jubilación o por la intención de construir una catedral ortodoxa en una zona verde de Ekaterimburgo, contra la intención de controlar Internet. Además de la movilización masiva por la detención irregular del periodista de investigación Ivan Golunov, que, entre otras cosas, también había destapado varios escándalos de corrupción en el Ayuntamiento de la capital rusa.

El Ayuntamiento de Moscú, donde viven 12,5 millones de personas, tiene 45 escaños. Es responsable de un gran presupuesto municipal que ahora controla Rusia Unida, el partido del Gobierno. Sin embargo, esta marca política está bastante dañada, tanto por la gestión como por el malestar ciudadano, apunta Schulmann. Así que sus candidatos concurren como independientes, pese a su vinculación con el partido.



“No pueden permitirse un resultado incontrolable. Han perdido popularidad y los opositores podemos ganarles una gran cantidad de terreno, así que lo que están

haciendo es directamente evitar que participemos”, reclama Alexander Soloviov, aspirante independiente a candidato. *“Estamos ante un régimen autoritario. Y como tal trata de evitar que uno de los elementos esenciales de una democracia, unas elecciones, se celebre. Es lamentable”,* añadió antes de ser arrestado también. Para competir en los comicios, aquellos candidatos no respaldados por un partido político representado en la Duma Estatal deben reunir unas 5.000 firmas -o las correspondientes al 3% de la ciudadanía registrada en el distrito o distritos que quieran representar-. Hasta ahora, la Comisión Electoral ha registrado a 200, todos respaldados por Rusia Unida, el partido del Gobierno. Las autoridades rechazaron inscribir a candidatos como Soloviov o Liubov Sóbol -que estaba en huelga de hambre desde hacía días para denunciar la situación- afirmando que sus firmas son falsas o inválidas. Rúbricas que han revisado durante días, en un recinto cerrado y sin que los aspirantes pudieran estar presentes. Los opositores denunciaron, además, que los candidatos respaldados por el Kremlin no habían tenido que pasar por ese control extremo. También que la Comisión les impedía una auditoría externa de esos avales, muchos de los cuales sospechaban que estaban falsificados.

“El Kremlin es consciente”, advierte el reputado analista Andrei Kolésnikov. Y por eso trata de maniobrar no solo intentando evitar que los opositores obtengan cualquier migaja de poder, sino también intentando impedir que ese descontento social sea visible. *“Creen que dejar a un candidato opositor concurrir sería de alguna manera romper una presa de agua”,* apunta Schulmann.



PUTIN HACE PAGAR A LA OPOSICIÓN EL CASTIGO EN LAS URNAS CON REGISTROS MASIVOS

La policía entra en casi 200 centros del partido de Navalni, el principal rival del presidente, cuya estrategia contra Rusia Unida resultó un éxito en las elecciones.



absurdas y pretende ser un nuevo caso amañado».

Los registros se llevaron a cabo con extrema dureza, aseguró Yuri Prudnikov, responsable de la sede del partido de Navalni en Cheliábinsk (Urales). Sin encontrar la más mínima resistencia, los agentes entraron por la mañana rompiendo la puerta, obligaron a los presentes a tenderse en el suelo y se llevaron documentos y ordenadores.

Parece evidente que el llamamiento hecho por Alexéi Navalni, el principal opositor del Kremlin, en los comicios locales del domingo 8 de septiembre en Rusia de votar a cualquier candidato que no sea del partido del presidente Vladímir Putin ha surtido un cierto efecto pernicioso para el poder. Y las represalias no se han hecho esperar. Policías efectuaron el jueves 12 de septiembre más de un centenar y medio de registros en 40 ciudades, en locales de la organización de Navalni y en las viviendas de sus colaboradores y activistas. *«Es la mayor operación policial en la historia de la Rusia moderna»,* dijo el dirigente opositor en un mensaje publicado en su blog.

En esta masiva operación participaron *«cientos de agentes»*, declaró a la radio Eco de Moscú Leonid Vólkov, miembro de la dirección de la Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK). Creada y dirigida por Navalni, esta estructura es el principal instrumento de su actividad política y de desenmascaramiento de los fraudulentos manejos de algunos miembros del Gobierno y del entorno de Putin.

El Comité de Instrucción (SK), órgano judicial autónomo pero vinculado antes a la Fiscalía General, investiga el supuesto blanqueo de mil millones de rublos (unos 13,6 millones de euros) por parte del FBK. Según el Comité de Instrucción, *«entre enero de 2016 y diciembre de 2018 personas vinculadas a la Fundación recibieron el equivalente a mil millones de rublos en divisa extranjera sabiendo que habían sido obtenidos de forma ilegal».* Según Vólkov, las acusaciones del SK *«son*

La organización de defensa de los derechos humanos Ágora sostiene en un reciente informe que estos registros *«se realizan con una clara intención intimidatoria».*

De condena en condena

Como organizador de las grandes protestas contra Putin en 2011 y 2012, Navalni, de 43 años, se convirtió en el principal líder opositor. Contra él han sido incoadas varias causas por delitos económicos y ha cumplido múltiples condenas de prisión menor por convocar manifestaciones, la última de 30 días. En julio, estando en los calabozos, tuvo que ser hospitalizado a causa de una *«dermatitis»* que él cree fue provocada por una sustancia tóxica que alguien le administró en la celda.

Salió de la cárcel el jueves 23 de agosto tras ser el motor de las nuevas movilizaciones convocadas desde julio, en protesta por la exclusión de candidatos opositores a los comicios del domingo 8 de septiembre. Estas marchas se saldaron con cerca de 3.000 detenidos, desmesuradas cargas de los antidisturbios y varias condenas de entre tres y cinco años de cárcel a manifestantes que supuestamente actuaron con violencia contra la policía.

No es la primera vez que se efectúan registros en locales vinculados a la organización de Navalni, pero nunca habían sido tan masivos. De cara a los recientes comicios, el opositor lanzó el llamado



«voto inteligente», consistente en votar en cada circunscripción al candidato, sea del partido que sea, con más probabilidades según las encuestas de batir al representante de Rusia Unida, el partido del Kremlin. En Moscú al menos funcionó, ya que la formación gubernamental, pese a mantener la mayoría absoluta, ha perdido doce concejales con respecto a las anteriores elecciones.

Los comunistas, los que más se ha beneficiado del desvío del voto propuesto por Navalni, le han mostrado su gratitud. «*Todos hemos tratado de sacar el máximo provecho de la situación actual para ganar y por eso quiero dar las gracias a todos, incluido Navalni*», dijo el miércoles 11 de septiembre Valeri Rashkin, jefe de los comunistas de Moscú.

RUSIA PLANTA CARA A EEUU Y DEJA EL TRATADO DE DESARME

Putin abandona el pacto nuclear INF en respuesta a la medida similar de Trump.

Rusia se mostró el miércoles 2 de enero dispuesta a aplicar una vez más el principio del «ojo por ojo y diente por diente» en su política exterior y de defensa y anunció que la suspensión de su participación en el tratado de desarme nuclear INF en respuesta a la medida similar adoptada por Estados Unidos. «*Daremos una respuesta simétrica. Nuestros socios norteamericanos anunciaron que suspenden su participación en el tratado; pues también lo hacemos nosotros*», declaró el presidente ruso, Vladimir Putin,



en una reunión con los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov, y de Defensa, Serguéi Shoigú.

El líder ruso respondía así a la declaración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien informó unos días antes que Washington comenzaría el 2 de febrero «el proceso de retirada del tratado INF, que se completará en seis meses a no ser que Rusia vuelva a cumplir» con lo pactado en el acuerdo de 1987 «mediante la destrucción de todos los misiles, lanzaderas y equipos asociados que violan» sus términos.

Tras la salida de Estados Unidos este país podría posicionar sistemas de misiles en Europa, mientras que Rusia podría hacer lo mismo en sus territorios limítrofes con la Unión Europea u otras zonas geográficas.

El presidente ruso dijo al respecto que Rusia no pretende desplegar misiles «ni en Europa, ni en otras regiones del mundo» si no lo hace antes Estados Unidos. Además, aseguró que Moscú no se dejará arrastrar a una nueva carrera de armamentos, aunque autorizó al Ministerio de Defensa a empezar las labores para el desarrollo de un nuevo misil hipersónico de alcance medio, una tarea que, según expertos, podría prolongarse por unos dos años.

Putin rechazó en su momento el ultimátum presentado por EEUU que daba 60 días de plazo a Moscú para cumplir de manera «verificable» el tratado INF, el primer

acuerdo de desarme nuclear de la Guerra Fría, considerado hasta ahora como uno de los pilares de la seguridad estratégica mundial.

Moscú considera «inadmisible» la exigencia de que destruya el misil de crucero ruso Novator 9M729, que, según la OTAN, viola el INF al superar los 500 kilómetros de alcance. Mientras, el Ministerio de Defensa ruso, que mostró el misil a la prensa, argumenta que tiene un alcance de solo 480 kilómetros, por lo que se enmarca dentro del tratado. Según insistió Lavrov, Rusia «*trató de hacer todo lo posible para salvar*» el INF dada su «*importancia para la seguridad estratégica para Europa y el resto del mundo*».

El ministro aseguró que Moscú estaba dispuesta a «*unas medidas de transparencia sin precedentes*», por encima de sus obligaciones contempladas en el tratado, para convencer a los estadounidenses de que no viola el INF. «*Esos intentos y propuestas fueron torpedeados por los estadounidenses, que nos lanzaron nuevamente un ultimátum que nosotros, naturalmente, no pudimos aceptar, porque contradice la letra y el espíritu del propio tratado*», afirmó el diplomático. A la vez, alertó de que la decisión de EEUU de abandonar el INF pone en riesgo también el futuro del tratado START-3, que limita el armamento estratégico ofensivo y expira en 2021, y cuyas negociaciones están estancadas.

RUSIA ADVIERTE SOBRE EL RIESGO DE UNA GUERRA NUCLEAR

Moscú aseguró que el deterioro de la seguridad estratégica es «un hecho indiscutible» del que culpa a Estados Unidos.



La estabilidad estratégica internacional se está deteriorando y existe el riesgo de que se pueda desatar una guerra nuclear, advirtió el jueves 12 de septiembre el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov. El alto diplomático ruso constató durante una conferencia celebrada en la Escuela Superior de Economía el creciente deterioro de la estabilidad estratégica, al señalar que se trata de «un hecho indiscutible».

«Los riesgos también crecen... existe el riesgo de que se desate una guerra nuclear, incluso en una situación en que las partes no tengan la intención de desatar un conflicto nuclear», afirmó, citado por RIA Novosti. Según Riabkov, esta dinámica negativa se observa de modo especial durante el último año, en el cual los pasos dados por

«los colegas occidentales» se toman cada vez menos pensados y por momentos «extremadamente agresivos».

En ese sentido, acusó a Occidente de «bloquear» el trabajo de los canales de diálogo y continuar desmontando los mecanismos de control de armamentos.

EL PAPA FRANCISCO RECHAZA EN JAPÓN EL USO DE ARMAS NUCLEARES

«El uso de la energía atómica con fines de guerra es más que nunca un crimen contra toda posibilidad de futuro», afirma el Papa.



El viaje a Japón del papa Francisco, que concluyó el martes 26 de noviembre, estuvo marcado por su firme condena no solo al posible uso de armas nucleares sino también a su posesión. En su reunión privada con el emperador Naruhito, Francisco compartió el recuerdo de haber visto a sus padres llorar por la tragedia en Hiroshima tras la bomba atómica. Esa vivencia le marcó profundamente, confesó, y con ese recuerdo comenzó este viaje. Su primera etapa fue Hiroshima y Nagasaki, ciudades arrasadas por las bombas atómicas lanzadas por los EEUU en 1945 y que causaron cerca de 400.000 muertos durante todos estos años debido a

las radiaciones.

En el hipocentro de la bomba de Nagasaki, junto a la icónica foto del niño que con los labios apretados espera con su hermano muerto en la espalda el turno del crematorio, Francisco llamó a los líderes de los países nucleares a abandonar el clima de miedo en el que se apoya su doctrina nuclear. Denunció que en nuestro mundo vive «en la perversa dicotomía de querer defender y garantizar la estabilidad y la paz con base en una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza, que

termina por envenenar las relaciones entre pueblos e impedir todo diálogo».

En Hiroshima hablaron los supervivientes y sus palabras en el silencio de la noche ante el cenotafio construido donde impactó la bomba recordaron el «infierno» de aquel día. «Trabajo duro para dar testimonio de que no

debemos usar estas terribles bombas atómicas de nuevo, ni dejar que nadie en el mundo sienta tanto sufrimiento”, dijo Yoshiko Kajimoto, que tenía 17 años cuando su mundo se destruyó. Allí Francisco tras saludar a los supervivientes clamó “que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común” “El uso de la energía atómica con fines de guerra es un crimen y es inmoral” y remarcó que “también la posesión de armas es inmoral” y que “seremos juzgados por esto”.

también el debate sobre los peligros de las centrales nucleares estalló de lleno en el viaje, pues los obispos japoneses han pedido en varias ocasiones el cierre de los reactores, y así se lo comunicaron a Francisco. “Por favor, rece para que en todo el mundo se elimine de nuestro futuro la amenaza de la exposición a las radiaciones”, le pidió al papa uno de los damnifica-



dos por el terremoto que en 2011 provocó el tsunami y la crisis nuclear en Fukushima. Francisco no habló del cierre de las centrales, pero subrayó la necesidad de “tomar decisiones valientes en el uso de los recursos naturales”.

ALEMANIA ACUSA A RUSIA DE «TERRORISMO DE ESTADO»

El Gobierno federal tiene claro que servicios secretos de Moscú están directamente implicados en el asesinato de un georgiano en Berlín.

Rusia sigue practicando el terrorismo de Estado, propio del país dictatorial que representa, dirigido por un auténtico sátrapa llamado Vladímir Putin. Al igual que la muerte del exiliado ruso Alexander Litvinenko, envenenado con polonio en Londres, o el intento de asesinato de Sergei Skripal y su hija con el agente tóxico novitchock en Salisbury, que condujeron a graves tensiones entre los Gobiernos de Reino Unido y Rusia, la ejecución el pasado mes de agosto en un parque berlinés a balazos del asilado político georgiano Selimchan Changoschwili se produjo por orden del Kremlin.

El Gobierno alemán que dirige la canciller federal, Angela Merkel, está absolutamente convencida de que los servicios secretos rusos están directamente implicados en la muerte de Changoschwili. Varios medios germanos revelaron el 3 de diciembre que el fiscal federal, Peter Frank, iba a asumir la investigación de esa muerte ante los cada vez más claros indicios de que se trata de un caso de terrorismo de Estado por parte de Rusia.



En el momento en el que eso suceda, Alemania se verá obligada a tomar represalias. Habitualmente y en un caso así con la expulsión de diplomáticos rusos. Cuando el doble agente Skripal fue envenenado con novit-

chok en el Reino Unido se produjo una reacción consensuada de 15 países europeos que expulsaron a más de una treintena de diplomáticos rusos. Por prudencia y ante la falta hasta ahora de pruebas determinantes de que Moscú se encontraba realmente detrás de la ejecución de Changoschwili, la cancillería federal y el ministerio germano de Exteriores habían renunciado hasta ahora a asumir consecuencias diplomáticas.

El propio fiscal federal Frank había declarado el pasado octubre que, mientras una participación de Rusia en el crimen se base «en presunciones, hipótesis o afirmaciones sin confirmar, nuestra legislación obliga a que sea la Fiscalía local la que se encargue del caso». Una situación que parece haber cambiado.

Selimchan Changoschwili combatió con la guerrilla chechena contra Rusia y trabajó después en Georgia y Ucrania contra los intereses rusos. Asilado político en Alemania, fue asesinado el 23 de agosto pasado en el parque berlinés del Tiergarten de tres disparos cometidos por un ciclista. La primera bala derribó al georgiano. El asesino se apeó de su bicicleta y remató a su víctima en el suelo de dos disparos certeros en la cabeza. Seguidamente tiró el arma, la bicicleta y una peluca que llevaba puesta al río Spree.

Dos adolescentes que observaron como el hombre se escondía tras un arbusto para cambiarse de ropa alertaron a una patrulla policial, que le detuvo de manera inmediata. El presunto sicario se identificó como Vadim



Sokolov, un ciudadano ruso de San Petersburgo que poco antes del atentado había llegado a Berlín vía París y Varsovia. Sokolov se encuentra desde entonces en prisión preventiva y mantiene un comportamiento ejemplar.

Sin embargo, los investigadores alema-

nes han determinado que la verdadera identidad del presunto asesino es Vadim Krasikow, de 54 años, y que la documentación de Vadim Sokolov, de 49 años, es falsa. Ese nombre no existe en el banco de datos de pasaportes rusos, ni en el registro de entradas o salidas de ese país, según reveló 'Spiegel Online'.

Vadim Sokolov solo aparece en el registro de documentos de identidad rusos con un número de seguridad social concedido poco antes del crimen y el pasaporte con ese nombre con el que se identificó el presunto asesino fue expedido también inmediatamente antes de viajar a Berlín. Solo los servicios secretos rusos tienen potestad para crear identidades nuevas y documentos a su nombre.

RUSIA PONE EN SERVICIO SU "ARMA DEL FUTURO"

Con este primer misil hipersónico intercontinental, Putin busca mantener la paridad nuclear con EE.UU y seguir siendo fuerte para seguir violando impunemente los derechos humanos y saqueando a su pueblo.



Rusia puso el viernes 27 de diciembre en servicio el primer misil hipersónico intercontinental, el sistema estratégico Avangard, llamado “el arma del futuro” por el presidente ruso, Vladímir Putin, decidido a mantener la paridad nuclear con Estados Unidos. “Este es el arma del futuro, capaz de superar tanto los actuales sistemas de defensa antimisiles como los que se desarrollen de aquí en adelante”, dijo Putin al revisar

el desarrollo del armamento de nueva generación. El presidente ruso, también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue informado por el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, sobre el despliegue de dicho armamento cerca de los Urales, línea de separación entre Europa y Asia.

El Avangard, que puede alcanzar en 15 minutos territorio estadounidense, es una de las

“superarmas” presentadas por Putin durante su célebre discurso sobre el estado de la nación de marzo de 2018, lo que llevó a muchos a hablar de una nueva carrera armamentista como la conocida como “Guerra de las Galaxias”, que condenó a la Unión Soviética a la desaparición.

La entrada en servicio de estos misiles coincidió ade-

más con el pulso entre el Kremlin y la Casa Blanca sobre la suerte del último tratado de desarme en vigor entre ambas superpotencias, el tratado de reducción de armas estratégicas, START III, que expira en 2021 y cuya renovación Moscú puso en duda.

Recientemente, expertos estadounidenses pudieron inspeccionar las características y el potencial del Avangard durante una visita a Rusia. Este "superarma" está compuesto por un cohete balístico intercontinental y equipado con una o varias ojivas hipersónicas capaces de maniobrar en los planos vertical y horizontal, así como cambiar de rumbo antes de alcanzar su objetivo, lo que lo convierte en prácticamente invulnerable.

"Ningún país del mundo tiene armas hipersónicas en general y, menos aún, armas hipersónicas de alcance continental", dijo Putin. Según este sátrapa, los Avangard pueden alcanzar las más densas capas de la atmósfera y superar en 20 veces la velocidad del sonido. "Se dirige al objetivo como un meteorito, como una bola de fuego", aseguró Putin, quien reconoció que Moscú comenzó a desarrollar dicha arma en 2003, es decir justo después de que Washington abandonara unilateralmente el tratado de defensa antimisiles. Los expertos, consideran que EE.UU. necesitará aún varios años para desarrollar armamento hipersónico como el Avangard, que no tiene aún parangón en el mundo.



Después de varios años de inversiones multimillonarias en rearme, Putin estimó en que el armamento moderno supone el 82% de la triada nuclear: submarinos atómicos, misiles intercontinentales y aviación estratégica. En referencia al tratado de control armamentístico START III, el presidente ruso aseguró que Rusia está dispuesta a negociar nuevos tratados en el ámbito del control de armamento, aunque advirtió que, mientras eso no ocurra, seguirá desarrollando sistemas de misiles capaces de "contener las agresiones contra Rusia y sus aliados". De hecho, Rusia sigue adelante con el desarrollo de armas como el Burevestnik (Albatros), misil de crucero nuclear de alcance ilimitado, o el Poseidón, un submarino no tripulado que se desplaza a gran velocidad y profundidad.

HONG-KONG

EL ATAQUE A LOS MANIFESTANTES SACUDE HONG KONG

El asalto de mafiosos y simpatizantes de China, de los que seis ya han sido detenidos, instala el miedo en el distrito de Yuen Long.

A una hora del centro de Hong Kong en tren, al llegar al distrito de Yuen Long se ven los rascacielos de Shenzhen, al otro lado de la frontera en China. Su estación, que el lunes 22 de julio estaba desierta y tenía sus tiendas tan cerradas como las del adyacente centro comercial Yoho, fue asaltada el domingo por la noche por una turba de hombres vestidos de blanco. Armados con palos y



cañas de bambú, atacaron brutalmente a todo aquel que iba de negro, el color de los manifestantes contra la ley de extradición a China, o parecía que venía de las protestas en el centro de la isla, donde miles de jóvenes se enfrentaban a la policía tras una nueva marcha multitudinaria.

Como muestran los vídeos de las redes sociales, el ataque fue tan salvaje que dejó numerosos contusionados y 45 heridos fueron hospitalizados. La policía no apareció hasta 35 minutos después, cuando los asaltantes ya se habían marchado, y no detuvo a nadie, pese a que

los agentes se cruzaron con varios que portaban barras y palos. Tras la indignación que desató su pasividad, la policía arrestó a seis personas, pero eso no le va a librar del sambenito de connivencia con los atacantes.

Formando un grupo de entre 200 y 300, según testigos consultados, se sospecha que son matones pagados por las triadas y simpatizantes del autoritario régimen de Pekín, furiosos con los manifestantes por haber destrozado la Oficina de Enlace del Gobierno chino. «Me enviaron un mensaje para ir a recoger una máscara y una caña, pero ya he dejado eso porque acabo de tener un bebé», cuenta Powes, un ingeniero tecnológico de unos treinta años que conoce a las sociedades «subterráneas» de la zona, como se llama aquí a las mafias, porque de joven bebía y alteraba con sus miembros. Aunque explica que algunos asaltantes eran paquistaníes y emigrantes del sur de Asia, «a los que les habían pagado la cena», asegura que la mayoría fueron vecinos de mediana edad leales a China que no quieren que vengan los manifestantes a protestar contra el régimen del Partido Comunista. «Proteger Yuen Long, proteger nuestro hogar», rezaban unos carteles pegados camino de la estación que una joven, partidaria de las protestas, rajó con su paraguas con rabia. Minutos después, otro vecino que pasó por allí, un profesor jubilado que se hace llamar Tío Fung, maldecía que rompan los carteles y culpaba a las manifestantes de la creciente división en la sociedad hongkonesa.

«China es nuestro país. ¿Por qué lo insultan y atacan nuestros edificios y a la policía?», se preguntaba mien-



tras enseñaba en el móvil un vídeo de un numeroso grupo de jóvenes vestidos de negro pegando a tres hombres ataviados de blanco. «Ellos atacaron primero», asegura con vehemencia.

Pero Alex, uno de los empleados de la estación de tren, detalla que «el grupo de blanco entró pegando a todo el mundo y destrozándolo todo, mientras la policía se ocultaba en su comisaría y yo tenía que esconderme en la oficina del personal». Tanto la jefa del Gobierno local, Carrie Lam, como el comisario de policía, Stephen Lo, condenaron la violencia y atribuyeron el retraso a la falta de personal porque la mayoría de los agentes estaban en la isla intentando dispersar a los manifestantes que habían tomado el centro. Por miedo a un nuevo ataque, las tiendas de Yuen Long y otros distritos de los Nuevos Territorios cerraron a primera hora de la tarde y las calles se quedaron desiertas.

NUEVA PROTESTA EN HONG KONG ENTRE GASES LACRIMÓGENOS DE LA POLICÍA

Decenas de miles de hongkoneses volvieron a expresar su rechazo al Gobierno y exigieron reformas democráticas

Decenas de miles de hongkoneses volvieron a expresar el viernes 2 de agosto su rechazo al Gobierno y exigieron reformas democráticas en una marcha que recorrió algunas de las arterias comerciales de la ciudad provocando el cierre de establecimientos y alteraciones del tráfico.



Al término de la marcha, algunos de los manifestantes trataron de rodear la comisaría de Tsum Sha Tsui y la policía reaccionó lanzando gases lacrimógenos para dispersarlos y tratar de arrestarlos.

En un comunicado, el cuerpo policial condenó los "actos violentos" de "un grupo de manifestantes radicales" que se habían congregado en la mencionada comisaría para "prender fuego en varias zonas, dañar vehículos y lanzar objetos contra el edificio".

Desde las 16.00 hora local, los manifestantes (120.000, según los organizadores) se congregaron en el distrito de Mong Kok, popular destino de compras y escenario de los enfrentamientos de las protestas prodemocráticas de 2014.

La marcha provocó el cierre de tiendas y alteraciones del tráfico -los manifestantes bloquearon un túnel durante una hora- entre llamadas a la huelga general convocada para el lunes 5 de agosto y proclamas contra la Policía por lo que los manifestantes, en su mayoría jóvenes, consideran un excesivo uso de la violencia para reprimirlos. Así, los manifestantes cantaron consignas como "Recuperar Hong Kong, la revolución de este tiempo" y "¡El lunes, huelga!" pero evitaron enfrentarse con los agentes tras los 44 arrestos que hubo la semana anterior en un cambio de táctica ante el alto coste que estaba teniendo para ellos la confrontación directa.

La mayoría de las tiendas en Nathan Road, una avenida llena de innumerables comercios y normalmente llena de turistas, cerraron a cal y canto durante toda una jornada que durante la tarde vio cómo algunos manifestantes ocupaban calles no previstas en la ruta inicial sin ningún destino preestablecido.



Poco después, a las 18:00 hora local, algunos manifestantes tomaron una medida inusual: establecer barricadas improvisadas para bloquear el túnel Cross Harbor en Hung Hom que conecta Kowloon con la isla de Hong Kong. La multitud ocupó todos los carriles fuera del túnel, paralizando el tráfico durante aproximadamente una hora, reflejando el cambio de táctica de los manifestantes, sobre todo de los jóvenes que suelen situarse en primera línea.

"Con tantos detenidos, el coste de la confrontación directa con la policía se ha vuelto demasiado alto para nosotros", dijo un manifestante vestido de negro y enmascarado que se identificó como Jeff. Añadió que los manifestantes buscaban acciones "relámpago" en lugar de establecer barricadas y "permanecer quietos durante horas". "Habrá más idas y venidas continuas y la Policía no lo tendrá tan fácil para detenernos", indicó. Menos de una hora después, el túnel volvió a abrir y los manifestantes volvieron a Mong Kok. Entre tanto, algunos activistas crearon barricadas improvisadas utilizando medianas desmanteladas de las carreteras: "Nadie sabe qué sigue. Improvisaremos", dijo Jeff.

En cualquier caso, los manifestantes volvieron a ignorar las advertencias de Pekín con sus protestas y proclamas. Además, planean otras dos marchas en la isla de Hong Kong y en la bahía de Tseung Kwan O.

Mientras tanto, miles de partidarios de Pekín, en su mayoría vestidos de blanco y portando banderas de China, se reunieron el viernes 2 de agosto para mostrar su apoyo al Gobierno local y a los agentes.

La protesta se produjo un día después de que miles de funcionarios públicos dieran un paso sin precedentes asistiendo a una concentración en la que pidieron al Gobierno hongkonés que escuchara a la gente.



ESCALADA DE PROTESTAS EN HONG KONG

Decenas de miles de personas salieron el domingo 29 de septiembre a las calles, en la mayor manifestación desde hacía un mes en Hong Kong, para protestar contra el Gobierno chino en una concentración que, a tramos, contó con incidentes de violencia.

Centenares de policías salieron de las bocas de metro, de callejones, de furgonetas enviadas por la Comisaría central para detenerlos, en una operación de limpieza por todo el centro de la antigua colonia que se prolongó durante horas y que dejó claro el profundo cisma que se creó no solo entre manifestantes y los Gobiernos de Hong Kong y Pekín; también, entre la Policía local y los ciudadanos de a pie.

Los altercados entre ambas partes fueron los más violentos en tres meses de protestas. Los dos lados endurecieron sus tácticas en vísperas de los festejos con los que China pretendía celebrar por todo lo alto los 70 años de la República Popular -uno más que los que llegó a cumplir la ahora difunta Unión Soviética-. Los manifestantes están dispuestos a aguar la fiesta y la Policía y el Gobierno autónomo, a impedirselo.

Que los altercados del domingo 29 de septiembre, el décimo séptimo de protestas en la antigua colonia británica, iban a tener una escala mucho mayor que en fines de semana previos quedó claro desde primera hora de la tarde. Ya antes de comenzar la manifestación, para la que el grupo convocante no había pedido autorización previa de la Policía, los agentes lanzaron



varias rondas de gases lacrimógenos en la cabeza de la marcha, en Causeway Bay, uno de los grandes núcleos comerciales hongkoneses.

Los manifestantes también habían dejado claro que querían hacerse oír más que nunca, en la ciudad y en el exterior. El lema oficial de la marcha era "contra el totalitarismo global"; muchos jóvenes portaban distintas banderas -Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, España, Irlanda, Estonia, Senegal- y lemas en varias lenguas. La imagen del presidente chino, Xi Jinping, se había transformado en una alfombra sobre la que los movilizados pateaban con entusiasmo; abundaban los carteles en los que las estrellas de la bandera nacional china se habían convertido en una esvástica. Todos los manifestantes ocultaban su rostro en mayor o menor manera.

Las cargas policiales comenzaron a mitad de recorrido, en lo que pareció un cambio de táctica con respecto a otras ocasiones. Grupos de jóvenes radicales habían cubierto con carteles y pintadas negocios supuestamente de propiedad prochina, roto cristales y lanzado cócteles molotov contra la boca de metro de Wan Chai, una de las más concurridas en la isla de Hong Kong. Los antidisturbios dispararon abundantes rondas de gas pimienta y balas de plástico; una hirió a una periodista indonesia.

En la cabecera de la manifestación, en torno a los edificios de Gobierno, los antidisturbios utilizaban cañones de agua, más rondas de gases lacrimógenos, más balas de plástico. El gas pimienta aún seguía flotando en el ambiente minutos después de que, finalmente, cargaran contra los manifestantes y detuvieran a decenas de ellos. La escena se repitió en diversos



puntos de la ciudad, mientras el público increpaba ruidosamente a los agentes y estos -devolviendo a veces los insultos- trataban a su vez de impedir el trabajo de los periodistas, intentando deslumbrarles con luces o -en alguna ocasión- lanzando gas lacrimógeno en lo que pareció un gesto intencionado.

"Mira en lo que se han convertido", sollozaba Sophia, una joven menuda. "Mi abuelo, mi abuela, son partidarios de China. Puedo entenderlo. Ellos me dan sus argumentos e intentan razonar. Esta Policía no solo es que defiende a China. No razona, nos ataca, nos insulta, han perdido por completo su ética profesional".

Una investigación sobre la violencia policial es una de las demandas principales de los manifestantes, que reclaman también sufragio universal, la puesta en libertad de los detenidos en las protestas y que se retire la descripción de "disturbios" a las manifestaciones. La única reivindicación que se vio cumplida fue la retirada del proyecto de ley de extradición cuyo trámite desen-



cadenó las movilizaciones el pasado 9 de enero. A lo largo de las avenidas del centro de Hong Kong, la Policía seguía avanzando para retirar las barricadas, algunas incendiadas, que los manifestantes habían dejado en su retirada. Tras ellos, centenares de ciudadanos les seguían increpando.

LA POLICÍA REPRIME A TIROS EN HONG KONG

Los agentes disparan por primera vez con fuego real y hieren de gravedad a un activista de 18 años el día en que China celebraba su 70 aniversario.

Habían advertido de que harían todo lo posible por eclipsar la conmemoración del 70 aniversario de la fundación de la República Popular China, y los manifestantes de Hong Kong no defraudaron en su convocatoria para celebrar un día de luto nacional. Aunque la mañana del martes 1 de octubre fue tranquila, y muchos ciudadanos de la excolonia siguieron por televisión el discurso del presidente chino, Xi Jinping, y el posterior desfile militar en Pekín, la violencia no tardó en estallar. Mientras la principal manifestación convocada en la isla transcurría de forma pacífica a pesar de haber sido prohibida, otros focos a lo largo del centro financiero se convirtieron en un polvorín de gases lacrimógenos y balas de goma. Los enfrentamientos se dieron primero en barrios periféricos, y luego se fueron extendiendo hacia el



centro, donde políticos prodemocracia lideraban una marcha con cientos de miles de personas. Finalmente, el escenario de la manifestación que denunciaba el totalitarismo de China terminó convirtiéndose también en un campo de batalla. Las autoridades habían calificado los actos previstos de "muy peligrosos" y la realidad les dio la razón. Pero no porque los manifestantes llevaran a cabo las "acciones de corte terrorista", que la Policía había previsto, sino porque un agente sacó su revólver y disparó en el pecho a un estudiante de 18



años.

El joven, junto a otros manifestantes, había arrinconado a una pareja de antidisturbios en el distrito de Tsuen Wan. Un vídeo grabado durante la pelea muestra que el activista estaba golpeando al policía con una barra de hierro cuando este sacó su arma reglamentaria y disparó una bala a pocos centímetros del pecho. Aunque en un primer momento los médicos temieron por su vida, después de una intervención quirúrgica de urgencia para retirar la bala del pulmón y cortar la hemorragia interna afirmaron que, a pesar de su estado crítico, su vida no corría peligro. Es el primer herido de bala registrado en las protestas que sacuden Hong Kong.



PARÁLISIS TOTAL EN HONG KONG

El tercer día de huelga general ahonda la crisis política, social y económica de la ciudad, de la que huyen algunos estudiantes chinos.

Los manifestantes de Hong Kong se habían propuesto paralizar el principal

centro financiero de Asia durante tres días de huelga general, y lo lograron. Eso sí, no tanto porque los comercios hayan echado la persiana por voluntad propia o porque los siete millones de habitantes de la excolonia británica se hayan negado a acudir a sus puestos de trabajo. No, la parálisis la lograron convirtiendo la megalópolis en un campo de batalla.

Tras la brutal jornada del lunes 11 de noviembre, que dejó el segundo manifestante herido de bala en cinco meses de protestas y un padre de familia en la UCI después de que le prendieran fuego por apoyar a China, el martes 12 de noviembre la violencia se trasladó a los campus universitarios, sobre todo al de la Universidad China de Hong Kong (CUHK), en el que antichinos y Policía protagonizaron durante todo el día escenas más propias de una guerra civil que de una protesta política. Los agentes dispararon 1.567 proyectiles de gas lacrimógeno, 1.312 balas de goma, otros 380 proyectiles no letales y 126 granadas de 'foam'. 142 personas fueron



arrestadas. La más joven tenía 14 años. «La sociedad y el Estado de Derecho están al filo de un colapso total», advirtió el superintendente Kong Wing-cheung. «La violencia de los delincuentes está afectando seriamente a la vida de todos los ciudadanos», añadió en una comparecencia de prensa.

Los enfrentamientos volvieron a repetirse al día

siguiente (miércoles 13 de noviembre: solo 108 de las 1.100 rutas de autobús operaron, muchas estaciones de metro cerraron y los cortes de carretera impidieron que miles de personas acudiesen al trabajo. En esta coyuntura, 250 sucursales bancarias decidieron no abrir sus puertas, el mayor número en la historia de Hong Kong si se excluyen los días de tifones severos, e incluso se suspendió la sacrosanta carrera de caballos en Happy Valley.

En previsión de que el bloqueo se mantuviera, el Gobierno decretó la suspensión para el jueves 14 de noviembre de todas las clases. Más allá fue la CUHK, que puso punto final al semestre con un mes de antelación. En parte, por el miedo entre los estudiantes de la China continental y del extranjero. Diferentes medios de comunicación informaron de que el martes 12 de noviembre más de un centenar de los primeros fueron evacuados a la vecina Shenzhen en un buque de la Policía. Al otro lado de la frontera que separa Hong Kong

del resto del país, los jóvenes fueron acogidos en alojamientos de diferentes instituciones, incluida la Liga Joven Comunista. He Kewei estudia Periodismo en la Universidad Baptista de Hong Kong y decidió regresar a su localidad natal de Ningbo, en la costa oriental de China, por miedo a terminar siendo víctima de la violencia. «Hay mucho odio hacia los chinos del continente y temo las palizas que reciben los que muestran opiniones contrarias a las de los manifestantes. No regresaré hasta que cese la violencia», comentó. «Los estudiantes chinos que están aquí no entienden nuestra lucha. Les han lavado el cerebro y muchos pertenecen a familias adineradas que se benefician de las redes clientelares del Partido Comunista. Ha habido choques con ellos y



puede que se repitan», reconoce Jessica Chen, miembro del Consejo Estudiantil de la Universidad a la que acude He. «Pase lo que pase, continuaremos protestando», sentenció.

CHINA

LA NEFASTA POLÍTICA DE NATALIDAD PASA FACTURA A CHINA

La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población fuerzan al Gobierno a plantearse eliminar la limitación del número de hijos, vigente durante 40 años, y promover la procreación



últimas cuatro décadas por una numerosa generación de jóvenes empresarios innovadores. Durante los próximos diez o veinte años, los parámetros demográficos chinos seguirán siendo benignos. Pero, a partir de ahí y debido a la política del hijo único, hacia 2030 China se enfrentará a un brusco frenazo que puede tener

consecuencias muy graves», avanza Liang, que también es presidente de la mayor agencia de viajes 'online' de China, Ctrip. Los dirigentes comunistas siempre han subrayado que la política de natalidad, aprobada ahora hace 40 años, ha sido un gran éxito porque ha evitado el nacimiento de unos 400 millones de personas. Eso ha permitido controlar el crecimiento de la mayor población mundial y ha sido clave en la erradicación de la pobreza extrema. No obstante, la pirámide de población va perdiendo su forma característica y amenaza con convertirse en un peligroso rombo. No en vano, la Asociación China de Seguridad Social estima que, en 2035, la población de más de 60 años

«Ese rápido crecimiento ha estado propiciado en las

se disparará de los 240 millones actuales a 400 millones. De forma paralela, la esperanza de vida también crece: en los últimos ocho años ha pasado de 74,83 años a 76,5. Lo único que se reduce es la población en edad de trabajar. Después de alcanzar un máximo en 2010, cuando el 70% pertenecía a esta variable, en esta década se ha desplomado hasta caer por debajo del 65%. Y las perspectivas no son halagüeñas. Por todo eso, el borrador del nuevo Código Civil, que está previsto que entre en vigor en 2020, elimina todas las referencias a la planificación familiar. Eso supone que China podría eliminar por completo las restricciones. La pregunta, ahora, es si la medida no llegará demasiado tarde. Porque, de momento, la relajación de la política de natalidad, que desde 2016 permite tener dos hijos a todas las parejas, no ha dado los resultados esperados.



Es más, después de un breve repunte, la natalidad ha continuado cayendo. En 2017, en China nacieron 17,23 millones de personas, un 3,5% menos que en 2016. Las razones, según la Comisión de Planificación Familiar, fueron la reducción del número de mujeres en edad fértil -que se espera que caiga un 40% adicional en la próxima década- y el aumento de los jóvenes que deciden posponer la procreación. Porque la sociedad china cada vez se parece más a la de otros países desarrollados, en los que la mujer se ha incorporado al mundo laboral y en los que una mayor preocupación por la calidad de vida ha incrementado el coste de tener hijos.

«En las ciudades los precios se han disparado. Incluso encontrar un buen colegio para los niños es una batalla encarnizada y muy cara. También es cierto que somos más exigentes con la vida que queremos llevar y que

estamos dispuestos a hacer menos sacrificios que nuestros padres», comenta una treintañera de Shanghai, Long Fei. «No me veo capaz de sacar adelante un hijo con los ingresos que tenemos. ¡Imagínate dos o tres!», apostilla.

En esta coyuntura, se antoja difícil que provincias como Liaoning alcancen el objetivo de duplicar el número de nacimientos en 2030. Concretamente, en este territorio del noreste del país la tasa de fertilidad es de 0,9, una de las más bajas del mundo y muy inferior al 2,1 que garantiza el reemplazo generacional -la de España es de 1,34 hijos por mujer-. Otras provincias tienen indicadores algo superiores -la media es de 1,57-, pero el problema es nacional. Conscientes de la situación, diferentes gobiernos han comenzado a incentivar la natalidad. El 'Diario del Pueblo', medio de comunicación oficial del Partido Comunista, proclama que «tener hijos es un asunto familiar pero también un asunto de Estado», así que China se prepara para dar un giro de 180 grados a sus políticas.

Si antes se inmiscuían en las relaciones de pareja para restringir su número de descendientes a uno, algo que se hizo muchas veces por la fuerza, ahora las autoridades buscan convencer a la población de que tenga 'la parejita'. Liaoning ya ofrece incentivos fiscales, y otras provincias han propuesto sumar ayudas para quienes tengan el segundo hijo en áreas como la educación, la sanidad, o la vivienda. En un reciente viaje a la depauperada provincia de Guizhou, este corresponsal también pudo ver cómo los tradicionales eslóganes que advertían de las consecuencias de saltarse la ley del hijo único se han convertido ahora en carteles promocionales del segundo vástago. «Un niño es más feliz con hermanos», rezaba uno de ellos.



Hu Yen no ha necesitado campañas de publicidad para tener dos niñas. Esta joven de Liyang, en la provincia oriental de Jiangsu, tuvo claro desde el principio que no quería un hijo único. Incluso estaba dispuesta a pagar la multa correspondiente en caso de que no se relajase la política de natalidad, como hicieron sus padres hace dos décadas cuando nació su hermana menor. «Pero es verdad que muy pocos piensan como yo. Tradicionalmente, los chinos hemos tenido hijos con la vista puesta en la vejez y en que los necesitaremos para que nos cuiden cuando seamos mayores, pero eso ahora es una losa para la mayoría de los jóvenes. Y va a suponer un gran problema social», reconoce.



El Gobierno chino se enfrenta a un reto de dimensiones colosales. Por un lado, ha prometido incrementar las coberturas del sistema de salud público y aumentar las cuantías de las pensiones; por el otro, cabe la posibilidad de que se vea obligado a retrasar la edad de jubilación y a subir los impuestos para sufragar estas coberturas. Algunos analistas temen que la situación demográfica obligue a dejar estas reformas a medias y que el país caiga en lo que se conoce como la 'trampa de los ingresos medios', un parón en el desarrollo económico antes de alcanzar el estatus de 'país desarrollado'.

Liang compara la situación con la de Japón, donde asegura que el envejecimiento ha sido una de las principales razones por las que lleva tres décadas

coqueteando con la recesión. «Sus principales empresas tecnológicas fueron creadas tras la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Silicon Valley han surgido en los últimos 20 años. Japón ha perdido la revolución de internet, y eso se debe, sobre todo, a su envejecimiento y a la falta de capacidad para innovar», afirma. No obstante, el país nipón cuenta con uno de los sistemas sociales más avanzados, algo de lo que China todavía está muy lejos. A pesar de todo, Liang añade que «nunca es tarde para tomar estas medidas», y anima al Gobierno a que aumente el gasto social destinado a incentivar la natalidad. «Es algo muy costoso. Los países desarrollados destinan entre el 2% y el 5% de su PIB. Pero no hacerlo puede salir todavía más caro», advierte. Aunque parezca imposible, no hay suficientes chinos en China.

CRISIS DE NATALIDAD EN CHINA: LOS PARLAMENTARIOS PRESENTAN SOLUCIONES, PERO NO ENCUENTRAN VOLUNTAD POLÍTICA

Una de las propuestas eliminará las sanciones financieras por los bebés nacidos fuera del matrimonio. Otra reduciría la edad legal para casarse. Otras prohibirían la discriminación laboral contra de las madres y ofrecerían o expandirían la licencia de paternidad.

La sesión legislativa anual de China -la Asamblea Popular Nacional- suele ser un evento formal que tiene el objetivo de engrandecer al gobierno del Partido Comunista. En 2019, sin embargo, ha producido una oleada de propuestas para lidiar con lo que

expertos y funcionarios ahora reconocen como una crisis demográfica amenazadora causada por el pronunciado declive en la tasa de natalidad del país. Las ideas que ahora están en boca de funcionarios, empresarios y otros actores regionales reflejan cuán profunda es la preocupación en torno a este problema, pero también el hecho de que aún no hay un consenso claro sobre qué debería hacer el gobierno al respecto.

Una diputada, Huang Xihua, incluso llegó a proponer una enmienda a la constitución con el fin de eliminar todas las restricciones a la planificación familiar, tristemente célebres por prohibir -hasta 2016- que las fami-

lias chinas tuvieran más de un hijo.

«La razón por la que tantos diputados están presentando propuestas es que la tasa de natalidad ha disminuido durante dos años consecutivos», señaló en una entrevista He Yafu, un demógrafo y autor de un libro sobre el impacto de los controles a la población china, quien le ayudó a Huang a escribir su propuesta. «Ya no hay razones para limitar los nacimientos».

Al menos hasta ahora, el gobierno no ha dado señales de querer renunciar a su enfoque de mano dura en cuanto a las políticas sociales ni a la inmensa burocracia que aún aplica leyes de planificación familiar.

Durante más de tres décadas, China implementó con severidad su política de hijo único e impuso multas y, en algunos casos, abortos y esterilizaciones. El gobierno cedió recién en 2016, luego de que expertos previeron los problemas demográficos que el país sufre actualmente.

Hoy en día, casi todas las familias pueden tener dos hijos, pero la explosión de natalidad que se esperaba nunca sucedió. En los últimos dos años, los nacimientos han disminuido de manera vertiginosa, con una reducción del 12 por ciento en 2018. Esta tendencia ha suscitado advertencias cada vez más graves de que China se enfrenta a una población que envejece día con día y a una fuerza laboral menguante que deberá mantenerla durante las próximas décadas.

Puede que el debate en el congreso sea una señal de que se avecinan cambios en los próximos meses. Algunas de las propuestas podrían servir como pruebas experimentales para evaluar o moldear la opinión pública, particularmente en torno a temas delicados como el matrimonio y la igualdad de género.

La propuesta que ha captado más la atención fuera del Gran Salón del Pueblo, donde se celebró el congreso,



busca eliminar las restricciones legales a los niños nacidos fuera del matrimonio. Aunque nominalmente la ley en China les otorga a los hijos de madres solteras los mismos derechos que a los demás, las madres pueden estar sujetas a multas u otras sanciones.

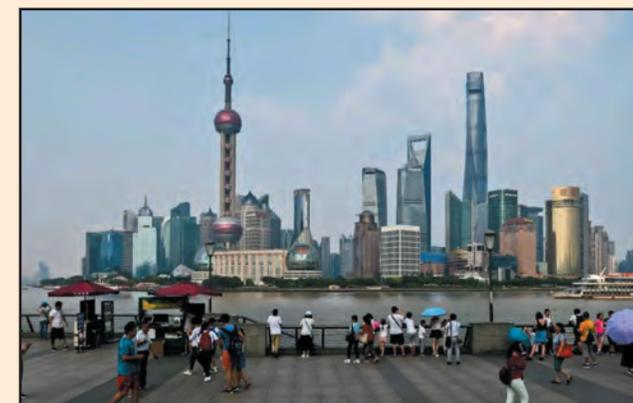
Por ejemplo, en muchas provincias, un niño puede recibir un permiso de residencia -conocido como hukou- solo si el matrimonio de sus padres está registrado. En otras, se les solicita a los padres solteros que paguen una cuota de «mantenimiento social» para cubrir el costo de los servicios públicos que recibe su hijo -básicamente, un impuesto-. Ha habido casos en los que madres solteras han sido despedidas de sus trabajos, según destacó el canal de noticias chino Caixin con base en una encuesta sobre políticas regionales.

En una sociedad conservadora como la china, las madres solteras siguen siendo blanco de estigma, aunque quizá menos que antes. Un cambio en la ley también podría afectar a las mujeres solteras que deciden tener hijos por su cuenta mediante la inseminación artificial, ya sea en China o en el extranjero. La propuesta de Huang eliminaría todas las limitaciones legales a esta práctica.

«Darles un hukou a los niños nacidos fuera del matrimonio no es una forma de motivar la maternidad en la soltería», dijo Huang en una videoentrevista para un sitio web chino, «sino de proteger sus derechos».

Una de las partidarias más fervientes de la propuesta de Huang es Zou Xiaoqi, contadora en Shanghái que dio a luz a su hijo hace dos años. Cuando se embarazó, tenía 41 años, no estaba casada y no tenía intenciones de tener un hijo. «Antes no me gustaban mucho los niños», admitió, «pero sentí que no podía renunciar a él».

Durante su embarazo, descubrió que las autoridades locales no le darían prestaciones por



maternidad, que incluyen el costo del cuidado prenatal y el salario de la madre durante los seis meses de incapacidad. Demandó al consejo local de planificación familiar y al departamento de servicios sociales pero perdió.

“El estigma todavía es muy fuerte, especialmente en algunas ciudades más pequeñas o en áreas rurales”, afirmó. “Esas madres no tienen el valor de pelear por sus propios derechos”, dijo en referencia a las madres solteras.

Si bien el órgano legislativo, en gran medida ceremonial, es el que ratifica en última instancia las nuevas leyes, los ministerios gubernamentales son los que las redactan y las presentan a los diputados para que las aprueben, por lo general, luego de meses o años de consideración. Aún está por verse cuál de las propuestas implementará el gobierno, si es que acepta alguna. Huang, por ejemplo, ya antes ha presentado propuestas y no ha obtenido resultados. Otras propuestas se han enfocado en ofrecer incentivos a las familias con hijos, por medio de exenciones fiscales, subsidios o un gasto gubernamental mayor en escuelas y servicios.

Yao Jinbo, el director general de 58.com, un sitio en línea



para consumidores minoristas, propuso un aumento a las prestaciones de subsistencia para las familias que eligen tener un segundo hijo. Otro ejecutivo, Ding Lieming de Betta Pharmaceuticals, propuso reducir la edad legal para el matrimonio, del límite actual de 22 años a los 20 para los hombres y de los 20 años a los 18 para las mujeres. Al menos dos delegados sugirieron leyes para ofrecer licencia por paternidad “para motivar a los padres a compartir las responsabilidades familiares”, según lo explicó uno de ellos, Ke Jianhua.

BIRMANIA

UN MILLÓN DE ROHINGYAS SE HACINAN EN CONDICIONES INFRAUMANAS EN BANGLADESH

Dos años después de la limpieza étnica que llenó los campos de refugiados de Bangladesh, un millón de rohingyas se hacinan en condiciones infrahumanas.

Desde una de las torretas de vigilancia situadas en lo alto de una suave colina, el mayor campo de refugiados del mundo es una interminable sucesión de chabolas de madera, bambú y chapa que se pierde en el horizonte. Aquí y allá, un árbol solitario se mantiene en pie de forma precaria sobre el polvoriento terreno que acoge a casi un millón de personas de etnia rohingya. Hasta hace dos años, la mayoría de estos montículos del sureste de Bangladesh componían un frondoso bosque que los elefantes cruzaban tranquilamente en su migración por el sur de Asia.

Todo cambió en agosto de 2017, cuando Birmania puso en marcha lo que Naciones Unidas ha calificado como «una limpieza étnica de manual». Con la excusa de com-



batir al grupo guerrillero de esta minoría musulmana, considerada la etnia más perseguida del mundo, el ejército de Myanmar -la antigua Birmania- y la población budista iniciaron una brutal campaña de asesinatos, violaciones y quema de viviendas que provocó una de las mayores cri-

sis humanitarias de este siglo: en solo un mes, medio millón de personas cruzaron el río Naf, que dibuja la frontera entre ambos países; un año después, su número había aumentado a más de 730.000, que ahora se suman a los que ya huyeron durante las recurrentes oleadas de violencia que han sacudido la región desde 1978.

«Los soldados fueron casa por casa, robando todo lo de valor y separando a los hombres de las mujeres y de los niños. A ellas las violaron. Le sucedió a mi sobrina, que tuvo suerte de que no la ejecutaran después. A muchos niños sí que los mataron. Lo vi con mis propios ojos. En una ocasión, tuve que hacerme el muerto para no correr la misma suerte que un amigo mío, que fue decapitado», recuerda Shofike Alom, un hombre de 45 años que escapó en septiembre de 2017 y que ahora vive con su mujer y sus cinco hijos en una chabola del campo de Unchiprang. «Por lo menos, hemos conseguido que toda la familia se salve», apostilla, buscando cierto consuelo.

Menos suerte tuvo Hasina. «Los soldados mataron a mi marido y decidí huir con mis dos hijos. No fue fácil. Tuvimos que dejar atrás todo lo que teníamos, incluso a mis padres, que no están en condiciones de hacer el viaje. A mí me dispararon en el tobillo, caí, y me rompí la mano. Aun así, logramos llegar», recuerda esta mujer de 30 años que comparte chabola con otras tres personas y que acaba de dar a luz a una nueva niña en el campo número 20.

Allí se ha reencontrado con familiares y conocidos a los que perdió la pista durante el éxodo. Juntos acuden a los grifos en los que pueden abastecerse de agua dos veces al día, hacen largas colas con sus cartillas de racionamiento para recibir del ejército Bangladesí las lentejas, el arroz y el aceite que les mantienen vivos, y llevan a los más pequeños a las rudimentarias escuelas que Unicef gestiona para evitar que los niños, que suponen en torno a la mitad de los refugiados, terminen convertidos en una generación perdida.

Una minoría perseguida

Mientras tanto, ya apenas quedan ciudadanos rohingya en Myanmar, un país en el que son considerados inmigrantes bengalíes llegados de forma ilegal en el



siglo XIX con los colonizadores británicos. Esa es la razón por la que el Gobierno de Naypidó rechaza reconocer a los rohingya como una de las 134 minorías étnicas del país, les niega la nacionalidad y el acceso a multitud de servicios básicos, y los confina al Estado noroccidental de Rakhine. «Estamos felices de seguir con vida y en Bangladesh nos sentimos más seguros, pero tememos no poder salir de los campos nunca más», apostilla Hasina.

Ese es un temor que comparten la mayoría de los refugiados. Naciones Unidas presiona a Myanmar para que ponga en marcha un proceso de repatriación, pero los rohingya exigen que se cumplan unas condiciones mínimas que chocan frontalmente con el odio que les profesa la mayoría de la población birmana. «Solo volveremos si se garantiza nuestra seguridad, se nos concede la nacionalidad y el acceso a la sanidad y la educación públicas, se devuelven nuestras propiedades y se respeta nuestro derecho a la libre circulación y a profesar el islam», enumera Mustafá, un activista rohingya del campo 16.

A finales de julio, una delegación gubernamental birmana visitó los campamentos, situados cerca de la ciudad de Cox's Bazar, y prometió la naturalización a quienes puedan acreditar que llevan más de tres generaciones en Myanmar, algo que ya está recogido en la Ley de Ciudadanía de 1982. «Una vez



que los padres obtienen la ciudadanía por esta vía -que no otorga los mismos derechos que la nacionalidad del resto de la población-, sus descendientes también tienen derecho a ella», comentó el sábado 27 de julio el secretario de Asuntos Exteriores birmano U Myint Thu. El problema, rebaten airados en los campos de refugiados, es que la mayoría de quienes huyeron de la violencia no llevaron consigo los documentos que el Gobierno exige para iniciar el proceso, y que los militares se encargaron de destruir cuando pegaron fuego a decenas de pueblos de mayoría rohingya. «Se nos ha discriminado desde hace décadas por nuestra raza y nuestra religión. Se ha hecho todo lo posible para empobrecernos, y no hay razón para pensar que la situación vaya a cambiar si regresamos a Myanmar. No nos fiamos de las promesas de sus políticos», afirma Mustafá, que también escapó del país en agosto de 2017.

Condiciones deplorables

No obstante, todos coinciden en la necesidad de buscar una solución al problema lo antes posible, porque los campamentos están al límite, las condiciones de vida son deplorables y el mantenimiento es un enorme lastre económico para Bangladesh. Los 20 millones de dólares que el Gobierno destina a los refugiados cada año suponen una factura muy abultada para uno de los países más pobres del continente.

Además, la repentina explosión demográfica provocada por el éxodo rohingya provoca continuos roces con la población local, es el caldo de cultivo perfecto para el contagio de enfermedades, y se traduce en un grave problema medioambiental debido a la continua deforestación de los bosques en los que habitan los refugiados. Por si fuese poco, la falta de oportunidades económicas



ha disparado el tráfico, tanto de personas como de estupefacientes. «Solo podemos acceder a trabajos de construcción y adecentamiento de los campos, por los que nos pagan 250 takas (2,7 euros) al día», se queja un hombre que abre una zanja en el campo 15.

Una de las soluciones propuestas incluye la reubicación de unos 100.000 rohingyas en una isla deshabitada de la bahía de Bengala. La primera ministra bangladesí, Sheikh Hasina, afirmó en febrero que se trata de una solución temporal para descongestionar los campos de Cox's Bazar, pero los detractores del plan denuncian que es un territorio que a menudo queda sumergido por las fuertes lluvias y que apenas cuenta con accesos. «Sería equiparable a un campo de concentración», afirma Mustafá. Consciente del peligro de que el problema se haga crónico, él aboga por una solución intermedia. «Si nos diesen estatus de refugiados, podríamos ser acogidos por otros países o, al menos, movernos por Bangladesh y tratar de buscarnos la vida», razona.

Las muertes por ajustes de cuentas entre narcotraficantes son habituales en los campos de refugiados, y el consumo de 'yaba' -metanfetamina- se extiende entre los jóvenes, para los que apenas hay actividades. La escolarización solo está garantizada hasta los 10 años. La mitad de los refugiados son niños, y muchas mujeres están en situación de vulnerabilidad. Algunas son engañadas con falsas promesas de trabajo, otras son violadas y raptadas. Durante nuestra visita, un grupo de periodistas alemanes fue apaleado porque los refugiados creían que estaban robando una niña.

Se estima que los refugiados queman unas 2.250 toneladas de madera cada día para cocinar, lo que está provocando una grave crisis medioambiental. La Cruz Roja y otras ONG distribuyen cocinas de gas para reducir el impacto de los campos en el entorno.



LA ONU DENUNCIA QUE LA VIOLENCIA LA SEXUAL CONTRA LOS ROHINGYAS TUVO INTENCIÓN GENOCIDA

Un equipo de expertos de la ONU denuncia que la violencia sexual por parte de militares birmanos contra mujeres rohingyas en 2017 tuvo una "intención genocida".

La misión ahora concluye que hay indicios razonables para asumir que la violencia sexual perpetrada contra las mujeres y las niñas, y que comenzó el 25 de agosto de 2017, es un nuevo factor que indica la intención genocida del Tatmadaw (Ejército birmano) para destruir a la población rohingya», afirmó un grupo de investigadores independientes conformado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) en un nuevo informe. Los expertos han justificado esas conclusiones basándose en el "asesinato sistemático de mujeres y niñas, la selección sistemática de mujeres y jóvenes en edad reproductiva para violaciones, ataques en mujeres embarazadas y bebés, mutilaciones y otras heridas a los órganos reproductores", entre muchas otras violencias.

De acuerdo con el informe, "cientos" de mujeres y niñas fueron violadas durante la represión de 2017 en el Estado de Rajine (oeste).

El 80% de los abusos corresponderían a violaciones en grupo, de las cuales un 82 por ciento fueron perpetradas por militares birmanos, añade.

En este contexto, los expertos han criticado a las autoridades de Myanmar (Birmania) por no haber "investigado ni castigado estos actos de genocidio".



La misión concluye que "hay indicios razonables para asumir que la violencia sexual perpetrada contra las mujeres y las niñas y que comenzó el 25 de agosto de 2017 es un nuevo factor que indica la intención genocida del Tatmadaw (Ejército birmano) para destruir a la población rohingya", afirmó un grupo de investigadores independientes conformado en 2017 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) en un nuevo informe.

Además, lamentó que en estos dos últimos años ningún comandante militar de Myanmar haya sido juzgado por los posibles delitos cometidos y los dos principales mandos de las Fuerzas Armadas siguen en sus puestos, a pesar de que hay pruebas que los acusan de "crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio".

El Gobierno birmano no autorizó la entrada de los expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al país asiático, por ello, los investigadores acumularon esas informaciones, entrevistando a refugiados rohingyas en países vecinos como Bangladesh, Tailandia y Malasia.

La violencia contra los Rohingya, llevada a cabo por el Ejército y las tribus budistas, se intensificó en agosto de 2017. Miles de musulmanes fueron asesinados, y más de 700 000 sobrevivieron huyendo del país al ser perseguidos por las autoridades. Muchas organizaciones pro derechos humanos han condenado la mortífera represión de los rohingyas y la ONU ha calificado de "limpieza étnica" la situación de la minoría más perseguida del planeta.



UNOS 100.000 ROHINGYAS RECLAMAN DIÁLOGO EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU ÉXODO

Los rohingyas se congregaron en Kutupalong, convertido ya en el mayor campo de refugiados del mundo con 630.000 habitantes, con pancartas en las que insistían en que se les tuviera en cuenta durante las negociaciones para su repatriación a Birmania, repitiendo un único mensaje: *"Hablad con nosotros"*.



Unos 100.000 rohingyas se congregaron el domingo 25 de agosto en el campo de refugiados de Kutupalong, en el sureste de Bangladesh, para reclamar un diálogo con esta minoría musulmana que facilite su regreso a Birmania (Myanmar), de donde huyeron por una ofensiva del Ejército birmano que estalló un 25 de agosto de hace dos años.

Los rohingyas se congregaron en Kutupalong, convertido ya en el mayor campo de refugiados del mundo con 630.000 habitantes, con pancartas en las que insistían en que se les tuviera en cuenta durante las negociaciones para su repatriación a Birmania, repitiendo un único mensaje: *"Hablad con nosotros"*.

"Campaña para regresar a casa, hablad con nosotros", "Hablad con nosotros sobre derechos", "Hablad con nosotros sobre ciudadanía y la etnia rohingya", "Hablad con nosotros sobre seguridad", rezaban las pancartas de gran tamaño que presidían la concentración.

En la protesta de Kutupalong participaron *"unos*

100.000 rohingyas", aunque también hubo concentraciones en otros campamentos, explicó el agente a cargo de la comisaría de la que depende la zona, Nurul Islam Majumder, que anotó que las concentraciones transcurrieron de manera totalmente *"pacífica"*.

La protesta de Kutupalong concluyó con un emotivo momento de rezo, en el que los rohingyas, muchos de ellos entre lágrimas, recordaron a las víctimas por el "genocidio" perpetrado por el Ejército birmano en Rakáin, en el oeste de Birmania.

La ofensiva comenzó el 25 de agosto de 2017 como respuesta a varios ataques de una guerrilla rohingya, empujando a Bangladesh a 738.000 miembros de esta comunidad, a la que Birmania no reconoce su ciudadanía.

El desproporcionado operativo dejó a su paso unos 10.000 rohingyas asesinados, mujeres y niñas violadas y aldeas arrasadas, una ofensiva calificada por la ONU de *"limpieza étnica de manual"* con *"indicios de genocidio"*.

"Nos gustaría volver a casa con nuestros derechos como ciudadanos, con seguridad y a nuestra propia tierra. Queremos un diálogo con Birmania sobre nuestros derechos", manifestó el líder rohingya Mohammad Jubai, miembro de la Sociedad Rohingya de Arakan para la Paz y los Derechos Humanos.

Hasta ahora, los dos intentos de iniciar el proceso de repatriación han fracasado al no presentarse ningún voluntario por la falta de garantías en Birmania.



EL GENOCIDIO DE LOS ROHINGYAS, A JUICIO POR PRIMERA VEZ EN LA HAYA

Aung San Suu Kyi escuchó relatos de muertes de menores a golpes o violaciones grupales de soldados.

La líder de Myanmar (Birmania), Aung San Suu Kyi, escuchó el martes 10 de noviembre la acusación de genocidio dirigida contra el ejército de su país por actos cometidos contra la minoría musulmana de los rohingyas a partir de 2016, en la primera vista oral celebrada por este asunto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Suu Kyi no intervino en el juicio, pero escuchó atentamente las alegaciones de los abogados de Gambia, un pequeño Estado africano de algo más de dos millones de habitantes que ha contado con el respaldo de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica para presentar la denuncia.

"Todos los genocidios ocurridos en la historia han tenido sus propias causas, con su contexto político único, pero esto no sucede de la noche a la mañana, sino que está precedido de una historia de desconfianza y propaganda que deshumaniza a los otros", declaró al comienzo de la vista oral el titular de Justicia de Gambia, Abubacarr Tambadou.

El ministro gambiano agregó: *"Cuando deshumanizamos al otro, nos deshumanizamos a nosotros mismos como seres humanos"*, y señaló que los actos de genocidio solo pueden ocurrir *"cuando existe indiferencia en la comunidad internacional"*. *"Otro genocidio está sucediendo ante nosotros, pero no hemos hecho nada para pararlo"*, y *"lo único que pide Gambia es que se le diga a Myanmar que detenga estos asesinatos"*.



sin sentido, estos actos de barbarie que siguen escandalizando nuestra conciencia colectiva", remarcó Tambadou. Suu Kyi tuvo que escuchar, en boca de los abogados de Gambia, los duros testimonios de víctimas rohingyas, como el de una madre cuyo hijo fue golpeado por militares birmanos hasta la muerte o el de una mujer embarazada que fue violada repetidamente. Entre las medidas cautelares solicitadas por Gambia están que Birmania *"tome todas las medidas a su alcance para prevenir todos los actos que constituyan o contribuyan al delito de genocidio"*, se dice en el pliego de la denuncia. Eso incluiría que se eviten crímenes como *"ejecuciones extrajudiciales o abusos físicos, violaciones u otras formas de violencia sexual, quemas de casas o pueblos, y la destrucción de tierras y ganado"*, entre otros.

Gambia se ha basado en la Convención de Ginebra para plantear el caso y sus abogados presentaron informes elaborados por la ONU, que ha documentado la violencia sufrida por unos 700.000 rohingyas que huyeron de Birmania a Bangladés desde octubre de 2016. El éxodo de esta minoría musulmana se debió a una campaña militar del ejército de Birmania, pero ese país ha defendido que actuó contra grupos insurgentes que supuestamente atacaron puestos policiales y fronterizos.

El amparo de Suu Kyi a los militares a pesar de sus supuestos crímenes es total, aseguraron los abogados de Gambia, que mostraron un cartel desplegado en Birmania para anunciar el comienzo del juicio. En él se ve a la premio Nobel de la Paz con miembros del Ejército y del Gobierno bajo el lema *Estamos*



todos juntos, mientras se ve de fondo el Palacio de la Paz de La Haya, sede de la CIJ. Ese apoyo explícito demostraría que Suu Kyi no tiene intención de tomar medidas para evitar los abusos de los militares contra los rohinyás, según los abogados de Gambia.

Mientras se celebraba la vista oral, entre 100 y 150 personas se manifestaron frente a la CIJ con pancartas en favor de los rohinyas y fotos de Suu Kyi con la palabra "¡Vergüenza!" escrita sobre ella. Una contramanifestación de un grupo menor, compuesto por unas diez personas, desplegó un cartel con otra imagen de la líder birmana en la que se decía: "Te queremos, estamos contigo".



RACISMO EN EEUU

TRECE NIÑOS ASESINADOS EN SEIS MESES EN SAN LUIS, EE UU

Son los menores negros asesinados en la ciudad estadounidense de San Luis, víctimas de la violencia y la tenencia de armas. La Policía es acusada de desidia,

La novela de Agatha Christie 'Diez negritos' ('Ten little niggers') recibe ese título por una canción infantil muy popular que sigue con la frase 'y no quedó ninguno'. Y aunque luego cambiaron negritos por indios ('Ten little indians') para no incurrir en racismo (la palabra 'nigger' es insultante pronunciada por un blanco que se dirige a un negro), el argumento de esta ficción sigue siendo el mismo: diez personas encerradas en una casa que empiezan a ser asesinadas una a una. En la realidad, el símil puede ser



la ciudad de San Luis, en Misuri, donde niños y adolescentes, todos negros, están cayendo víctimas de la violencia en sus calles, uno a uno. Y van 13 en 6 meses, desde abril, en una ciudad de 318.000 habitantes.

El Estado de Misuri fue señalado en 2017 por la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) como un lugar a evitar por los turistas negros al ser el actual ojo del huracán de la tensión racial en EE UU. Aunque parece que el racismo no tiene que ver con la sangría desatada en San Luis... O sí. La NAACP lanza esta advertencia: «Se recomienda a los individuos que viajen a este Estado que extremen la precaución. La raza,



el género y los delitos basados en el color tienen una larga historia en Misuri. Este Estado fomenta las disparidades raciales y étnicas en educación, salud, economía, distribución de poder y justicia criminal».

Dos años después, 13 menores negros han muerto en los últimos seis meses en incidentes violentos, y poco se sabe de los culpables. La Policía ha sido acusada de desidia, de no poner demasiado empeño en la investigación de casos donde la víctima es afroamericana. Un Estado donde los conductores negros son parados por los agentes de circulación un 75% más que los blancos, según un estudio de su fiscal general realizado en 2016. Con estas críticas y la opinión pública al acecho, la Policía, a través de la alcaldesa de San Luis, Lyda Krewson (blanca), ofreció el 24 de agosto -un día después de que Jurnee Thompson, 8 años, fuera disparada mientras esperaba con su familia frente a un restaurante-, una recompensa de 100.000 dólares (91.200 euros) para atrapar a los culpables. Pero al día siguiente tenía otros dos menores muertos, una cría de 10 años asesinada a tiros esa misma noche y uno de 15 años a la mañana siguiente.

Uno de esos 13 niños se llamaba Xavier Usanga y fue abatido en agosto en el patio trasero de su casa en un fuego cruzado entre dos hombres. Tenía 7 años. La comunidad negra se queja de que han debido morir unos cuantos de sus pequeños hasta que han conseguido salir en los medios de comunicación, algo que el fallecimiento de un solo niño



blanco habría logrado al instante. La madre de Xavier, Dawn Usanga, dijo a 'The Guardian': «Lo único que me consuela es que San Luis no llegó a destrozar a mi hijo. Cualquier cosa podía haberle afectado: drogas, armas... Los niños pueden cambiar muy rápido y hacer cosas malas».

El último de los menores asesinados, el número 13, se llamaba Sentonio Cox, 15 años, y estaba retrocediendo con las manos en alto cuando un hombre le disparó a la cabeza, según la Policía. Era el segundo de seis hermanos en ser muerto a tiros (el primero, de 18, falleció hace dos años). Después de que se anunciara la recompensa, detuvieron a Joseph Renick, un blanco de 54 años, acusado de asesinato en primer grado, acción criminal y posesión ilegal de arma. El gobernador de Misuri, Mike Parson, anunció que iba a desplegar más agentes en la zona con vistas a «sacar de la calle a los delincuentes». En ningún momento habla de revisar la política que permite comprar y llevar armas de fuego, un grave problema en todo el país.

Koran Addo, jefe de prensa de la alcaldesa, admitió que «la violencia es consecuencia de la pobreza generacional y la falta de oportunidades en estos barrios». Antes de trabajar para la alcaldesa, Addo estuvo en el otro lado, como reportero del 'St. Louis Post-Dispatch', y es famosa una foto suya tirada en el suelo en 2014 llorando por el gas pimienta que un agente le roció en el rostro mientras cubría una manifestación ante la sede de la Policía. Protestaban por la muerte de Michael Brown, joven negro de 18 años abatido por Darren Wilson, de 28, un agente de la autoridad blanco.



ATAQUES DEL EI EN EUROPA / REINO UNIDO

DOS MUERTOS POR ARMA BLANCA EN UN ATAQUE TERRORISTA EN LONDRES

La policía abate al sospechoso que llevaba un chaleco bomba falso y había sido reducido por varios viandantes. El atentado tuvo lugar en el mismo lugar que el ocurrido en 2017 y también en plena campaña electoral.

Dos personas murieron el viernes 29 de noviembre en Londres como consecuencia del ataque con cuchillos de un terrorista abatido posteriormente por la Policía en el puente de Londres, un puente sobre el Támesis en el centro de la capital británica donde en junio de 2017 se produjo otro ataque indiscriminado con cuchillos que causó nueve muertes, entre ellas la del español Ignacio Echevarría, cuando intentó impedir un crimen de tres terroristas islamistas.

En esta ocasión se trata de un hombre solo, que comenzó su ataque en la parte norte del puente, en la ribera de la City financiera. Habría entrado en el Fishmongers Hall, el salón de los pescadores, una de las sedes de gremios con orígenes medievales desde las que aún se forma el Ayuntamiento de la milla cuadrada de las finanzas. El salón, con una puerta que da al puente, acogía una conferencia sobre criminología a la que asistían especialistas y estudiantes de la Universidad de Cambridge y expresos. El fallecido, que cumplió condena por delito de terrorismo, habría causado allí al menos tres heridos poco antes de las dos de la tarde, hora local. Medios británicos afirman que habría un total de doce heri-



dos. Ya en el exterior, el asesino fue atacado por varios transeúntes, que lograron reducirlo. Según testigos presenciales, un peatón le perseguía con un palo de madera, otro con un extintor de incendios. Había elegido para su ataque una hora con mucho movimiento en las aceras, porque los empleados de múltiples oficinas, empresas y comercios de la zona salen a comer entre la una y las dos. Seis o siete hombres le retenían en el suelo cuando llegaron tres policías. Uno de ellos apuntó al presunto autor de los crímenes con una pistola taser de neutralización eléctrica, otro portaba un subfusil ametrallador y se apartó de la escena dos o tres metros tras conminar a los civiles a que se apartaran. Uno de los civiles se alejó con un cuchillo que había arrebatado al atacante, con una hoja de unos veinte centímetros.

Un tercer policía entró en acción hasta apartar al último civil que retenía al sospechoso. Intentó incorporarse cuando quedó solo sobre la acera y el policía armado con el subfusil lo mató con dos disparos. Junto a su cuerpo había otro cuchillo.

La Policía confirmó que el fallecido portaba un falso chaleco explosivo. Los tres terroristas de 2017 llevaban también grandes cuchillos y falsos chalecos de explosivos.

La Policía confirmó que el fallecido portaba un falso chaleco explosivo. Los tres terroristas de 2017 llevaban también grandes cuchillos y falsos chalecos de explosivos.



La estación intermodal del puente de Londres, uno de los grandes nodos del transporte en la capital británica, fue evacuada. También el rascacielos The Shard, que se levanta al pie de la estación. El mercado de Borough, donde se dieron algunos de los episodios más graves del atentado de 2017, vivió otro momento de pánico y también fue evacuado.

La Policía advirtió a la población de que algunas áreas permanecerían acordonadas, pero la normalidad regresaba paulatinamente salvo a la zona del norte del puente, donde se concentraba la investigación forense. El primer ministro afirmó que el incidente estaba ya «contenido».

A pesar de la confusión de los primeros minutos, las autoridades procedieron de inmediato a actuar como si se tratara de un atentado terrorista. Los vídeos grabados por algunos de los testigos mostraban con detalle gran parte de lo sucedido en el lado norte del puente.

Las imágenes de uno de estos vídeos mostraban a un hombre vestido con traje y corbata que parecía haber arrebatado un largo cuchillo al atacante. Un agente arrastró a la otra persona por la ropa para aislar al presunto terrorista y fue entonces cuando la Policía le disparó dos tiros, matando al atacante.

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, lamentó que algunas personas hubieran resultado heridas. *“Mis pensamientos están con ellos y*



con sus familiares”, declaró Johnson. Recalcó que *“cualquiera que esté involucrado en este ataque será cazado y llevado ante la justicia”*.

“El mensaje que enviamos a cualquiera que esté asociado con este tipo de ataques” es que “los valores británicos

prevalecerán”, agregó el primer ministro británico.

Elogio a los ciudadanos

En 2017 el múltiple crimen se produjo cuando se disputaban elecciones generales convocadas por Theresa May y en este momento Reino Unido estaba también sumergido en la campaña electoral que desembocaría en el voto del 12 de diciembre. Hace dos años, el atentado provocó reproches conservadores a la supuesta ambigüedad del laborista Jeremy Corbyn.

El líder conservador, Boris Johnson, elogió el valor de los transeúntes y de las fuerzas de seguridad. Corbyn se sumó al mismo mensaje, compartido también por los líderes de otros partidos y por el alcalde de la capital, Sadiq Khan. Los partidos suspendieron temporalmente sus actos de campaña tras conocerse que había dos víctimas mortales. Johnson llamó telefónicamente a Corbyn para darle información privilegiada sobre el incidente.



ATAQUES DEL EI EN EUROPA / HOLANDA

UN ATAQUE CON ARMA BLANCA DEJA TRES HERIDOS EN LA HAYA

el viernes 29 de noviembre se produjo un ataque con arma blanca en la principal calle comercial de la ciudad holandesa de La Haya. La Policía detuvo a un hombre de unos 35 años cerca de la calle comercial donde tuvo lugar el apuñalamiento que dejó heridas a tres personas.

Una portavoz de la Policía se negó a confirmar si se trata del autor del apuñalamiento, aunque este hombre, con pantalones verdes, chaqueta negra y con rastas en el pelo, fue detenido a tan solo unos metros de la calle comercial Grote Markstraat y en todo momento



se resistió a los agentes que intentaban trasladarle hasta el furgón policial.

En un primer momento, la Policía había dicho que el presunto autor del ataque era un hombre de estatura alta, de entre 45 y 50 años, pero al final retiró esta información, asegurando que es un error y que la persona detrás del apuñalamiento no tiene ese perfil.

Además, localizaron un cuchillo en la calle peatonal, cerca de la tienda donde entraron los heridos huyendo del agresor, pero la Policía no confirmó que se tratara de la misma arma usada en el ataque.

UN TIROTEO CON TRES VÍCTIMAS MORTALES DESATA LA PSICOSIS TERRORISTA EN HOLANDA

La policía no descarta ninguna hipótesis pero cobra fuerza la idea de que el autor, ya detenido, actuó por motivos familiares.

Asesinato por asuntos familiares, crimen de honor y atentado terrorista. Esas serían algunas de las hipótesis que a última hora de la noche del lunes 18 de marzo se mantenían abiertas en relación con el tiroteo perpetrado en uno de los tranvías de la localidad holandesa de



Utrecht, que se saldó con tres muertos y cinco heridos, tres de ellos graves, en torno a las once de la mañana.

El principal sospechoso, un hombre de 37 años, Gökmen Tanis (nacido en Turquía), con un amplio historial delictivo, emprendió la huida tras el ataque manteniendo en alerta a toda la ciudad durante siete largas horas, hasta que fue detenido por la policía. Un hecho

que desató la psicosis terrorista en Holanda y mantuvo en vilo a todo el mundo, apenas tres días después de los atentados en las dos mezquitas de Nueva Zelanda. El primer ministro holandés, Mark Rutte, en una comparecencia de prensa a última hora de la tarde, descartaba cualquier vinculación entre el suceso de Utrecht y el que dejó medio centenar de fallecidos en la ciudad neozelandesa de Christchurch.

Habló de «ataque» porque sesgó la vida de tres personas «y otras tres están luchando por sobrevivir», pero eludió emplear el calificativo de terrorista. «Hay muchas preguntas y rumores», subrayó.

El pánico se desató a las 10:45 horas en esta histórica localidad, de unos 340.000 habitantes, a unos 70 kilómetros de Ámsterdam. En la conocida como plaza 24 de Octubre, que en realidad es un cruce de viales al que se accede directamente desde una de las autopistas principales del país, un hombre la había emprendido a tiros contra los pasajeros de un tranvía. Según los detalles aportados por testigos, primero arremetió directamente contra uno de los ocupantes del convoy (una mujer) por circunstancias aún no aclaradas. Posteriormente, descerrajó los tiros fatales que acabaron con la vida de las dos personas que habían acudido a auxiliarla. Un amplio despliegue policial, al que se sumaron tres helicópteros, comenzó a buscar al presunto asesino, que había emprendido la huida. Inmediatamente se activó en toda la región de Utrecht el nivel de alerta máxima antiterrorista 5 (el 4 se mantuvo en el resto del país). Se recomendó a los ciudadanos que no abandonasen sus casas, se cerraron las puertas de los colegios y centros comerciales, se habilitó una línea telefónica de información directa a familiares en



el municipio y Cruz Roja activó un enlace en su web para poner en contacto a las familias. Llegó a recibir más de cinco mil entradas.

Se reforzó la presencia de unidades policiales y anti-terroristas en todos los lugares sensibles de la ciudad, pero también del país, en sus estaciones ferroviarias y en el aeropuerto de Schipol (Ámsterdam). A esas horas la policía seguía la pista de un vehículo, un Renault Clio de color rojo, en el que emprendió la huida el sospechoso. Tras encontrarlo abandonado y recabar varias huellas y otras pistas halladas en su interior, en torno a las tres de la tarde, se difundió a través de Twitter la imagen de Gökmen Tanis, natural de la Yozgat, una provincia del centro de Turquía. El rostro del presunto criminal fue captado por una de las cámaras de seguridad del interior del tranvía, apenas unos minutos antes del tiroteo.

El balance de víctimas sería confirmado a través de un mensaje de vídeo por el alcalde de la localidad holandesa, Jan van Zanen, apenas una hora después. Tres fallecimientos y un total de ocho heridos, tres de ellos en estado crítico, aunque posteriormente la policía reduciría ese número a cinco. Ya en ese momento, el regidor holandés mantenía que se trabajaba sobre la hipótesis del atentado, sin confirmar el cariz terrorista. «Probablemente hay un delincuente, pero también podría ser que haya varios». Se confirmaría un primer arresto, pero sin aclarar sus implicaciones.

El objetivo principal de los agentes era Tanis. Y su captura se hizo oficial en torno a las siete de la tarde, en mitad de la que era ya la segunda rueda de prensa del regidor de Utrecht y en la que un portavoz de la Fiscalía apuntaba ya posibles «razones



familiares» como una de las hipótesis de la investigación. Los registros en el interior de la vivienda de Tanis continuaron al tiempo que se rebajaba a la situación anterior el nivel de alerta antiterrorista.

Para entonces ya se había hecho pública la larga trayectoria delictiva del individuo. El pasado 4 de marzo Gökmen Tanis compareció ante un juez bajo sospecha de estar involucrado en una violación que se

había producido en julio de 2017. En 2012 fue juzgado también por robo y a finales de 2013, por intento de homicidio involuntario.

Medios turcos recogían también declaraciones de su familia. Al parecer, regresó a Turquía en 2008 después de divorciarse de su esposa, que se había quedado con su hijo en Holanda, adonde habían emigrado juntos.

ATAQUES DEL EI EN EUROPA / ALEMANIA

TERROR ANTISEMITA EN EL ESTE DE ALEMANIA

El atacante mató a dos personas en la calle y un local de comida turca tras fracasar en su plan de entrar en una sinagoga el día de la gran fiesta judía.

Dos personas murieron el miércoles 9 de octubre y varias resultaron heridas en Halle (este de Alemania) en un ataque frustrado a una sinagoga y un posterior tiroteo contra un local de comida turca, sucesos cuya investigación asumió la Fiscalía General al considerarlos de forma preliminar como un atentado de extrema derecha. La policía detuvo al que se considera único sospechoso. Según el semanario Der Spiegel, que cita a fuentes de la investigación, el atacante es un hombre identificado como Stephan B., de Sajonia-Anhalt, el land donde se encuentra Halle

El ministro de Interior, Horst Seehofer, indicó que la Fiscalía General, competente en delitos de terrorismo, encontró «suficientes indicios» para considerar un «posible contexto ultraderechista». «Con lo que se conoce debemos partir de la base de que se trata por lo menos de un ataque antisemita», señaló. El portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, habló de un atentado «horrible» y transmitió la «solidaridad» del Ejecutivo a «todas las judías y judíos». El ministro de Exteriores, Heiko Maas, subrayó que un ataque a una sinagoga conmueve especialmente en Alemania. «Todos debemos posicionarnos contra el antisemitismo en nuestro país», agregó.

Según la reconstrucción provisional de los hechos, el atacante, con ropa militar y varias armas, trató de irrumpir a mediodía en la sinagoga del distrito de Paulus de Halle, ciudad de unos 240.000 habitantes cercana a Leipzig. Entre 70 y 80 personas celebraban



en el templo el Yom Kippur, la principal festividad judía. No logró entrar, lo que evitó una auténtica masacre. Según explicó Max Privorozki, presidente de la Comunidad Judía de Halle, las puertas, cerradas según sus protocolos de seguridad, «detuvieron el ataque». «Hemos visto a través de la cámara de nuestra sinagoga que un hombre fuertemente armado, con un casco de acero y un fusil, trataba de abrir a tiros nuestras puertas», explicó.

Como en Christchurch

El atacante -que llevaba una cámara en el casco como el autor del atentado de las mezquitas de la neozelandesa Christchurch- disparó entonces a su alrededor, hiriendo mortalmente a una mujer, según el diario Bild, que asegura que también lanzó una granada de mano al cementerio judío adyacente. Luego montó en un Volkswagen alquilado y se detuvo al menos en una ocasión en medio de la calzada para disparar. Primero contra las personas que aguardaban en una parada de tranvía y luego contra un local de comida turca para llevar. Allí se produjo la segunda muerte.

De estos momentos son las imágenes, grabadas con

teléfonos móviles, difundidas por televisión y en las redes sociales. En ellas se ve a un hombre, de verde militar, con chaleco antibalas y casco integral, disparar en varias ocasiones con un arma pesada, que recarga de forma profesional. Las fuerzas de seguridad no

acleararon cuándo y cómo fue detenido.

De forma paralela se produjo un tiroteo en Landsberg, a 50 kilómetros de Halle. Allí se desplazó también un importante dispositivo policial pero no trascendió una posible relación con el ataque previo a la sinagoga.

BERLÍN CALIFICA EL ATAQUE DE HALLE DE «ULTRADERECHISTA» Y «ANTISEMITA»

El autor, un joven alemán, fue detenido tras matar a dos personas y transmitir en directo por internet sus acciones.

Las autoridades alemanas calificaron el jueves 10 de octubre de atentado «ultraderechista» y «antisemita» el ataque perpetrado el día anterior en Halle (este de Alemania), en el que murieron dos personas. Además reconocieron que, si el atacante hubiese logrado irrumpir en la sinagoga, podría haber cometido una «masacre». La crudeza del vídeo que el atacante retransmitió en directo y su manifiesto, que subió a internet, no dejan lugar a dudas sobre su ideología y sus objetivos.

«Lo que vivimos fue terrorismo», aseguró el fiscal general de Alemania, Peter Frank, quien afirmó que Stephan Balliet, de 27 años, trató de «cometer una masacre movido por el racismo y el antisemitismo». El joven, desconocido por las fuerzas de seguridad, iba «fuertemente armado», con «varias armas largas de fabricación casera» y «cuatro kilogramos de explosivos». Pero ni siquiera a tiros logró abrir la puerta de la sinagoga que pretendía asaltar y que en esos momentos acogía a entre 70 y 80 personas que estaban celebrando el Yom Kipur, la principal festividad judía.

La investigación precisará de cierto «tiempo» para dar «respuestas claras» a todas las preguntas sin despejar, explicó Frank, especialmente en lo referente a si el atacante contó con ayuda externa en la preparación del atentado. El jueves 10 de octubre Balliet llegó a la sede de la Fiscalía General para ser interrogado por primera vez. El sospechoso fue detenido el mismo miércoles pero tuvo que ser operado antes de su traslado porque resultó herido al sufrir un accidente de tráfico mientras huía en un vehículo robado. La Fiscalía



General le imputa dos cargos por asesinato y nueve intentos de asesinato.

El análisis de los investigadores se va a centrar en las comunicaciones del detenido en los últimos meses, pero también en el manifiesto que subió a internet y en la retransmisión en directo del ataque que realizó a través de Twitch, un portal para

compartir partidas de videojuegos. Esos 35 minutos, un compendio de rabia ultraderechista, son un registro desde la cámara que llevaba Balliet en su casco de todo lo sucedido. De su intento frustrado de entrar en la sinagoga, de su asesinato en plena calle de una mujer y de la muerte tiroteado de un hombre que esperaba en cola para pedir su almuerzo en un local de comida turca para llevar.

Odio a los judíos

El vídeo, que fue bloqueado por las principales plataformas digitales, también ofrecía una ventana a la ideología del odio del atacante, que apostaba por matar «antiblanco». Los judíos, dice, son «la raíz de todos los problemas» y se han inventado el Holocausto, el asesinato masivo y planificado de judíos por el III Reich, un hecho que considera que «nunca sucedió». El feminismo, por su parte, es el culpable de que la natalidad haya caído en Occidente.

El atentado tuvo también repercusiones políticas. Tras las condenas de todo el espectro político llegaron los reproches a la ultraderecha parlamentaria. El responsable de Interior de Baviera, el conservador Joachim Herrmann, que acusó al ala más radical de Alternativa para Alemania (AfD), el tercer partido con más diputados en el Bundestag, de ser los «instigadores intelectuales» del ataque. En este sentido, pero de forma más sutil, la ministra de Justicia, la socialdemócrata Christine Lambrecht, buscó responsables más allá de

los hechos materiales. «Primero van las palabras y luego los hechos», aseguró.

El ministro del Interior, el conservador Horst Seehofer, consideró una «vergüenza para todo el país» lo sucedido y alertó del auge de la violencia de extrema derecha. El de Halle no es un caso aislado. A principios de junio un ultraderechista asesinó al político cristiano-demócrata Walter Lübcke, que se había destacado por su defensa de la política de puertas abiertas con los peticionarios de asilo de la canciller Angela Merkel.



ATAQUES DEL EI / NUEVA ZELANDA

49 MUERTOS EN UN ATENTADO SUPREMACISTA CONTRA DOS MEZQUITAS EN NUEVA ZELANDA

El ataque terrorista de un australiano de extrema derecha se cobra la vida de 49 musulmanes mientras oraban en mezquitas de Christchurch.

Dos mezquitas de la ciudad de Christchurch fueron el viernes 15 de marzo el objetivo del peor ataque terrorista en la historia de Nueva Zelanda. Al menos 49 personas murieron y más de 40 resultaron heridas, confirmó la primera ministra, Jacinda Ardern. Un australiano descrito en la prensa de su país como un ultraderechista islamófobo disparó con un arma automática en una de las mezquitas y lo retransmitió por las redes sociales con una cámara adherida a su cuerpo. Fue acusado de asesinato tras ser detenido en una persecución policial. Hay otros dos arrestados. Es el atentado supremacista más letal desde la masacre en Noruega en 2011.

Alrededor de las 14.00 hora local, un individuo de 28 años identificado por los medios australianos como de extrema derecha entró armado en la mezquita Al Noor de Christchurch y abrió fuego indiscriminadamente contra los feligreses reunidos en la oración del viernes, según testigos. Mató a 41 personas -en el interior había al menos 300-. Llevaba cinco armas. El atacante lo retransmitió en directo por las redes sociales a través de una cámara. En el video dice llamarse Brenton Tarrant. Poco después de esta matanza, otras siete personas fueron asesinadas a tiros en la



mezquita de Linwood, a cinco kilómetros de la primera. Las autoridades no confirmaron si la misma persona ejecutó los dos ataques, que dejaron también más de 40 heridos, once de ellos en cuidados intensivos. Una última víctima falleció en el hospital. La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, aseguró el sábado 16 de marzo que «aparentemente las armas habían sido modificadas». Además, anunció cambios en su ley sobre posesión de armas.

Tres personas fueron detenidas tras el ataque. Tarrant, al que agentes de la policía detuvieron tras una persecución en coche, compareció ante un tribunal y fue acusado de asesinato. El juez no permitió que se le viera el rostro al detenido.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, le describió como un «terrorista extremista, de derechas y

violento».

Ninguno de los arrestados estaba vigilado, confirmó la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern. Este es uno de los debates abiertos en Nueva Zelanda: las voces críticas que acusan a la policía y las agencias de inteligencia de haberse concentrado solo en investigar posibles atentados islamistas e ignorar el crecimiento de la extrema derecha en el país. Christchurch se considera uno de los caldos de cultivo de los supremacistas.

Las investigaciones también se concentran en Dunedin donde residía el principal sospechoso. La policía cerró los accesos al centro de la ciudad, la tercera mayor del país, y pidió a la población que permaneciese en sus casas. El nivel de alerta máxima supuso el cierre de mezquitas, colegios y edificios públicos de Christchurch.

«Ha llegado la hora de cambiar nuestra legislación sobre la posesión de armas de fuego», dijo Ardern. Tarrant obtuvo una licencia de posesión de armas de fuego en noviembre de 2017 y empezó a comprar armas en diciembre de ese mismo año.

Al menos tres de los muertos tienen pasaporte de Bangladesh, según el consulado del país en Auckland. Cuando empezó el tiroteo, cerca de una veintena de miembros de la selección de críquet de Bangladesh se encontraban en un autobús a 50 metros de la mezquita Al Noor. Estaba previsto que disputasen un encuentro contra el equipo nacional neozelandés, que fue cancelado.

Ardern afirmó durante una comparecencia que «se trata de uno de los días más oscuros de la historia neozelandesa. Está claro que esto solo se puede describir como un ataque terrorista. Por lo que sabemos,



estaba bien planeado», declaró.

En el vídeo del ataque, de unos 17 minutos, se observa cómo el agresor, vestido con ropa militar, conduce hasta la primera mezquita, toma dos armas de su vehículo y con una de ellas, automática, dispara a quienes se encuentran en la calle y a la entrada del templo. Ya en el interior, vacía hasta tres cargadores. Cinco minutos más tarde, regresa a su coche y cambia de arma. Vuelve al templo y continúa la matanza. Tras alejarse con su vehículo, fue interceptado por los agentes. Tarrant es entrenador personal, según la prensa australiana. En una cuenta de Twitter, que fue eliminada, publicó un manifiesto en el que detalla los motivos que le llevaron a atacar y explica que se inspiró en Anders Behring Breivik, el noruego que en 2011 mató a 77 personas en Oslo y en la isla de Utoya. El de este viernes fue el atentado ultraderechista más letal desde el de Breivik.

En el manifiesto, titulado «The Great Replacement» (El gran reemplazo), se define como un «hombre blanco normal» que pretendía «cometer una barbarie para evitar otra mayor», para «enseñar a los invasores que nuestras tierras nunca serán sus tierras, nuestra patria nunca será la suya, al menos hasta que el hombre blanco viva, y que nunca conquistarán nuestro país y nunca sustituirán a nuestra gente». Cita también como inspiración la matanza de 2015 en una iglesia en Charleston (EE UU). Su autor, Dylann Roof, entonces de 21 años, mató a nueve negros con la intención de impulsar una guerra racial. En 2017 fue condenado a muerte.

Lo más difícil para los neozelandeses será digerir la pérdida de la inocencia que suponía creerse un país tranquilo y seguro donde nunca pasa nada. Como dijo la primera ministra, un país «donde no hay lugar para este tipo de ataques».



ATAQUES DEL EI / FILIPINAS

UN DOBLE ATENTADO CONTRA UNA IGLESIA DE FILIPINAS DEJA 20 MUERTOS

Una primera bomba explotó dentro del templo durante la misa y otra poco después en el exterior. El Estado Islámico reivindicó el atentado.

Al menos 20 personas murieron el domingo 26 de enero y más de 80 resultaron heridas en un atentado contra una catedral católica en la provincia de Sulu, en el sur de Filipinas. Se registraron dos explosiones, una justo en el momento en el que los asistentes salían de misa y una segunda en el aparcamiento, cuando las fuerzas de seguridad acudían al lugar. La mayor parte de las víctimas fueron civiles. Las autoridades sospecharon que el grupo terrorista Abu Sayyaf estaba detrás del ataque.

Entre las víctimas por las dos explosiones en la catedral de Nuestra Señora del Monte Carmel hay 15 civiles y 5 soldados. El ataque se produjo en la localidad de Jolo, capital de la provincia de Sulu, a unos 1.000 kilómetros al sur de Manila. El suceso



tuvo lugar días después del plebiscito para la creación de una región autónoma musulmana en el sur del país, bautizada Bangsamoro y concebida como solución pacífica a cinco décadas de conflicto separatista en la zona musulmana de la isla de Mindanao, que se ha cobrado la vida de unas 150.000 personas.

Esa opción, ratificada en las urnas por un 87% de los votos, parte del acuerdo de paz firmado en 2014 con el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), el mayor grupo rebelde musulmán de Filipinas que renunció a sus aspiraciones independentistas y a la lucha armada a cambio de gobernar esa nueva región.

Sulu votó precisamente en contra, pero como forma parte de la región consultada, sus votos computan en bloque y pasarán a pertenecer a esa nueva entidad.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, a través de su portavoz, Salvador Panelo, prometió "aplastar" a los "impíos criminales" que se encuentran detrás del ataque. Panelo describió el incidente como un "acto de terrorismo" y un "atre-



vido desafío" contra la capacidad del Gobierno para controlar el sur del país, campo de actuación de grupos terroristas islamistas. "Perseguiremos hasta los confines de la Tierra a los despiadados perpetradores detrás de este crimen cobarde hasta que cada asesino sea llevado ante la justicia y sea puesto tras las rejas".

El secretario de Defensa de Filipinas, Deflín Lorenzada, calificó el ataque como un "acto cobarde" y urgió a la población local a mantenerse alerta y a colaborar con las autoridades para "evitar que el terrorismo obtenga más victorias".

El jefe de la Policía Nacional, Oscar Albayalde, señaló que es probable que el grupo terrorista islámico Abu Sayyaf esté detrás del atentado, aunque ninguna organización ha asumido aún la doble explosión.

Abu Sayyaf, ahora en la esfera del Estado Islámico (ISIS), nació en los años noventa gracias a la financiación de la red Al Qaeda y Osama bin Laden. El sur de Filipinas es precisamente el principal foco de sus atentados. Entre los perpetrados por el grupo terrorista destaca el llevado a cabo en febrero de



2004 contra un ferry, con más de un centenar de muertos.

En Sulu, actúan además varios grupos yihadistas vinculados al Estado Islámico, como Maute o los Luchadores por la Liberación Islámica del Bangsamoro, responsables de sangrientos atentados en la región y que son la principal amenaza del recién ratificado acuerdo de paz de 2014.

Al ser blanco del ataque un templo católico, la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas hizo un llamamiento a todos los cristianos de Bangsamoro para que se unan "a los musulmanes e indígenas amantes de la paz en su defensa contra el extremismo violento".

ATAQUES DEL EI / SRI LANKA

MASACRE TERRORISTA EL DOMINGO DE PASCUA EN SRI LANKA

Una cadena de atentados con bombas en tres iglesias y tres hoteles de lujo causaron el domingo 21 de abril al menos 290 muertos y más de 500 heridos en Sri Lanka. El atentado sacudió la frágil convivencia étnica y religiosa.

Las autoridades españolas pidieron al día siguiente, lunes 21 de abril, a los ciudadanos que se encontraban en Sri Lanka, que «extremaran las precauciones»



tras los atentados registrados que habían causado al menos 290 muertos y más de 500 heridos.

«Ha habido varias explosiones en Sri Lanka esta mañana. Se recomienda extremar las precauciones», indicaba la Embajada de España en la India, que se ocupa de los asuntos diplomáticos en Sri Lanka.

«Horrorizados por la noticia de que los cristianos de Sri Lanka han sido atacados y asesinados durante la Pascua. Lloramos por ellos y rezamos por los heridos y las familias», hizo hecho saber Steffen Seibert, el portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel.

Personal diplomático de la embajada de España en Nueva Delhi se desplazó a Sri Lanka para tratar de contactar con los 92 españoles residentes registrados en ese país. «La cónsul honoraria en Colombo está ya en contacto con las autoridades locales», señalaba el comunicado difundido al día siguiente de los atentados por la Oficina de Información Diplomática (OID) del ministerio de Exteriores.

Los diplomáticos españoles han viajado a la capital comercial de Sri Lanka «para realizar las indagaciones necesarias respecto de posibles afectados y atención a españoles», añadía la nota. El Gobierno de España expresa en el mismo comunicado «su más firme condena» por los atentados, que reafirman su «compromiso en la lucha internacional contra toda forma de terrorismo».



Asimismo, transmite «sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas así como al pueblo y al gobierno de Sri Lanka, junto con el deseo de una pronta recuperación de los heridos».

De acuerdo con el censo nacional de 2012 del país, un 9,7 por ciento de los 22 millones de ceilandeses son cristianos declarados. La mayoría de la población del país, un 70 por ciento, son budistas, mientras que un 12,6 por ciento son hindúes reconocidos.

En 2018 se registraron al menos 86 casos de discriminación, amenazas y violencia contra los cristianos de Sri Lanka, según la Alianza

Evangélica Cristiana del país (NCEASL), que representa a más de 200 iglesias y otras organizaciones cristianas.

En 2019, la misma organización registró 26 incidentes de este tipo, incluido uno en el que supuestamente monjes budistas intentaron interrumpir una misa dominical.

En su informe de 2018 sobre los derechos humanos de Sri Lanka, el Departamento de Estado de EEUU constató que algunos grupos cristianos e iglesias informaron que habían recibido presiones para poner fin a las congregaciones, que en algunos casos las autoridades llegaron a describir como «reuniones no autorizadas».

El mismo informe apuntó que los monjes budistas intentan, de manera habitual, cerrar los lugares de culto cristianos y musulmanes.



LOS YIHADISTAS DE SRI LANKA REVIVEN EL HORROR SUICIDA DE LOS TIGRES TAMILES

Rodeados por la Policía, seis terroristas se hacen explotar con tres mujeres y seis niños, que serían sus familiares.

Llevando su locura hasta el final, los yihadistas de Sri Lanka están dispuestos a morir matando, incluso a sus propias esposas e hijos si no pueden llevarse por delante a nadie más. Cercados por la Policía en un escondrijo de la costa oriental, cerca de la ciudad de Kalmunai, seis terroristas del grupo que habían atentado hacía una semana, el domingo 21 de abril, contra iglesias y hoteles de lujo se enfrentaron a tiros y bombazos cuando iban a ser detenidos el viernes 26 de abril por la noche. Tras un tiroteo de una hora, en el que tres de ellos fueron abatidos por las Fuerzas Especiales fuera de la casa, los otros tres se hicieron explotar en su interior. Cuando, ya al amanecer, los agentes y soldados entraron en la chamuscada vivienda, les aguardaba el horror. Junto a los cuerpos reventados de los tres kamikazes, encontraron los cadáveres carbonizados de tres mujeres y seis niños, que serían familia de los terroristas. Lo mismo hizo el domingo 21 de abril la esposa embarazada de uno de los terroristas suicidas que atacaron los hoteles de Colombo, quien se hizo estallar junto a sus hijos cuando la Policía se personó en su casa para registrar-



la, matando a tres agentes.

En el asalto las fuerzas de seguridad no sufrieron ninguna baja, pero sí confirmaron la muerte de un civil alcanzado por el fuego cruzado. Además, la agencia Reuters informó que había una mujer y una niña heridas. Al parecer, serían la esposa e hija del cabecilla del grupo, el clérigo radical Mohamed Zahran Hashim, quien se inmoló el domingo 21 de abril el restaurante del hotel Shangri-La de Colombo a la hora del desayuno. Mientras las imágenes emitidas por Reuters muestran a los soldados sacando en brazos a una niña que parece conomocionada, fuentes policiales revelaron a dicha agencia que la esposa de Hashim estaba grave. Entre las cenizas y cascotes del enfrentamiento, los agentes encontraron explosivos en abundancia en la vivienda, ubicada al sur de otra ciudad también atacada el Domingo de Resurrección, Batticaloa. En esta zona de población musulmana, que se llama Saindamarud y está a 370 kilómetros al este de Colombo, la Policía registró otra casa donde el grupo terrorista pudo haber grabado el vídeo reivindicando los atentados. Allí se encontraron la bandera del Estado Islámico que aparece de fondo y los uniformes negros que visten los ojos terroristas, así como un dron, 150 cartuchos de explosivos y miles de bolas de acero para cargar de metralla las bombas de sus kamikazes.

Con sus inmolaciones, los yihadistas de Sri Lanka reviven el horror de los Tigres Tamiiles, la guerrilla hinduista que luchó tres décadas por su independencia hasta su



derrota en 2009. Pioneros de los atentados suicidas, perpetraron 160 ataques de este tipo, que perfeccionaron con chalecos bomba muy sofisticados.

Debido a tan trágicos precedentes, el último enfrentamiento volvió a disparar la tensión en Sri Lanka, donde el domingo 28 de abril hoy se cumplía una semana de los salvajes atentados en cadena que dejaron 250 muertos y medio millar de heridos. Bajo la psicosis terrorista, la Iglesia católica suspendió todas las misas por seguridad. En su lugar, el arzobispo de Colombo, cardenal Malcom Ranjith, realizó una homolía desde su residencia que fue emitida por televisión y en Negombo, donde más de cien personas fueron asesinadas en la iglesia de San Sebastián, se celebró un acto de recuerdo en la carpa fuera del dañado templo.

Para impedir nuevos ataques, el Ejército desplegó a 10.000 soldados por toda la isla, que estaban buscando a los terroristas huidos con explosivos. Tras la detención de alrededor de un centenar, entre los que había yihadistas de Siria y Egipto, aún quedaban otros cuarenta dispuestos a asestar otro golpe en cuanto pudieran. Más de una treintena eran ceilaneses que habían



vuelto de luchar a las órdenes de Daesh en Siria e Irak. Allí empezaron a marcharse jóvenes musulmanes radicalizados a partir de 2013.

Muchos de ellos proceden de esta región del este de Sri Lanka, donde también nació y predicó el clérigo Hashim. En Katanduky, un área pequeña densamente

poblada por la comunidad musulmana, hay 63 mezquitas y, según el periódico local «The Daily Mirror», once

de ellas predicán el fundamentalismo wahabista. Aunque las mezquitas moderadas aseguran haber denunciado a las autoridades los mensajes de odio que pregona Hashim, no hicieron nada y este desapareció en marzo de 2017 tras un incidente armado con un grupo súfi contrario a su radicalismo.

Sus compañeros de la Organización Nacional de Monoteísmo (National Thowheeth Jama'ath) reniegan ahora de su violencia, pero el presidente del país, Maithripala Sirisena, prohibió el sábado 27 de abril a este grupo y a otra formación llamada Jamathe Milathu Ibrahim para acabar con el extremismo.

ATAQUES DEL EI / BURKINA FASO

UN ATAQUE YIHADISTA EN BURKINA FASO DEJA 37 MUERTOS

Una emboscada contra un convoy que transportaba empleados de una empresa minera canadiense dejó un saldo de 37 muertos y 60 heridos en el este de Burkina Faso. Las autoridades investigan si se trató de un ataque yihadista.

Er an las 9 de la noche del miércoles 6 de noviembre, cuando un comando armado atacó a un convoy de empleados de la compañía minera canadiense Semafo, en el este de Burkina Faso.

"Personas armadas no identificadas tendieron una



emboscada a un convoy que transportaba trabaja-

dores de la mina de oro Semafo S.A. en el eje Ugaru-Boungou", declaró el gobernador de la región, Saidou Sanou.

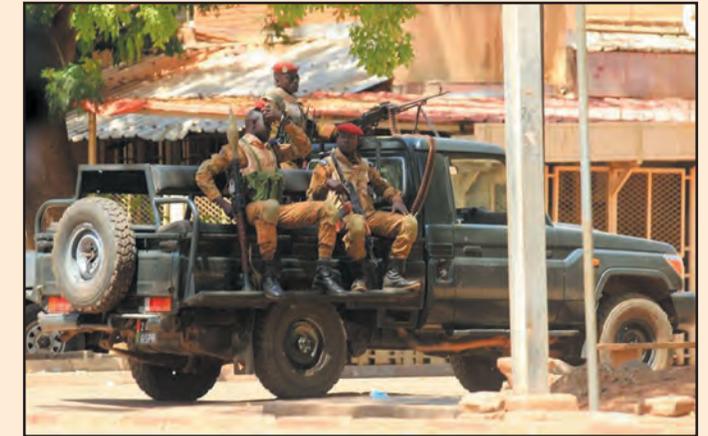
Un total de cinco autobuses que transportaban tanto a personal como a proveedores de la empresa fueron atacados. "Un vehículo militar que escoltaba al convoy saltó sobre un artefacto explosivo. Dos autobuses que transportaban a los trabajadores recibieron disparos", indicó una fuente de seguridad anónima.

Según las autoridades, el número de muertos fue es de 37, además de 60 heridos y varios desaparecidos. La cifra es la más alta desde el inicio de la violencia yihadista en el país hace cinco años. "Se está llevando a cabo un registro de las Fuerzas de Defensa y Seguridad en la zona", agregó el gobernador.

Semafo es una empresa minera con sede en Montreal y presente en 17 países del continente africano, entre ellos Burkina Faso, donde opera desde 2002 con dos instalaciones. Ya había sido objeto de dos ataques similares en agosto y diciembre de 2018, en los que murieron 11 personas.

Después de los incidentes de 2018, que según Semafo fueron el resultado de "bandidos armados", la compañía aumentó sus escoltas y decidió transportar a todos los empleados expatriados en helicóptero entre las minas de Boungou y Uagadugú.

"Por el momento, no tenemos toda la información y no estamos en condiciones de añadir nada al comunicado de esta mañana", respondió la compañía a la agencia Reuters. La empresa también recordó que el sitio de Boungou es seguro y que la explotación no se ve afectada.



En una semana, 95 muertos en el Sahel

Burkina Faso, que antes fue un remanso de paz, ha sufrido una insurgencia local en los últimos tres años, agravada por un estallido de violencia yihadista y de delincuencia, que inicio hace cinco años y se está extendiendo a países de toda la región del Sahel.

El país, que es uno de los más pobres del mundo, tiene dificultades para entrenar, asesorar y preparar adecuadamente a sus fuerzas de seguridad.

Pese a la conformación del G5 Sahel desde 2014, una alianza regional entre Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger cuyo propósito es luchar contra el terrorismo, el ejército no logra detener los ataques mortales.

En un principio, estos ataques se dirigían principalmente contra las fuerzas de defensa y de seguridad, así como a los símbolos del Estado. Hoy, sin embargo, los civiles también terminaron en el blanco de estos grupos.

"Unas 486.000 personas ya se han visto obligadas a abandonar el interior del país, incluidas 267.000 sólo en los últimos tres meses", anunció Andrew Mbogori, portavoz de la ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en una conferencia de prensa en Ginebra, y añadió que otras 16.000 han huido de las zonas afectadas hacia países vecinos. Por el momento, el número de muertes desde 2015 se estima en 600.

En solo una semana, la cifra de fallecidos en los ataques yihadistas en Burkina Faso y Mali, país con el que comparte frontera en el norte, es de 95 personas. Precisamente, un ataque contra un puesto militar en Mali el sábado 2 de noviembre dejó 54 víctimas, entre ellas un soldado francés.





EDUCANDO PARA ALCANZAR UN MUNDO JUSTO E IGUALITARIO

EL DRAMA DE LOS REFUGIADOS Y LOS EMIGRANTES

LA OFENSIVA TURCA EN SIRIA DESPLAZA A 100.000 PERSONAS

Naciones Unidas pide a las partes en conflicto que permitan el acceso a la ayuda humanitaria.

La ONU cifró el viernes 11 de octubre en 100.000 el número de personas que han tenido que abandonar sus hogares huyendo de la violencia tras tres días de la Operación "Manantial de Paz", la ofensiva turca contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria. Cerca de seis millones de civiles habitan la zona afectada. Naciones Unidas pidió a las partes en conflicto que permitan el acceso de la ayuda humanitaria a la zona donde 650.000 necesitan asistencia urgente.

Al menos 31 civiles han muerto -entre ellos varios menores- y más de 150 han resultado heridos en ambos lados de la frontera turco-siria. Las bajas de milicianos superan el medio centenar, según el recuento que hace el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, aunque ambos bandos aseguran que son muchas más las víctimas que han causado sus ataques en las tropas rivales. "El nuevo flujo de desplazamientos y las heridas causadas por los combates van a ejercer una presión extra sobre los limitadísimos recursos materiales y humanos en los hospitales", advirtió Robert



Onus, coordinador de emergencias de MSF para Siria. Al menos 4.000 personas fueron evacuadas el viernes 11 de octubre del campo de desplazados de Mabrouka por el fuego de mortero. Todos los hospitales de Tel Abyad, una de las localidades fronterizas más afectadas por los cazas turcos cerraron sus puertas. La Coalición Siria de Oposición -un grupo político que aglutina a la mayoría de facciones opositoras a Bachar el Asad- cerró filas junto a Ankara: "Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo y el retorno de los refugiados", anunciaron en Twitter. Se trata de los

dos objetivos enarbolados por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para lanzar el ataque: expulsar a las milicias kurdas (YPG), que tacha de terroristas por sus vínculos con el grupo PKK turco, de una franja de 480 kilómetros de largo por 30 de ancho al sur de su frontera y en territorio sirio donde aspira a reubicar a los 3,5 millones de refugiados sirios que acoge en su territorio. Las YPG acusan a Turquía de querer infringir un cambio demográfico reemplazando a las poblaciones kurdas por otras árabes más afines, alegando que ya ha ocurrido en el cantón kurdo de Afrin, ocupado desde hace año y medio por soldados turcos y milicias locales aliadas. "Hemos completado la primera fase de la ofensiva en Tel Abyad y Ras al Ain y libe-



rado 16 pueblos de los terroristas kurdos a lo largo de 120 kilómetros de frontera”, declaró, desde Turquía, el mayor Yousef Hamud, portavoz del Ejército Nacional Sirio (brazo militar de la Coalición Siria de Oposición que combate junto con las tropas turcas). Los expertos elevan a entre 25.000 y 30.000 los combatientes que sirven en sus filas y



Hamud cifra en “más de 14.000” los que están participando en la ofensiva. “Continuaremos con la siguiente fase de la operación hasta liberar los 30 kilómetros hacia el interior de Siria”, añadió tras puntualizar que Tel Abyad está “prácticamente cercada por las ENS”. Por su parte, las fuerzas kurdas acusan a Turquía de favorecer el resurgir del Estado Islámico con la invasión del norte de Siria tras informar de que al menos cinco presos yihadistas escaparon el viernes 11 de octubre de la prisión de Navkur después de que el fuego de artillería turco “golpeará deliberadamente la penitenciaría”. Estas fuerzas kurdo-árabes, y principal aliado en tierra de la Coalición internacional en la lucha contra el Estado Islámico, han quedado a cargo de la custodia de 12.000 presos yihadistas de 60 nacionalidades distintas y de decenas de miles de mujeres e hijos.

Las células durmientes yihadistas han incrementado el número de atentados y ataques en los últimos días. El viernes 11 de octubre, el EI asumió la responsabilidad de un atentado con coche bomba que dejó al menos

cuatro muertos y nueve heridos en la ciudad de Qamishli. Por la mañana fueron las fuerzas internas de seguridad kurdas (Assayish) quienes lograron contener un motín en el campo de Al Hol, el más poblado de los habilitados para familiares del Estado Islámico que alberga a 80.000 personas. “Hubo un ataque contra varios Assayish para provocar una fuga del campo que tornó

en manifestación y lluvia de piedras al grito de Dios es Grande”, dijo un responsable de seguridad en declaraciones recogidas por el Centro de Información de Rojava. Desde dentro, las yihadistas aseguran a sus familias que la tensión es “insostenible” y que “las estanterías (del mercado de alimentos del campo) están vacías”.

Tras ocho años y medio de guerra con más de 370.000 muertos y millones de sirios fuera de sus hogares (5,7 millones de refugiados y 6,2 millones de desplazados internos), la ofensiva turca abre una nueva etapa en la guerra que podría tener consecuencias en la región. Tras inicialmente dar luz verde a la ofensiva de Ankara, el presidente de EEUU, Donald Trump, se retractó para amenazar el viernes 11 de octubre con imponer “sanciones muy significativas” a Turquía por su incursión militar en Siria. “Digan lo digan, no vamos a detener nuestra marcha contra las YPG”, respondió Erdogan durante una conferencia de parlamentarios dedicada a la lucha contra el terrorismo.

LAS POLÍTICAS DE TRUMP ESTÁN CREANDO LA CRISIS DE INMIGRACIÓN QUE BUSCABA

Las patrullas fronterizas detuvieron a 76.103 personas en el sur durante el mes de febrero, la cifra más alta de los últimos once años.

Hasta el miércoles 6 de marzo las estadísticas no daban la razón a Donald Trump cuando alarmaba a sus



bases con la avalancha de inmigrantes indocumentados que llegan a EE UU, pero sus políticas están creando la crisis que buscaba. Durante el mes de febrero las patrullas fronterizas detuvieron a 76.103 personas en la frontera sur -en comparación a 58.295 el mes anterior-, la cifra más alta de los últimos once años. Muchas de ellas se entregaron voluntariamente para solicitar asilo político, una categoría que ha aumentado en un 90% debido en gran parte a la crisis hondureña, donde, a diferencia de Venezuela, el Gobierno de Trump ha apoyado las elecciones fraudulentas que permitieron a Juan Orlando Hernández perpetuarse en el poder.

La difusión que Trump ha dado a las caravanas de migrantes las ha hecho más populares. Al menos 70 grupos de más de cien personas han intentado cruzar la frontera en este año fiscal -que comenzó en septiembre de 2018-, según dijo el miércoles 6 de marzo al Congreso la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. En comparación, sólo trece grupos lo intentaron en 2018 y apenas dos en el que le precedió. Con esos datos en la mano, la encargada de la seguridad en la frontera intenta justificar la emergencia nacional que ha declarado el presidente para apropiarse de 5.700 millones de dólares (5.040 millones de euros) con los que construir un muro que blinde los 3.000 kilómetros comunes que separan a EE UU de México. A pesar del repunte las cifras totales siguen lejos de la media de



81.588 detenciones al mes que se registraron durante el Gobierno de George W. Bush y de las de Bill Clinton. En el año 2000 se detuvo a 1,64 millones de personas que intentaban cruzar la frontera, frente a las 368.044 del año fiscal correspondiente a 2018. Incluso si se extrapolan las 268.044 detenciones de los primeros cinco meses de este año fiscal al resto de los meses, la cifra quedaría muy por debajo del récord ocurrido con el cambio de milenio.

Lejos de aminorar el problema, el endurecimiento de las políticas migratorias y la seguridad en la frontera animan a los inmigrantes a intentarlo antes de que sea más difícil. Los propios ‘coyotes’ centroamericanos utilizan el argumento del muro para animarles a emprender

la aventura antes de que se construya. Nielsen dijo también que ha dedicado «gran parte» de su tiempo a convencer al Gobierno mexicano para que frene a los emigrantes en la frontera con Guatemala, «más cerca de su fuente de origen». El mayor aumento de detenciones se ha producido en el sector de El Paso, donde el incremento ha sido del 434%. Eso justifica la construcción de nuevas cárceles donde se retiene a los detenidos hasta que se procesen sus expedientes. Quienes van acompañados de niños no pueden ser legalmente detenidos durante más de 20 días, lo que es el caso de más de la mitad de los detenidos en febrero.



TRUMP SE RETIRA DEL TRATADO DE ARMAS DE LA ONU

El presidente de EE UU anuncia la medida en la reunión de la Asociación Nacional del Rifle, con la que cuenta para salir reelegido en 2020.



Donald Trump sabe que hay cosas serias y sagradas con las que no se juega, como la vida ajena. «¡Bum! ¡Otro tipo malo! ¡Bum!», dramatizaba el viernes 26 de abril el presidente desde el escenario de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), con la que cuenta para ganar las elecciones. «Amigos, id a votar, que si no os van a quitar vuestras armas. Y no penséis que falta tanto, eso le estaba diciendo yo a Melania -por cierto, que hoy es su cumpleaños, feliz cumpleaños, Melania-. ¿Te puedes creer que ya están otra vez las elecciones a la vuelta de la esquina? Y parecía que cuatro años era mucho tiempo...».

Tocaba dar un caramelo a tan nutrido grupo de votantes, para que no se olviden de a quién tienen que apoyar el año que viene, pero como la alta política le aburre, la despachó en dos frases.

«Hoy anuncio oficialmente que EE UU revocará a todos los efectos la firma del equivocado Tratado para el control del Comercio de Armas. Nunca dejaré que burócratas extranjeros pisoteen vuestro derecho de la Segunda Enmienda constitucional (a portar armas)», prometió.

Y tal vez porque a él le sonaba a chino antes de que sus asesores se lo sirvieran en bandeja, le sorprendió el aplauso rotundo. «Estoy impresionado, nunca imaginé que muchos de vosotros sabrías lo que es eso». Un día más en la vida política de EE UU bajo el Gobierno de Trump, y uno menos para la paz mundial. El Tratado para el Comercio de Armas fue una iniciati-

va del Nobel de la Paz costarricense Oscar Arias para establecer estándares internacionales que regulasen el comercio de armas convencionales. Desde Amnistía Internacional hasta el Dalai Lama se sumaron a su propuesta, que tardó décadas en materializarse a través del Tratado no vinculante de Armas Cortas Ilícitas que se aprobó en la ONU en 2003 bajo el mandato de George W. Bush.

Todavía hubo que esperar una década a que la Asamblea General de la ONU convocase una gran conferencia sobre el comercio de armas para darle dientes a estos acuerdos, que entraron en vigor en 2014 en la forma actual del tratado.

Con todo, el Congreso de Estados Unidos nunca lo ratificó y ya no tendrá que hacerlo. Una treintena de países entre los que destacaban los malhechores habituales -Rusia, Israel, Corea del Norte, Venezuela y Siria- se habían resistido a permitir su entrada en vigor, muchos de ellos pendientes de lo que hiciera Washington.

El tratado se redactó con el máximo cuidado para no interferir en asuntos domésticos, por lo que las reticencias de los portadores de armas en EE UU a los que Trump asusta con la burocracia extranjera son de todo punto injustificadas. Lo único que se establece es la obligación de supervisar la exportación de armas para asegurarse de que no lleguen a los países sancionados con un embargo, se usen para violar los derechos humanos o caigan en manos de terroristas. De hecho, muchas de las normas de importación y exportación de armamento que contempla son similares a las que tiene Estados Unidos para rastrear su destino, pero los detalles son lo de menos cuando se trata de ganarse a las masas.



TRUMP JUEGA CON MÉXICO HASTA EL FINAL

A la desesperada, el Gobierno mexicano detiene a activistas y migrantes para probar su colaboración.

Los «aranceles migratorios» del 5% con los que Donald Trump amenazó a México parecían el viernes 7 de junio un imparable misil en línea directa de colisión con la economía mexicana, pero la primera víctima no fue el peso, sino Irineo Mujica.

El activista de 48 años que se declara «migrante de nacimiento» fue detenido en Sonora por tres policías de paisano poco después de que el secretario de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, se reuniera con el vicepresidente, Mike Pence. Hacía mucho que Estados Unidos le seguía los pasos a él y a otros dirigentes de la organización Pueblos Sin Fronteras, que asiste a las caravanas de migrantes en sus travesías. Los medios estadounidenses se habían hecho eco del espionaje al que se sometía a la organización y el acoso que sufrían tanto sus activistas como los periodistas que les acompañan al cruzar la frontera de vuelta a EE UU.

Mujica, «capaz de quitarse su propia camisa para dársela a un hermano migrante», aprendió a curarles las ampollas de los pies con Médicos Sin Fronteras y llevaba al menos un década dedicado a ayudar a cuantos podía. Él mismo ha cruzado el río Bravo o saltado la valla en innumerables ocasiones.



A estas alturas tiene doble nacionalidad, pero había elegido quedarse a vivir en el lado mexicano, convencido de que hay más trabajo en las plantas manufactureras de Tijuana que al otro lado de la frontera.

México intenta persuadir a toda costa al inestable presidente de EE UU de que le ahorre el sufrimiento de hundir sus exportaciones, destinadas en un 80% a su vecino del norte. En pocos días el Gobierno mexicano ha aceptado destacar a 6.000 efectivos en la frontera de Guatemala, ha incautado las cuentas bancarias de quienes cree responsables del tráfico de migrantes centroamericanos en seis ciudades mexicanas, ha aceptado que los solicitantes de asilo político en EE UU esperen la decisión en México y el viernes 7 de junio parecía dispuesto a aceptar también lo que, a priori, Ebrard

había considerado innegociable: un acuerdo que obligue a los migrantes a solicitar el asilo en el primer país al que crucen y, por tanto, permita a EE UU deportar a México a todos los guatemaltecos; y a este, deportar a Guatemala a todos los salvadoreños y hondureños que intercepte.

500 personas detenidas

Como señal de buena voluntad, el Gobierno mexicano detuvo a Irineo Mujica y después, cerca de Ciudad de México, a Cristóbal Sánchez, otro destacado activista de Pueblo Sin Fronteras. Además, las autoridades migratorias se encargaron de disolver una caravana de 500 personas



«que huyen del hambre y la violencia», en la que había «familias enteras» que fueron detenidas, según denunció la organización. Satisfecho con las concesiones, Trump dio indicios de que hay «buenas posibilidades» de alcanzar un acuerdo que evite la entrada en vigor del 5% de impuestos arancelarios sobre todos los productos mexicanos que prometió con un tuit, pero no por ello bajó la presión. Su portavoz Sarah Huckabee insistió en que la Casa Blanca sigue con el plan hasta que se firme un acuerdo, para desesperación de importadores y exportadores a ambos lados de la frontera.



Si algo logró la delegación mexicana en una semana de negociaciones en Washington es el apoyo de empresarios y legisladores estadouniden-

ses, que se preparan para la pesadilla económica y logística que supondría la entrada en vigor de esos impuestos.

EL HORROR DE LOS NIÑOS DETENIDOS EN LA FRONTERA VUELVE A SACUDIR EEUU

Donald Trump pospone las redadas masivas, pero las condiciones de los centros de detención se asemejan a los campos de concentración.

Sus cuerpos no tienen nombre, puede que nunca lo tengan. La etiqueta que le han colgado del tobillo en la morgue del condado de Hidalgo (Texas) sólo tiene un número, pero los que más estremecen son los que puso en un tuit el sheriff

Eddie Guerra: «Una mujer de unos veintitantos años, dos niños y un bebé». Murieron tras cruzar el río Bravo, aún se desconoce cómo, en un rincón del parque nacional Anzalduas conocido como 'El Rincón del Diablo'. No muy lejos hay mesas de picnic para los domingueros. El presidente Trump lo visitó en enero para subrayar la necesidad de construir el muro que ha prometido y, por si la presencia de narcotraficantes y coyotes no asustan los sufi-



ciente, aseguró que en esa zona capturaban «hombres de Oriente Medio». Solo que esta mujer y presumiblemente sus tres hijos parecen venir de donde la inmensa mayoría de los 144.000 inmigrantes detenidos en el mes de mayo por cruzar ilegalmente la frontera, del triángulo centroamericano que forman El Salvador, Guatemala y Honduras. Si hubieran estado vivos cuando los focos de las patrullas fronterizas iluminaron la espesa oscuridad

del parque, es posible que hubieran acabado en una de las instalaciones para menores que tienen horrorizada a la opinión pública mundial y hasta a los jueces del Noveno Circuito de Apelaciones. «¿Es que usted no cree que tener acceso a un jabón, una manta y un cepillo de dientes es básico para decir que hay condiciones sanitarias?», le preguntó indignado a finales de junio uno de los jueces a una abogada del Gobierno de Trump, que ha cortado el acceso de productos básicos.

Y eso que estos jueces no han visto los lugares en los que se hacían. Los médicos y abogados que visitaron uno de estos albergues en Clint (Texas) quedaron tan espantados que decidieron jugarse los casos que llevan y hasta la licencia al denunciarlo abiertamente a la prensa, empezando por Associated Press y terminando con las principales cadenas de televisión.

Epidemias de gripe mortales

Cientos de criaturas en barracones sin ventanas, durmiendo en el suelo con papel térmico por manta, obligados a cuidarse unos a otros, algunos incentivados con comida para convertirse en capacitados dentro de las instalaciones. Epidemias de gripe que han costado varias vidas. «Le pregunté a una de las niñas por qué el bebé que tenía en brazos no llevaba pañales», contó al canal ABC News la abogada Warren Binford. «Me miró sorprendida y me dijo que no lo necesitaba. En ese momento el bebé se le orinó encima y se puso a llorar. Tienen



a niños cuidando niños que no saben que hacer».

A las madres que les permiten ocuparse de sus bebés ni siquiera se les da acceso a agua corriente para lavar los biberones. Hay plagas de pio-

jos que al menos en un caso los guardias solucionaron proporcionándoles dos peines para 350 niños. «Arreglároslos», dijeron. Y cuando uno de los dos peines se perdió, castigaron a los chicos quitándoles las pocas mantas y colchonetas que había en el barracón.

«Siempre han pasado cosas horribles en las instalaciones de las patrullas fronterizas, especialmente con los niños», explicó la misma abogada a la revista 'New Yorker'. «Lo que ahora nos preocupa es el número de niños que arrestan, las edades -el más pequeño tenía dos meses y medio- y el tiempo que los tienen allí -legalmente es un máximo de 72 horas, pero casi todos los que entrevistaron lle-

vaban varias semanas-». Ante esas condiciones, la noticia de que Donald Trump ha pospuesto las redadas «masivas» que había anunciado no logró devolver el sueño a quienes se preparan para perder a sus hijos. «Es un aplazamiento, no una solución», subrayó el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, una de las diez ciudades que se enfrentan a la batida. Son sus iglesias el último santuario al que acuden quienes forman parte de esta nueva lista de Shindler.



UNICEF DENUNCIA DESATENCIÓN DE MENORES MIGRANTES EN EEUU

La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, denunció el martes 25 de junio la falta de protección y servicios necesarios en Estados Unidos para garantizar el bienestar de los menores migrantes, tras el fallecimiento de la niña salvadoreña de casi dos años y su padre, que murieron ahogados en el río Bravo.

La responsable del fondo para la infancia de la ONU calificó la muerte de ambos de "un claro recordatorio de los peligros que afrontan los migrantes intentando llegar a Estados Unidos".

"Es una imagen demoledora que debería sacudirnos a cada uno de nosotros", agregó Fore en referencia a la foto que apareció publicada y que recoge los cadáveres de padre e hija.

En un comunicado, la directora de Unicef mostró también su preocupación "por el bienestar de los niños migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos niños, tras afrontar viajes peligrosos, están ahora ubicados en instalaciones que no están equipadas para cubrir las necesidades de esta población vulnerable".

Fore defiende que los niños no deben estar en ambientes que no son seguros y que puedan causarles "estrés" y un "daño irreparable a su salud y desarrollo", por lo que pidió una acción urgente y



fondos para proveer los servicios y el apoyo esencial a los menores y sus familias.

"Es difícil comprender que esto suceda en un país con una historia tan rica como defensor de los niños necesitados en todo el mundo", concluyó Fore, que visitó varios campamentos de migrantes en Tijuana, México.

Asimismo, instó a los países de origen, tránsito y destino a que actúen e implementen enfoques coordinados para garantizar los derechos, la protección, el bienestar y la dignidad de los niños migrantes y refugiados.

"La muerte de la niña de dos años Valeria, muestra que es necesaria de manera urgente una acción coordinada que aborde el origen de las causas de la migración irregular y que mantenga a los niños seguros", agregó.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) expresó su consternación por la fotografía del padre y su hija de 23 meses ahogados en el Río Bravo, cuando intentaban cruzar de México a Estados Unidos y dijo que pone en evidencia la falta de respuesta de los Estados a la migración.

"Aunque los detalles permanecen inciertos, lo que está claro es que las circunstancias que llevaron a esta tragedia son inaceptables", señaló el organismo en un comunicado.



BACHELET HORRORIZADA POR LAS CONDICIONES QUE SUFREN LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS EN EEUU

Para la responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, las medidas para gestionar el movimiento de personas en la frontera deben cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y no basarse en políticas de miras estrechas destinadas únicamente a detectar, detener y deportar rápidamente a los migrantes irregulares.



También recordó que la detención de niños migrantes puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró el lunes 8 de julio horrorizada "por las condiciones en que los migrantes y refugiados, niños y adultos, están detenidos en los Estados Unidos de América después de cruzar la frontera sur".

Michelle Bachelet, que además es madre y pediatra, hace hincapié en que "los niños nunca deben ser recluidos en detención migratoria o separados de sus familias".

Desde octubre, nueve personas, de ellas tres niños, han muerto en los centros de detención a los que son conducidos los migrantes y refugiados tras cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Muchos también

han caído enfermos debido a unas pobres condiciones higiénicas y sanitarias.

Cuando finalmente creen que han llegado a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte.

"Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de Estado, estoy profundamente sorprendida de que los niños se vean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas, sin acceso a atención médica ni alimentos adecuados, y con malas condiciones de saneamiento", dijo Bachelet.

Trato cruel, inhumano o degradante

La Alta Comisionada declaró que varios organismos de derechos humanos de la ONU han encontrado que "la detención de niños migrantes puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante que está prohibido por el derecho internacional".

"Detener a un niño, incluso por períodos cortos y en buenas condiciones, puede tener un impacto grave en su salud y desarrollo. Consideren el daño que se está haciendo todos los días al permitir que esta situación alarmante continúe", afirma Bachelet, para quien es claro que la detención de inmigrantes nunca está en el mejor interés de un niño. Bachelet menciona el perturbador informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense que señala que se deben corregir



las condiciones en los centros para migrantes a lo largo de la frontera sur, e insta a las autoridades a encontrar alternativas que no incluyan la detención de niños y adultos migrantes y refugiados.

El arresto, el último recurso

"Cualquier privación de libertad de los migrantes y refugiados adultos debe ser una medida de último recurso", asevera la Alta Comisionada que indica que, si se lleva a cabo la detención, esta debe ser por el período más corto de tiempo, con garantías de debido proceso y en condiciones que cumplan con todas las normas internacionales de derechos humanos relevantes.

"Los Estados tienen la prerrogativa soberana de decidir sobre las condiciones de entrada y permanencia de los extranjeros. Pero claramente, las medidas de gestión de la frontera deben cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y no deben basarse en políticas de miras estrechas destinadas únicamente a detectar, detener y deportar rápidamente a los migrantes irregulares", agregó.

Bachelet indica que, en la mayoría de estos casos, los migrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y alejados de la violencia y el hambre: *"Cuando finalmente creen que han llegado a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte".*

Situación compleja para los Estados

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México y América Central ha documentado numero-



sas violaciones de derechos humanos y abusos contra migrantes y refugiados en tránsito, incluido el uso excesivo de la fuerza, la privación arbitraria de la libertad, la separación familiar, la denegación del acceso a los servicios, el rechazo y expulsiones arbitrarias. La Alta Comisionada reconoce la complejidad de la situación y los desafíos que enfrentan los Estados de origen, tránsito y destino.

Por ese motivo, les pide que trabajen juntos para abordar las causas fundamentales que obligan a los migrantes a abandonar sus hogares mediante la implementación de políticas transversales que tomen en cuenta los complejos factores de la migración. Estos factores incluyen la inseguridad, la violencia sexual y de género, la discriminación, la pobreza, los impactos adversos del cambio climático y la degradación ambiental.

La Alta Comisionada reconoce la complejidad de la situación y los desafíos que enfrentan los Estados de origen, tránsito y destino. Por eso, deben trabajar juntos.

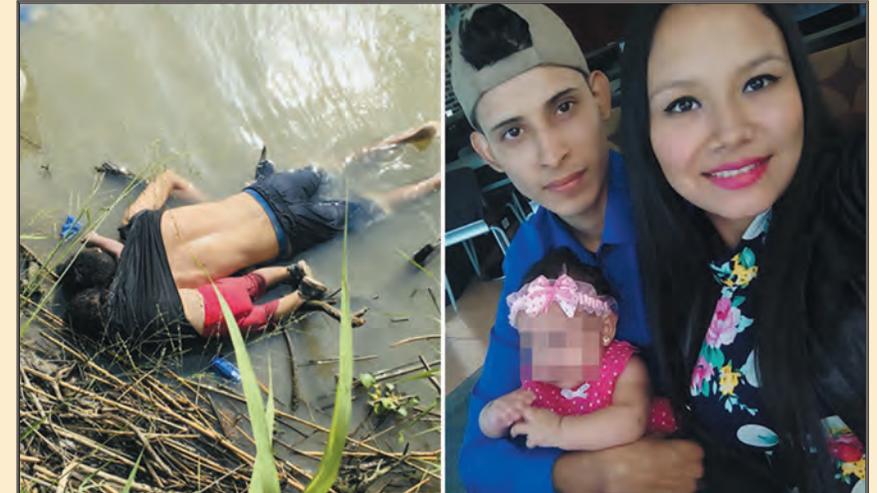
Bachelet también rindió homenaje a individuos y organizaciones de la sociedad civil que han brindado a los migrantes los derechos más básicos, como el derecho al agua, la alimentación, la salud, la vivienda adecuada y otra asistencia de este tipo.

"La provisión de asistencia para salvar vidas es un imperativo de derechos humanos que debe respetarse en todo momento y para todas las personas necesitadas; es inconcebible que aquellos que buscan brindar dicho apoyo corran el riesgo de enfrentar cargos penales", afirmó.



IMPOTENCIA E INDIGNACIÓN POR LA MUERTE DE UN PADRE Y SU HIJA EN AGUAS DE RÍO BRAVO

La tragedia que enlutó a la comunidad salvadoreña y a la población de casi todo el mundo por la muerte tan cruel que sufrieron un padre y su hija de tan solo año y medio en la frontera de México y Estados Unidos el pasado mes de junio, causó tal impacto en las conciencias que numerosas personas se pronunciaron con mensajes de consternación.



Entre ellos el presidente de ese país, Nayib Bukele, quien comunicó que su gobierno asumiría los gastos de repatriación de los cuerpos y que ayudaría económicamente a la familia, en respuesta a la petición de un pariente de Martínez, quien acudió a las redes sociales para solicitar al presidente ayuda para traer al país a las víctimas.

"He dado instrucciones a presidencias para que también se ayude económicamente a la familia. Esta tragedia nos debe recordar que debemos de construir un país donde migrar sea una opción y no una obligación", escribió en su cuenta de Twitter.

En menos de 10 días, tres migrantes salvadoreños murieron intentando cruzar México para llegar a Estados Unidos en busca del tan anhelado *"sueño americano"*.

Óscar Martínez, Tania Ávalos y su hija Angie Valeria, intentaron cruzar el caudaloso Río Bravo, que separa México de Estados Unidos, donde se lo conoce como Río Grande, pero jamás llegaron a su destino, ya que la peligrosa corriente arrebató la vida al padre y a la niña.



Sus familiares contaron que los migrantes estuvieron unos dos meses en un albergue en el Estado mexicano Chiapas, pero la familia se impacientó y emprendió su camino al norte. Rosa Ramírez, madre de Óscar, dijo a los periodistas que su hijo se fue porque en El Salvador no ganaba lo suficiente y tenía el sueño de ahorrar para comprarse una casa.

"Desde la primera vez que él me hizo el comentario que se querían ir, yo les decía que no se fueran, que no tomaran esa decisión. Era un presentimiento tan feo, como madre sentía que algo podía pasar", dijo Ramírez en su pequeña vivienda ubicada a las afueras de San Salvador.

La esposa y madre de los migrantes salvadoreños que perdieron la vida a la orilla del río Bravo relató la desgarradora escena que ha conmovido al mundo entero y narró cómo sucedieron los hechos.

"Él cruzó a la niña primero y luego fue por mí, pero la niña pensó que estaba jugando y se fue tras él. Entonces la niña cayó al agua y sin pensarlo, mi esposo se lanzó tras ella, pero cuando él trató de agarrarla se metió más adentro para salvarla y ya no pudo salir, él se la metió en su camisa y me ima-

gino que él dijo: “Hasta aquí no más llegué”.

Tania pudo ser rescatada posteriormente por varias personas que escucharon sus gritos de desesperación y dolor. Las autoridades locales iniciaron la búsqueda de los cuerpos, pero hasta el día siguiente no fueron encontrados varios metros río abajo.

El papa Francisco expresó su pesar por la muerte de este migrante salvadoreño y su hija.

“Con inmensa tristeza, el Santo

Padre ha visto las imágenes del padre y su hija bebé que se ahogaron en el río Bravo cuando trataban de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos”, dijo el vocero interino Alessandro Gisotti en un comunicado.

“El Papa está profundamente apesadumbrado por su muerte y reza por ellos y por todos los migrantes que han perdido la vida cuando intentaban huir de la guerra y la miseria”, añadió.

Por su parte, el presidente Donald Trump culpó a los



demócratas por la muerte del hombre y su hija, mostrada en una dura fotografía que se ha convertido en un símbolo del peligro que enfrentan los migrantes. Cuando se le preguntó sobre la fotografía cuando salía de la Casa Blanca para un viaje rumbo a Asia, Trump dijo a los periodistas: “La odio”.

Pero dijo que las muertes podrían haberse evitado y culpó a los demócratas por no aprobar una legislación que, según afirma,

impediría que la gente intentara hacer el peligroso viaje. Trump dijo que el padre, Óscar Alberto Martínez Ramírez, probablemente era un “tipo maravilloso”.

Sin embargo, la lamentable muerte desató un tsunami de críticas contra la política migratoria del presidente.

“Trump es responsable de estas muertes”, dijo Beto O'Rourke, excongresista por el estado de Texas inmerso en la carrera para ser el candidato del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2020.

LA ONU CRITICA LA POLÍTICA MIGRATORIA DE EEUU

La nueva política migratoria con la que Estados Unidos espera frenar el flujo migratorio de centroamericanos va en contra de sus obligaciones internacionales al restringir fuertemente derechos y libertades básicas.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) criticó el pasado mes de julio de esta forma la medida que implica que EEUU rechazará a partir de ahora las peticiones de asilo de extranjeros que hayan pasado por un tercer país considerado seguro, sin que hayan presentado en este una petición similar. “Creemos que esta medida recorta excesivamente el derecho a pedir asilo, amenaza el derecho a no sufrir un retorno forzado y



pone de forma excesiva el peso de la prueba en los solicitantes”, dijo la portavoz de ACNUR, Liz Throssell. La consecuencia será “poner en riesgo a las personas vulnerables que necesitan protección internacional”.

TRUMP DA PODER A INMIGRACIÓN PARA EJECUTAR DEPORTACIONES “EXPRES”

Cualquier agente de ese departamento podrá determinar, sin pasar por un juez, que un detenido se encuentra en el país de forma ilegal.

La última vez que Donald Trump avisó de que su Gobierno llevaría a cabo «deportaciones masivas» de «millones» de inmigrantes indocumentados, los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a 35 personas, de las que 17 fueron «detenciones colaterales». Lo que no cuentan las estadísticas es los millones de personas que dejó aterrizadas, las que huyeron de sus casas, los niños que se orinaron en la cama pensando que no volverían a ver sus padres y cuántas familias construyeron apresuradamente refugios secretos, como en los tiempos de la persecución nazi. El círculo de esta cacería, que afecta al menos a once millones de personas, se estrechó aún más el martes 23 de julio al entrar en vigor una nueva autorización del Gobierno a los agentes del ICE que les permitirá deportar de forma expedita a los detenidos sin pasar por un juez. Hasta ahora esa potestad se limitaba a los que capturados en las primeras cien millas de la frontera que no pudieran demostrar que llevaban más de 14 días ininterrumpidos en el país, o hubieran llegado por mar y llevaran menos de dos años.

Tras buscar con lupa las lagunas legales en las leyes y directrices expedidas desde 1997, el Departamento de Seguridad Nacional considera que tiene potestad exclusiva e «inrevisable» para cambiar esas directrices. Con la excusa de homogeneizar las políticas mencionadas y ali-



viar el embotellamiento burocrático, desde el martes 23 de julio se aplica la deportación expedita a todos los detenidos que hayan llegado por tierra o mar sin importar en qué parte del país sean detenidos.

¿Y cómo se determinará quién es susceptible de ser deportado, si ningún juez lo revisa? ¿Tendrán que ir todos los hispanos con el pasaporte y la tarjeta de residencia en el bolsillo hasta para salir a la esquina? El peso de demostrar su situación «a satisfacción del agente de Inmigración» recaerá sobre ellos.

No sería la primera vez que este departamento deporta a ciudadanos estadounidenses, detenidos por el simple hecho de hablar español o tener un nombre hispano. El miedo ahora se extiende mucho más allá de los once millones de indocumentados y llega al 14% de la población nacida en el extranjero.

Varias organizaciones se han apresurado a llevar a los tribunales el terrorismo migratorio de Trump, pero la maquinaria judicial lleva su tiempo. Precisamente ese es el argumento del Gobierno para justificar esta medida extrema. «El efecto de este cambio será mejorar la seguridad nacional y la seguridad pública, mientras se reducen los costes», defiende la directiva en la que se anunció.

De camino, se hace también un favor a los detenidos, que en lugar de estar en custodia los 51,5 días de media que se tarda en una deportación ordinaria, sólo pasarán 11,4. «Eso despejará más camas para que el ICE pueda hacer más arrestos en el interior del país», se congratula el Departamento de Seguridad Nacional.



TRUMP ANUNCIA UNA LEY QUE PERMITE RETENER A NIÑOS INMIGRANTES DE FORMA INDEFINIDA

El mandatario sostiene que su Administración está pensando "muy seriamente" abolir el derecho a la nacionalidad por nacer en Estados Unidos.

La Administración de Donald Trump anunció el miércoles 21 de agosto un cambio normativo que permitirá a los agentes fronterizos detener de forma indefinida a familias inmigrantes sin papeles, anulando de esta forma el acuerdo que obliga a que los menores retenidos queden libres a los 20 días. El secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, señaló en una rueda de prensa que las nuevas reglas terminarán con la idea de que los niños son "el pasaporte para entrar a Estados Unidos". En ocasiones anteriores Trump ya ha perdido la batalla de detener a los menores de manera indefinida. La aspiración del republicano en su ofensiva antiinmigratoria es anular una sentencia judicial de 1997, conocida como el acuerdo Flores, que estableció que el Gobierno federal no tiene derecho a retener más de 20 días a niños migrantes arrestados, y que exige que se dé prioridad a ponerlos bajo custodia de un familiar o tutor legal. La actual Administración considera que esta orden es la detonante de la ola de familias migrantes que han deci-



dido cruzar la frontera estadounidense. McAleenan anunció el miércoles 21 de agosto que las familias detenidas serán trasladadas a centros donde se garantizará que todos los niños sean tratados "con dignidad y respeto". Los grupos familiares serán retenidos en recintos distintos de otros inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera. Además, contarán con un espacio educativo, otro que ofrecerá servicios médicos, tres comidas calientes al día e instalaciones recreativas. "El cambio de reglas permite al Departamento de Seguridad Nacional encarcelar a niños y familias indefinidamente, en instalaciones donde existen antecedentes demostrados que los pone directamente en peligro. La norma debe ser revocada de inmediato", afirmó Vanita Gupta, presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos.

Desde octubre de 2018, más de 432.000 miembros de unidades familiares han sido detenidos, un aumento del 456% respecto al mismo período del año anterior, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La última ola migratoria ha estado liderada por centroamericanos y mexicanos en busca de asilo. Más de 6.000 migrantes se presentaron de manera fraudulenta como miembros de una unidad familiar, según el Departamento de Seguridad Nacional. Para evitar esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha dos planes



piloto que permiten hacer pruebas de ADN en la frontera para comprobar que los grupos que llegan están realmente emparentados.

La última ola migratoria ha estado liderada por ciudadanos del denominado Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) y mexicanos que suelen escapar de la violencia en sus países en busca de asilo. Entre 2012 y 2017, la tasa de rechazo de peticiones de asilo a salvadoreños fue del 79,2%, prácticamente igual a la de hondureños y guatemaltecos, según cifras oficiales obtenidas por investigadores de la Universidad de Syracuse.

El secretario de Seguridad Nacional en funciones estimó que las familias estarán un promedio de 50 días detenidas, pero en la práctica esto se puede alargar. Actualmente hay cerca de 900.000 casos atascados en los juzgados de inmigración -casi el doble que hace tres años- a la espera de ser resueltos. Pueden tardar meses o incluso años hasta que un tribunal estudie un caso. Los conservadores se quejan de que el colapso del sistema se debe a que está construido sobre "leyes débiles" que permiten que muchos inmigrantes no se presenten a su cita con el juez.

Con esta nueva normativa miles de familias no esperarán por su turno en libertad, sino que lo harán en un centro de detención. McAleenan dijo que a partir del jueves 22 de



agosto ya habrá disponibles tres espacios que pueden albergar a cerca de 3.000 personas. "Participarán de un proceso justo, pero expedito", sostuvo el funcionario. Agregó que los funcionarios de Seguridad Nacional con el nuevo poder de "deportación acelerada" podrán enviar de regreso a los inmigran-

tes más rápido que los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia. Con esto, el Gobierno espera que disminuya el número de entradas ilegales y, de lo contrario, "garantice la deportación inmediata de los extranjeros detenidos en EE UU".

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) ha dicho en reiteradas ocasiones que las detenciones en estos centros no son adecuadas para los menores, ya que la experiencia puede ser traumática y tener efectos negativos a largo plazo. Hace poco más de un año este diagnóstico se puso en el centro de la mesa cuando la Administración Trump implementó la política de "tolerancia cero", que separaba a los niños de sus padres sin papeles al cruzar la frontera del país. "Estados Unidos no será un campo de migrantes, no será un centro de acogida de refugiados. No bajo mi mando", advirtió



el mandatario entonces. El alud de críticas que despertó la iniciativa provocó que Trump se retractara a las pocas semanas.

Cuando Trump firmó la orden ejecutiva que puso fin a la separación de padres e hijos inmigrantes tras su detención, el Departamento de Justicia solicitó la suspensión del acuerdo Flores, argumentando que si no, no hubiese límite de tiempo para custodiar a los menores, sería más mantenerlos juntos durante los procesos penales. La juez Dolly Gee, de la corte federal de Los Ángeles, ratificó la sentencia judicial de 1997, que establece que el Gobierno no tiene derecho a retener bajo su custodia más de 20 días a niños migrantes arrestados.



TRUMP AUMENTA EL PLAZO DE ARRESTO DE FAMILIAS MIGRANTES

La detención podrá ser indefinida en lugar del máximo de 20 días que limita por ley por el bienestar de los menores.

El presidente Donald Trump no desiste en su empeño de complicar la situación migratoria en la frontera sur. El Gobierno de Estados Unidos anunciaba ayer una reforma que permitirá que las familias de inmigrantes puedan permanecer detenidas de manera indefinida, en sustitución de un acuerdo de 1997 que de factolimita este tiempo de arresto a un máximo de 20 días en aras del bienestar de los niños.



Sin embargo, esta nueva normativa, que previsiblemente

será impugnada en los tribunales, está llamada a reemplazar al denominado Acuerdo Flores, un pacto que implica la liberación de las familias en 20 días y que, en opinión del actual Gobierno, incita a los inmigrantes a entrar en Estados Unidos con niños.

“Ningún niño debería ser un peón”, afirmaba ayer el secretario en funciones de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, al presentar la nueva normativa que será publicada mañana en el Registro Federal y entrará en vigor 60 días después, si antes no prospera alguno de los recursos-.

McAleenan confía en el efecto disuasorio de la reforma y asegura que el Gobierno sospecha que algunas familias serían “fraudulentas”, conforme a los análisis de ADN que se han realizado en una serie de programas piloto puestos en marcha en



los últimos meses.

El presidente Trump, ha presumido de mano dura contra la inmigración y la semana pasada su Gobierno ya anunció que negaría los visados y los permisos de residencia permanentes a inmigrantes sin recursos, lo que podría reducir a la mitad el número de entradas.

Según los datos del Departamento de Seguridad Interior, en los últimos cuatro años, solo el 18% de los inmigrantes que fueron liberados en Estados Unidos cumplió con una orden judicial para salir del país. El dato, en cambio, se eleva al 97% en el caso de quienes estaban detenidos.



EE UU NEGARÁ EL VISADO A AQUELLOS QUE NO PUEDAN PAGAR UN SEGURO MÉDICO

La nueva medida, que entró en vigor el 3 de noviembre, no especifica qué cantidad de dinero será exigida o qué criterios concretos se aplicarán.

Estados Unidos negará los visados a los inmigrantes que, al entrar en el país, no tengan seguro médico o no puedan demostrar que tienen recursos para pagárselo una vez se conviertan en residentes. Así lo ha anunciado la Casa Blanca el viernes 4 de octubre, en una nueva ofensiva en su batalla para cumplir su promesa electoral de reducir la inmigración.

La medida, que entró en vigor el 3 de noviembre, justo un año antes de las elecciones presidenciales en las que Trump busca un segundo mandato, permitiría la entrada en el país solo a aquellos migrantes “cubiertos por seguros médicos aprobados” o que tengan “los recursos financieros para pagar por los costes médicos razonablemente previsibles”.

El anuncio no especificó qué cantidad de dinero será



exigida o qué criterios concretos se aplicarán. El requisito tampoco se exigirá a hijos de ciudadanos estadounidenses que no lo sean ellos mismos, ni a refugiados o solicitantes de asilo. Si se aplicará, en cambio, al resto de solicitantes de visado, aunque tengan familiares en Estados Unidos.

El presidente Trump alegó, para justificar la medida, que la probabilidad de que los inmigrantes legales carezcan de seguro médico es tres veces mayor que la de los ciudadanos estadounidenses. “El presidente tomó esta acción para promover la autosuficiencia de los inmigrantes, que ha sido durante mucho tiempo un aspecto fundamental de nuestro sistema migratorio”, dice la proclamación presidencial.

En los 12 meses hasta octubre de 2018, Estados Unidos emitió cerca de 534.000 visados, un 4,6% menos que el año anterior, según datos del Departamento de Estado. Los visados de inmigrante son a menudo el paso previo a recibir la residencia permanente en el país.

INVESTIGAN LA MUERTE DE MIGRANTES EN EEUU

Al menos siete menores han perdido la vida desde 2018 bajo custodia del Gobierno de Trump.

Congresistas estadounidenses anunciaron el martes 24 de diciembre una investigación sobre la muerte de niños y adultos inmigrantes que permanecían detenidos, al advertir de que al menos siete menores han perdido la vida desde 2018 bajo custodia del Gobierno de Donald Trump. Los congresistas demócratas Carolyn Maloney, presidenta del Comité de Supervisión y Reforma, y Jamie Raskin, líder del subcomité de Derechos Civiles y Libertades Civiles, anunciaron la indagación después de informes que advierten de un "patrón de negligencia y abuso que provocó daños graves y la muerte de inmigrantes". Para ello enviaron sendas cartas al Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional. "La falta de tratamiento parece ser una violación flagrante de los estándares de detención de la Patrulla Fronteriza y plantea serias dudas acerca de si el Departamento de Seguridad Nacional no está tratando a los niños y adultos con los principios humanos de dignidad y compasión", señaló Maloney. En concreto, los congresistas aludieron a la muerte de un joven de 16 años detenido por la Patrulla Fronteriza



que murió en una celda en la que, según la nota de los legisladores, fue dejado "durante horas sin tratamiento médico a pesar de los síntomas prolongados de sufrimiento grave". Según los congresistas, "esta muerte no es un incidente aislado: al menos siete niños han muerto en custodia del Gobierno desde 2018, después de casi una década sin tales muertes". Agregan que, según otra noticia reciente, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles ha recibido al menos 17 quejas de tratamiento médico inadecuado u omisión en nueve instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que acabó en dos cirugías que se pudieron prevenir y tuvo influencia en cuatro muertes.

777 INMIGRANTES MURIERON AHOGADOS AL INTENTAR LLEGAR A ESPAÑA EN 2018

El informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) titulado "Viajes desesperados", detalla el marcado aumento de la tasa de mortalidad de las personas que cruzan el Mediterráneo, cómo han tenido que soportar mayores peligros de secuestro y tortura para obtener un rescate, y la amenaza de los traficantes.



Se estima que 2.275 refugiados e inmigrantes murieron en el Mediterráneo en 2018, cifra muy inferior a los 3.139 fallecidos de 2017 y algo

menos de la mitad del récord de 5.096 muertos de 2016, lo que hace un promedio de seis muertes al día y

un fallecido por cada 51 migrantes. El caso de España es bien distinto. Se registraron 65.000 llegadas en 2018 -8.000 a través de Ceuta y Melilla-, y el número de fallecidos en la travesía desde el norte de África prácticamente se cuadruplicó hasta los 777, frente a los 202 de 2017.

Para Acnur, el aumento de víctimas se debe a "nuevas prácticas de tráfico de personas que animan a los barcos a partir independientemente de las condiciones meteorológicas". Las razones del espectacular aumento de las llegadas a España radican "en una combinación de varios factores, incluido el aumento de las oportunidades creadas por los contrabandistas, el factor de atracción creado por el éxito de otros, la necesidad de protección internacional o la reunificación familiar, las dificultades para cruzar desde Libia a Europa, y las redadas y deportaciones en Argelia". 2018 fue también un ejercicio en el que refugiados y emigrantes tuvieron que esperar en alta mar varios días para desembarcar, dadas las restricciones de países como Italia de cerrar los puertos. Dicho de otra manera, pasaron más tiempo en barcos destrozados, a veces sin comida ni agua durante varios días antes de llegar a tierra o ser rescatados. Según Acnur, la gran mayoría de



niñas, mujeres y también algunos hombres y niños, procedentes de Libia sufrieron episodios de abusos y violaciones. "Salvar vidas en el mar no es una opción, ni una cuestión política, sino una obligación ancestral", señala el máximo responsable de Acnur Filippo Grandi. "Podemos poner fin a estas tragedias teniendo el coraje y la ambición de mirar más allá del próximo barco y adoptar un enfoque a largo plazo basado en la cooperación regional, y centrada en la vida y la dignidad".

ITALIA TEME OTRA MAREA HUMANA LIBIA

El líder del Gobierno de Trípoli advierte de que 800.000 personas intentarían cruzar el canal de Sicilia si Europa frena al general Haftar.

Italia tiene un polvorín al otro lado del Mediterráneo: Libia. La inestabilidad en que cayó el país norteafricano después del fin del régimen de Muamar Gaddafi en el 2011 propició un aumento exponencial en la llegada de inmigrantes a través del canal de Sicilia que podría repetirse con la nueva guerra civil que ha estallado entre los dos poderes que se disputan hoy el territorio. A un lado está el Gobierno de Trípoli liderado por Fayeza Serraj, reconocido por las Naciones Unidas y que cuenta con el apoyo de la poderosa milicia de la ciudad de Misrata. Y al otro, el general Jalifa Haftar, hombre fuerte de la zona oriental del país. En medio de la disputa, que ha dejado ya al menos 130 muertos, 560 heridos y 16.000 desplazados desde que Haftar comenzó el 4 de abril su operación



para intentar conquistar Trípoli, se encuentran los seis millones de libios y los alrededor de 800.000 inmigrantes subsaharianos que allí viven. Unos 1.500 refugiados se encuentran retenidos en centros de detención localizados en áreas donde se están desarrollando los combates, advirtió la ONU, mientras que la ONG Habeshia denunció que 700 eritreos, etí-

pes, sudaneses y somalíes llevaban días en un campamento sin agua ni comida. «La posibilidad de que puedan volver los desembarcos hacia nuestras costas existe, no es un misterio», reconoció Luigi di Maio, vicepresidente del Gobierno de Roma, en una entrevista publicada por el Corriere della Sera. Según una reciente declaración parlamentaria de Luciano Carta, director del Aise, la agencia italiana encargada de la seguridad en el extranjero, es probable que unos 6.000 refugiados o desplazados traten de cruzar el canal de Sicilia aprovechando el caos del momento para escapar de los combates. En un grito desesperado de ayuda lanzado en varios diarios italianos, Serraj instó a Europa a intervenir para frenar a Haftar porque se corre el riesgo de que «800.000 inmigrantes y libios invadan Italia y Europa». Para sacudir aún más el fantasma del miedo, el líder del Gobierno de Trípoli aseguró que entre quienes pretenden cruzar el Mediterráneo hay terroristas ligados al Estado Islámico.

«Hay riesgo de que se produzca una crisis humanitaria no sólo para los subsaharianos, sino también para los libios que tratan de huir de la guerra», advirtió Claudia Gazzini, experta en el país norteafricano del International Crisis Group. Esta posibilidad podría acabar con la política de puertos cerrados defendida



hasta ahora por el Ejecutivo de Roma, que ha conseguido una drástica disminución en los desembarcos. La ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, reconoció que en caso de que haya un éxodo masivo de personas que escapan del interminable conflicto bélico en Libia habrá que abrir los puertos porque «no se trata de inmigrantes sino de refugiados, y a los refugiados se les acoge». El Gobierno italiano espera que este escenario pueda evitarse mediante la presión a los países que apoyan a Haftar. Además de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, el general cuenta con el no menos poderoso sostén de Francia y de Rusia.

MÁS DE 80 DESAPARECIDOS EN EL NAUFRAGIO DE UN BOTE HINCHABLE FRENTE A TÚNEZ

Cuatro personas que se aferraron a los restos de la barca pudieron ser rescatadas, pero una de ellas murió en el hospital.

La Guardia Marítima de Túnez rescató el jueves 4 de julio a cuatro supervivientes de una embarcación hinchable que se encontraba a la deriva frente a la costa de Zarzis. Uno de ellos murió posteriormente en el hospital. Fueron los únicos que permanecieron en los restos de la embarcación que naufragó y de la que desaparecieron más de 80 personas. El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Italia, Flavio di Giacomo, precisó que se teme que los desaparecidos estén muertos. Habían salido dos días antes desde Zuara, en Libia, con el sueño de llegar a Europa.

A principios de julio otro bote de estas características cruzó desde la vecina Túnez y 65 personas llegaron a salvo al puerto de Sfax. Según los datos recogidos por la Organización Internacional para las Migraciones,



597 personas perecieron en el mar mientras trataban de alcanzar las costas de Europa desde el inicio de 2019, una cifra muy próxima a los 620 que se registraron en todo 2018 y que coincide con la prohibición del trabajo de los barcos de las ONG que se dedican al rescate.

La noticia del naufragio llegó apenas 24 horas después

de que 53 migrantes, entre ellos seis niños, fallecieron en Trípoli en el bombardeo que sufrió el centro donde estaban detenidos y del que se acusan mutuamente el Gobierno de Unidad Nacional (GNA), reconocido por la ONU, y el Ejército Nacional Libio (ENL), del general rebelde Jalifa Haftar. Naciones Unidas denunció que tras el impacto los migrantes trataron de escapar y los guardas de seguridad abrieron fuego contra ellos. El Consejo de Seguridad fue incapaz de lograr una condena unánime del ataque, lo que volvió a demostrar la profunda división en la comunidad internacional.



MUEREN 1.151 INMIGRANTES DURANTE EL AÑO DE PUERTOS CERRADOS EN ITALIA

Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée denuncian que cerca de 10.000 personas han sido devueltas a la fuerza a Libia, un país en guerra civil.

Hace un año que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, proclamó con orgullo el cierre de los puertos de su país a los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo para intentar llegar a Europa. Aunque el cerrojo no ha sido total y han seguido produciéndose desembarcos (desde comienzos de 2019 y hasta el pasado domingo hubo 2.124 llegadas, una cifra mucho menor que en años precedentes) esta política tiene un coste en vidas humanas. Lo revelaron el miércoles 12 de junio las organizaciones humanitarias Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée al destacar que en los últimos doce meses han muerto en el Canal de Sicilia al menos 1.151 personas.

Estas ONG informaron además de que son cerca de 10.000 los inmigrantes y refugiados que fueron devueltos en ese mismo período forzosamente a Libia, un país que hoy no es seguro para nadie pues se encuentra en medio de una guerra civil. Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée hicieron un llamamiento a la Unión Europea que apoye la búsqueda y rescate de migrantes en el mar. «La respuesta de los gobiernos europeos a la crisis humanitaria en el Mediterráneo y en Libia fue una carrera hacia el abismo», denunció en



un comunicado David Noguera, presidente de MSF, que pidió además el fin de la «dehumanización» de los migrantes motivada por «fines políticos».

El polémico cierre de los puertos por parte del Gobierno de Roma tuvo su primera consecuencia cuando a la nave 'Aquarius', operada por MSF y SOS Méditerranée, se le impidió desembarcar en Italia a las 630 personas que llevaba a

bordo tras rescatarlas en el Mediterráneo central. Tras un tenso tira y afloja, la 'Aquarius' acabó llevando a estas personas al puerto de Valencia después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ofreciera a acogerlas. Un año más tarde, la respuesta europea al desafío migratorio en el Mediterráneo «ha alcanzado nuevos mínimos desoladores», según denunció Noguera. Las ONG destacaron que el flujo migratorio en el Canal de Sicilia no se ha detenido pese a la falta de barcos destinados a socorrer a los desplazados. «Las personas con pocas alternativas continúan emprendiendo esta ruta mortal independientemente de los riesgos», subrayó Frédéric Penard, director de operaciones de SOS Méditerranée. A principios de junio se produjo un leve repunte en las llegadas de inmigrantes a Italia. Arriban desde Túnez y Turquía usando pequeñas embarcaciones que resultan más difíciles de interceptar, por lo que han sido bautizadas por los medios locales como 'barcos fantasma'.

MUEREN MÁS DE UN CENTENAR DE MIGRANTES EN EL PEOR NAUFRAGIO DEL AÑO EN EL MEDITERRÁNEO

Viajaban en un bote de madera en el que pretendían cruzar el Mediterráneo.

Al menos 116 inmigrantes han desaparecido y otros 132 fueron rescatados por guardias costeros libios y pescadores locales después de que volcara una embarcación de madera frente a la costa de Khoms, una ciudad al este de la capital, Trípoli, según informó el jueves 25 de julio el portavoz de la marina libia, Ayoub Qassem. Anteriormente, la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) había hablado de más de 150 desaparecidos y otras 150 rescatados. La embarcación había salido de la ciudad libia de Khoms, explicaron fuentes de seguridad, sin especificar cuándo sucedió el naufragio y qué barcos participaron en el rescate.

El portavoz de la Guardia Costera libia, Ayub Qasem, explicó en declaraciones a la prensa que en la embarcación viajaban alrededor de 250 personas, y que los rescatados "fueron trasladados a tierra, don de recibieron primeros auxilios" antes de ser conducidos a centros de detención bajo el control del gobierno sostenido por la ONU en Trípoli.

El Alto Comisionado para los refugiados de la ONU calificó el naufragio como "la peor tragedia en el Mediterráneo ocurrida en 2019" e insistió en que es urgente "restaurar los rescates en el mar, poner fin a la detención de refugiados y migrantes en Libia y aumentar las vías seguras" para salir de Libia "antes de que



sea demasiado tarde para muchas más personas desesperadas".

De acuerdo con el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, 426 personas han fallecido en el mar entre enero y julio de 2019 tratando de llegar a las costas de Europa y otras 3.750 han sido transferidas a centros de detención en Libia.

Libia es un punto de reunión para los migrantes que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo debido a la proximidad a las aguas europeas y la presencia de mafias de traficantes de personas. El ACNUR y otras agencias de la ONU han pedido en repetidas ocasiones que los supervivientes no sean devueltos al país, una zona de conflicto donde los migrantes rescatados y los refugiados son encarcelados rutinariamente en condiciones inhumanas.

TRECE MUERTOS Y QUINCE DESAPARECIDOS EN UN NUEVO NAUFRAGIO FRENTE A LAMPEDUSA

Entre enero y agosto, de 2019 más de 1.071 inmigrantes han fallecido en el Mediterráneo, la mayoría en el Canal de Sicilia.

El Mediterráneo vuelve a convertirse en un mar de muerte para los inmigrantes que tratan de llegar a Europa tras zarpar desde el norte de



África. El último naufragio tuvo lugar en la madrugada del lunes 7 de octubre frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa y dejó al menos 13 personas fallecidas, todas ellas mujeres, 15 desaparecidos, entre los que hay ocho niños, y 22 supervivientes. El desastre se habría producido porque la

pequeña nave en la que viajaban volcó al desestabilizarse cuando los inmigrantes se colocaron todos a un lado al ver que se acercaba una patrullera de la Guardia Costera italiana. Las malas condiciones meteorológicas que se registraban en la zona a aquella hora contribuyeron al hundimiento de la embarcación, cuyos pasajeros eran en su mayoría tunecinos o provenientes de países del África subsahariana.

Flavio Di Giacomo, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), destacó que este naufragio «vuelve a demostrar una vez más la necesidad de reforzar la presencia de los barcos de rescate, especialmente cuando las condiciones del tiempo empeoran». Entre enero y octubre de 2019 han muerto 1.071 personas en el Mediterráneo, 688 de ellas en la ruta del Canal de Sicilia, según los datos de la OIM.

Esta tragedia se produjo pocos días después de que se conmemorara el sexto aniversario del hundimiento frente a Lampedusa de un viejo pesquero que zarpó desde Libia en el que murieron 368 personas y otras 20 fueron dadas por desaparecidas. Aquel desastre provocó una gran conmoción en la opinión pública europea durante un tiempo, aunque pronto cayó en el olvido y no sirvió para poner en marcha medidas duraderas para evitar



que se repitiera. Desde entonces más de 14.000 inmigrantes se han dejado la vida en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa.

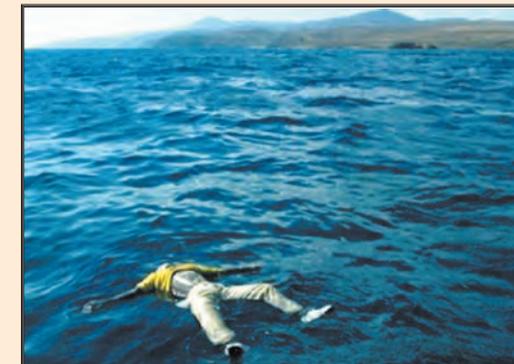
El líder de la Liga, Matteo Salvini, aprovechó el naufragio para criticar una vez más la política migratoria del nuevo Gobierno italiano. «Vuelven por desgracia las noticias de muertos frente a las costas de Lampedusa. Son hijos del 'buenismo', del "hay espacio para todos", de la reapertura de los puertos. En sólo un mes los desembarcos en Italia se han triplicado», comentó Salvini comparando los datos de septiembre con los del mismo período de 2018, cuando él estaba al frente del ministerio del Interior con el anterior Ejecutivo.

MUEREN AL MENOS CINCO PERSONAS AL VOLCAR UNA PATERA EN LANZAROTE

Varios de los inmigrantes que viajaban en la patera están desaparecidos.

Al menos cinco personas fallecieron el miércoles 6 de noviembre y un número indeterminado de inmigrantes se encuentran desaparecidos al volcar una patera en una zona rocosa de la costa del municipio de Teguiise, en Lanzarote, donde Cruz Roja está atendiendo a cuatro supervivientes, han informado fuentes de la Guardia Civil.

Los agentes localizaron a las 8:10 horas a cuatro varones en la zona de Caleta Caballo, que explicaron que en la embarcación viajaban unas catorce personas. Los bomberos del Consorcio de Lanzarote recupera-



ron cinco cuerpos del agua. La patera volcó cerca de la costa sobre la una de la madrugada.

Salvamento Marítimo y patrullas de la Guardia Civil inspeccionaron la zona mientras el personal de Cruz Roja atendió en Caleta Caballo a los cuatro supervivientes localizados, con síntomas de lipotimia.

Los servicios de emergencia prosiguieron su búsqueda

por mar y aire para encontrar a las personas que aún no habían sido localizadas.

En el operativo intervino un helicóptero del 112, una patrullera de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil, Policía Local y Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

RESCATADOS CASI 300 MIGRANTES EN EL MEDITERRÁNEO EN APENAS DOS DÍAS

Casi 300 migrantes fueron rescatados en apenas 48 horas en el mar Mediterráneo, al norte de Libia, por los buques de salvamento marítimo gestionados por Open Arms, Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée.



En uno de los últimos operativos, Open Arms rescató el jueves 21 de noviembre "una barca en peligro de naufragio con 73 personas a bordo -69 hombres, cuatro mujeres, niños de 3 y 4 años y 24 menores solos".

Entre las personas rescatadas había "casos de 'shock' traumático, quemaduras de segundo y tercer grado, heridas de bala, hipotermia grave y deshidratación", informó la ONG en Twitter.

Según la portavoz de la ONG, Laura Lanuza, los migran-

tes, en su mayoría de África Central y Occidental, viajaban a bordo de un barco cuyo motor se había averiado. Muchos estaban en estado de shock y presentaban hipotermia y quemaduras de segundo grado por la exposición prolongada al agua salada y la gasolina, añadió, según Reuters.

El jefe de misión del Open Arms, Ricardo Gati, explicó que aunque el rescate se había producido cerca de la ciudad libia de Zawiya, la ONG quiere desembarcar a los rescatados en un puerto europeo.

"Nos gustaría una respuesta de un gobierno funcional, lo cual lo reduce a Italia o Malta. El puerto seguro más cercano para nosotros está en Italia", sostuvo Gati. "Estamos esperando a ver cuál es la respuesta y cuánto tenemos que esperar", añadió.

GRECIA CERRARÁ LOS CAMPOS DE REFUGIADOS EN LAS ISLAS Y CREARÁ CENTROS DE DETENCIÓN

La medida trata de atajar la saturación de los campos, donde se hacían miles de personas, y acelerar las devoluciones a terceros países.



El nuevo Gobierno conservador griego, que derrotó a la izquierda de Syriza en las elecciones de julio, anunció a finales de noviembre un plan

para cerrar los tres principales campos de refugiados de los cinco que hay en las islas griegas y reemplazarlos por centros cerrados con más restricciones de movimiento. El objetivo de la medida es, según el Ejecutivo, atajar la saturación de estos campos, donde viven miles de personas en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. Estos nuevos centros se instalarán en las mismas islas donde hasta ahora hay Centros de Identificación y Recepción, los llamados hotspots, concebidos como primer punto para gestionar las llegadas desde Turquía.

Estas estructuras se implantaron en virtud del pacto que cerró la UE con Ankara en marzo de 2016 para sellar la frontera oriental de la Unión y que redujo drásticamente el flujo a través de Grecia, por donde entraron más de un millón de refugiados rumbo al resto de la Unión Europea entre 2015 y 2016. En los últimos meses, y por primera vez desde el pacto con Turquía,

Grecia es la principal vía de llegadas irregulares del Mediterráneo. Y los campos, sobre todo el de Moria, en Lesbos, están saturados.

Moria mantiene en condiciones extremas de hacinamiento, falta de higiene e incertidumbre a unas 15.000 personas, de las cuales un tercio son niños. Decenas de ONG llevan años denunciando la situación del campo, con unas 8.000 personas viviendo en tiendas de campaña alrededor del recinto oficial, con capacidad para unas 3.000.

Los nuevos centros tendrán un régimen cerrado: "(Los refugiados) no pueden moverse por el país sin restricción, y (la medida) debería enviar un claro mensaje a quienes planean venir al país ilegalmente cuando no tienen derecho a asilo", señaló el portavoz del Gobierno, Stelios Petsas. En tres de los nuevos centros (en Lesbos, Samos y Quíos) la capacidad será de al menos 5.000 personas. En la isla de Kos será de 2.000 y el de Leros, de 1.000.

Ahora mismo hay unas 36.400 personas atrapadas en las cinco islas griegas mientras se tramitan sus solicitudes de asilo, un proceso complejo y lento que puede mantenerlas en las islas durante meses o años. Hasta ahora, solo unos miles han logrado ser transferidos a uno de los 28 campos de la Grecia continental, en principio con instalaciones más adecuadas. El Gobierno griego del derechista Kyriakos Mitsotakis anunció en septiembre que planeaba evacuar a unas 20.000 personas de las islas de aquí a finales de año.

A principios de noviembre, el Parlamento griego aprobó una nueva legislación de asilo mucho más estricta con la idea declarada de agilizar la burocracia que requieren las solicitudes de refugio y que quienes no tengan derecho a



protección internacional sean devueltos a Turquía. Varias ONG y ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, denuncian que las nuevas leyes restringen severamente los derechos de los solicitantes de asilo y critican el hecho de que amplíe de tres a 18 meses el tiempo de detención de los migrantes. "Los cambios pondrán en peligro a quienes necesitan protección internacional", dijo en un comunicado el representante de ACNUR en Grecia, Philippe Leclerc, justo antes de que se aprobaran las nuevas leyes.

ASCIENDEN A CUATRO LOS MUERTOS EN EL NAUFRAGIO DE UNA PATERA EN MELILLA CON 10 DESAPARECIDOS

Salvamento Marítimo logró rescatar el miércoles 27 de noviembre a cerca de 70 personas cuando la patera había naufragado.



Cuatro migrantes fallecieron y al menos diez desaparecieron en el mar a unas 30 millas al Norte de Melilla, tras el naufragio de una patera que se encontraba a la deriva. Salvamento Marítimo logró rescatar a cerca de 70 personas, entre ellas tres niños, y trasladó a Melilla a cinco adultos en estado grave. Los inmigrantes, de origen subsahariano y asiático, llegaron al puerto deportivo de Melilla sobre las 23.15 horas envueltos en mantas y uno a uno fueron desembarcando, entre ellos tres niños de muy corta edad.

Todos fueron atendidos por voluntarios de la Cruz Roja, que les prestaron asistencia sanitaria y varios

de ellos fueron trasladados al Hospital Comarcal en ambulancias.

Como es habitual, también acudió a la zona personal de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), para comprobar si alguno de los inmigrantes podría tener necesidad de protección internacional, así como agentes de la Policía Nacional y la

Guardia Civil.

Tras recibir asistencia en el puerto, los rescatados fueron conducidos al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que estaba por encima de su capacidad máxima debido a la presión migratoria que sufre Melilla ante la llegada frecuente, desde agosto, de varios cientos de inmigrantes trasladados desde Chafarinas.

Solo en la última semana de noviembre, incluyendo este rescate, han sido trasladados a Melilla unos 170 inmigrantes.

EL NÚMERO DE INMIGRANTES QUE LLEGA A LA UE DESCENDE A MÍNIMOS HISTÓRICOS

La llegada se sitúa en un 92% menos que en 2015, que supuso el pico de la crisis migratoria.

El número de personas que han atravesado las fronteras exteriores de la UE a través de vías irregulares ha llegado en 2019 a su punto mínimo de los últimos seis años, señala en su último informe la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). El descenso representa un 92% menos que el registrado en 2015, en el pico de la crisis migratoria que sacudió los pilares del proyecto comunitario.

La inmigración ha sido el epicentro de buena parte de la agenda comunitaria durante los últimos años. También ha sido uno de los temas que ha despertado los discursos más emocionales, broncos y divisorios en las instituciones europeas. El discurso de poner freno a la inmigración irregular ha empapado a la mayoría de las familias del arco político. Pero, ¿qué pasó en las fronteras externas de la UE en 2019? Que este tipo de llegadas cayó en picado, según recogen las cifras preliminares del último informe de la agencia Frontex. El documento apunta a dos causas principales que han sido la tendencia general de este periodo: el descenso de llegadas a través de las rutas del Mediterráneo Central -que conecta principalmente Libia con Italia- y del Mediterráneo Occidental -puente entre el norte de África y España-



Así, durante el año 2019, la inmigración irregular ha caído un 6% situándose en las 139.000 personas (un 0,027% de la población comunitaria), lo que significa un 92% por debajo del récord establecido en 2015, en el pico de la crisis de refugiados. En 2019, Europa vio el mayor movimiento en sus fronteras desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, las capitales europeas -y las propias instituciones- han hecho públicas sus diferencias sobre cómo abordar una de las crisis que más les ha dividido.

El número de personas que llegó de forma irregular a las costas europeas a través de la vía del Mediterráneo Central fue de 14.000, lo que representa una caída del 41%. Los ciudadanos de Túnez y Sudán fueron las nacionalidades más numerosas. En el caso de la ruta Occidental el descenso fue del 58%, siendo marroquíes y argelinos las principales nacionalidades de entre las 24.000 personas que arribaron.

El descenso generalizado se produce a pesar de la tendencia inversa que vivieron el año pasado, 2018, la ruta del Mediterráneo Oriental -que conecta principalmente Turquía con las islas griegas- y el camino de los Balcanes Occidentales. En medio de las amenazas de Ankara de dejar de cumplir el acuerdo migratorio UE-Turquía, las personas que tomaron esta vía se duplicaron en 2019 con respecto al año previo. También doble ha sido el número de personas que han cruzado las fronteras europeas a través de los Balcanes Occidentales.



39 MUERTOS EN UN CAMIÓN FRIGORÍFICO DE TRANSPORTE ILEGAL DE INMIGRANTES A REINO UNIDO

El remolque procedía del puerto belga de Zeebrugge y lo conducía un transportista de Irlanda del Norte.

Treinta y nueve personas no identificadas, entre ellas un adolescente, fueron halladas muertas en la noche del martes 22 de octubre en el interior de un camión frigorífico en un polígono industrial del este de Londres. La investigación sobre la identidad de las víctimas y de los autores del crimen se concentra en el itinerario del vehículo.

La Policía fue alertada del hallazgo de los cadáveres a la 1.40 horas del miércoles 23 de octubre por el servicio de ambulancias, que había recibido una llamada telefónica desde un polígono industrial en la localidad de Grays, que forma parte del gran complejo portuario, logístico e industrial que se concentra en la desembocadura del Támesis. La cabina del camión, registrada en Bulgaria en 2017 a nombre de una compañía propiedad de una mujer irlandesa, había llegado a Reino Unido el sábado 19 de octubre en el ferry que une Dublín con el puerto de Holyhead, en el noroeste de Gales. El conductor, Mo Robinson, de 25 años, reside en una pequeña localidad cerca de Portadown, en Irlanda del Norte. La reconstrucción de los movimientos del camión lo sitúa cerca del puerto de Purfleet a las 0.30 horas del miércoles 23 de octubre. Habría llegado a Reino Unido en un ferry procedente de Zeebrugge, en la



costa belga, que mantiene cuatro servicios diarios con Londres. Purfleet mueve anualmente 250.000 remolques y contenedores a través de sus conexiones con Rotterdam o Zeebrugge.

La hora del hallazgo sugiere que el camión había llegado en el ferry que parte del puerto belga a las 16.00 horas y arribó a Purfleet a medianoche, según el horario oficial de la compañía naviera que explota la línea. Robinson es un transportista autónomo, que llegó a Holyhead al volante de su cabina pero sin el remolque frigorífico. La habría conectado con su carga a la 1.05 horas. El remolque había sido alquilado, según 'The Times', a una empresa de Monaghan, localidad del sur de Irlanda próxima a la frontera con el Norte.

Las autoridades búlgaras confirman que el camión de la marca Scania fue registrado como 'The Polar Express' en su país, pero que no hay constancia de que haya regresado a Bulgaria desde la fecha del registro. Existe constancia de que habría movido cargas en los últimos años entre Dinamarca, Suecia y Reino Unido.

El remolque frigorífico puede alcanzar una temperatura de -25 grados centígrados. De estar conectado, habría provocado una muerte rápida de los fallecidos, cuya nacionalidad no se conoce aún, aunque se ha descartado la impresión inicial de que podían proceder de Bulgaria, cuyos habitantes pueden entrar en Reino Unido libremente puesto que su país es miembro de la Unión Europea.

LOS DATOS

250.000 remolques y contenedores se mueven anualmente en Purfleet, a través de sus conexiones con Rotterdam o Zeebrugge.

-25 grados centígrados es la temperatura que puede alcanzar un camión frigorífico de estas características.

59 ciudadanos chinos murieron en 2000 en un remolque proveniente de Bélgica, en el crimen más trágico de este tipo en suelo británico.

La Agencia Nacional del Crimen (NCA), especializada en la investigación de graves delitos y estructuras de crimen organizado, asiste a la Policía del condado de Essex, que engloba a las localidades en las que se descubrieron los cadáveres. El primer ministro británico, Boris Johnson, calificó lo sucedido como «espantoso» y subrayó que las bandas implicadas en el transporte ilegal de inmigrantes «han de ser capturadas».

El único crimen comparable en suelo británico fue la muerte de 58 ciudadanos chinos, en 2000, en un remolque que provenía también de Bélgica. Se achacó la organización del transporte a una banda china y el conductor del camión fue condenado a una pena de cárcel de 14 años. Nueve inmigrantes fueron hallados ayer, pocas horas después, en una autopista de Inglaterra, ocultos en otro camión.

La portavoz de la Policía de Essex, Pippa Mills, advir-



tió de que la investigación será «un proceso largo» en el que se da prioridad a la identificación de los fallecidos y a la notificación a sus familias. La detención de Robinson se fundamenta en la sospecha de un delito de asesinato.

LOS “TRENES DE LA MUERTE” TOMAN IMPULSO

Los trenes en los que miles de polizones centroamericanos atraviesan México soñando con alcanzar los Estados Unidos vuelven a coger impulso. Los toman al asalto desesperados por entrar antes de que Trump endurezca aún más las políticas antimigratorias.

Cuando comenzó a correrse la voz de lo que era capaz de hacer aquel inmenso gusano de acero que resoplaba, chillaba y reptaba a lo largo de los 3.200 kilómetros que separan Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, de la frontera norte del país, lo apodaron 'la bestia'. El monstruo se convirtió en el 'tren de la muerte' el mismo día en que los cadáveres y miembros amputados que iba sembrando en las vías a su paso llegaron a ser tantos que ya nadie se preocupó de contarlos.

Hace más de una década que los convoyes de mercancías que atraviesan el país azteca son casi la única forma de escapar del infierno para las docenas de miles de centroamericanos de todas las edades que cada año se encaraman a ellos huyendo de la miseria y soñando con que les deje a las puertas del paraíso, aunque en el viaje les vaya la vida. Ni el aumento de vigilancia en las estaciones y vías muertas ni la orden de que las locomotoras aceleren la



marcha en los 'puntos calientes' donde los polizones desesperados intentan encaramarse a sus vagones ha sido capaz de adormecer a 'la bestia'. Ahora, tras varios meses en los que el control fronterizo parecía haberse relajado y muchos migrantes optaban por otros medios de transporte más seguros, el número de viajeros sin billete que escogen esta peligrosa alternativa se ha vuelto a disparar. Sólo en la última semana de abril el 'tren de la muerte' se ha cobrado la vida de un salvadoreño de 25 años que, deshidratado, murió de un paro cardíaco; ha dejado a un joven de 18 años electrocutado y a otro, quizá con más suerte que sus compañeros, le ha arrancado un

brazo.

«El miércoles 1 de mayo, 800 personas pasaron por el albergue. Comieron y se ducharon. Alguno, incluso, pasó por la enfermería», cuenta el padre Alejandro Solalinde, casi una institución en Oaxaca, en donde hace quince años abrió un refugio para migrantes que desde entonces ha tendido la mano a no menos de 300.000 personas. «El día anterior despedí a 1.200 cuando ya estaban subidos al tren. La situación es terrible porque es cruel y no tiene fin», dice el hombre, que en estos años se ha convertido en un ángel de la guarda para miles de centroamericanos. Confirma que, por mucho empeño que se ponga, es imposible saber a cuántos ha transportado 'la bestia' a lo largo de este

camino de hierro. Son varios los itinerarios de estos trenes de mercancías que, cargados de alimentos, equipos de transporte, automóviles, cemento, productos químicos o plásticos, surcan México camino de los Estados Unidos. Según algunos cálculos, el número de emigrantes que se arriesgan a cabalgar a lomos de 'la bestia' ha ascendido algunos años al medio millón; fundamentalmente, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. Viajan colgados de los estribos o encaramados al techo, en tramos de 6 a 14 horas de viaje durante más de 20 días. Otros, citando fuentes cercanas al Gobierno, apuntan a que el número se acercan más a los 150.000, pero no existe ningún organismo, oficial ni extraoficial, que maneje cifras certeras. Nadie los cuenta, ni vivos ni muertos, y pocos son los que acusan recibo de su llegada a destino. Mucho menos el Instituto Nacional de Migración mexicano, que, según el padre Solalinde, «es un auténtico cártel».



Una mafia que se ha convertido en la principal red de traficantes de personas».

Mientras él alza la voz pidiendo justicia, los trenes de mercancías, como pesadas y ruidosas serpentinas, siguen su camino trasladando bajo un sol ardiente a su famélica carga. Hombres y mujeres, niños y viejos, tan desesperados que arriesgan la vida no sólo en los techos, vagones y pescantes, sino también enfrentándose a la extorsión y la violencia de las pandillas y bandas de desalmados que controlan las rutas hacia el norte. Y es que las vías del tren son la columna vertebral de un país atenazado por la violencia de las maras, y atraviesan muchos lugares en los que el Estado ha dejado de ser Estado y el crimen organizado lleva las riendas. Es un viaje para el que las mujeres se preparan inyectándose anticonceptivos, pues saben que siete de cada diez serán violadas en algún punto del recorrido.

Por complicado que resulte de entender, para los más pobres de Centroamérica 'la bestia' constituye la única opción de atravesar el país azteca y llegar a los Estados Unidos. Necesitan un visado para viajar a México y, con miles de agentes patrullando las carreteras y controlando las estaciones de autobuses, los trenes de carga eran, y vuelven a serlo, la única opción de sortearlos.

La red ferroviaria que atraviesa el país puede ser abordada allí donde el destino ha colocado a cada cual, pero las dos estaciones más cercanas a la frontera con Guatemala -Tapachula, en el estado de Chiapas, y Tenosique, en el de Tabasco-, suelen ser el punto de partida. Desde allí los migrantes ponen rumbo al norte; en realidad, hasta Lechería, en el Estado de México, desde donde quienes han logrado llegar pueden



optar por seguir su camino por diferentes trayectos, dependiendo del lugar por el que tengan planeado atravesar las puertas del paraíso: quienes sueñan con entrar cruzando el valle del Río Grande toman la ruta del Golfo, y los que creen que pueden tener más posibilidades llegando a Arizona o California siguen la vía del Pacífico. Cualquiera de las opciones es igual de peligrosa. Prueba de ello es que el trayecto está sembrado de albergues para mutilados. Lugares en los que hay quien ha aparcado su sueño de sentirse a salvo y se ha convertido en una especie de guía; muchachos que, a cambio de cien o doscientos dólares, enseñan a los que aún tienen esperanzas a subirse a lomos de 'La Bestia'.

Oscar Martínez, periodista y escritor salvadoreño, autor del libro 'Los migrantes que no importan', cuenta que en uno de sus viajes siguiendo el rastro de 'la bestia' dio con Wilber, un hondureño autonombrado instructor de inmigrantes que lleva años mostrando a sus clientes la forma de encaramarse al tren. Fue él quien le contó que había visto cómo un convoy pasaba a un desgraciado por encima de la pierna porque no fue capaz de agarrarse cuando trataba de subirse. «Como no iba tan rápido, le dio tiempo a verse la pierna cortada y a meter la cabeza bajo la siguiente rueda. Si iba a buscar un trabajo allá arriba es porque no ganaba bien abajo, y ya, sin una pierna, ¿qué iba a hacer?», le dijo Wilber tan tranquilo al periodista.

Diana Manzo, Premio Estatal de Periodismo y Derechos Humanos, ha escuchado muchas veces historias parecidas. Ella está siendo también testigo de cómo, a finales de abril comenzaron las redadas impulsadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) para dispersar las caravanas, los desposeídos han vuelto a asaltar el tren tratando de llegar a la fron-



tera norte. «Es el quinto contingente que llega a Oaxaca en las últimas dos semanas», describe. «No había tanto migrante a lomos de 'la bestia' desde 2014, cuando el Gobierno de Enrique Peña Nieto implementó el Plan Frontera Sur».

Diana explica que aquel plan destinó dinero para mejorar las vías férreas y dotó de vigilancia policial a los convoyes. «Entonces, muchos tomaron rutas marítimas y otros caminaron, pero había muchísima violencia. Durante cinco años las cosas fueron así y por eso surgieron las caravanas. Ahora, al ver que no hay guardias en 'la bestia', las cosas vuelven al principio», cuenta la periodista, que el 1 de mayo estuvo en Ciudad de Ixtepec y vio partir a cientos de personas, incluida un madre con un bebé en los brazos y una chica embarazada de cinco meses que había salido de Honduras.

Muchos de ellos han esperado durante semanas visados mexicanos que no han terminado de llegar. Otros, confirma el padre Solalinde, formaban parte de una caravana de 3.000 personas que policías federales y agentes migratorios desintegraron el pasado lunes en una redada en una carretera al este de Ixtepec. «Es un hecho que,

como decenas de puntos de revisión migratorios y policiales se extienden a lo largo de las carreteras, muchos migrantes ya consideran que la forma más segura, aunque todavía riesgosa, para llegar a la frontera con Estados Unidos es el tren», explica el sacerdote.

De poco sirve que el 18 de enero el Gobierno de México pusiera en marcha un plan de atención a las

caravanas para tratar de garantizar un acceso ordenado y seguro al país, respetando los derechos humanos de los migrantes. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), desde ese momento hasta el 1 de mayo de 2019 se han registrado 9.957 solicitudes de permisos para adultos por razones humanitarias y otras 2.346 para niños y adolescentes.

EL VATICANO AVALA EL MODELO VASCO PARA AFRONTAR EL RETO MIGRATORIO

El lehendakari Urkullu comparte el espíritu de la iniciativa 'Share' e invita al Papa a visitar Euskadi.

La fórmula magistral para enfocar y encauzar la actual crisis migratoria es sencilla, elemental y asequible. Y muy antigua. Bastaría con conjugar compromiso, justicia, seguridad, humanidad, dignidad, solidaridad, responsabilidad,... Una especie de equilibrio social y político difícil de lograr, pero no imposible. Más aún, después de que la Santa Sede se haya posicionado a favor de Share, la iniciativa que abandera el Gobierno vasco que promueve un reparto del esfuerzo de la acogida de las personas refugiadas entre los Estados miembros inspirado en criterios de ingresos, población y desempleo.

Si hace unos meses los halagos a este proyecto con sello vasco procedían de la Comisión Europea, el miércoles 28 de agosto era el Papa Francisco quien respaldaba ese planteamiento para tratar de enderezar el reto migratorio que se vive a las puertas de Europa y que pretende convencer a los gobiernos europeos e instituciones comunes para aceptar una distribución responsable de personas refugiadas y migrantes en situación de grave vulnerabilidad. De momento, el Vaticano -actor político y diplomático de primer orden y referente moral para millones de personas- se ha mostrado dispuesto a profundizar y colaborar en esta iniciativa y trabajar conjuntamente con Euskadi en planteamientos de acogida de refugiados en el continente europeo.

Así lo explicó el pasado mes de agosto el lehendakari Iñigo Urkullu quien, tras la Audiencia con el Papa, destacó que comparten el planteamiento del pontífice ante el fenómeno migratorio basado en "acogimiento, protección, promoción e integración". En este senti-



do, Urkullu recordó los gestos y los hechos "muy significativos" que el pontífice ha capitaneado en esta materia como presentarse en las islas de Lesbos y Lampedusa, sus manifestaciones ante el cuerpo diplomático o sus declaraciones públicas sobre el fenómeno migratorio.

El lehendakari indicó que los diferentes encuentros mantenidos durante el viaje a Roma de la delegación vasca, han servido para profundizar tanto en el Pacto Social para la migración que se quiere impulsar en Euskadi como en la propuesta Share de compartir el trabajo con refugiados, solicitantes de asilo, migrantes en tránsito y menores no acompañados, "desde un principio de corresponsabilidad con la estrategia coordinada, ordenada y sostenible en la UE por parte de los gobiernos de los Estados miembros y los de entes subestatales y del ámbito municipal".

De todo ello hablaron con un viejo conocido: el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, primer colaborador del Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia y máximo exponente de la actividad diplomática y política de la Santa Sede. En enero de 2017, por boca del propio lehendakari, ya tuvo opor-

tunidad de conocer el empeño de la Administración vasca en favor de los Derechos Humanos y la preocupación por la situación de las personas refugiadas así como por la insuficiente capacidad de reacción de los gobiernos estatales europeos y de las instituciones comunes.

Ahora, dos años y medio después, ambas partes profundizaron en estas cuestiones y se plantearon la posibilidad de que “actores internacionales” les puedan “ayudar a desarrollar esta propuesta”. Según apuntó Urkullu, han recibido por parte del Estado Vaticano y, en concreto, por parte del secretario de Estado, “la sintonía absoluta en los principios” de su propuesta. “Se ha mostrado dispuesto a analizar la propuesta en profundidad y a colaborar con la misma”, subrayaba el lehendakari poco después de confesarse “impactado” porque “pasemos de las palabras a los hechos”. “Y, además, con unos hechos que puedan ser asumidos no solo en una comunidad como la vasca, sino en el conjunto de la UE”, enfatizó.

Por todo ello, Urkullu manifestó su satisfacción por que el Vaticano se haya mostrado dispuesto a trabajar conjuntamente con Euskadi propuestas de acogida de refugiados en Europa. “Nos damos por satisfechos por lo que es la impresión de que sintonizamos en esos cuatro principios de cara a una estrategia ordenada y coordinada de acogimiento, protección, promoción e inclusión. Entienden también que la propuesta Share es una propuesta realista que serviría también para esa integración como objetivo final, primero acogimiento y segundo, la integración”, expresó. Así las cosas, está previsto que el organismo religioso correspondiente (dicasterio) se ponga en contacto con las conferencias episcopales para que desde la Iglesia Católica “se impulse esta iniciativa una vez que



la hayan estudiado. También hemos quedado en que desde los gobiernos subestatales, en este aspecto que estamos desarrollando el Gobierno vasco con regiones sin Estado en la Unión Europea, sea otro de los ámbitos en los que profundicemos, como hasta ahora lo hemos venido haciendo”, describió Urkullu. En este sentido, el lehendakari quiso destacar que sea el Gobierno de una nación sin Estado de una región europea el que haya defendido esta propuesta. “Lo hemos defendido y hemos insistido en que, al final, son las comunidades más cercanas a lo que puede ser el fenómeno de la inmigración, más allá de los propios Estados”, añadió. Durante el encuentro con Parolin, la delegación vasca -en la que también estaban Marian Elorza, secretaria general de Acción Exterior, y Jonan Fernández, secretario general para los Derechos Humanos, la Convivencia y Cooperación- también tuvo ocasión para trasladar al Vaticano su apuesta por una coordinación entre los distintos gobiernos de los Estados, algo que ya se está intentando con el español.

LA TERRIBLE EXPLOTACIÓN QUE SUFREN LOS TRABAJADORES DEL ENVASADO DE MARISCO

La explotación a la que están sometidos los trabajadores en la extracción y el envasado de marisco, que raya la esclavitud, es un mal endémico en el Sudeste asiático. La presión de la prensa y las ONG busca aliviarla.

La próxima vez que compre gambas, langostinos, o cualquier otro tipo de marisco congelado, fijese en su procedencia. Puede que haya sido pescado en el Sudeste asiático. En ese caso, sobre todo si el país de origen es Tailandia, cabe la posibilidad de



que se vaya a comer el producto de UN trabajo esclavo. Porque ese empaquetado divertido en el que luce el dibujo de una gamba sonriente puede esconder una realidad muy oscura de tráfico de personas y trabajos forzados.

El escándalo saltó hace ya un lustro, cuando medios de comunicación como 'The Guardian' y 'The New York Times' investigaron el floreciente sector de la pesca tailandesa. Descubrieron que cientos, incluso miles, de hombres eran comprados y vendidos como esclavos para trabajar en la extracción y el pelado de marisco en condiciones deplorables. «Me tenían encadenado, no me daban nada de comer, y pensé que iba a morir. Nos vendían como animales», contó entonces al rotativo británico Vuthy, un monje camboyano que logró escapar. Las historias que se publicaron provocaron una indignación global. A la luz salieron jornadas de 20 horas, torturas e incluso ejecuciones. Los pescadores podían pasar años sin pisar tierra firme, y se mantenían activos consumiendo las anfetaminas que los patrones de estos buques fantasma les ofrecían. Sus operaciones eran en muchas ocasiones ilegales, pero todo se blanqueaba cuando el producto era adquirido por grandes empresas como Charoen Pokphand, el principal productor de gambas del mundo, que luego proveía a grandes cadenas de supermercados de todo el planeta.

La agencia Associated Press tomó el relevo de la historia e investigó el asunto durante 18 meses. Sus informaciones le valieron el Premio Pulitzer al Mejor Servicio Público de 2016 y pusieron a Tailandia contra las cuerdas. Como consecuencia de toda esta presión,



ese país se convirtió el pasado 30 de enero en el primer Estado asiático en firmar la Convención sobre el Trabajo en la Pesca de la Organización Internacional del Trabajo, que entrará en vigor en enero de 2020 y que erradica el trabajo forzado de los pescadores. Al menos, sobre el papel.

Parece lógico pensar que ya se puede consumir marisco tailandés sin cargo de conciencia, pero diferentes ONG han demostrado que no. En 2018, Human Rights Watch denunció que, a pesar de los esfuerzos que las autoridades están haciendo para acabar con la esclavitud, aún persiste. «Las reformas que se han puesto en marcha son meramente cosméticas», criticó el director de HRW en Asia, Brad Adams. «El trabajo forzado continúa siendo una realidad rutinaria. Los pescadores siguen siendo víctima del tráfico, no pueden abandonar sus trabajos, sufren abusos físicos y falta de alimentos, y muchos no reciben ningún pago por jornadas larguísimas. Pero lo más difícil de sobrellevar es el daño psicológico y la falta de dignidad», añadió.

Desafortunadamente, aunque el foco se ha puesto en Tailandia, la situación no es mucho mejor en países vecinos. En Vietnam, por ejemplo, aunque el tráfico de personas no está tan extendido, sí que es habitual el endeudamiento de los pescadores, a los que sus patrones cobran sumas exorbitantes por los servicios que les ofrecen, desde el alojamiento en chabolas, hasta la comida. Eso obliga a los hombres a trabajar sin descanso. Pero es todo un espejismo, porque son incapaces de devolver el dinero a la velocidad a la que se genera la deuda.

Las autoridades del Sudeste asiático, conscientes de la amenaza que esta situación supone para el lucrativo negocio de la pesca, aseguran



que ya han comenzado a tomar medidas. Pero buena muestra de su poca credibilidad es que el Gobierno de Bangkok no encontró ni un solo caso de trabajo esclavo en las inspecciones que hizo a más de 474.000 pescadores en 2015, año en el que la Unión Europea amenazó con prohibir todas las importaciones de marisco de Tailandia.

En cualquier caso, Bruselas decidió el pasado mes de enero (2019) retirar la 'tarjeta amarilla' con la que había advertido al reino asiático. «Tailandia ha remediado los defectos de sus normativas y de las políticas administrativas en el sector de la pesca», justificó la Comisión Europea en un comunicado en el que también aplaudió las medidas de Bangkok para evitar la esclavitud en el sector.

«La pesca ilegal y no regulada no solo daña los recursos marinos, también la vida de quienes los explotan, que suelen ser vulnerables a la pobreza. Por eso, luchar contra la pesca ilegal es una prioridad de la



UE», afirmó el comisario europeo para el Medio Ambiente, Karmenu Vella. Los activistas, no obstante, han respondido indignados. «Es una decisión que da a los consumidores la falsa sensación de que ya no se dan abusos», criticó el responsable de Pesca de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, Johnny Hansen. Sin duda, detrás de una gamba hay historias muy sórdidas.

CONTINÚA LA FLAGRANTE EXPLOTACIÓN A LOS FABRICANTES DE LADRILLOS EN BANGLADESH

Un millón de personas fabrican 23.000 millones de ladrillos cada año en Bangladesh con medios rudimentarios y en condiciones aterradoras.

Pocas maniobras de aproximación a un aeropuerto resultan más espectaculares que la de los aviones que aterrizan en Dacca. Sobre todo cuando llegan desde el este y sobrevuelan el explosivo cóctel de casi 18 millones de habitantes que es la capital de Bangladesh. No solo por el sorprendente caos urbano de una ciudad que construye rascacielos sobre chabolas, sino por lo que la rodea: Dacca está constreñida por un cinturón de chimeneas que vomitan un tóxico humo negro. A su alrededor, como si fuesen hormi-



gas, un ejército de seres humanos da forma a uno de los elementos clave del rápido desarrollo que ha alentado la musculosa industria textil: ladrillos.

A ras de suelo, la escena impacta incluso más. Las márgenes de los ríos están tomadas por decenas de estas fábricas, cuya extensión ahora no es capaz de abarcar la vista. El manto de ladrillos grises que se secan al sol se pierde en un horizonte al carboncillo. El aire pesa por la humedad y el polvo azabache que flota en él. Tiene un olor acre, y la

sensación de opresión que provoca este ambiente se ve acrecentada por la elevada temperatura. Pero solo las lluvias torrenciales que suelen anegar el país durante el monzón detienen el trabajo.

Las estadísticas ayudan a visualizar la escala de esta industria: según datos oficiales de 2017, los últimos publicados, Bangladesh cuenta con 7.000 fábricas que emplean en torno a un millón de personas y producen 23.000 millones de ladrillos al año. Ingresan unos 2.300 millones de dólares, y contribuyen un 1% al producto interior bruto del país. Son cifras que convierten a Bangladesh en el cuarto productor mundial de este material de construcción.

Y no parece que vaya a perder comba, porque el Gobierno estima que el país de 160 millones de habitantes necesitará levantar cuatro millones de viviendas al año para responder a la demanda de su creciente población. Si se cumplen estas previsiones, será necesario incrementar la producción de ladrillos entre un 2 y un 3% al año. Pero lo que parece una buena noticia para los empresarios no lo es tanto ni para los trabajadores, ni para el medio ambiente.

Es fácil entender por qué nada más entrar a una de estas fábricas. Cientos de hombres, mujeres y niños se desloman en sus instalaciones de sol a sol. El proceso de producción de los ladrillos es completamente manual y se lleva a cabo con medios que bien podrían haber salido de la Edad Media: la tierra se extrae de las márgenes del río a paladas, es mezclada con la cantidad exacta de agua y amasada por hombres en cuclillas que utilizan una caja de madera para darle



forma de ladrillos. Finalmente, niños descalzos se encargan de voltearlos para que se sequen uniformemente durante unas seis horas.

Un euro y medio por día

Cuando ya han ganado consistencia, un nutrido grupo de porteadores, sobre todo mujeres, los transportan en sus cabezas hasta el gigantesco horno que tiene la chimenea en el centro. Es una superficie ovalada en la que los ladrillos se ubican en paredes radiales entre las que se deja un espacio para echar carbón. Cuando toda la superficie está llena, se cubre con arena y se prende fuego dentro. Así se cocinan los ladrillos, que abandonan su tono blanquecino para adquirir uno rojizo.

«En un horno pueden entrar hasta 800.000 ladrillos por cada tanda. Durante los seis meses de la época seca, que es cuando podemos trabajar, fabricamos

unos cuatro millones», comenta uno de los capataces, llamado Ahmed. Es el encargado de ofrecer una ficha por cada viaje que hacen los porteadores. Dependiendo de cuántos ladrillos lleven en la cabeza, reciben una de un color o de otro. «Los más débiles cargan con ocho. Los más fuertes, con 10 o 12. Al final de la jornada, se cuentan las fichas y se les paga de acuerdo al trabajo que han hecho», concluye.

Lo más habitual es transportar unos mil ladrillos cada día. Eso reporta un jornal de 135 takas. Euro y medio al cambio. «Es una miseria. Por eso



tenemos que poner a trabajar a nuestros hijos, aunque todavía sean muy pequeños», explica Monwara Begum, madre de tres. La más pequeña tiene solo siete años, pero ya muestra gran destreza dando la vuelta a los ladrillos. «Eso sí, siempre que puede va a la escuela», puntualiza Begum, que lleva diez años trabajando en las fábricas con su marido. «Él lidera una cuadrilla, así que gana 4.000 takas (45 euros) a la semana. Somos afortunados», dice mientras cocina la cena en la chabola que comparten todos los miembros de la familia.

Los accidentes son habituales. «Lo peor son las caídas, porque mucha gente se rompe un hueso y, además de tener que pagar a los médicos de su bolsillo, ya no puede trabajar el resto de la temporada. Luego están la deshidratación y los mareos, que pueden provocar la pérdida de la conciencia y caídas», relata Sofiruddin Sufir, un joven de 20 años. Si continúa desempeñando esta labor, es muy probable que no llegue a viejo, porque las emanaciones del carbón que se quema son muy dañinas para el sistema respiratorio. «La mayor parte de nosotros no tiene alternativa. Somos gente sin tierras, obligada a abandonar nuestros lugares de origen y ahorrarse estos meses para sobrevivir todo el año», añade.



Las fábricas son también la principal fuente de contaminación de una capital que se ahoga. El Gobierno estima que queman casi seis millones de toneladas de carbón al año, que, a su vez, se traducen en 15,67 millones de toneladas de emisiones de CO2. Son cifras desorbitadas, que las autoridades están tratando de mitigar con subvenciones para la adopción de tecnologías más limpias. Pero, de momento, no parece que estén teniendo mucho éxito.

LA MISERABLE VIDA DE LOS BUSCADORES DE ZAFIROS EN MADAGASCAR

La búsqueda de piedras preciosas amenaza los ricos ecosistemas de Madagascar, condenando a niños y adultos a una vida miserable

Las piedras azules y rojizas comenzaron a aflorar a finales de los años noventa en el remoto suroeste de Madagascar. La fortuna de los primeros descubridores de zafiros y rubíes

atrajo a otros muchos que, como ellos, suponían que un golpe de suerte podría proporcionarles mayores ingresos que tres o cuatro meses de duro trabajo arando la tierra. «Legaban cientos de campesinos, aquello era un caos, me recordaba a 'La leyenda de la ciudad sin nombre', la película de Lee Marvin basada en los



buscadores de oro en el Lejano Oeste», indica José Luis Guirao, un veterinario granadino radicado en la isla desde hace más de veinte años y fundador de la ONG Agua de Coco. Aquel poblado efervescente con varias decenas de recién llegados se convirtió rápidamente en la ciudad de Ilakaka, actualmente con más de 60.000

habitantes llegados de todas partes. «Hoy es un paisaje lunar, una especie de gruyer lleno de hoyos en un escenario desértico», añade el fotógrafo palentino Benito Pajares, que también ha sido un observador privilegiado de este crecimiento rápido y anárquico. Pero

no se trata de un caso aislado. La aparición de nuevas vetas en el este del país africano, una región de gran riqueza medioambiental, amenaza con extender la fiebre por los brillantes y destruir un territorio que acumula el 5% de la biodiversidad del planeta.

La ambición ha atraído a familias enteras. Y, con ellas, miles de niños quedan atrapados involuntariamente por esta calentura colectiva. La entidad creada por Guirao ha construido en el lugar la Escuela de los Zafiros, un centro educativo destinado a combatir la explotación laboral infantil proporcionando comida diaria y formación a los menores. «La zona es un desastre», asegura el veterinario, quien aprecia que el trabajo de los mineros está mal pagado y, a menudo, resulta arriesgado. «Los buscadores rastrean en las aguas y también cavan hoyos de hasta treinta metros de profundidad, pero sólo los niños pueden llegar hasta el último tramo, el más duro y estrecho», agrega.

Los minerales no son de gran calidad, según el cooperante, y no han favorecido la mejora del nivel de vida. Además, las decenas de miles de buscadores se afanan en competencia con empresas e inversionistas que han conseguido concesiones del Estado. Mohammed Jamal Khalifa, cuñado de Osama Bin Laden y presunto colaborador de su red islamista, era propietario de una explotación en la vecina ciudad de Sakahara y fue asesinado en 2007, en el transcurso de una visita. El crimen fue achacado a una banda de delincuentes, un fenómeno habitual, pero las últimas hipótesis apuntan a una supuesta operación de comandos militares norteamericanos.

Violencia y prostitución



Hombres de negocios de Sri Lanka y Tailandia monopolizan la comercialización de los hallazgos. Sus tiendas se hallan a pie de los yacimientos y adquieren directamente las piedras en un tráfico ajeno al control de la Administración y que puede mover anualmente más de 130 millones de euros sin ningún tipo de tributación. «Los territorios mineros son focos de violencia, hay mucha gente armada, prostitución y se abusa del alcohol», dice Guirao.

El instinto de supervivencia está en el origen de estos flujos migratorios inmediatos y masivos. La creciente desertización de la isla también impulsa la afluencia hacia las áreas de extracción. «Madagascar ha resultado muy afectado por el cambio climático y llevamos varios años sin lluvias», lamenta el cooperante. Con una superficie algo mayor que la de España, el 90% de los 27 millones de habitantes de la isla se dedica a la agricultura, tanto de subsistencia como al cultivo de la vainilla para los mercados mundiales. El territorio minero comprende a nativos de sus 18 etnias, en las que se mezclan ancestros llegados desde la lejana Indonesia junto a bantúes procedentes del continente africano y árabes que se asentaron en el norte.

El poderoso influjo de los zafiros no se ha limitado a la zona más meridional. Hace tres años, se produjeron nuevos hallazgos de piedras preciosas en el este, lo que ha impulsado una nueva ola migratoria hacia Bemainty, pequeña aldea situada en un entorno de selva tropical, el denominado corredor Ankeniheny-Zahamena, de extraordinario valor ecológico. Según un estudio del International Institute for Environment and Development, en octubre de 2016, el nuevo Eldorado recibía diariamente entre 1.500 y 2.000 buscadores con sus aperos y la ilusión de encontrar piedras de buen tamaño.

La organización medioambiental Conservation

International, encargada de proteger esta reserva natural con el beneplácito estatal, se vio desbordada por la furia depredadora de los recién llegados y solicitó en vano la ayuda gubernamental e, incluso, la presencia del Ejército para impedir la devastación. Pero el apoyo oficial ha sido muy limitado. "Madagascar ha firmado convenios para recabar ayudas financieras extranjeras destinadas a la protección de sus bosques primigenios, pero el dinero se utiliza como se utiliza", se lamenta Mireia Trias, responsable de proyectos de la ONG catalana Yamuna. Ella también ha sido testigo de las condiciones en las que se lleva a cabo la búsqueda de brillantes. "He visto agujeros de 15 ó 20 centímetros a los que sólo pueden acceder chavales muy pequeños y se producen numerosos accidentes porque los pozos se hunden". Ella forma parte de una organización formada por familias que adoptaban huerfanos malgaches. "Los futuros padres debían realizar estancias de tres meses para cumplimentar los procesos y, después de la inmersión en su realidad, no se podían quedar al margen. La población vive en condiciones neolíticas a nivel tecnológico y la inmensa mayoría carece de luz o agua corriente".

La fiebre de las piedras preciosas ha conseguido notoriedad, pero no se trata de la única amenaza que se cierne sobre la isla más grande de África. "Hablamos de un mercado negro de todo -advierte-. El expolio no se circunscribe a esa zona". A la deforestación tradicional para conseguir carbón vegetal y plantaciones de maíz se suma la demanda de maderas exóticas para elaborar muebles de lujo en Occidente y China. La destrucción para obtener palo de rosa y ébano se suma a la perforación de túneles y la extracción de arenas flu-

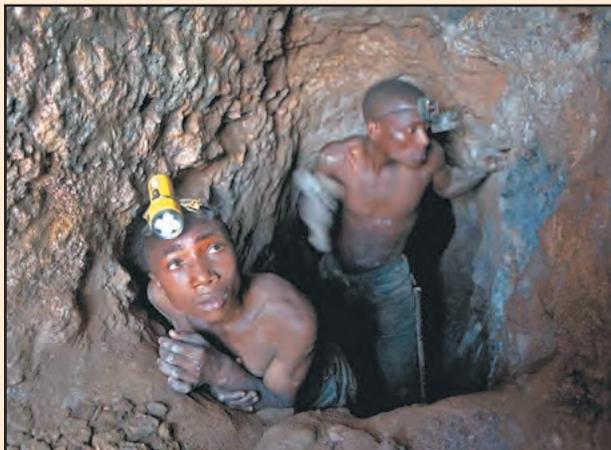


viales para decantar piedras.

Bosques esquilados

El golpe de Estado impulsado por el líder populista Andrey Rajoelina en 2009 dio paso a una década de penuria económica en la que se ha multiplicado la destrucción de los ecosistemas, impulsada por los trabajadores mineros y la mafia de leñadores asentados en los parques nacionales de Marojejy y Masoala. Más de 300.000 árboles han sido abatidos a lo largo de este período y sus troncos, almacenados en depósitos cercanos a la costa, desde donde son enviados furtivamente a grandes buques de carga que esperan en alta mar. Los madereros también se benefician de permisos de exportación con la excusa del paso de alguno de los ciclones que arrasan periódicamente la isla.

Las condiciones de vida en Madagascar explican la violación constante de la ley y la impunidad de los infractores. "Es un drama enorme", reconoce Trias. La antigua colonia francesa es uno de los cinco países más pobres del planeta y más del 70% del presupuesto nacional depende de la ayuda exterior. La miseria explica que aún siga padeciendo brotes de peste bubónica, enfermedad con reminiscencias medievales, y la pobreza amenaza incluso a su propia identidad. Además de la destrucción generada por el expolio de zafiros, madera, oro y níquel, sus esquilados bosques corren el riesgo de perder a los lemures, esa especie de primate endémica de la isla y que se ha convertido en el reclamo de algunos restaurantes de lujo. Esos fantasmas de ojos brillantes pueden desaparecer antes de que su hábitat quede definitivamente arruinado por la voracidad humana.



LA IMPUNIDAD EN LA TRATA DE PERSONAS SE HACE ESCLAVITUD

La ONU reclama poner freno a esta lacra cada vez más usada por grupos armados en zonas de conflicto.



La ONU ha pedido acabar con la impunidad en la trata de personas, una nueva forma de esclavitud usada cada vez más por grupos armados en zonas en conflicto para financiarse y atraer a reclutas con la promesa de explotar a mujeres como esclavas sexuales.

El Informe Global sobre Trata de Personas -presentado en Viena- analiza unos 24.000 casos documentados en 2016 en 142 países, y la explotación sexual (59%) es el destino más frecuente de esta "esclavitud del siglo XXI", seguido por el trabajo forzado (34%).

Esa cifra es solo "la punta del iceberg" debido a que muchas de las víctimas no son detectadas, y el número de personas afectadas podría cifrarse "en millones", según el director de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yuri Fedotov.

Según el estudio, más del 70% de las víctimas globales de trata son niñas, chicas y mujeres. Casi la mitad de las víctimas totales son mujeres adultas (49%), mientras que las niñas suponen el 23% del total y su número va en aumento. Los hombres representan el 21% de las víctimas documentadas y los niños, el 7%.

Mientras que la enorme mayoría de quienes sufren explotación sexual son mujeres, los hombres son el mayor grupo en los casos de trabajos forzados. La trata es un crimen que consiste en captar y retener a una persona mediante la fuerza o la coerción, con el fin de explotarla sexual o laboralmente.



Si bien la forma más conocida es la explotación sexual, otras víctimas sufren condiciones de esclavitud en tareas domésticas o en sectores como la minería y la agricultura o, incluso, son explotadas en la mendicidad infantil o sometidas a matrimonios forzados. También se han documentado en los pasados 13 años 700 casos de extracción de órganos, sobre todo en Oriente Medio y el norte de África. "La impunidad es el mayor problema", aseguró Angela Me, la responsable del informe, al hacer referencia a que apenas hay datos de víctimas detectadas en grandes partes de África y Asia.

La ONU calcula que este es el tercer tipo de crimen a escala global que más beneficios genera para las redes criminales, solo por detrás del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, y las cifras que se mueven son de decenas de miles de millones de dólares.

La mayor parte de los casos son detectados en los países de origen de las víctimas, aunque existe un patrón universal en el que las víctimas se desplazan desde regiones más pobres a otras más ricas.

Las redes criminales se benefician de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, lo que se agudiza en las zonas de conflicto debido al desmoronamiento del Estado, el desplazamiento de la población y la necesidad de bienes básicos. "El tráfico de personas en conflictos armados ha alcanzado proporciones terribles, con niños soldados, trabajos forzados y esclavitud sexual", denunció Fedotov. En zonas de conflicto en África subsahariana y Oriente Medio, grupos armados convierten a niñas y mujeres en esclavas sexuales "para impulsar el reclutamiento y recompensar a sus combatientes", agregó el responsable máximo de la ONUDD.

LA CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL LLEVA EL HAMBRE A 821,6 DE PERSONAS

Las cifras de este drama crecen por tercer año consecutivo afectando ya al 20% de los africanos.

Un total de 821,6 millones de personas pasaban todavía hambre en el mundo en 2018, cifra que ha aumentado por tercer año consecutivo en parte por la débil recuperación de la última gran crisis económica, según destacó el lunes 15 de julio Naciones Unidas. Las últimas estimaciones muestran que el número de hambrientos se ha incrementado lentamente desde 2015, mientras que su prevalencia se ha estancado por debajo del 11% de la población tras décadas de descenso.



2,2 MILLONES DE NIÑOS ESTÁN EN SITUACIÓN DE POBREZA



Un total de 2,2 millones de menores está en situación de pobreza, según un informe de Save the Children donde se menciona que ocho de cada diez ciudadanos consideran que combatir esta situación debe ser una prioridad para gobiernos. El 56,7% aceptaría pagar más impuestos para eliminar la pobreza infantil, que afecta al 28% de los niños españoles. Los padres que viven en situación precaria pronostican un futuro para sus hijos sin empleo ni vivienda dignos y en el que serán más infelices que ellos.

Según el informe de cinco agencias de Naciones Unidas, la tímida recuperación económica y el bajo rendimiento en muchos países tras la recesión mundial de 2008 y 2009 está socavando los esfuerzos para acabar con el hambre y otras formas de malnutrición.

“En el cambio de tendencia en los números del hambre, el factor económico ha pesado de manera muy importante”, explicó el experto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Marco Sánchez Cantillo. De los 77 países que experimentaron un aumento de la desnutrición entre 2011 y 2017, 65 sufrieron una desaceleración o una contracción de sus economías de manera simultánea y, entre estos, 52 dependían altamente del comercio de productos básicos y el vaivén de sus precios.

Los choques económicos han empeorado, además, el impacto de conflictos y sucesos climáticos extremos, como la sequía en la mitad de los países sumidos en crisis alimentarias agudas, ha afectado a 96 millones de personas en 2018.

De los más de 820 millones de personas con hambre, 513,9 millones se localizan en Asia (el 11,3% de la población), 256 millones en África (19,9 %) y 42,5 millones (6,5%) en América Latina y el Caribe. La situación más alarmante está en África, donde la subalimentación ha crecido en casi todas sus regiones, mientras que en países de Oriente Medio como Siria o el Yemen no para de incrementarse desde 2010 por la inestabilidad.

EL 30% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL SE PIERDE O ES DESPERDICIADA

El mundo atraviesa por una crisis alimentaria con más de 820 millones de personas que padecen hambre, mientras cerca de 672 millones de adultos y 124 millones de niños son obesos.



Esta situación podría mejorar si se modifican el modelo económico, las conductas de consumo y la percepción de lo que es una alimentación adecuada, afirmó Carlos Labastida Villegas, coordinador del Programa Universitario de Alimentos (PUAL) de la UNAM (México).

El problema del hambre no se debe estrictamente a la producción o disponibilidad de alimentos, sino al acceso económico; es decir, que la gente tenga los recursos económicos suficientes para comprar comida, dijo en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemoró el 16 de octubre, y que este año llevó por lema “*Dietas saludables para un mundo sin hambre*”.

El universitario resaltó que 30% de la producción en el mundo no llega a la mesa del consumidor, lo que equivale a aproximadamente mil 300 millones de toneladas por año. Ahí intervienen dos factores importantes: las pérdidas y el desperdicio.

Asimismo, sostuvo que dado que los avances registrados han sido lentos, difícilmente se alcanzará el objetivo de desarrollo sostenible de “*hambre cero*” para 2030, establecido por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2015; sin embargo, es posible enfrentar la

crisis alimentaria y lograr avances significativos si se toman las acciones necesarias.

“*Se pueden reducir los estragos del hambre si se modifica la estructura económica para que la gente tenga ingresos suficientes para adquirir más y mejores alimentos y, por otro lado, se revisan y mejoran las acciones relacionadas con la educación alimentaria y de consumo de alimentos para disminuir el sobrepeso y la obesidad*”.

El hambre existe desde tiempos inmemoriales y es una realidad en muchos países, como el nuestro. Actualmente, en Asia hay 515 millones de personas en esa condición, 256 millones en África, y 42 millones más en América Latina y el Caribe, subrayó.

En México este problema se ubica sobre todo al sureste del territorio, y tiene menos incidencia en las entidades del norte. En contraste, siete de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad, lo mismo que tres de cada 10 niños y cuatro de cada 10 adolescentes, añadió el coordinador del PUAL.

Las pérdidas de alimentos se consideran a partir de la producción, siembra, cosecha, transporte, almacenamiento y distribución a los centros de consumo. “*Se almacenan cereales en lugares inadecuados, donde son presa de la humedad y hongos que los hacen inservibles para el consumo*”, ejemplificó.

El desperdicio se refiere a alimentos que son desechados por elección, porque se estropearon o caducaron sus fechas para consumo óptimo.



mo. Esto se da principalmente en los centros de venta como mercados, supermercados o tiendas minoristas y, de una manera importante, en nuestros propios hogares.

Por ejemplo, al comprar más alimentos de lo que comúnmente se consume, éstos se rezagan, sufren deterioro físico y ya no son apetecibles. De igual manera, algunos productos envasados llegan a la fecha de caducidad o de consumo preferente y se tiran.

"Es aconsejable hacer una lista de lo que vamos a consumir en un cierto período y revisar las fechas de caducidad. Debemos ser mejores consumidores".

Labastida Villegas advirtió que los problemas del hambre, sobrepeso y obesidad no serán resueltos por



alguien en particular, porque todos estamos involucrados: *"los sectores público y privado, la sociedad y los individuos. Cada quien tiene un papel que cumplir y si no se emprenden acciones urgentes, integrales y en todos los niveles, difícilmente podremos modificar esta alarmante realidad".*

Finalmente, el universitario recomendó llevar una dieta equilibrada, que incluya los diferentes grupos. *"Debemos pensar más en nuestra alimentación y no tomarla como un acto trivial. Además, se requieren campañas masivas para que este tipo de educación llegue a toda la población. Si cada uno hace lo que le corresponde, podemos mejorar la realidad actual".*

113 MILLONES DE PERSONAS PRECISARON ASISTENCIA ALIMENTARIA URGENTE EN 2018 POR CULPA DE LAS GUERRAS

113 millones de personas necesitaron asistencia urgente de alimentos en 2018 por culpa de enfrentamientos armados, catástrofes medioambientales o inestabilidad económica. Lo confirma el 'Informe mundial sobre las crisis alimentarias 2019' presentado el 2 de abril de 2019.



traron en: Yemen (15,9), República Democrática del Congo (13,1) y Afganistán (10), según revela el Informe mundial sobre las crisis alimentarias 2019 realizado entre varias agencias de la ONU y otras entidades

La voluntad humana podría haber evitado que más de 113 millones de personas en 53 países o territorios sufrieran hambre aguda en 2018 y requirieran una acción urgente para proveerlas de alimentos y medios de vida. De entre las causas del infame dato, los conflictos y la inseguridad fueron la mayor maquinaria de hambrientos. Las luchas de los hombres armados provocaron hasta 74 millones de personas desfavorecidas en 2018, y de ellos, cerca de 40 millones se concen-

presentado en Bruselas. *"Esto demuestra la violación de la resolución adoptada por la ONU sobre la protección de la población civil en los conflictos armados al impedir el acceso a la comida",* reseña Luca Russo, analista de Crisis Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y miembro del equipo de trabajo de este estudio que se realiza desde 2016, cuando se registraron en total 108 millones de personas víctimas de hambre de tal severidad que representaba una amenaza inmediata para sus vidas o sus medios de subsistencia. En 2017 fue-

ron 124 millones, un repunte identificado con la injerencia del fenómeno climático llamado El Niño que no afectó con tanta fuerza en 2018. En ese año, las peores crisis alimentarias, por orden de gravedad, sucedieron en Yemen, la República Democrática del Congo, Afganistán, Etiopía, la República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur y el norte de Nigeria. Estos ocho países suman casi 72 millones de personas, dos tercios del total mundial.

"En zonas de conflicto se bombardean las reservas de alimentos, los mercados dejan de funcionar, los precios suben, no se pueden cultivar las tierras, surgen desplazamientos hacia lugares que pueden ser remotos o se cortan las carreteras o los puertos para la introducción de víveres", añade el experto. Pero son 21 los países en conflicto que los autores del informe catalogan en la llamada fase tres de una clasificación de consenso universal sobre la seguridad alimentaria. Un estadio de crisis que supone la acción urgente y que contempla que aun si se cuenta con asistencia humanitaria, al menos uno de cada cinco hogares en el área estudiada sufre brechas en el consumo de alimentos, niveles de desnutrición aguda elevados, o apenas puede nutrirse y únicamente recurre para ello al agotamiento acelerado de sus medios de vida. Unos 33 millones de las personas que sufren esta situación derivada de los conflictos estaban en 10 países de África; más de 40 millones en 10 países de Asia y 1,1 millones en Europa del Este.

También relacionado en cierta medida con razones antropogénicas y su vínculo con el cambio climático; las sequías, las inundaciones, los huracanes o los terremotos, supusieron 29 millones de desfavorecidos y se sitúa así como la segunda causa que provoca más crisis alimentarias. *"Como en años anteriores, la mayoría de estas personas estaban en África, donde casi 23*



millones de personas en 20 países sufrieron inseguridad alimentaria aguda", se lee en el informe, que detalla que los tres peor situados del continente fueron Etiopía, con 8,1 millones de personas afectadas; Malawi, con 3,3; y Kenia, con 2,6. *"En este aspecto se puede trabajar mucho más en la prevención, con más inversión en la agricultura, que no sea tan frágil. Si las condiciones de desarrollo son mejores, el daño en los casos de eventos climáticos se puede prevenir",* considera Luca Russo que señala que con un sistema más fuerte, el impacto del ciclón Idai en Mozambique podría haber sido menor.

Y la tercera de las principales causas descritas en el informe es el colapso económico de los países y provoca 10,3 millones de personas afectadas. *"La inestabilidad política, las cuestiones comerciales que en ocasiones devalúan la moneda o hacen que suban los precios de forma sustancial, también inciden",* señala Russo. En este caso, los tres países con mayor índice de hambrientos en situación de crisis son Sudán, con 6,2 millones; Zimbabue, con 1,9 y Burundi con 1,7.

En este apartado, el informe señala que Venezuela ha sufrido *"una grave agitación económica y política que desencadenó incrementos masivos en el precio de los alimentos y otros productos básicos".* *"Esta hiperinflación ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de las personas, frenando el acceso a los alimentos. Muchos de los venezolanos que buscan refugio en los países vecinos han agotado sus medios para comprar alimentos",* se lee en el texto sobre este país, del que Russo alerta que apenas se han podido recabar datos para su estudio.

El informe concluye con recomendaciones para evitar que se perpetúe esta situación y entre ellas, plantea acabar con los conflictos, empoderar a las mujeres, alimentar y educar a los niños, mejorar la infra-



estructura rural y reforzar las redes de seguridad social. Propone también un nuevo modelo de asistencia humanitaria que incluya las perspectivas de desarrollo en las zonas afectadas. "Se lograría un progreso real en la reducción del número de personas necesitadas, si se combinan herramientas de financiación para ser más predictivos, flexibles y duraderos, con acciones tempranas y medidas preventivas", se lee en el texto. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), organismo también de la ONU, ha analizado la situación en RDC y calcula que aunque el país tiene un potencial agrícola para alimentar a 2.000 millones de personas, su población, de 85 millones, sufre una de las mayores crisis nutricionales más graves del mundo.

"Tenemos que trabajar unidos, desde el principio, los que trabajamos en ayuda humanitaria, junto a los de desarrollo. Y es fundamental que se haga con los líderes y soluciones locales y comunitarias, para que se



mantengan las soluciones en el tiempo", detalla Arif Husain, jefe de Economía del PMA, quien comparte las recomendaciones del informe e insta a que estas fórmulas de trabajo se apliquen desde antes de que millones de personas requieran de ayuda urgente de alimentos.

HAMBRUNA EN AFGANISTÁN

La guerra ha sumido al 50% de los afganos en la pobreza, muchos de ellos están en riesgo de morir de hambre.

El hambre amenaza a unos 13,5 millones de afganos. Más de la mitad de la población de Afganistán vive en la pobreza debido al impacto que ha producido en la población décadas de conflicto. Según explicó el pasado mes de febrero el número dos de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (Unama), Toby Lanzer, muchas de estas personas sobreviven con menos de una comida al día. De acuerdo con la ONU, algo menos de diez millones de afganos viven en la categoría tres dentro de los cinco niveles en los que se mide la inseguridad alimentaria y en el que el más alto equivale a la hambruna, mientras que otros 3,6 millones se encuentran en la categoría cuatro, a un paso de morir de hambre. Afganistán tiene unos 34 millones de habitantes. En 2018, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ayudó a unos 5,5 millones de personas y en 2019 a 4,5 millones.

El responsable de la ONU advirtió de que aunque finalizase el conflicto afgano, los retos a los que se enfren-



ta el país no terminarían inmediatamente. "Una vez que haya paz, comienza la verdadera guerra", destacó Lanzer, en referencia a la necesaria lucha contra la pobreza en este país asiático. Al conflicto se ha sumado en el último año una grave sequía. "La gente aquí no vive, sobrevive". Desde el consejo Noruego para los Refugiados explicaron que la población sigue huyendo de "bombardeos aéreos, fuego cruzado y ofensivas militares". En Afganistán hay unos 1,5 millones de desplazados internos.

EN PAKISTÁN MUEREN 42 DE CADA MIL NIÑOS AL NACER, LA TASA MÁS ALTA DEL MUNDO

El superpoblado Pakistán lucha para que sus recién nacidos sobrevivan. Arrastra la tasa de mortinatos más elevada del mundo: 42 de cada mil nacimientos no salen adelante.

El bebé, diminuto y aún sin nombre, duerme acurrucado en el regazo de su madre. En Pakistán, donde los patronímicos se deciden en familia bajo el reinado de los hombres, se cuidan de identificar antes de tiempo a los recién nacidos. La muerte ronda a las parturientas en este infradesarrollado, contradictorio, desigual y también fascinante país de 200 millones de habitantes, en el que la población no para de crecer pese a estar lastrado por el índice de mortinatos más elevado de la comunidad internacional. Mortinato es una rara y hermosa palabra que encierra un significado terrible. Describe a los niños que nacen muertos. Unicef amplía el término para denunciar y combatir la tragedia colectiva que se esconde tras los 42 pequeños, menores de un mes, que fallecen de media por cada mil nacimientos. Una devastación que no resulta irremediable como una plaga de la naturaleza, sino que puede enjugarse con una pastilla de jabón y con leche materna. Porque hay lugares en este mundo donde un gesto tan mecánico y doméstico como lavarse las manos, donde un gesto tan instintivo y ancestral como amamantar a una criatura, es capaz de obrar el milagro de la vida. El milagro de la supervivencia.

El bebé de Asma, el bebé aún sin nombre, duerme al



calor de la piel de su madre y de una rudimentaria estufa encendida en medio del bochorno ambiental del noviembre paquistaní para que la sala de prematuros del Services Hospital, en Lahore, mantenga una temperatura de 25 grados. El niño nació, a la semana 33 de gestación. Pesa apenas un kilo y 800 gramos, un cuerpo tan delicado y quebradizo que conmueve tan siquiera rozarlo. Su madre, un ama de casa de 22 años originaria de un barrio rural de esta urbe que bulle como un panal con diez millones de almas, se siente feliz. Feliz de su estreno en la maternidad porque ha logrado alumbrar a su hijo. Porque «está vivo», relata. Cuesta hacer hablar a las mujeres humildes de Pakistán, y más con la trabajosa traducción de ida y vuelta del inglés al urdu, la lengua oficial del país. Pero sus palabras resuenan como una exclamación espontánea de alegría y alivio.

El parte médico, redactado a bolígrafo en un folio, no especifica por qué se adelantó tanto el primogénito de Asma. Nueve de cada diez bebés que fallecen en Pakistán lo hacen por complicaciones en el parto -una de las más comunes, que al neonato no le llegue oxígeno suficiente-, por infecciones severas y por prematuridad. Si cada muerte de un niño representa un desgarramiento sin sutura posible, que el 80% de las que se contabilizan en los registros paquistaníes sean evitables con un puñado de medidas elementales, epidérmicas, sobrecoge. Y conviene tomarse esos registros con cautela,



porque podrían resultar incluso peores: la informatización generalizada de los datos continúa siendo hoy tal quimera que las estadísticas aparecen apuntadas en pizarras de colegio.

El silencio envuelve el drama cotidiano de las familias que pierden a uno de los suyos. En muchos clanes, los niños siguen naciendo en casa; en hogares que en las zonas más depauperadas de Lahore -la capital del Punjab, la región avanzada del país- carecen de agua potable y en las que los cables de electricidad comunitarios cuelgan temerariamente en las calles polvorientas sin asfaltar. En no pocos casos, las infecciones se convierten en letales porque se retrasa al límite el traslado de las embarazadas a alguno de los cuatro hospitales públicos con que cuenta la metrópoli; dar a luz en un centro privado cuesta alrededor de mil dólares, cantidad inalcanzable para la gran mayoría de unos ciudadanos empobrecidos. Las ambulancias escasean casi tanto como la conciencia de que una mínima higiene salva vidas. Como la formación de las matronas y las insuficientes enfermeras, la lactancia justo después del alumbramiento o el 'método canguro', la 'piel contra piel' entre madre e hijo que Unicef trata de extender como un salvavidas natural junto a las autoridades sanitarias del país.

La ONG para la infancia aconseja que los bebés tomen el pecho en sus primeros seis meses de vida. La lactancia ha pasado en el Services Hospital del 50 al 90% en los dos años de aplicación del programa y el 'método canguro' ha reducido a nueve los mortinatos entre los 553 recién nacidos que han pasado por la unidad,



un modelo en la región. Nasrim se abraza a su hija, otro bebé que todavía no tiene nombre. A diferencia de Asma, con la que comparte la austera habitación de prematuros, ella sí accede a fotografiarse con su hija. Si entre nosotros lo difícil es retratar a los niños y más si les aqueja algún mal, en Pakistán son las mujeres las que se resisten a ofrecer su rostro a la cámara. Los hombres no se dejan ver en los paritorios. Sí menudean en los pasillos y en las escaleras del hospital, salas de espera de circunstancias por las que transita una muchedumbre con la efervescencia de las calles atoradas por un tráfico enloquecedor y una polución agobiante. Hay fiereza en algunas miradas y un runrún constante. También una suerte de autocontrol -¿la resignación forzosa ante la falta de expectativas?- con el que la vida fluye en medio de las penurias.

Y las mujeres no han perdido la capacidad de sonreír. Lo hace Nasrim, con los labios pintados para las extranjeras que la contemplan con la curiosidad invasiva del primer mundo. Su hija nació hace tres días; un latido arropado por tan solo un kilo y 700 gramos al que aguardan cinco hermanos, todos ellos alumbrados en casa. Nasrim tiene 32 años y si éste es su bautismo en el hospital es porque ingresó con una hipertensión inquietante para ella y para su bebé. La misma preeclampsia que sufría la tercera paciente de esta sala, Rabia, que solo desea que su pequeño Ali -él sí tiene ya identidad- crezca como «una buena persona». Muchas paquistaníes son madres de proles numerosas en un entorno hostil. Y ello las envejece en la flor de su juventud.



Los ojos de la desnutrición

Pakistán es un lugar peligroso para nacer y más si se nace mujer. El país constituye «una prioridad» para Unicef porque suma buena parte de los indicadores que desatan las alarmas en la comunidad internacional: la mortalidad infantil, la desnutrición, los cinco millones de niños menores de diez años sin acceso a la escuela, un presupuesto ínfimo en Sanidad y Educación para la envergadura de las demandas sociales... Cuando la visitante se maravilla de lo guapos que son los pequeños de pelo azabache y ojos cristalinos, alguien recuerda que esa mirada casi de color hielo puede ser fruto de la deficiente nutrición: la mitad de los pequeños por debajo del lustro no come ni bien ni lo bastante. «Es muy frustrante perder un bebé. Pero aún es más frustrante que acaben muriendo después de sobrevivir al primer mes», lamenta la doctora Rubeena Sohail.

La supervivencia pende en Pakistán de la habilidad para persuadir a las familias de que no pueden acariar a un recién nacido con las manos sucias. O de que no desprecien el calostro, la «leche amarilla» que en los hogares anclados en el pasado se sustituye por té o por miel. La reivindicación de la lactancia como profilaxis frente a la muerte es incuestionable para las profesionales que trabajan en el Services Hospital, sorprendidas de que, entre nosotros, haya parturientas que necesiten refuerzo externo. «Creemos que eso es



un mito. Es imposible que la leche de una madre sea de mala calidad», zanja con la fe que encara cada día pruebas al límite.

Parsa Batool tiene apenas tres meses y lleva una semana ingresada en la sala de nutrición del Nawaz Sharif, otro de los hospitales públicos de Lahore. Pesa 2,8 kilos y batalla contra una infección respiratoria que le impide ganar peso. Sus facciones se transparentan en un rostro cerúleo, con unos ojos almendrados que angustian. Es el tercer bebé de Fatima,

una mujer de 37 años que también conserva una sonrisa mientras cuenta cómo se llama la pequeña y cómo ha acabado en el centro hospitalario. Como las del resto de madres, sus respuestas son cortas en charlas apresuradas, en las que incomoda importunar ante semejante trance vital. Pero Fatima cabecea amable y da mimos a ese bebé cuya suerte es una incógnita mientras se teclean estas líneas.

La mirada ajena se detiene lo justo frente a esas incubadoras que parecen deberle décadas al progreso. Como evita hacerlo más de la cuenta con las condiciones del paritorio de otra época, de otro mundo, del BHU Dograi Kallan, el equivalente a un ambulatorio en una comunidad rural de Lahore. Arrancó en 1972 con 5.000 pacientes en un radio de 20 kilómetros, pero el 'boom' poblacional ha disparado esa cifra hasta los 30.000. Hace apenas un par de horas que Igra, una joven de 24 años, ha alumbrado aquí a su tercera criatura, una niña también sin nombre. Ha sido un parto deprisa y corriendo -Igra se sintió mal y acudió al centro conduciendo la moto de su marido, sin imaginar que estaba a punto de parir-, con un desenlace afortunado. Tanto que en seis u ocho horas las enviarán a ambas a casa asistidas por las 'ladies health workers', las trabajadoras formadas en las comunidades vecinales con las que la sanidad paquistaní trata de cubrir sobre el terreno carencias mayúsculas. «Para todos los pueblos, sus niños son lo más importante. Salvarlos es una responsabilidad nacional», cierra el doctor Akbar Ali, director del Nawaz Sharif.



ALCOHOL, DROGAS Y ANSIEDAD: EL COSTE DE LA CRISIS PARA LOS GRIEGOS

La recesión ha provocado que los licores vivan días de gloria en Grecia, así como la aparición de una nueva sustancia en las calles de Atenas, la sisa, conocida como la 'cocaína de los pobres'.

Hay una estampida en la calle Chalkokondili. «¡Viene la Policía!», grita una mujer con el rostro y el cuerpo marcados por años de drogadicción. Es una más del grupo de decenas de toxicómanos que salen corriendo por esta céntrica vía de Atenas. La parte final de Chalkokondili, con sus aceras porticadas y el antiguo hotel Ionis, convertido con la recesión económica en un albergue para indigentes, es uno de los puntos calientes del mercado de estupefacientes. A cualquier hora es posible encontrar a hombres y mujeres tirados por el suelo, con el síndrome de abstinencia o consumiendo heroína o sisa, la nueva droga que ha surgido en Grecia durante la crisis. Es un cristal de metanfetamina que se fuma y resulta terriblemente adictivo, al que se conoce como la 'cocaína de los pobres' por su bajo precio. Además de ser un poderoso estimulante, también inhibe la sensación de sed, lo que puede provocar la muerte por deshidratación en sólo unas horas durante el sofocante verano ateniense. Falsa alarma en Chalkokondili. Al final no aparece ningún agente y los toxicómanos retoman sus posiciones. Hay tantos griegos como inmigrantes, entre los que destacan los afganos, muchos de los cuales llegaron al país ya adictos a la heroína de su tierra. Mientras un chico de rasgos orientales fuma sisa en una pipa de cristal sentado en la acera, del hotel Ionis sale llorando una muchacha griega que un día debió de ser bonita, pero la droga la ha estropeado. Le ruega al joven que le invite a una calada, pero éste se niega. Harto del jaleo, el dueño de una agencia de viajes situada en la esquina de Chalkokondili sale de su tienda y se pone a increpar a los drogadictos. Está



claro que no es el mejor ambiente para hacer negocios legales, aunque la gente de la zona apuesta por una próxima intervención de las autoridades. «Han abierto al lado un hotel de cuatro estrellas y construyen otro, así que no tardarán en echar a los yonquis», dice Spyros, que vive a pocas manzanas. «El centro de Atenas se ha visto muy golpeado por la recesión. Hay muchas tiendas cerradas y el mercado está moribundo, así que los drogadictos han ocupado el espacio que quedó vacío», cuenta el psiquiatra Konstantinos Kokkolis, director de implementación de programas en Okana, la organización estatal contra las drogas. «La crisis se ha notado en todos los aspectos. En los primeros años, entre 2009 y 2013, hubo un aumento terrible del sida. Pasamos de 10 o 15 nuevos cada año a entre 150 y 200. Muchos drogadictos no tenían dinero para comprar jeringuillas y las compartían, lo que propagó mucho la enfermedad. Por suerte el Estado reaccionó, invirtió en planes de prevención y volvimos a las cifras normales».

Futuro pesimista

Kokkolis no cree que hayan aumentado los usuarios de drogas duras durante la década de crisis y considera que habrá que esperar unos años para ver sus efectos. «Muchos niños inmigrantes que están hoy en los campos de acogida tienen un alto riesgo de



acabar viviendo en las calles y consumiendo», advierte. Es en cambio mucho más inmediato el impacto de la recesión en el abuso del alcohol. «La gente cada vez bebe más y además consume bebidas de peor calidad, porque han aumentado mucho las destilaciones clandestinas de 'tsipouro', un licor local. El alcohol vive sus días de gloria durante la crisis, porque además ha bajado de precio».

La absoluta incertidumbre ante el futuro que atenaza a buena parte de los griegos ha aumentado mucho los niveles de ansiedad entre la población, señala Kokkolis. Caterina Pasa, psicóloga social que trabaja en Atenas, destaca por su parte los efectos de la recesión en dos sectores particulares: los jóvenes y los padres de familia. «Si tienes hoy unos 20 años la mayor parte de tus recuerdos son de un momento de depresión y pánico nacional. En esa situación resulta difícil pensar cómo vas a poder construirte un porvenir, cómo atreverte a imaginar algo diferente. Acabas viviendo al día», dice la psicóloga. Para los varones de mediana edad la situación económica puede tener efectos «desesperantes», porque sienten la responsabilidad «de sacar adelante a la familia y, a diferencia de las mujeres, les cuesta mucho más hablar de esta frustración y pedir ayuda». No resulta difícil entender la desesperación de muchos



griegos al escuchar la historia de una de las usuarias habituales del comedor social Kiada, el mayor de Atenas, gestionado por el Ayuntamiento y la Iglesia ortodoxa. «Es una señora de unos 50 años divorciada que tiene cuatro hijos. Ha perdido el trabajo y no se atreve a decírselo a los niños, así que cada día viene y se lleva cinco raciones, que mete en la olla antes de que ellos regresen de la escuela para que piensen que los ha cocinado ella», cuenta uno de los voluntarios del comedor..

EL ESTALLIDO SOCIAL EN LATINOAMÉRICA SURGE DE LA CORRUPCIÓN Y LA DESIGUALDAD

La movilización masiva en Chile y Ecuador se ha extendido a Argentina, Bolivia, Uruguay y Colombia. El motivo: la desigualdad social

América Latina vive una explosión de descontento social que tiene su principal foco de tensión en Chile, precedido en octubre por una serie de protestas violentas en Ecuador, Honduras y Haití, y que ha influido en las recientes elecciones de Argentina, Bolivia, Uruguay y Colombia. Este estallido latinoamericano se une a la actual protesta global con características propias: denuncia de una escandalosa desigualdad, estancamiento económico y descrédito del sistema democrático. La reciente publicación del Barómetro de las Américas reveló que solo el 57,7% de los ciudadanos de la región apoyan la democracia como mejor forma de gobierno, una cifra que ha disminuido 10 puntos en los últimos seis años. Ante esta situación crítica que puede contagiar, aún más, a parte del continente, los analistas se



preguntan con preocupación hacia dónde va Latinoamérica. «No es un panorama esperanzador, por lo menos a medio plazo», afirma la politóloga y expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que considera que no debe sorprendernos la agitación en las calles. «Hay cuatro variables: la democracia va perdiendo adeptos; el ciclo electoral de los últimos 30 meses -15 elecciones- muestra un mensaje de hartazgo y un

deseo de cambio; los gobiernos, salvo en México, tienen mayorías precarias para realizar mejoras y la caída de la actividad económica en la región impide las reformas y la gente tiene temor de ir hacia atrás”, resume con contundencia. Estas variables muestran que la falta de equidad es un polvorín social que puede estallar en cualquier momento y que la miseria que se veía en las orillas de la autopista de peaje que une el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez con el centro de Santiago de Chile no era un elemento más del paisaje típico sudamericano. La rabia de las protestas no se ha alimentado solo del estancamiento económico o la ceguera política. Para el jurista peruano José Ugaz, “la corrupción es un factor fundamental en el descontento que se vive en la región”. “En Ecuador, los ajustes de tarifas tienen que ver con prácticas corruptas que se le imputan al expresidente (Rafael) Correa y su gobierno; en Guatemala, Honduras, Perú y Brasil, las crisis por escándalos de corrupción ha sido mayúsculas. Lo que está ocurriendo en Chile tiene que ver también con la



falta de legitimidad de las Fuerzas Armadas y carabineros a raíz de graves casos de corrupción que han sido ventilados recientemente”, explica el procurador Ad-Hoc peruano en el caso Fujimori-Montesinos. Chichilla también resalta el cansancio social ante esta lacra: “La obscenidad de la corrupción en el continente, que se lleva destapando en estos años, empuja a la gente a buscar el cambio sin importar que sea izquierda o derecha”.

LA POBLACIÓN SUDAMERICANA SE REBELA CONTRA LA DESIGUALDAD

Las protestas se contagian como un virus por Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina... Los ciudadanos de la región se rebelan contra la desigualdad y contra unos políticos ineficaces que hacen caer el peso de los ajustes económicos en la clase media y baja.



colmado las calles de algaradas imprevistas que emanan de varias causas, pero que tienen un hilo conductor que se repite: el hartazgo ante unas élites políticas que no saben dar respuesta al incremento de la desigualdad.

Sudamérica, la región del mundo con más

inequidad, encadena crisis tras crisis sin hallar salida al laberinto y arde en el descontento. A la convulsión que asola a Venezuela y Nicaragua se van sumando un país tras otro. Lo de Chile, más que una crisis, está siendo una insurrección en toda regla. Sin llegar a ese grado de amotinamiento, Brasil, Colombia y Perú no viven precisamente en estado placentero.

En este paisaje incierto surge un factor de preocupación. La diáspora, antes exclusiva de centroamericanos y mexicanos que se desplazaban a EE UU, ahora se

En Chile el detonante que hizo estallar las protestas fue el aumento del precio del billete de metro. En Ecuador, la supresión de los subsidios a los combustibles. En Bolivia, las sospechas de fraude electoral. En Haití, la escasez de alimentos y gasolina. En una región poblada por 620 millones de habitantes y compuesta por una veintena de países, es difícil encontrar patrones comunes que expliquen el malestar social que impregna América Latina. El desencanto de los ciudadanos ha

extiende también a la Venezuela de Nicolás Maduro, de donde han huido ya 4,5 millones de personas. «Puede ser un factor de desestabilización. Por fortuna, ha prevalecido la comprensión. Colombia, principal destino de los migrantes venezolanos, tiene una política de puertas abiertas, pese a lo limitado de los recursos públicos. Es verdad que Perú y Ecuador comienzan a poner algunas trabas. Pero hay muchas diferencias entre la política de Latinoamérica con relación a la migración venezolana, de un lado, y la europea con respecto a los refugiados sirios, de otro», destaca Carlos Malamud, investigador sobre América Latina del Real Instituto Elcano.

Si la crisis de 2008 fue devastadora en Europa, Latinoamérica salió entonces indemne de la embestida. Ahora eso no ocurre. La previsión de crecimiento se ha visto recortada hasta un 0,2%, una cifra raquítica que obedece sobre todo a la desaceleración en Brasil y México.

El descrédito de los políticos se alía con la corrupción rampante, la ineficiencia estatal y la degradación de los servicios públicos. Todos estos ingredientes se conjuran para crear una situación explosiva. Escandalosa resulta la insensibilidad de unos dirigentes que piden sacrificios mientras ellos se solazan en una vida regalada. El ministro de Economía de Chile, Juan Andrés Fontaine, se mofó de las quejas ciudadanas ante la subida del precio del metro y sugirió con sarcasmo a los descontentos que madrugaran con el fin de pagar tarifas más baratas. Es lo que se conoce como el síndrome de María Antonieta. Cuando a la esposa de Luis XVI le informaron de las hambrunas que asolaban Francia y del sufrimiento de los campesinos por la falta de pan, dijo: «Que coman pasteles». La cita es casi con toda seguridad falsa, pero ilustra a la perfección la ceguera en que viven



a veces los gobernantes. Al final Fontaine pidió perdón, como lo hizo también el presidente Sebastián Piñera. Mientras las calles de Santiago ardían en tumultos callejeros, el mandatario, uno de los hombres más ricos del país, abandonó el Palacio de La Moneda y se fue a comer una pizza a un barrio acomodado para celebrar el cumpleaños de su nieto.

De declarar la guerra a los contestatarios, Piñera se ha visto obligado a remodelar su gabinete para rebajar la ira. Ha levantado el estado de excepción y revocado las medidas que encarecían el viaje en el suburbano. Al menos 20 personas han muerto y más de mil han resultado heridas en los disturbios. Atrás queda una manifestación histórica, la celebrada en Santiago, que congregó a 1,2 millones de descontentos.

Gobernar para unos pocos

La desconfianza de los latinoamericanos hacia una democracia que les está defraudando por su inoperancia es patente. A la luz del último Latinobarómetro publicado, un 75% de los encuestados piensan que los gobiernos no defienden los intereses de la mayoría y que gobiernan para unos pocos. «Cada año va bajando la valoración de la calidad de la democracia, no de ella como sistema. Además, la afección a la clase política está en niveles bajísimos. Es fruto de una falta de res-



puesta de las instituciones a las demandas de la población, al tiempo que persiste el sentimiento de que el peso del ajuste lo están pagando las clases medias», dice Anna Ayuso, investigadora del Centro para Asuntos Internacionales de Barcelona.

El descreimiento de los ciudadanos para con sus élites políticas ha sido palpable en los comicios locales y regionales de Colombia. El número de papeletas en blanco fue tan abultado que en algunos departamentos en los que ganaron los partidos tradicionales esa opción resultó la segunda o la tercera.

Pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) quiere disipar en el subcontinente su leyenda de ogro, lo cierto es que están renaciendo las suspicacias en su contra, si es que alguna vez se habían ido. «Parece que el FMI no aprende. Lo increíble es que sus recetas están deteriorando o haciendo caer a los gobiernos de derechas. A los ejecutivos que trataban de reconducir la política económica a modelos más ortodoxos, el FMI les pide que adopten unas medidas que la población no puede asumir. Hace poco estábamos hablando del giro a la derecha de Latinoamérica, pero los efectos a medio plazo se traducen en un resurgir de la izquierda», apunta Ayuso.

El neoliberal Mauricio Macri ha perdido las elecciones en Argentina frente al peronista Alberto Fernández, cuya victoria responde tanto a méritos propios como a la gestión desastrosa de su antecesor, aunque la economía ya estaba agrietada con Cristina Fernández de Kirchner. Por unos y otros, Argentina roza ya el 55% de inflación y un 35% de pobreza. El caso del liberal Macri -también de Piñera- contradice el mito de que un empresario de éxito es la mejor forma de sacar del atolladero a un país. Ahora Alberto Fernández tendrá que renegociar con el



FMI las condiciones de un préstamo por valor de 57.000 millones de dólares.

El presidente ecuatoriano Lenin Moreno se ha encontrado con que aplicar la disciplina fiscal produce sublevaciones. Moreno no hizo sino actuar en coherencia con el programa de ajuste exigido por el FMI dirigido por Kristalina Georgieva, sucesora de Christine Lagarde. En Ecuador no han sido las clases medias las que se han rebelado, sino unas comunidades indígenas empobrecidas a las que se les pedían severos sacrificios para reducir la abultada deuda, herencia del anterior presidente, Rafael Correa.

En todo caso, el hervidero latinoamericano no se entiende sin el efecto contagio de los 'chalecos amarillos' de Francia, la desobediencia civil de Hong Kong o, más recientemente, las protestas del Líbano. Por de pronto, el enfrentamiento en la calle ha dado sus frutos, pues los gobiernos ecuatoriano y chileno han reculado ante la furia popular. Solo Argentina ha encauzado su malestar a través de las urnas.

Desde Río Grande a Tierra de Fuego, cunde la percepción de que la corrupción es un quiste imposible de extirpar. A su vez, las expectativas de antaño de participar en la senda del desarrollo económico se han desvanecido con la bajada abrupta del precio de las materias primas. Hubo un tiempo feliz en el que China compraba cantidades ingentes de soja y carne de vacuno a Argentina, cobre a Chile y Perú, hierro a Brasil y petróleo a Venezuela. Todo eso se esfumó. «Las políticas sociales que se iniciaron con el auge económico propiciado por las exportaciones a China no se han podido mantener. Ecuador se endeudó muy malamente con China en obras que no tenían ninguna sostenibilidad financiera», asegura Erika Rodríguez, coordinadora del panel de América Latina de la Fundación Alternativas.



Rodríguez desconfía de las tesis que apuntan a que Rusia y China están azuzando el clima de inestabilidad aprovechando la política errática de la Administración Trump en la región: «El factor conspiratorio en la ecuación es innecesario. Ya estaban todas las características para que se produjeran las movilizaciones en países muy diferentes. China no tiene ese interés político, es verdad que ha entrado a lo bestia con sus inversiones en un momento en que EE UU pone restricciones, pero no veo que todo eso la beneficie. Y en cuanto a Rusia, tampoco veo que tenga un interés geopolítico en alentar unas protestas que no se sabe muy bien hacia dónde van».

Para la experta, las llamaradas que están prendiendo en la zona tienen más que ver con la debilidad de un Estado del bienestar incapaz de atajar la dureza de las reformas que se están acometiendo.



LATINOAMÉRICA CONVULSA

Reguero de crisis.

Cada país es diferente, pero hay un denominador común para explicar la crisis: la desigualdad y las graves dificultades económicas en un contexto de desaceleración. Chile, Ecuador y Bolivia son algunos exponentes de países en conflicto, pero también Perú, donde Martín Vizcarra ordenó la disolución del Congreso, o Haití, donde las protestas casi derriban a un presidente. Venezuela está sumida en el colapso desde hace tiempo, lo que ha motivado un éxodo masivo de 4,5 millones de personas. Argentina está atrapada por un crédito del FMI de 57.000 millones de dólares. El descontento en Brasil aupó al poder al ultraderechista Jair Bolsonaro. México es un Estado fallido por culpa del narcotráfico.

0,2% Es el parco crecimiento pronosticado por el FMI para 2019 en América Latina y el Caribe, sumidos en la incertidumbre. El exiguo porcentaje contrasta con la cifra del 5,9% que se prevé crecerá Asia y el 3,2% de África.

Los 'Chicago boys' de Chile.

El modelo económico chileno es producto del régimen militar de Augusto Pinochet, quien quedó seducido por las recetas privatizadora de los 'Chicago boys', dirigentes educados en las teorías del Premio



Nobel Milton Friedman. Servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas, al tiempo que se impuso una fuerte privatización de la sanidad, la educación y las pensiones. La apuesta fue refrendada por el éxito de los datos macroeconómicos. Pero el precio a pagar es la desigualdad. Así, el 50% de los hogares de menores ingresos accede solo al 2,1% de la riqueza neta del país.

200 dólares al mes es la cantidad máxima que puede adquirir un argentino. La medida, adoptada por el Banco Central tras las elecciones, trata de estabilizar la cotización del peso y evitar las maniobras especulativas. El peronista Alberto Fernández, recién elegido, apuesta por una rebaja de los tipos de interés para alentar el consumo y el crédito.

LAS PROTESTAS EN BOLIVIA DEJAN NUEVE MUERTOS Y MÁS DE UN CENTENAR DE HERIDOS

Duros enfrentamientos entre grupos cocaleros, la Policía y el Ejército a la entrada de la ciudad de Cochabamba, bloqueada por las fuerzas.

Bolivia vivió el viernes 15 de noviembre la jornada más dura desde que se registran las protestas tras las elecciones del 20 de octubre, con fuertes enfrentamientos en la región de Cochabamba con un saldo de 9 muertos y 100 heridos.

Miles de personas provenientes de varias provincias del departamento boliviano de La Paz marcharon nuevamente en las ciudades de La Paz y El Alto y se registraron incidentes con la Policía y el ejército que usaron gases lacrimógenos. En 26 días de manifestaciones, la situación en Bolivia se ha ido agudizando tras las elecciones en las que Evo Morales fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de irregularidades. Morales renunció a la Presidencia y al día siguiente viajó a México en condición de asilado, no sin antes pedir a sus bases condenar un "golpe de Estado", que "se consumó" después de que Jeanine Áñez asumiera la Presidencia interina de Bolivia. Áñez le advirtió a Morales que tiene cuentas pendientes con la Justicia si regresa a Bolivia, por un supuesto delito electoral y presuntos casos de corrupción de su Gobierno.

Continúan los disturbios

Como si se tratara de un campo de batalla, así fue el duro enfrentamiento entre grupos cocaleros del trópi-



co de Cochabamba que por segundo día intentaron entrar en la ciudad, donde la Policía y el ejército tenían bloqueada la entrada para evitar su llegada. El representante en Cochabamba de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nelson Cox, dijo que "penosamente tenemos cinco (muertos) en Sacaba", por heridas de bala. La cifra de fallecidos ascendió posteriormente a nueve, según el diario 'Los Tiempos' que cita a la misma fuente.

Desde el domingo 10 de noviembre ha habido "una escalada de intervenciones de las fuerzas conjuntas, policiales y de las Fuerzas Armadas que han tenido de forma desproporcional sus intervenciones", concluyó.

La Policía Boliviana informó de que sus agentes "fueron atacados con armamento letal y armas de fuego improvisadas en el puente Huayllani", entre las ciudades de Cochabamba y Sacaba.

La nueva gobernadora del Departamento de Cochabamba, Esther Soria, señaló que se va a conformar una comisión integrada por la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y demás autoridades para instalar un diálogo con las partes en conflicto e hizo un llamado urgente a la pacificación.

Evo Morales, que desde México se encuentra muy activo en sus redes sociales, condenó la represión contra los grupos cocaleros y llamó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a "que paren la masacre".

El expresidente boliviano afirmó que la única salida para la crisis y para pacificar Bolivia es celebrar una reunión nacional con todos los



actores políticos, ya sea con o sin mediación internacional.

"La mejor forma de pacificar en este momento es una reunión en la que esté (el opositor Luis Fernando) Camacho, (Carlos) Meza, Evo, los movimientos sociales, el gobierno de facto", señaló Morales en una entrevista con la cadena CNN en español en la Ciudad de México, donde está asilado. En la entrevista, Morales sostuvo que desde su llegada a México, ha planteado esta reunión convencido de que "con tanta masacre no creo que el pueblo pare".

Morales aseguró que el movimiento de protesta en su país "es hasta sacar a la dictadura y acabar con el golpe de Estado". Confirmó que no tiene problema en que haya o no mediación internacional porque desde que llegó a México ha hecho un llamamiento a un diálogo de alto nivel y "es mejor con mediación, con participación".

El exmandatario boliviano lamentó las muertes ocurridas durante las protestas en la zona de Cochabamba, al señalar que una de las razones por las cuales dimi-



tió fue para evitar la violencia y las muertes en Bolivia. "He cuidado permanentemente que no haya muertos y si renuncié no es por cobarde. No quería que hubiera esta violencia", puntualizó Morales. También lamentó la represión y dijo que autoridades de facto en el país son responsables. "Es un genocidio. Lamento mucho tantos muertos" apostilló.

LA POLICÍA DE BOLIVIA USA GASES LACRIMÓGENOS PARA DISPERSAR UNA MARCHA CON FÉRETROS

«Hemos sido matados» -gritó una mujer-, «y ahora somos gasificados».

La Policía dispersó el jueves 21 de noviembre con gases lacrimógenos una marcha que portaba los féretros de los fallecidos en un operativo militar y policial a su llegada al centro de La Paz, entre gritos de «Asesinos» hacia los policías.

La manifestación, seguida por miles de personas, llegó desde la vecina ciudad de El Alto a la céntrica plaza paceña de San Francisco, con ataúdes con los cuerpos de ocho civiles que habían fallecido el martes 19 de noviembre al ser tiroteados en un operativo militar.

La multitud se había detenido en una avenida junto a la plaza cuando efectivos de la Policía Boliviana comenzaron a lanzar botes con gases y los manifestantes se dispersaron por las calles adyacentes.

Varios de los participantes declararon que se sintieron «tratados como perros», tras haber desarrollado



«pacíficamente» su protesta para denunciar la intervención militar y policial en El Alto. «Hemos sido matados» -gritó una mujer-, «y ahora somos gasificados».

Algunos de los féretros fueron bajados al suelo en plena calle por los manifestantes, tras haber acompañado a los vehículos que los traían de El Alto, mientras pedían ayuda para atender a la gente afectada por los gases.

Los ocho civiles fallecidos recibieron impactos de proyectiles de armas de fuego, cuya autoría se investiga, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

El Gobierno interino de Bolivia mantiene que los disparos mortales no fueron realizados por los militares, pero por ahora no hay versión oficial sobre los autores.

Con los ocho fallecidos en El Alto, la cifra de muertos desde que estalló la crisis en Bolivia tras las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre subió a 32 personas.



LAS PROTESTAS EN LATINOAMÉRICA SE EXTIENDEN A COLOMBIA

Colombia es el último país en sumarse a las demandas del continente con un paro contra el presidente Iván Duque que acabó con tres muertos.

El deterioro de las pensiones y los salarios, el incumplimiento de los acuerdos con los estudiantes, y la perenne situación de violencia que vive el país -más de 160 dirigentes sociales y sindicales han sido asesinados entre enero y noviembre-, así como el intento del Gobierno de modificar el acuerdo de paz con las FARC en 2016, están detrás de las movilizaciones que sacuden Colombia desde el viernes 23 de noviembre, jornada de huelga general.



Las manifestaciones y los disturbios que se produjeron en casi todo el país contra la política económica de Iván Duque obligaron incluso a declarar el toque de queda en Cali. En Bogotá, las caceroladas se hicieron sentir con fuerza mientras se recrudecían los enfrentamientos con la Policía.

Los manifestantes incluso atacaron el Palacio de Liévano, en el centro histórico de Bogotá, que sufrió diversos daños poco antes de que los antidisturbios lanzaran gases lacrimógenos contra la multitud en un intento de dispersar la marcha. En otro punto de la ciudad, un grupo de manifestantes que se dirigía al Aeropuerto El Dorado se enfrentó con los antidisturbios.

Poco después, los enfrentamientos se



recrudecieron en las inmediaciones del centro comercial Gran Estación, por lo que otro grupo de manifestantes se dispersó hacia el cercano edificio de la Gobernación de Cundinamarca.

La Universidad Nacional, el Congreso y la sede del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) también fueron escenario de enfrentamientos. En un video difundido, se puede ver cómo un grupo de policías protegen la entrada de las oficinas del Senado mientras se protegen con sus escudos ante el lanzamiento de piedras, ladrillos y otros objetivos por parte de los manifestantes.

Frente a la sede de ICETEX, un grupo de personas habría intentado entrar en las instalaciones haciendo uso de piedras y 'papas bomba' (que reciben ese nombre por su parecido con los tubérculos y pueden incluir clavos, tuercas y piedras). Al menos cuatro agentes resultaron heridos. La ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que el Gobierno del presidente Iván Duque garantizaría el derecho a la protesta pacífica, así como «la vida, honra, y bienes tanto de quienes participen en la misma, como de los terceros que no lo hagan», pero advirtió que los actos violentos serían respondidos «con toda la fuerza del Estado».

Los días previos a la huelga, el Ejecutivo otorgó plenos poderes a las autoridades locales y regionales para imponer las medidas necesarias en caso de que se produjeran actos de violencia y revueltas similares a las acontecidas en las principales ciudades de algunos de los países de la región, como Ecuador, Chile y Bolivia.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que la capital no sería militarizada y que no



habría toque de queda. No obstante, en la ciudad de Cali las autoridades declararon el toque de queda debido a los disturbios y saqueos registrados. «El país y el Gobierno ya están al tanto del toque de queda en Cali que empieza desde ahora, lamentablemente tenemos una serie de disturbios en Bogotá que han dañado la protesta pacífica», alertó Gutiérrez en relación a lo sucedido en las dos ciudades colombianas.

El Defensor del Pueblo, Jorge Calero, señaló que se había producido un «ataque a una misión médica y una unidad médica, cuyo conductor ha resultado herido». «También, en Bogotá, una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo que acompañaba la marcha fue objeto de una agresión con elementos contundentes», manifestó.

Según los datos de la Policía, hubo 79 los heridos -42 civiles y 37 policías- y 36 detenidos en el marco de las protestas. En una rueda de prensa, el jefe de las fuerzas de seguridad, Hoover Penilla, indicó que «más de 96.000 personas todavía se encuentran en algunos lugares concentrados esperando para llegar a sus hogares».

«La Policía Metropolitana de Bogotá y la Policía Nacional quieren dejar claro a la ciudadana bogotana que vamos a hacer hasta lo indecible, lo que nos corresponda, hasta el último aliento, por sofocar esta situación», aclaró.

Avisó asimismo que los miembros de las fuerzas de seguridad saldrán «a cumplir su tarea: salvaguardar bienes públicos y privados y defender el bienestar y la integridad del ciudadano de bien. Repito: hasta el último aliento, no más».



PARA EVITAR LAS PROTESTAS MUNDIALES, HAY QUE HACER FRENTE A LA DESIGUALDAD SOCIAL

Las manifestaciones que se están produciendo en las calles de todo el mundo indican que, pese a los avances (aún insuficientes) en la lucha contra la pobreza, el hambre y las enfermedades, muchas sociedades no están funcionando como debieran. El hilo conductor, como señala las Naciones Unidas, es la desigualdad.

El último Informe sobre Desarrollo Humano 2019 pone de manifiesto que, a pesar de que para millones de personas la brecha en aquellos aspectos ligados a las condiciones de vida más básicos se ha reducido, está surgiendo una nueva generación de desigualdades.

Desde Chile a Hong Kong, desde Irán a Francia, el mundo está siendo testigo de innumerables protestas sociales en demanda de mejores condiciones de vida en todos sus aspectos.

Es preciso comprender que el problema radica en la distribución desigual de riqueza y poder.

“Diferentes desencadenantes están llevando a la ciudadanía las calles: el coste de un billete de tren, el precio del petróleo, la demanda de libertades políticas, la reivindicación de justicia y equidad... Es el nuevo rostro de la desigualdad”, señala el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con motivo de la publicación del informe, titulado “Más



allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI”.

Achim Steiner declara que esa desigualdad sistémica está causando un daño profundo a nuestra sociedad.

“La desigualdad no es solamente la diferencia de ingreso entre una persona y su vecino. Es preciso comprender que el problema radica en la distribución desigual de riqueza y poder: las arraigadas normas sociales y políticas que están empujando a la gente a lanzarse a las calles, y los factores desencadenantes por los que lo seguirán haciendo en el futuro a menos que algo cambie”. Pero como el mismo Steiner señala: la desigualdad tiene solución y para hacer frente a esas demandas, se necesita abordarla en todas sus formas, desde la que tiene su origen en los ingresos hasta la provocada por los cambios tecnológicos, el cambio climático o el sistema educativo.

El documento asegura que, por ejemplo, de no abordarse adecuadamente, el cambio climático y los cambios tecnológicos podrían provocar una “nueva gran divergencia” en la sociedad no vista desde la Revolución Industrial.

El creciente poder de mercado de los empresarios está relacionado con la reducción de la proporción de los ingresos que reciben los trabajadores.

Por ejemplo, en los países con desarrollo humano muy alto las suscripciones a servicios de banda ancha fija están creciendo a un ritmo 15 veces más rápido que en los países



con desarrollo humano bajo, y la proporción de la población adulta con estudios superiores también está creciendo a un ritmo más de seis veces superior que en los países de desarrollo humano bajo.

“Aspectos que solían considerarse como deseables, como ir a la universidad o disponer de internet de banda ancha, son cada vez más importantes para acceder a las oportunidades del mundo actual: quien solo tiene acceso a lo básico se enfrenta problemas para avanzar en su futuro”, argumenta Pedro Conceição, director del equipo del PNUD encargado de elaborar el Informe sobre Desarrollo Humano.

El documento analiza la desigualdad en tres esferas, establece que es un problema que tiene solución y propone una batería de políticas para combatirla:

Pensar más allá del ingreso

El Índice de Desarrollo Humano 2019 y el índice que lo complementa, ajustado por la desigualdad, muestran que la distribución desigual de la educación, la salud y los niveles de vida obstaculiza el progreso de los países. Según estas variables, en 2018 se perdió el 20% del progreso del desarrollo humano debido a las desigualdades.

Por lo tanto, las Naciones Unidas recomiendan adoptar políticas que, sin olvidar las variables económicas, vayan más allá del ingreso; por ejemplo:

Inversiones en la primera infancia y a lo largo de toda la vida: La desigualdad comienza antes del nacimiento y puede acumularse, amplificada por las diferencias en salud y educación, durante la edad adulta. En Estados Unidos, los hijos de familias profesionales escuchan hasta tres veces más palabras que los niños que viven en familias que reciben prestaciones sociales, lo que repercute en las puntuaciones de los exá-



menes que realizarán en etapas posteriores de la vida. Así pues, las políticas dirigidas a corregir esta situación deben empezar a aplicarse en el momento del nacimiento o incluso antes. Dichas políticas incluyen inversiones en la educación, la salud y la nutrición de niños y niñas de corta edad.

Productividad: Tales inversiones deben continuar a lo largo de la vida de la persona, tanto cuando obtienen ingresos en el mercado laboral, como posteriormente. Los países con una mano de obra más productiva tienden a presentar una menor concentración de riqueza en el tramo superior de la distribución. Esto se debe, por ejemplo, a políticas que fortalecen el papel de los sindicatos, a la fijación de un salario mínimo adecuado, a procesos para pasar de la economía informal a la formal, a la inversión en protección social y a la atracción de las mujeres al mercado laboral. Sin embargo, las políticas dirigidas a mejorar la productividad no bastan por sí solas.

El creciente poder de mercado de los empresarios está relacionado con la reducción de la proporción de los ingresos que reciben los trabajadores. Las políticas antimonopolio, entre otras, son fundamentales para corregir los desequilibrios de poder en el mercado.

Gasto público y tributación justa: El Informe argumenta que la tributación no puede considerarse de forma aislada, sino como parte de un sistema de políticas, que incluyen el gasto público en salud y educación, y alternativas a un estilo de vida con altas emisiones de carbono.

Las políticas a nivel nacional están además cada vez más condicionadas por los debates mundiales relativos a los impuestos que gravan la actividad empresarial. Este hecho subraya la importancia de introducir nuevos



principios en el ámbito de la tributación internacional, con el fin de garantizar una competencia leal, evitar una carrera hacia mínimos en los impuestos a las empresas -especialmente en el contexto de economías digitales con nuevas formas de generar valor- y detectar y disuadir la evasión fiscal.

Mirar más allá de los promedios

Los expertos de la ONU afirman que, con frecuencia, los promedios* ocultan lo que realmente sucede en una sociedad; pese a que pueden resultar útiles para explicar el panorama general, se necesita información mucho más detallada para diseñar políticas capaces de combatir eficazmente la desigualdad. Solo así será posible luchar contra las múltiples dimensiones de la pobreza, dar respuesta a las necesidades de aquellos más postergados - como, por ejemplo, las personas con discapacidad-, y promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Por ejemplo:

Igualdad de género: si se mantienen las tendencias actuales, se tardarán 202 años en cerrar la brecha de género solamente en el terreno de las oportunidades económicas.

Si bien ya se está rompiendo el silencio en torno a cuestiones como el abuso, no ocurre lo mismo con el *'techo de cristal'* que impide el progreso de las mujeres. ésta sigue siendo una realidad en la que subyace una historia de sesgos y de retrocesos. A modo de ejemplo, en un momento en que se supone que debería estar acelerándose el avance para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030, el Índice de Desigualdad de Género 2019 muestra que, en realidad, el avance se están ralentizando en esta materia. Además, de acuerdo con el nuevo *"índice de normas sociales"* presentado en este Informe, en la mitad de



los países analizados ha aumentado el sesgo de género en los últimos años. En torno al 50% de la población de 77 países declaró que pensaba que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, al tiempo que más del 40% creía que los hombres también son mejores ejecutivos empresariales. Por ello, las políticas que abordan los sesgos, las normas sociales y las estructuras de poder subyacentes resultan absolutamente cruciales. Por ejemplo, según el Informe, las políticas dirigidas a buscar el equilibrio entre la distribución de los cuidados, sobre todo de los niños, son esenciales, dado que buena parte de la diferencia de ingreso entre hombres y mujeres a lo largo de su ciclo vital surge antes de los 40 años.

Planificar más allá del presente

Con la mirada puesta más allá del presente, el informe se pregunta cómo cambiará la desigualdad en el futuro. En particular, examina dos transformaciones radicales que condicionarán la vida de aquí al siglo XXII:

La crisis climática: Como demuestran las numerosas protestas a escala mundial, políticas vitales para afrontar la crisis climática, como el establecimiento de un precio para el carbono, pueden llegar a gestionarse de forma incorrecta. Esto puede provocar un aumento de las desigualdades reales y percibidas de las personas más desfavorecidas, que destinan una proporción mayor de sus ingresos que sus vecinos más ricos a adquirir bienes y servicios de alto consumo energético. Los investigadores del PNUD argumentan que, si los ingresos procedentes de los precios del carbono se *"reciclan"* en beneficio de los contribuyentes como parte de un paquete de políticas sociales más amplio,



dichas políticas podrían reducir la desigualdad en lugar de incrementarla.

Transformación tecnológica: La tecnología, incluso en forma de energías renovables y eficiencia energética, financiación digital y soluciones sanitarias digitales, permite entrever que la desigualdad puede romper con el pasado si las oportunidades se aprovechan con rapidez y se distribuyen de forma amplia.

Existen precedentes históricos de revoluciones tecnológicas que han provocado desigualdades profundas y persistentes. La Revolución Industrial no solo generó una gran divergencia entre los países industrializados y los que dependían de las materias primas, sino que además dio lugar a unos modelos de producción que han culminado en la crisis climática.

La transformación que se está produciendo va más allá del cambio climático, pero podemos evitar que se produzca una *"nueva gran divergencia"* impulsada por la inteligencia artificial y las tecnologías digitales.

El Informe sobre Desarrollo Humano recomienda adoptar políticas de protección social que garanticen, por ejemplo, una compensación justa para el trabajo colaborativo en línea, inversiones en aprendizaje permanente para ayudar a los trabajadores a adaptarse o cambiar a nuevas ocupaciones, así como un consenso a escala internacional sobre cómo deben tributar las actividades digitales.

Todos estos elementos deben contribuir a crear una economía digital segura y estable que se convierta en



motor de convergencia, no de divergencia, en el desarrollo humano.

"Reconocer el verdadero rostro de la desigualdad es el primer paso. Lo que suceda a continuación dependerá de las decisiones que tome cada líder", concluye el administrador del PNUD.

Los más desarrollados y los menos El índice de desarrollo humano, que combina ingresos, esperanza de vida y educación, lo encabeza Noruega, Suiza e Irlanda, y lo cierran Chad, República

Centroafricana, Níger.

En América Latina, los países mejor ubicados son Chile, en el puesto 42, Argentina (48), Barbados (56), Uruguay (57) y Bahamas (60).

*Nota: Es el caso, por ejemplo, de la renta per capita, ya que para obtenerla se tienen en cuenta los ingresos del Producto Interior Bruto de un país y se divide entre todos sus habitantes, enmascarando las grandes diferencias que existen entre ricos y pobres.

EL DESPLOME DE LAS MATERIAS PRIMAS, ES EL ORIGEN DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES EN SUDAMÉRICA

La caída de los precios del crudo, el gas y los minerales han lastrado los presupuestos de los países y activado recortes públicos generando grandes bolsas de pobreza entre la población.

La dependencia energética de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil o Venezuela es tan elevada que sus cuentas públicas no se sostienen sin los ingresos extraídos del petróleo, el gas o diversos tipos de minerales.

Después de dos años con las cotizaciones a la baja, los presupuestos se han ajustado y con ello se han reactivado las protestas sociales. Ya ocurrió en 2000 y en 2014, con mayor o menor grado de intensidad callejera. Ahora, los expertos reconocen que el retroceso experimentado en los precios de esas *"commodities"* impactan directamente en sociedades muy dependientes de sus recursos naturales. *"La desaceleración económica mundial también se nota en América Latina"*, explica Joaquín Robles, de XTB. *"Hay una menor demanda*

mundial de materias primas", señala este analista, por la ralentización de las economías desarrolladas y emergentes. En este contexto también ha influido la guerra arancelaria, que se ha dejado notar en el dinamismo del Cono Sur.

Joaquín Robles también explica que "las expectativas a medio plazo no son nada alentadoras" para las economías latinoamericanas. "parte de sus industrias se han visto afectadas por la disminución de los precios", como es el caso del crudo. "Todos estos países tienen unos presupuestos muy condicionados a estos activos y cuando caen, los ingresos se resienten mucho", afirma. Y recuerda que algunas de esas economías "han emitido deuda pública" por primera vez en su historia. Los últimos datos difundidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe destacan que Argentina es el país de la región con el mayor por-



centaje de deuda externa en relación con su Producto Interior Bruto. El importe que debe a sus acreedores externos representaba alrededor del 42% del PIB en 2018. Otros países como El Salvador, Ecuador, Panamá y Uruguay deben más del 30% mientras que Brasil, México y Chile, este porcentaje era inferior al 10%.

EN ARGENTINA SE ESTÁ PRODUCIENDO AUMENTO DEL HAMBRE PROPIO DE SITUACIONES DE GUERRA

Argentina es un país capaz de producir comida suficiente para alimentar a más de 400 millones de personas, casi 10 veces su población. Y, sin embargo, las últimas proyecciones de la FAO indican que, si no se actúa de forma urgente, más de siete millones de argentinos (un 17% de la población) se quedarán sin comida hasta el punto de que muchos de ellos estarán uno o varios días sin comer, expuestos al hambre.

Y si a aquellos en riesgo de no comer lo suficiente para llevar una vida plena sumamos a quienes no tienen ninguna seguridad de si les llegará para obtener comida suficiente y se verán obligados a reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumen, estamos hablando del 45% de la población, según los datos de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES). La inflación desbocada, el encarecimiento de los precios de los alimentos y unos ingresos familiares cada vez más bajos son las principales causas de esta situación, que afecta a casi la mitad de los argentinos, algo inaceptable para



un país que exporta alimentos a todo el mundo. A este panorama se añade un dato aún más alarmante: según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en 2018 un 13% de los niños argentinos pasó hambre y un 29,3% empeoró la calidad y la cantidad de su dieta. La situación alimentaria de la infancia ha empeorado un 30% respecto a 2015. Nunca se ha visto un deterioro tan rápido en un país

que no esté sufriendo una guerra, un conflicto armado o una gran convulsión social. Son cifras propias de situaciones de inestabilidad social y política extrema y hay que abordarlas con medidas contundentes. No olvidemos que los niños son el futuro de una nación y, si no obtienen una alimentación adecuada en sus etapas de crecimiento, estamos comprometiendo su desarrollo y el del país entero.

Para solucionar esto existen numerosas medidas de probado éxito, y ponerlas en marcha es cuestión de voluntad política. Es urgente mejorar las condiciones de vida y trabajar por el desarrollo para que todos, también los pequeños productores rurales, puedan tener una vida digna. Eso podría incluir un plan de emergencia que comience con programas de transferencia de ingresos, el fortalecimiento de la alimentación escolar, la ampliación de los comedores populares, programas de distribución de alimentos básicos -sobre todo en ciudades pequeñas y medianas y en zonas rurales-, y una redistribución de las sobras alimentarias -como las que generan los supermercados y otras superficies- a través de bancos de alimentos.

Si queremos reactivar la actividad económica, también es fundamental poner en marcha programas de microcréditos para que los pequeños y medianos comerciantes de las zonas populares puedan comprar alimentos producidos por agricultores familiares y así generar un círculo virtuoso.

También hay que repensar un modelo agroalimentario que hasta ahora se ha centrado en la exportación de productos básicos, y priorizar en su lugar el abastecimiento del mercado interno a través de circuitos de producción y consumo cortos y locales, que pongan los alimentos sanos y saludables como las legumbres, las frutas, los huevos o las verduras al alcance de



todos.

Solo así podremos hacer frente a la otra cara de la moneda: los crecientes niveles de obesidad que ya afectan al 30% de los argentinos. Para ello, es fundamental poner más énfasis en la educación nutricional y más atención a la forma de comer. Una alimentación que, hoy en día, está terriblemente influenciada por una publicidad agresiva de productos poco saludables, a menudo dirigida a los niños. Es importante redoblar esfuerzos contra los alimentos ultraprocesados ricos en sal, azúcar y grasas, y muy calóricos pero poco nutritivos. El hambre es hoy la mayor vergüenza de Argentina, y además es un crimen. Dado que erradicar el hambre y de la pobreza y mejorar la nutrición son cuestiones sociales centrales y de enorme envergadura que requieren acción coordinada a todos los niveles (Gobierno, sector privado y académico, ONG, órdenes religiosas, gremios, sindicatos y sociedad civil), es necesario el apoyo decidido de todos los líderes políticos por situar estas cuestiones como prioridades en sus gobiernos.



UNA DE CADA SEIS FAMILIAS ESPAÑOLAS CAYÓ EN LA POBREZA DURANTE LA CRISIS Y NO SE HA RECUPERADO

La clase media se ha polarizado y tiene actualmente diez puntos menos de la renta nacional en comparación con la que ostentaba en el año 2010.

La desigualdad entre pobres y ricos es cada vez más evidente, una polarización que se agudiza en España y castiga principalmente a mujeres y niñas, dos de los colectivos más vulnerables. Los ricos siguen siendo ricos y los pobres tienen muy difícil salir de esa pobreza en España a lo largo de su vida, más tras la crisis. Éstas son dos de las principales conclusiones que se extraen del informe publicado el domingo 20 de enero por Oxfam Intermón bajo el título "Desigualdad 1 - Igualdad de Oportunidades 0. La inmovilidad social y la condena de la pobreza", que se presentó en el Foro Económico Mundial en Davos. Y es que en España la desigualdad se disparó a raíz de la última crisis, hasta tal punto que no se ha conseguido revertir pese a la recuperación (cuando se encadenan ya cuatro años consecutivos de fuerte crecimiento del PIB, con alzas cercanas o superiores al 3%, algo que nos sitúa a la cabeza de Europa). Pero esto ha tenido un precio alto: el adelgazamiento de las clases medias. De hecho, se estima que uno de cada seis hogares de clase media cayó en la pobreza durante la crisis y no se ha recuperado, pese a la actual situación de crecimiento, según resalta el mencionado informe. De esta forma, la clase media española tiene hoy 10 puntos menos de la renta nacional en comparación con la que ostentaba en el año 2000. Los datos no dan lugar a la esperanza: en España la



pobreza aumentó durante la crisis cuatro veces más de lo que se ha reducido con la recuperación, algo que es fiel reflejo de la grave desigualdad que vive el planeta. La creciente brecha entre las personas ricas y pobres está poniendo en peligro la lucha contra la pobreza y castiga sobre todo a mujeres y niñas. En el mundo, la fortuna de los multimillonarios -de los que 9 de cada 10 son hombres- aumentó en un 12% en el último año, a razón de 2.500 millones de dólares diarios. Sin embargo, la riqueza de la mitad más pobre de la población -franja en la que se sitúan 3.800 millones de personas- se redujo un 11%, según detalla el informe con el análisis internacional "Bienestar público o beneficio privado?", que publicó también el domingo 20 de enero Oxfam.

Desde el inicio de la recuperación, el crecimiento económico ha beneficiado desproporcionadamente a las rentas altas. Así, el año pasado aumentaron en 16.500 los hogares en los que no entró ningún tipo de ingreso, alcanzando los 617.000. Mientras los ultramillonarios -personas cuyos activos netos equivalen o superan los 40 millones de euros- aumentaron en un 4%, llegando a la cifra récord de 1.690 personas.

"Esta alarmante crisis global de desigualdad es el reflejo del fracaso del sistema económico actual", advierte el director general de Oxfam Intermón, José María Vera, quien alerta de que "los Gobiernos deben actuar inmediatamente para lograr cambios reales y un futuro digno para todas las personas y no solo para una minoría privilegiada".

Cuatro generaciones

No se trata de un hecho baladí. Cuanto más desigual es una sociedad, más condicionado estará el futuro de



niños y niñas por el nivel de ingresos del hogar en el que nacieron y menos igualdad de oportunidades habrá entre unos y otros. Si no se reducen los actuales niveles de inequidad, la OCDE estima que en España se necesitarán 120 años, cuatro generaciones, para que una familia del 10% más pobre alcance los ingresos medios. En esta línea, el informe detalla cómo la pobreza y la riqueza en España se heredan. Si se nace en una familia de ingresos altos se ganará un 40% más que si se crece en un hogar con ingresos bajos. Además, el sistema educativo es ahora más inequitativo que antes de la crisis. De todas las personas que abandonan prematuramente sus estudios, una de cada dos pertenece al 20% de hogares con menos ingresos. Hasta tal punto afecta esta desigualdad -señala el director de esta ONG- que, por ejemplo, si vives en un barrio rico de Barcelona tu esperanza de vida será de 11 años más que si tu casa está en un barrio pobre. En Madrid, esta diferencia alcanzaría los 7 años. "En España y en el mundo el sistema no solo no es capaz de reducir la pobreza, sino que ahora es más aguda", resalta Vera. El estudio hace hincapié además en que en España tampoco hay un sistema fiscal progresivo, de forma que



se recauda poco y mal para poder contar con un sistema de protección social eficaz contra la pobreza. La presión fiscal sobre el PIB es del 34,5%, 6,9 puntos inferior a la media de la zona euro, según señala a esto se le añade otros dos enemigos para la desigualdad: la precariedad laboral y un sistema de protección "ineficaz, que no garantizan una vida digna a las personas más vulnerables" Así, el 13% de los trabajadores vive por debajo del umbral de la pobreza.

CÁRITAS DETECTA UN MILLÓN MÁS DE ESPAÑOLES EN EXCLUSIÓN SOCIAL QUE HACE UNA DÉCADA

Cáritas denuncia que hay seis millones de personas integradas pero precarias que se encuentran en el límite de la exclusión y que se suman a los 8,6 millones de individuos ya excluidos del sistema. Calcula que hay cerca de cuatro millones en situación severa y alerta de que el 37% de los más pobres carece de vivienda y empleo.



ingresos precarios. Están integrados pero al límite de la exclusión. Si hay un gasto imprevisto, se pasan al otro lado, ese en el que nadie quiere estar. Hay seis millones de personas en España en estas circunstancias (el 13% de la población), que se suman a los 8,6 millones de individuos ya excluidos (el 18,4%

del total). Antes el empleo lo condicionaba todo, pero ahora la vivienda es el factor que provoca mayor exclusión social, por encima del paro. Un ciudadano con nómina puede cambiar de estatus de un día para otro con una simple subida del alquiler. Más de dos millones de personas viven en España con el miedo a perder su casa.

La pobreza evoluciona y adopta formas distintas, tal y como refleja el VIII Informe sobre Exclusión y

Desarrollo Social en España, elaborado por la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) y que presentó el miércoles 12 de junio Cáritas Española. El trabajo son 598 páginas donde se relata cómo nos ha ido desde antes de la crisis (2007) pasando por su punto de inflexión (2013) y llegando hasta el momento presente (2018).

El vaso medio lleno lo pone que se han recuperado los niveles previos a la crisis en el caso de la integración plena, alcanzando cifras superiores al 48% e igualando la situación de 2007. La mitad de la población disfruta de integración plena y no se encuentra afectada por ningún rasgo de vulnerabilidad. Esta integración plena ha aumentado en el último lustro del 34% al 48%, lo que significa una mejora del 42%.

El vaso medio vacío tiene que ver con los que menos poseen, y ahí no hemos avanzado: 8,6 millones de personas se encuentran en el espacio de la exclusión social; son el 18,4% de la población. Suponen 1,2 millones más que en 2007, cuando el porcentaje era del 16%, aunque también es verdad que ha bajado en los últimos años, pues en 2013 se registró un pico que llegó al 25%.

Dentro de esa exclusión hay un tramo más concreto de exclusión severa, que afecta a 4,1 millones de personas (el 8,8%). Ahí se ha producido un aumento del 40% respecto a hace una década. Los pobres más pobres son más pobres y más numerosos que antes. De esos 4,1 millones, hay 1,8 en una situación límite, "casi sin posibilidad de retorno", el triple que en 2007. Cáritas detecta que casi el 9% de la población española ha dejado de comprar medicinas por problemas económicos, mientras que el 15% no va al dentista porque no

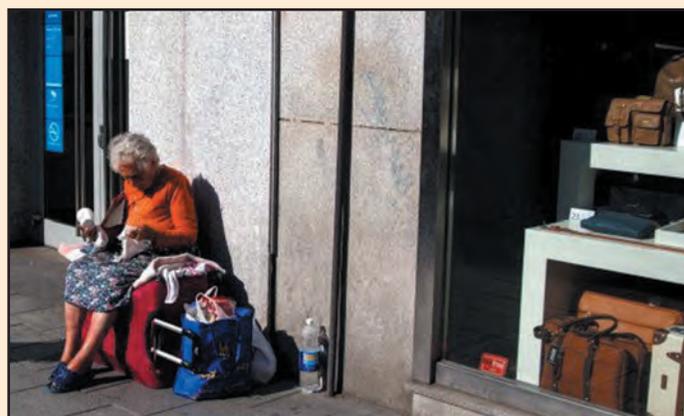


puede permitírselo.

"Las condiciones de vida hoy son peores que las de hace 10 años, la situación mejora respecto a 2013, pero no alcanza los estándares de 2007", alertó Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa, advirtiendo de las paradojas de estos tiempos en los que "puedes esforzarte y dejarte la piel, pero, aún así, no sales adelante". Por ejemplo, el 14% de los trabajadores está en exclusión social a pesar de tener un empleo. Y otro dato más: una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. En el caso de las mujeres inmigrantes, esa 1,5 horas extra se convierten en dos horas.

"Podría hablarse de una recuperación a dos velocidades, que provoca un mayor distanciamiento entre los que viven una participación social integrada y quienes transitan por los espacios más alejados de la exclusión", advierte el informe, que alerta que, dentro del grupo de los integrados, hay cada vez más personas en el límite: esos seis millones "en una posición de gran debilidad, viviendo tan al día que un ligero empeoramiento de la situación socioeconómica haría que sus posibilidades de transitar hacia situaciones de exclusión sean muy elevadas".

Estas personas, a las que Cáritas llama "población insegura", son carne del populismo y del malestar. "Expresan su descontento de forma airada", advierte Guillermo Fernández, coordinador del trabajo. Sienten que los políticos les dan la espalda y se niegan a darles respaldo. "Les indigna que la sociedad segura se desentienda". Hay barrios, muy pobres, donde el 75% de sus habitantes no vota. Forman parte del denominado "preariado político". "Muestran un espacio de integración con bases más débiles y con una exclusión



severa que se enquista en la estructura social".

Esas bases más débiles se reflejan, sobre todo, en un mapa autonómico desigual. Canarias es la comunidad con mayor porcentaje de población en exclusión social (el 29%), seguida de Extremadura (el 23%) y Baleares (el 21,5%). Ya no es la clásica diferencia entre el norte y el sur; ahora se incorpora un eje longitudinal oeste-este que ya se observó en 2013. Son distintas formas de salir de la crisis, en donde Castilla-La Mancha, "una comunidad autónoma tradicionalmente alineada en el eje sur, se ubica ahora más cerca de una situación intermedia".

¿Por qué Baleares obtiene tan mal resultados? Buena parte de la culpa la tiene el elevado precio de la vivienda. El informe constata que "la vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social". "Una vivienda digna se está convirtiendo en un derecho humano inaccesible", advierte. Y dice también que un parque de alquiler social "casi inexistente", unido a la "falta casi total de ayudas directas al pago del alquiler" han provocado que el esfuerzo económico que deben soportar los hogares españoles para pagar esta renta haya crecido de forma sostenida en la última década hasta situarse entre los más elevados de Europa. En dos años el alquiler ha subido un 30% y el 70% de los desahucios ya son por motivo del impago de esta renta.

"Disponer de una vivienda en condiciones y desarrollar un trabajo digno y remunerado son los dos pilares básicos para sentirnos protagonistas en la sociedad. Los déficits en salud, educación y la soledad son otras tantas dimensiones que nos abocan a quedar aparcados de la vida social. Ocurre que el modo de salir de la Gran Recesión ha cuajado en vivienda inaccesible y empleos insuficientes. Los ingresos son escasos y el trabajo precario. Frente a ello, el precio de una vivienda y el coste de los alquileres son demasiado altos. Los jóvenes no



se pueden emancipar y los mayores no se pueden calentar. La vivienda aparece para los jóvenes como una aspiración inaccesible desde el empleo y para los mayores como una carga difícil de mantener", reflexiona Antonio Izquierdo, catedrático de Sociología de la Universidad de La Coruña y uno de los autores del informe.

Explica, con números, que el 60% de la población vulnerable se ve afectada por la exclusión residencial, mientras que hay un 56% excluida por la carencia de empleo. "Y más cuánto mayor es su nivel de carencias vitales, de modo que los ciudadanos que viven en situación de exclusión severa aún notan más la inaccesibilidad de la vivienda (69%) que la del empleo (61%)", añade.

Las personas que acceden al alquiler son, además, las más vulnerables. Un tercio de los hogares de los dos quintiles más bajos de ingresos y más del 40% de los que sufren exclusión viven en alquiler. Uno de cada 10 hogares es de extrema dificultad para afrontar el coste de la vivienda por encontrarse con una carga excesiva en los cargos de la vivienda.

Además, en España, a diferencia de otros países, se mezcla el problema de la vivienda con la baja calidad del empleo, "un cóctel mortal", según los expertos: El 37% de los excluidos por el empleo lo es también por la vivienda.

Y todo ello, en un contexto que tiende al "individualismo" en el que, según denuncia Cáritas, cada vez las personas tienen menos vínculos afectivos y "se está perdiendo el sentimiento de comunidad". Lo llaman "la fatiga de la compasión": el 51,3% de los individuos está menos dispuesto a ayudar a los demás que hace 10 años. Ha caído el índice de solidaridad y también la disponibilidad a pagar más impuestos a cambio de mejorar la situación de los que peor lo pasan.



1.557 FAMILIAS HAN SIDO ATENDIDAS POR POBREZA ENERGÉTICA EN EUSKADI

Cruz Roja alerta de los riesgos de los hogares que sufren otros problemas como la exclusión social.

Cruz Roja Euskadi atendió en 2018 a un total de 1.557 familias beneficiarias de ayudas en materia de pobreza energética. En Bizkaia se ha atendido a 922 familias, en Gipuzkoa a 420 y en Álava a 215. Estos datos se desprenden del Boletín de Cruz Roja sobre Vulnerabilidad Social, denominado 'La Vulnerabilidad asociada al ámbito de la vivienda y pobreza energética en la población atendida por Cruz Roja'.

El estudio analiza de forma pormenorizada las problemáticas relacionadas con el hábitat, la vivienda y la pobreza energética que afectan a las personas atendidas a nivel estatal por la Institución en ámbitos urbanos y rurales, así como su situación socioeconómica, de salud y su nivel de riesgo de pobreza y exclusión social.

En el caso de Euskadi, Cruz Roja ha ofrecido cobertura de las necesidades básicas (entrega de alimentos, vestuario, material de higiene, y pago de suministros), apoyo a personas sin hogar y a la escolarización con equipamiento y material escolar.

Asimismo, ha trabajado mejorando la eficiencia energética de los hogares trasladando a las familias información sobre medidas de ahorro energético y la ins-



talación de kits de ahorro energético en los domicilios. Cruz Roja Euskadi tiene actualmente firmados convenios con Gobierno Vasco y con las principales empresas suministradoras de energía para agilizar y facilitar la forma de pago a las personas usuarias de servicios sociales por deudas generadas por motivo de suministro de electricidad o gas.

Gracias a ello, ha atendido en 2018 a un total de 1.557 familias que han sido beneficiarias de la ayuda en materia de pobreza energética en Euskadi. Por territorios, Bizkaia es quien más personas aporta, con 922 familias beneficiarias, seguida de Gipuzkoa, con 420, mientras que en Álava se ha atendido a 215 familias.

MÁS DE 1,3 MILLONES DE HOGARES SIGUEN EN SITUACIÓN DE POBREZA ENERGÉTICA

El 7,4% de los hogares españoles (el 4,3% en Euskadi) se encuentra en situación de pobreza energética, es decir, familias cuyo gasto en facturas de luz o gas es elevado para su bajo nivel de ingresos, lo que se traduce en aproximadamente 1,3 millones de hogares.

A pesar de estos datos referidos al cierre de 2017, el índice de pobreza energética se ha reducido en los últimos años, tal y como revela un informe de la Fundación Naturgy. En el año 2013, en el peor momento de la crisis, ese problema afectaba a un 9% de los hogares.



CRECE LA POBREZA EN EUSKADI Y ALCANZA A 131.000 VASCOS

Aumentan un 6,9% desde 2016 y un 46% en la última década, según la encuesta del Gobierno vasco.

Un total de 130.965 vascos viven en situación de pobreza real, un 6,9 % más que en 2016 y un 46 % por encima de los que sufrían esta situación en 2008, mientras que la ausencia de bienestar afecta a 270.294 ciudadanos de Euskadi, un 17,3 % más que en 2016 y un 53,9 % más que hace diez años.

Estos datos se recogen en las estadísticas de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales correspondiente a 2018, elaboradas por el Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales, que se hicieron públicas el viernes 12 de julio en una comparecencia de prensa de la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena.

En las tablas se recoge que las 130.965 personas en situación de pobreza real suponen el 6,1 % de la población y las que tienen ausencia de bienestar el 12,5 %. El aumento de personas pobres con respecto a 2016 es del 6,9 %, incremento que es especialmente significativo si se analiza la evolución en la última década (2008-2018), en la que el aumento es del 46 %.

En el caso de los ciudadanos que padecen ausencia de bienestar, el número ha crecido en un 17,3 % desde 2016 y en un 62,1 % desde 2008.

A estos datos hay que agregar que 172.307 personas



(8 % de la población) viven en riesgo de pobreza, un 14 % más que en 2016 y un 41,4 % más que en 2008. Si se habla de riesgo de ausencia de bienestar, lo padece el 22,4 % (484.571), con un aumento del 22,9 % en dos años y del 37,4 % en la última década.

Por su parte, aumentan en un 3,8 % desde 2016 y en un 83,7 % desde 2008 las personas que aseguran que no cubren los gastos básicos (121.659) y en un 4,1 % y un 122,5 %, respectivamente, las que confiesan tener impagos o retrasos de pagos en alquileres, hipotecas y recibos. El embargo de bienes afecta a 19.966 personas (16 % más que en 2016 y 180 % más que en 2008).

Por contra, se rebaja de manera importante la población con problemas graves (46.149) o muy graves (39.111) de alimentación, que disminuye en un 40,8 % y en un 41,2 % respectivamente. No obstante, 25.674 personas viven en hogares en los que se ha sentido hambre, un 30 % menos desde 2016, pero un 20,7 % más que en 2008.

La imposibilidad de afrontar gastos imprevistos afecta al 23,1 % de la población (+27,6 % desde 2016) y el 20,1 % no puede ir de vacaciones más de una semana por problemas económicos (+6,3 %). Por su parte, el riesgo de endeudamiento afecta en 2018 a un 6,2 % menos de personas que dos años antes, pero el incremento es del 62,4 % si se compara con 2008.

La mayoría de las personas que sufren pobreza real (44,7 %) son parejas con hijos, el 29,4 % son familias monoparentales, el



19 % personas solas, y el 6,8 % parejas sin hijos. Los porcentajes son similares si se alude a la ausencia de bienestar.

En el 50,2 % de los casos de pobreza real están afectados menores de 14 años, porcentaje que baja al 46 % si se trata de ausencia de bienestar. Por sexos, la pobreza afecta prácticamente por igual a hombres y mujeres y en cuanto a la nacionalidad, mayoritariamente son españoles (68,7 %). El 15,4 % carece de estudios y 12,9 % afirma tener formación cualificada.

Kortajarena advirtió que "todos los indicadores vuelven a situaciones anteriores al año 2000" y reflejan "de manera cruda" la precariedad laboral. Reconoció que los datos "no son una sorpresa" porque "reafirman" que la mejora económica "no llega a los ciudadanos" e insistió en la necesidad de



reformar el sistema vasco de protección social "ampliando derechos y no recortándolos".

LA MITAD DE LOS HOGARES MONOPARENTALES EN ESPAÑA ESTÁ EN RIESGO DE POBREZA O DE EXCLUSIÓN

Ocho de cada diez familias monoparentales en España están encabezadas por mujeres y el 43% no tiene empleo. Un 75% reconoce que llega con dificultad a final de mes.

Casi el 75% de los hogares monoparentales en España llega a fin de mes con dificultad y uno de cada dos está en riesgo de pobreza y exclusión, casi el doble del valor para el total de los hogares del país (26,1%), según alertó miércoles 18 de septiembre la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) en su último estudio, en el que analiza la Encuesta de Condiciones de Vida y el indicador europeo Arope. El informe Género, Monoparentalidad y Rentas Mínimas pretende realizar una radiografía de las familias monoparentales en España al analizar los datos recopilados. Además, encuestaron a 34 mujeres que encabezan hogares monoparentales y que perciben algún tipo de renta mínima. "No tener dinero suficiente me genera estrés, depresión, insomnio de pensar qué dar de comer a los hijos. Sentimiento de culpabilidad por regañar a los hijos cuando se les rompe la ropa, por no poder comprarles nueva o no saber de dónde sacar ropa", relata una de las mujeres entrevistadas.

En 2018, había un total de 1.878.000 hogares monoparentales en España, lo que supone el 10,3% del total de hogar, y la mayoría de ellos (1,5 millones, es decir



el 81,9%) están encabezados por mujeres. El 43% de las mujeres con hogares monoparentales están desempleadas, mientras que un 17% tienen algún tipo de ocupación, pero sin contrato. Asimismo, más de la mitad (el 50,8%) de estos hogares no puede irse de vacaciones al menos una semana al año y el 53,7% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos de 650 euros o más. Un 7,4% revela que no puede incorporar proteínas a su dieta cada dos días; el 18% tuvo retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda principal y un 16,4% no puede mantener su casa a temperatura adecuada.

Tal y como pone de manifiesto el informe, la mitad de los hogares monoparentales se encuentra en riesgo de

pobreza y exclusión (Arope) casi el doble del valor para el total de los hogares de España (26,1%), y sufren una tasa de pobreza infantil 15 veces superior a la media.

"A mí me dijo una trabajadora social que con 400 euros se puede vivir. ¿Quién puede vivir? ¡Por favor! Mentira", relata otra de las encuestadas. Muchas de ellas coinciden señalar que la renta mínima no les permite tener un nivel de vida digno, en relación con los costes que supone tener que sacar adelante a su familia. "Es insuficiente para la vida diaria, no se corresponde con los gastos reales. Es un parche para comer y no acabar en la calle sin más", remarca otra de las encuestadas.

Tras analizar la situación de estas familias, EAPN pide una legislación específica sobre los hogares monoparentales con el fin de garantizar derechos, eliminar la



discrecionalidad y las prácticas discriminatorias. Asimismo, reclama una renta mínima de carácter estatal, en la línea del Ingreso Mínimo Vital, que permita a este tipo de hogares salir del círculo de la pobreza y la exclusión social.

SALARIOS BAJOS Y OCUPACIONES PARCIALES HUNDEN EN LA POBREZA AL 13% DE LOS TRABAJADORES

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de empleados en niveles de pobreza, según la OIT.

Además de estar a la cabeza de Europa en empleo y temporalidad, España tiene otro dudoso honor: se sitúa como el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores pobres. Así lo advirtió el lunes 7 de octubre el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto, durante una rueda de prensa celebrada con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo Decente. Sólo Rumania, con un 24% de sus trabajadores, y Grecia, con un 17%, lo superan y supone 3,5 puntos más que la media Europea, que se sitúa en el 9,5%. Esto significa que un 13% de los ocupados en España tienen unos ingresos que están un 60% por debajo de la media.

La OIT responsabiliza de este elevado nivel de pobreza entre los trabajadores a los bajos salarios que se pagan en España y, en gran parte, al elevado porcentaje de ocupaciones a tiempo parcial, que se han incrementado en los últimos años y afectan ya a más de tres millones de empleados, de los cuales 2,1 millones son mujeres. Pero lo más preocupante es que la inmensa mayoría de esas ocupaciones parcia-



les no son voluntarias, lo que significa que esas personas desearían trabajar más horas pero más del 60% no pueden hacerlo, lo que duplica la media europea, que se sitúa en el 30%. Si a esto se le suma la elevada temporalidad, que afecta a más de uno de cada cuatro trabajadores, el resultado es que España se sitúa a la cabeza en precariedad.

Ajuicio de Nieto, la crisis económica hizo mucho daño a nivel mundial, pero tuvo un peor efecto en los países del sur de Europa, como Portugal, Italia, Grecia y España. En este sentido, explicó que se ha conseguido que funcionen los datos macroeconómicos, pero la "recuperación social no ha ido al mismo ritmo que la

recuperación económica, que es la asignatura pendiente de Europa", por lo que abogó por mejorar la calidad del empleo, remodelar el modelo productivo de España y avanzar hacia la transición digital y energética.

"España tiene la oportunidad de remodelar su modelo productivo en términos positivos", aseguró Nieto, que apostó por convocar una mesa de diálogo social y presentar un paquete de medidas para avanzar hacia la consolidación de un trabajo decente. Para ello, abogó por evaluar cómo ha ido el plan director por un trabajo digno lanzado por el Gobierno hace más de un año, a fin de profundizar en lo que no ha ido bien y poner en marcha lo que aún no se ha implementado.



Además, desde la OIT advierten de los "nuevos retos y oportunidades" que se van a generar en torno a las actividades relacionadas con los ciudadanos derivados del envejecimiento de la población. Sobre este aspecto, indican que uno de los temas a resolver es el hecho de que dos terceras partes de los trabajos no remunerados relacionados con los cuidados los realizan las mujeres, si bien ellas también son mayoría en los que sí están remunerados.

Asimismo, la OIT viene denunciando desde hace tiempo que más de la mitad de los trabajadores a nivel mundial no cuentan con ningún tipo de protección social.

LOS DATOS QUE MIDEN LA POBREZA EN EUSKADI EMPEORAN PESE AL CLIMA DE RECUPERACIÓN

La población afectada por carencias materiales y rentas bajas ha crecido, según revela la última 'Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales'.

Situaciones tan comunes en los últimos años como la pérdida de empleo, la reducción involuntaria de horas de trabajo y de salarios, la precariedad y los contratos de pequeña duración, la ausencia de un trabajo regulado o la carencia de prestaciones y ayudas sociales están contribuyendo a que las encuestas que miden el riesgo de pobreza, la ausencia de bienestar material, o las personas que tienen que vivir con rentas inferiores a la media ofrezcan unos datos contradictorios con la mejoría macroeconómica, el crecimiento del PIB o la recuperación del mercado laboral. La pobreza laboral de la que tanto se habla desde hace un tiempo es una de las causas que están detrás del incremento de la precariedad real y de las carencias materiales en Euskadi y que han sido detectadas y evaluadas por la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, unas tasas que en algunos casos han vuelto a niveles del año 2000 y en otros empeoran los datos de 2008.

Según la encuesta, en 2018 las situaciones de riesgo de pobreza afectaban al 8% de la población vasca, esto son 172.307 personas, mientras que el riesgo de



ausencia de bienestar subía al 22,4% (484.571 personas) desde el 18,4% (394.266 ciudadanos) de dos años antes. Tanto la tasa de riesgo de pobreza -o pobreza de mantenimiento-, como las que miden la ausencia de bienestar -la de riesgo y la de ausencia de bienestar real- han crecido en 2018 con respecto a la medición anterior -realizada en 2016-. También sube la pobreza real, que pasa del 5,7% en 2016 al 6,1% en 2018, que es la cifra más alta de los diez últimos años. En estos indicadores generales de precariedad solo baja la pobreza de acumulación, que pasa del 1,6% en 2016 al 0,9% el año pasado.

En cuanto a la medición de la pobreza en Euskadi, que se hace atendiendo a los niveles de renta, la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales

(EPDS) indica que en 2018 había 382.316 personas -el 17,7% de la población- con ingresos inferiores al 60% de la renta media de Euskadi y 109.735 de esas personas no llegaban al 40% de la mediana de ingresos. Estas cifras de personas en riesgo de pobreza relativa (por debajo del 60% de la media) y grave (por debajo del 40%) significan que las tasas más recientes son 1,3 y 0,2 puntos porcentuales superiores a las de 2016 -17,7% y 5,1% frente a 16,4% y 4,9%, respectivamente- y 2,9 y 2 puntos mayores que las tasas que había en 2008: 14,8% y 3,1%.

A pesar de este empeoramiento de tasas relativas y cifras, algunas situaciones concretas que viven las personas afectadas por el riesgo de pobreza y exclusión han cambiado entre la EPDS realizada en 2016 y la de 2018 y ahora las carencias económicas se traducen más en cuestiones como la dificultad de cubrir gastos básicos, no poder pagar la hipoteca o el alquiler, o la denominada pobreza energética. Por el contrario, los problemas graves de alimentación y la necesidad de las familias de reducir gastos se han atenuado. En este sentido, el porcentaje de población vasca que no puede realizar una comida proteínica cada dos días como mínimo, se sitúa en el 2,3% (50.529 personas), por debajo del 3,4% (72.556 personas) de 2016. Los problemas graves de alimentación han bajado del 3,6% al 2,1% en los dos últimos años, y los muy graves, del 3,1% al 1,8%, pero aún así afectan a más de 39.000 personas.

Las dificultades económicas que se traducen en la imposibilidad de comer proteínas al menos cada dos días afectan al 7,9% de los europeos (UE-28) y al 3,7% de los españoles, de forma que la tasa del 2,3% correspondiente a Euskadi la sitúa muy cerca de los países con mejores datos: Irlanda (1,7%), Suecia (1,8%), Países Bajos (1,9%), Dinamarca (2,1%) y Luxemburgo (2,2%). En



cuanto a la pobreza energética -medida en el porcentaje de personas que no pueden mantener su domicilio con la temperatura adecuada en invierno- el 9,3% de Euskadi, que son casi 200.000 personas afectadas, supera la media de la UE-28 del 7,8% y del Estado Español, 8%, y solo hay cuatro países con una tasa más alta que la de el País Vasco:

Grecia (25,7%), Chipre (22,9%), Portugal (20,4%) e Italia (15,2%).

Otro indicador de la privación material de las familias es su incapacidad para afrontar gastos imprevistos o para irse de vacaciones al menos una semana al año. En el primer caso, la cifra de residentes en Euskadi que no puede hacer frente a un desembolso imprevisto ha pasado de 390.700 (18,2%) en 2016 a 496.553 (23,1%) en 2018, casi 5 puntos porcentuales más. Y los que no pueden ir de vacaciones fuera de su domicilio han subido de 407.679 (19%) a 433.277 (20,1%). En la comparativa europea, las tasas vascas que miden la incapacidad de abordar gastos extraordinarios (23,1%) y la ausencia de vacaciones por problemas económicos (20,1%) son mejores que la media de la UE: 33,8% y 30%, respectivamente, y la media española: 36,6% y 34,3%.

El indicador AROPE, que es una forma homologada a nivel europeo de medir la precariedad, tampoco ofrece buenos resultados en la medición de 2018, y aunque solo sube una décima respecto a 2016 -pasa del

20,6% al 20,7%-, está 2,8 puntos por encima de la tasa de 2008 -que era del 17,9%- . La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social Arope se creó en 2010 para medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos y para hacerlo tiene en cuenta tres variables: la población en riesgo de pobreza, con carencia material, o con baja intensidad en el empleo. Según este indi-



ador, el año pasado había en el País Vasco casi 447.000 personas en alguna de esas situaciones: 161.632 estaban afectadas por baja intensidad laboral (1,1 puntos porcentuales menos que en 2016); 382.316 tenían bajos ingresos (1,3 puntos más que dos años antes), y 119.885 sufrían privación material.

La tasa Arope medida en Euskadi (20,7%) está por debajo de la europea (22,4% para la UE-28) y de la del Estado español (26,6%), pero a bastante distancia de los países mejor situados: Chequia (12,2%), Finlandia (15,7%) y Eslovaquia (16,3%).

la desigualdad. Según la última EPDS elaborada por el Gobierno Vasco, la desigualdad social también ha aumentado en la medición de 2018 respecto a 2016, truncando una trayectoria de descenso de las desigualdades económicas que se inició en el año 2000 y se prolongó hasta 2014. En la encuesta de ese



año se volvió a registrar una subida de la desigualdad, en la de 2016 el dato mejoró y el año pasado volvió a empeorar.

EUSKADI LOGRA ESTABILIZAR SUS NIVELES DE POBREZA

Un total de 70.348 personas viven como “pobres” o “muy pobres” en Euskadi pese a recibir distintas ayudas.

Un total de 70.348 personas viven en situación de pobreza en Euskadi a pesar de recibir ayudas del sistema de protección social, según los datos de la encuesta de pobreza realizada en 2018 por el Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. El Ejecutivo destacó que los datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) muestran una dinámica de “estabilización”. La tasa de pobreza grave de Euskadi, 5,1%, se mantuvo el pasado año por debajo de la media europea, 6%. La encuesta indica que un 60,8% de las personas en situación objetiva de pobreza real pertenecen a hogares que, en términos subjetivos, señalan “apañárselas para hacer frente a sus necesidades o incluso vivir con cierta comodidad”. Esta proporción, que se encuentra ahora en su nivel máximo, se situó en torno al 44% en los años de crisis económica y alcanzó el mínimo del 36,1% en 2014.

En el caso de las 70.348 personas que, a pesar de acceder al sistema vasco de protección social -Renta de Garantía de Ingresos, Prestación Complementaria



de Vivienda y Ayuda de Emergencia Social-, no consiguen salir de la pobreza, un 80% está vinculada a hogares que se alejan de la percepción de su situación en términos de máxima pobreza, esto es, definiéndose como pobres o muy pobres. Se trata del nivel más elevado desde el 78,7% de hace once años.

El estudio también destaca la mejora en la cobertura de las necesidades alimentarias entre los años 2016 y 2018. El porcentaje de población que vivió durante los últimos doce meses alguna de las problemáticas de inseguridad de alimentación (escala FSS) se redujo de un 7,5% en 2014 a un 3,9% en 2018. Por todo ello, este porcentaje se situó en el nivel más bajo desde el 3,5% del año 2000.

UNO DE CADA CINCO HOGARES MONOPARENTALES VASCOS SE ENCUENTRA EN RIESGO DE POBREZA

Los hogares monoparentales suponen el 10% del total de familias en Euskadi. Reclaman más conciliación y flexibilidad.

Los hogares monoparentales han crecido un 2% en España en el último año, hasta registrar 1.878.500, mientras que en Euskadi representan el 10,4% respecto al total de hogares vascos. En este caso, destaca que el 80% de estos hogares está encabezado por mujeres (75.200 frente a los 18.700 hogares encabezados por hombres).

La Fundación Adecco volvió a realizar, a principios del pasado mes de noviembre, el Informe de Monoparentalidad y Empleo para sensibilizar y profundizar la situación y los retos que viven más de 1,5 millones de hogares administrados por mujeres con responsabilidades no compartidas en España.

En este sentido la Fundación realizó una encuesta confidencial a 170 mujeres: las principales conclusiones de este estudio indican que actualmente se contabilizan 1.878.500 hogares formados por un adulto y



uno o más hijos (En Euskadi representan el 10,4% del total de hogares), el 21,8% de las familias monoparentales en Euskadi se encuentra en riesgo de exclusión o de pobreza, frente al 12,1% del resto de los hogares, y que la conciliación y apuesta por medidas de flexibilidad, sumado al compromiso real del Estado y una visualización social de esta realidad, mejoraría la situación de más de 1,5 millones de mujeres a cargo de una familia, entre otras.

MÁS DE 100.000 VASCOS VAN A TRABAJAR TODAS LAS MAÑANAS PERO SUS FAMILIAS ROZAN LA POBREZA

Cáritas alerta que la precariedad laboral se ha vuelto «algo estructural» y ha creado un colectivo de empleados sin futuro

Tener trabajo ya no equivale a poder vivir con cierta tranquilidad. El percibir un salario no garantiza el acceso a una vivienda digna, a una alimentación correcta... Los sueldos bajos, la falta de continuidad en el empleo o la imposibilidad de poder acceder a jornadas laborales más amplias se están convirtiendo en el lastre de miles de familias vascas que rozan el umbral de la pobreza. No tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas. La situación preocupa a Cáritas Euskadi, que así lo destaca en su último informe. de noviembre. Según recuerda la entidad benéfica, el



11,4% de los trabajadores de Euskadi rozan la pobreza. Son casi 110.000 personas de las 961.582 que en septiembre estaban afiliadas a la Seguridad Social en

la comunidad. Se trata de vascos que «a pesar de su esfuerzo personal y de salir a luchar todas las mañanas por sus hijos tie-nen que escuchar que no son suficientemente emprendedores», lamentan desde Cáritas. Son una nueva clase de empleados sin futuro. «El bajo nivel salarial de muchos empleos» les impide dejar de lado sus carencias, destaca Guillerm Fernández, coordinador del último informe sobre la exclusión y el desarrollo social. A esto se suma «la poca continuidad del trabajador que en-cadena contratos cortos o que se ve obligado a cambiar mucho de ocupación en poco tiempo». Y no se trata de una cuestión puntual. «La precariedad laboral se ha convertido ya en una forma de vida, en algo estructural de nuestra sociedad», inciden desde Cáritas. Y la situación puede ir a peor. Hay una bolsa muy notable de vascos casi tan numerosa como la anterior sin ahorros y sin capacidad de reacción para hacer frente a una posible pérdida de su puesto laboral. «Se trata de personas que se quedaron sin empleo durante la crisis económica y que desde entonces solo han logrado acceder a empleos de baja calidad. Viven al día y hacen una vida normal, pero no tienen recursos económicos, ni ellos ni sus familias, para resistir a una posible pérdida del trabajo por la desaceleración», alerta Fernández. Se trata de un grupo que representa el 16,4% de la sociedad vasca. Cáritas advierte que la proporción de hogares en Euskadi en esta situación es mayor a la del resto de España. En total, hay 334.000 personas en exclusión social en Euskadi. Y donde ya la situación es crítica es entre los que no trabajan, los que Cáritas denomina la «sociedad expulsada». Son 90.000 vascos cuya única preocupación es sobrevivir cada día, poder llevarse algo a la boca. La situación de este colectivo se ha agravado en los últimos años, constata la entidad benéfica autora del



informe, y «probablemente no le llegan los mecanismos de protección de la sociedad o estos sean insuficientes». Cáritas destaca que el problema en Euskadi es menor que en otras regiones. Pero han saltado las alarmas ya que se encuentra entre las comunidades más desiguales. ¿Por qué? La franja que separa a la población pobre o que roza la pobreza del resto de la sociedad vasca es cada vez mayor por «la gran acumulación de dificultades que se acumulan en sus hogares». Y la exclusión social no es solo ganar poco dinero. Va más allá. La imposibilidad de acceder a una vivienda digna es un factor clave. Y este problema afecta a casi medio millón de vascos, un 22,2% de la población. Parte de estos domicilios presentan condiciones «insalubres». En otros, sus moradores no tienen capacidad de hacer frente al alquiler, la hipoteca o los recibos de luz y agua. Aquí también se incluyen los hogares en las que las familias u otros inquilinos viven hacinados -pisos minúsculos, compartidos, etc...- La salud es otro de los indicadores claros de pérdida de calidad de vida. Según Cáritas, en Euskadi 69.000 domicilios «han dejado de comprar medicinas, seguir trata-mientos o dietas por problemas económicos». Y hay 62.000 hogares en los que todos los adultos sufren una discapacidad o enfermedad crónica. A esto se suma que «los servicios de ayuda a domicilio públicos cubren a un porcentaje menor que en el conjunto de España», por lo que «en Euskadi se acude más al mercado para satisfacer estas necesidades»



ESPAÑA TIENE 979.000 GRANDES FORTUNAS TRAS SUMAR OTRAS 33.000 EN UN AÑO

El número de grandes fortunas se ha multiplicado por seis en solo dos décadas y se espera que se incremente otro 42% en los próximos cinco años.

Casi un millón de españoles tienen un patrimonio superior al millón de dólares (896.000 euros al cambio actual), sumando el valor de mercado de sus activos financieros y no financieros (inmuebles y solares) y descontando sus deudas. Ese es el récord que la economía ha alcanzado después de que en el último año el número de ciudadanos considerados estadísticamente ricos haya aumentado en 33.000 personas. De esta forma, España cuenta con 979.000 millonarios y se sitúa como el décimo país en el ranking elaborado anualmente por Credit Suisse, donde se refleja que un 2% de los ricos de todo el mundo son españoles. Esta progresión ha sido imparable en los últimos años, incluso en los periodos de mayor crisis. De hecho, desde el año 2000 el número de millonarios se ha multiplicado por seis veces, desde los poco más de 172.000 que había hace dos décadas, hasta casi el millón actual. El informe de riqueza mundial apunta que los miembros de este selecto club aumentarán hasta un 42% hasta 2024, lo que supondrá que haya casi otro medio millón más de millonarios en cinco años.



Si se afinan aún más esos datos, España ocupa el puesto número 16 entre los países que tienen más ciudadanos ultraricos, esto es, con un patrimonio asignado superior a los 50 millones de euros. En este grupo hay ahora mismo casi 2.200 personas: casi 1.500 tienen entre 50 y 100 millones; otras 685 poseen entre 100 y 500 millones; y 61 españoles disponen de más de 500 millones de euros. Esta realidad contrasta con la de otros grupos, como el de los españoles que tienen más de 100.000 euros de patrimonio y que ascienden hasta 18,3 millones de personas, un 40% de toda la población.

Más fortunas mundiales

Por otra parte, la riqueza de los millonarios ha aumentado un 2,6% este año en todo el mundo hasta los 360.000 millones de dólares. Además, el número de millonarios aumentó un 2,4 % hasta los 46,8 millones, de los que un 40 % viven en Estados Unidos. China ocupa el segundo puesto (con un 10% del total) seguido de Japón (6%) y Reino Unido y Alemania (5%). El estudio del Credit Suisse refleja también cómo continúa una fuerte desigualdad en un mundo donde el 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico mientras que la mitad de la población más pobre posee menos del 1% del patrimonio económico global.



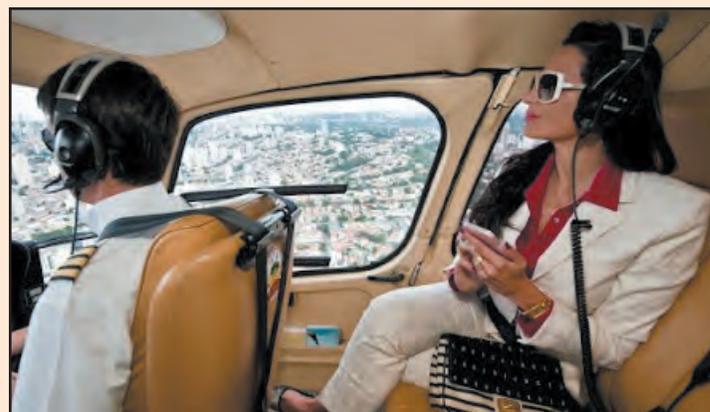
LOS MAYORES RICOS DEL ESTADO AUMENTAN SU FORTUNA

El propietario de Inditex, Amancio Ortega, con 63.000 millones de euros, su hija Sandra y Rafael del Pino lideran la lista.

Las 100 mayores fortunas de España en 2019 son 1.500 millones de euros más ricas que en 2018, un 1% más, hasta alcanzar los 148.200 millones de euros, y Amancio Ortega (Inditex) repite como el español más rico con 63.000 millones (frente a los 58.000 millones del año pasado), según la revista Forbes.

Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, vuelve a ocupar la segunda posición del ranking con una fortuna de 6.000 millones de euros, 4.000 millones más que en el ejercicio anterior, seguida de Rafael del Pino (Ferrovial), que acumula una fortuna de 4.100 millones de euros (frente a los 3.000 millones de 2018) y sube del quinto al tercer puesto. El presidente de Iberostar, Miguel Fluxá, se mantiene en el cuarto puesto, con 3.000 millones de euros, a pesar de que ha reducido su fortuna 500 millones respecto a 2018, seguido de Juan Roig, presidente de Mercadona, que baja del tercer al quinto puesto y acumula una fortuna de 2.700 millones de euros frente a los 3.700 millones del año anterior.

Estas cinco primeras fortunas de la lista suman 78.800 millones de euros, lo que supone el 50,3% del total. De hecho, el patrimonio del fundador de Inditex,



primero en la clasificación, equivale a la suma de los 43 ricos que le siguen. Según Forbes, Ortega ha aumentado su fortuna en el último año en 5.000 millones de euros y mantiene su estrategia de inversión en activos inmobiliarios, cuyo valor neto se estima en 7.500 millones.

Entre las nuevas incorporaciones a la lista destacan las accionistas de Coca-Cola Iberian Partners, Alicia y Mercedes Daurella, que pasan a ocupar el puesto 51 con una fortuna estimada de 500 millones de euros. De las 100 mayores fortunas españolas, 26 de ellas corresponden a mujeres, que acumulan más de 900 millones de euros y entre las que se encuentran, además de Sandra Ortega, Alicia Koplowitz (puesto 8), con una fortuna de 2.000 millones; María del Pino Calvo-Sotelo (10), con 1.700 millones de euros, o Sol Daurella (11) con 1.600 millones.

LOS ALTOS EJECUTIVOS DEL IBEX GANAN 123 VECES MÁS QUE SUS TRABAJADORES

El sueldo medio en las cotizadas cae un 1,2% hasta los 35.810 euros anuales, muy lejos de los 4,4 millones que ingresan sus directivos

Después de años de contención, los salarios comienzan a despegar, según diferentes informes, el último de Adecco, que habla de que en 2018 la remuneración media se elevó un 1,2% hasta los 1.658 euros brutos al mes. Sin embargo, resulta sorprendente que precisamente el sueldo medio haya disminuido en las empresas del Ibex en esa misma



proporción: un 1,2%, una caída que se dispara hasta el 12% en el caso de Iberdrola. Así, los ingresos de los empleados de las grandes cotizadas se redujeron de media hasta los 35.810 euros anuales. A la cabeza de los mayores sueldos se sitúa la inmobiliaria Merlin Properties, con más de 164.000 euros de media entre sus apenas 200 trabajadores, mientras que a la cola está Inditex, con una remuneración media por empleado de 20.865 euros, según el informe 'Quién parte y reparte' elaborado por Oxfam Intermón en el que analiza un año más el comportamiento de las 35 empresas que cotizan en Bolsa.

De igual forma también se han rebajado las ganancias de los altos ejecutivos del Ibex, en más de medio millón de euros -en este caso un descenso del 6,7%- hasta situarse de media en los 4,4 millones de euros. Sin embargo, tres empresas pagaron en 2018 más de 10 millones de euros a su máximo responsable: Naturgy, la antigua Gas Natural (15,5 millones), ACS (13,5 millones) y Banco Santander (11 millones), mientras que sólo una empresa semiestatal, Aena, destina menos de un millón de euros a su presidente, concretamente los 105.000 euros marcados por ley. Pese a esta contención en la remuneración de los grandes directivos de la Bolsa, la brecha salarial que mantienen con el trabajador medio sigue siendo muy elevada, ya que cobran 123 veces el sueldo medio de su empresa. Además, las mujeres que trabajan en estas empresas ganan en promedio un 15% menos que sus compañeros, porcentaje que se eleva hasta el 31% en el Banco Santander, pese a que el mayor sueldo recae en su presidenta, Ana Botín. Y esta desigualdad se refleja también en los



puestos de responsabilidad: aunque casi la mitad de las plantillas de estas cotizadas son mujeres (un 46%), ellas solo ocupan un tercio de los puestos directivos. «Las empresas del Ibex 35 propician el aumento de la desigualdad debido a las enormes diferencias salaria-

les, a la brecha salarial de género, a la insuficiente proporción de sus ganancias que pagan de impuestos y al alto porcentaje de beneficios que destinan al pago de dividendos a sus accionistas», tres de cada cuatro euros, según denuncia Oxfam Intermón. De igual manera, esta ONG hace hincapié en que estas 35 compañías aún mantienen 805 filiales en paraísos fiscales, y eso pese a haberlas reducido un 6% en el último año, y aún tardarían 15 años en reducir su presencia en estos territorios a cero. Según el informe, el desvío de beneficios de todo tipo de empresas hacia paraísos fiscales le cuesta cada año a España 3.250 millones de euros, el equivalente al 13% de la recaudación del impuesto sobre sociedades.

SOLO UNO DE CADA SEIS DIPUTADOS RENUNCIÓ A LA TARJETA DE TAXI

Solo 58 de los 350 diputados del Congreso, lo que supone apenas la sexta parte de la Cámara, renunció la pasada legislatura a la tarjeta personalizada por valor de 3.000 euros al año que el Congreso pone a disposición de sus

señorías para desplazarse en taxi en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

El coste de estas tarjetas depende del uso que se haga de ella, ya que es una ayuda finalista y el Congreso solo abona los viajes que el parlamentario

efectivamente haya realizado. Lo único fijado es el precio máximo por diputado, 3.000 euros al año, lo que supone una media de 250 euros mensuales.

En los apenas cuatro meses que van desde el inicio de la pasada legislatura (el 21 de mayo) hasta el pasado 24 de septiembre, fecha en la que el Congreso quedó disuelto con motivo de la convocatoria de las elecciones del 10 de noviembre, un total de 292 diputados contó con este abono taxi, lo que supone el 83% del hemiciclo. Se trata de 103 de los 123 diputados del PSOE; 63 de los 66 del PP; 56 de los 57 de Ciudadanos; 19 de los 42 de Unidas Podemos; 19 de los 24 de Vox; 13 de los 14 de ERC -el decimoquinto, Oriol Junqueras, tenía sus derechos suspendidos al estar en prisión-, los seis del PNV y 13 del Grupo Mixto, según los datos del Congreso.

Eso significa que en la pasada legislatura, que se extendió durante siete meses, únicamente 58 diputados, el 16,5%, renunciaron a solicitar la tarjeta de taxi: 10 del PSOE, tres del PP, uno de Ciudadanos, cinco de Vox, dos de ERC -uno de ellos, Junqueras- y cua-



tro del Grupo Mixto -incluyendo los tres presos de JxCat, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull-. Fue por tanto Unidas Podemos el grupo en el que más diputados desecharon la tarjeta: 23 renunciaciones -el 54% de la formación capitaneada por Pablo Iglesias- frente a los 19 que sí la demandaron. En total, el Congreso afrontó un gasto de 133.433,60 euros

para pagar estos viajes en taxi, lo que representa una media de 33.000 euros al mes.

Además del taxi, el Congreso cubre a los diputados los gastos de transporte en medio público -avión, tren, automóvil o barco-, así como los derivados del aparcamiento en estaciones de tren y aeropuertos. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario. Si lo que usan es su propio automóvil, se les abona 25 céntimos por kilómetro así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas, siempre con la debida justificación. En esta legislatura corta fueron 139 los diputados que solicitaron ayuda por kilometraje por un total de 97.130,75 euros.

EL 1% MÁS RICO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL POSEE EL DOBLE QUE 6.900 MILLONES DE PERSONAS

Un informe de Oxfam Intermon afirma que en España se emplean 130 millones de horas diarias en cuidados no remunerados, lo que equivale al 15% del PIB.

La desigualdad económica sigue en aumento. En el mundo existen 2.150 millonarios que poseen la misma riqueza que 4.600 millones de personas. En otras palabras, el 1% más rico de la población posee el doble que 6.900 millones de personas, que son casi el 89% de los habitantes de la Tierra. Esta enorme brecha es lo que denuncia Oxfam Intermón en su informe anual de desigualdad, que en la edición de este año 2019 se centra en el trabajo mal o nada remunerado, que de forma mayoritaria es llevado a cabo por mujeres y niñas en todo el mundo.



Pero el informe también se ocupa en cómo las grandes fortunas han seguido aumentando su riqueza durante los últimos años. Así, entre 2011 y 2017 los salarios pro-

medio en los países del G7 (EE UU, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) se incrementaron un 3%, mientras que los dividendos de los accionistas lo hicieron en un 31%, detalla Oxfam. En este sentido, la ONG denuncia que las empresas están sujetas a unos

impuestos «*extremadamente bajos*», lo que permite a los ricos «*aprovecharse*» de los beneficios obtenidos por las compañías de las que son accionistas.

No obstante, se estima que una tercera parte de la riqueza de los millonarios proviene de herencias, y ese patrimonio va generando más riqueza por sí solo. «*Los ricos no tienen más que sentarse y ver cómo crece su dinero gracias a la ayuda de unos asesores muy bien remunerados que han conseguido que su riqueza genere, en promedio, una rentabilidad anual del 7,4% en los últimos 10 años*», explican los autores del informe. Y ponen el ejemplo de Bill Gates, quien sigue teniendo actualmente un patrimonio de 100.000 millones de dólares, el doble que cuando dejó de estar al frente de Microsoft en 2014.

Contribución de las mujeres

Desde Oxfam advierten además de que las actuales cotas de riqueza extrema se asientan también sobre el sexismo, ya que nuestro sistema económico «*está construido por hombres que siguen siendo quienes dictan las normas y se quedan con la mayor parte de los beneficios*». A nivel mundial los hombres poseen un 50% más de riqueza que las mujeres. Además las muje-



res contribuyen a la economía de mercado «*como mano de obra barata e incluso gratuita y, al mismo tiempo, apoyan a los Estados llevando a cabo el trabajo de cuidados que debería estar cubierto por el sector público*».

Según la ONG, el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que realizan mujeres en todo el mundo a partir de los 15 años asciende a 10,8 billones de dólares anuales, lo que equivale a tres veces el valor de la industria mundial de tecnología. Entre los trabajos de este tipo destacan las tareas de cocinar, cuidar de los demás, recoger agua, limpiar o traer leña. Actividades «*esenciales para el bienestar de la sociedad y de la economía*», destaca el informe.

Según sus cálculos, un incremento de sólo el 0,5% adicional en el tipo de impuesto que grava el patrimonio del 1% más rico de la población, permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo en sectores como la educación, la salud y la asistencia a las personas mayores, acabando así con los déficits de cuidados en estos ámbitos, señala Oxfam.

Bajando los datos a España, Oxfam alerta de que en 2018 se emplearon en el país 130 millones de horas diarias en trabajo de cuidados no remunerado, una cifra que equivale a 16 millones de personas trabajando ocho horas sin remuneración o al 15% del PIB nacional, según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por ello se pide al nuevo Gobierno que las trabajadoras del hogar, uno de los colectivos más desfavorecidos, igualen sus derechos laborales al resto de empleados. Además, exigen una renta mínima garantizada y que las empresas paguen un 15% de tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades «*de forma inmediata*». Una medida ya incluida en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos, por lo que con toda probabilidad saldrá adelante cuando se aprueben los Presupuestos Generales de 2020.



EL NOBEL DE ECONOMÍA PREMIA LOS ESTUDIOS PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL MUNDO

El prestigioso galardón recayó en el americano Michael Kremer, la francesa Esther Duflo y el indio Abhijit Banerjee.

El indio Abhijit Banerjee, la francesa Esther Duflo -ambos con nacionalidad norteamericana- y el estadounidense Michael Kremer fueron los elegidos en 2019 para alzarse con el prestigioso Premio Nobel de Economía. Los tres han sido escogidos, tal y como anunció el lunes 14 de octubre en Estocolmo la Real Academia de las Ciencias de Suecia, por sus trabajos para aliviar la pobreza en el mundo. La elección de Esther Duflo supone todo un hito. Se trata de la segunda vez que una mujer recibe este prestigioso premio. Su nombre se suma al de Elinor Ostro, galardonada en el año 2009. Ambas son las únicas mujeres que han conseguido hacerse un hueco en la historia de un premio que cuenta ya con más de medio siglo de historia.

«Los galardonados de este año han introducido un nuevo enfoque para buscar los mejores caminos para luchar contra la pobreza global, concentrándose en aspectos concretos y manejables como, por ejemplo, la búsqueda de las intervenciones más eficaces para mejorar la salud infantil o la educación», resaltó la academia en un comunicado.

En concreto, Kremer, a mediados de la década de los 90, trasladó parte de su investigación del noroeste de Estados Unidos a la Kenia rural, donde realizó varios



ensayos de campo con una ONG local. Escogieron escuelas que necesitaban apoyo y las dividieron al azar en grupos diferentes. Todas recibieron recursos adicionales, pero de forma diferente y en momentos distintos. Sus experimentos demostraron que ni la disponibilidad de más libros de texto ni la introducción de más comidas gratuitas en las escuelas tenían influencia en los resultados de aprendizaje. De esta forma demostró que no se trata de un problema de recursos, sino que muchas veces la enseñanza no está lo suficientemente adaptada a las necesidades de los alumnos.

Por su parte, Banerjee y Duflo, con frecuencia en cooperación con Kremer, realizaron estudios similares en otros campos y en otros países. Así, por ejemplo, como resultado directo de sendos estudios, más de cinco millones de niños en India se han visto beneficiados por programas para mejorar el rendimiento escolar y se han introducido en algunos países subsidios para programas preventivos en salud. Pese a estos avances, la Academia se lamentó de que «más de 700 millones de personas aún subsisten con ingresos extremadamente bajos». Abhijit Banerjee, de 58 años, es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), además de doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Junto a Duflo -con la que además está casado-, codirige el Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL), perteneciente al MIT, que promueve la utilización de métodos científicos para evaluar la eficacia en el empleo de los fondos destinados a la ayuda al desarrollo.



EL PRIMER MINISTRO ETÍOPE, ABIY AHMED, PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2019

Sus esfuerzos para lograr la paz con Eritrea, tras largos años en guerra, le han valido este prestigioso galardón.

Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía ha obtenido el premio Nobel de la Paz 2019, por su papel clave a la hora de acabar con una larga guerra entre Etiopía y Eritrea que se cobró más de 70.000 vidas. Así lo anunció en Oslo el Comité Noruego del Nobel, que lo escogió entre más de 300 candidatos. A pesar de que la favorita en todas las casas de apuestas era la activista Greta Thunberg, la joven sueca no se ha alzado finalmente con el premio.

Ahmed repite nominación después de no lograr el reconocimiento en 2018. A pesar de que algunos pensaban que sus opciones para ganar se habían visto reducidas por el incremento de la violencia étnica y los miles de desplazados de este último año en esta región, finalmente se ha alzado con este prestigioso galardón por sus esfuerzos para lograr la paz con Eritrea.

Etiopía y Eritrea, enemigos históricos, libraron una sangrienta guerra entre 1998 y 2000, con miles de víctimas mortales y refugiados. Las relaciones se reestablecieron en julio de 2018 después de años de hostilidad, gracias, en gran parte, a los esfuerzos de Abiy Ahmed. «Abiy Ahmed ha iniciado importantes reformas que dan a muchos ciudadanos la esperanza de una vida mejor y un futuro más brillante. Pasó sus primeros 100 días como primer ministro levantando el estado de emer-



gencia del país, otorgando amnistía a miles de prisioneros políticos, descontinuando la censura de los medios, legalizando grupos de oposición prohibidos, destituyendo a líderes militares y civiles sospechosos de corrupción, y aumentando significativamente la influencia de mujeres en la vida política y comunitaria etíope. También se ha comprometido a fortalecer la democracia celebrando elecciones libres y justas», destacó el Comité del Nobel.

La oficina del primer ministro emitió un comunicado en el que valoraban el reconocimiento a Ahmed y afirmaban que Etiopía está «orgullosa como país» de esta distinción a uno de sus ciudadanos más ilustres. Con el premio concedido al líder etíope, nacido en 1976 en Beshasha, se quiere «reconocer a todos los actores que trabajan en favor de la paz y la reconciliación en Etiopía y en las regiones del este y noreste de África», apunta el Comité.

Nombrado primer ministro hace tan solo año y medio, llegó al poder acompañado de una gran popularidad entre los etíopes y con promesas de apertura y reconciliación. Logró la paz tras veinte años de guerra y legalizó a los partidos de la oposición que habían sido censurados. Tal era el nivel de entusiasmo que supuso para un país teñido desde hace años con un Parlamento monocolor y líderes de decisiones autocráticas, que medios internacionales como la revista The Economist empezaron de hablar de «Abiymania». Con 43 años, es probablemente el líder político con más educación del país, y en su currículum cuenta con un doctorado, experiencia militar y la



Los presidentes de Etiopía y Eritrea tras alcanzar un acuerdo para la paz

creación de la Agencia de Seguridad de Redes de Información (INSA), servicio de espionaje del país africano. El primer ministro etíope nació el 15 de agosto de 1976 en Agaro, un área rica en recursos naturales y café -el producto estrella de la exportación etíope- de la región de Oromia (suroeste), donde vive el grupo étnico más grande del país, los oromos.

Creció en una familia multicultural formada por una madre amara -el otro gran grupo étnico del país- de religión cristiana ortodoxa y un padre oromo musulmán. Casado y con 3 hijas, Abiy habla con fluidez, además de inglés y amárico (principales lenguas del país), oromo y trigríña. Fueron estas raíces mestizas, unidas a su juventud y el carisma de un líder que se ha ganado la opinión internacional, el signo que trajo esperanza a la población, que lo consideraba la persona que podía liderar la anhelada unidad nacional después de años de protestas constantes de oromos y amaras.

Ahmed comenzó su carrera política sirviendo en el Ejército etíope, con el que participó en misiones



internacionales de paz en varios países, entre ellos Ruanda; y se doctoró en el Instituto de Estudios de Seguridad y Paz de Adís Abeba en 2017. También llegó a ser nombrado ministro de Ciencia y Tecnología en 2015, y fundó la INSA, una agencia de ciberseguridad que ha vigilado de forma masiva a la población etíope, incluidos a disidentes de Europa y América del Norte.

Sin embargo, estas medidas estrella aplaudidas por la comunidad internacional, y ahora por el Comité Nobel de Noruega, se han visto nubladas por algunas críticas y por el hecho de que Etiopía fue en 2018 el país con más nuevos desplazados del mundo, crisis que dejan latente los problemas multiétnicos de una nación a la que Abiy quiso traer la paz.

El Nobel de la Paz también se fue en 2018 a África, al recibirlo el médico congoleño Denis Mukwege, que lo compartió con la activista iraquí yazidí Nadia Murad, ambos distinguidos por sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados.

EL PRIMER MINISTRO DE ETIOPÍA, ABIY AHMED, RECIBE EN OSLO EL PREMIO NOBEL DE PAZ 2019

El líder africano fue galardonado por sus iniciativas para la paz y la cooperación internacional al haber sido pieza clave en resolver el conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea, que duró más de dos décadas.

A sus 43 años, Abiy Ahmed recibió el Premio Nobel de Paz 2019 el martes 10 de diciembre. El primer ministro etíope fue galardonado por sus esfuerzos para resolver el conflicto entre su país y Eritrea, que llevaba dos décadas sin solución. El premio también honró su trabajo y dedicación en la



mediación en África oriental, así como las reformas democráticas que ha emprendido en su país.

"Este es un premio para toda África y para Etiopía, nos sentimos orgullosos como nación", dijo el dirigente africano agradeciendo al Comité Noruego del Nobel, el cual otorga el galardón.

El nuevo Premio Nobel de Paz celebró las inversiones enfocadas a la paz que se han dado en sus dos años en el poder, la liberación de los prisioneros políticos, el cierre de centros de tortura y la libertad de prensa.

Durante la ceremonia de entrega del Nobel, Abiy aprovechó para hacer un llamamiento a la unidad nacional, así como a unirse contra la división y el extremismo, una declaración con la que no eludió las tensiones étnicas al interior de su país.

"Quisiera llamar a todos mis compañeros etíopes a unir sus manos y a ayudar a construir un país que ofrezca Justicia, derechos y oportunidades iguales



El primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, posa con medalla y diploma después de recibir el Premio Nobel de la Paz durante la ceremonia en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2019.

para todos sus ciudadanos", señaló en su discurso de aceptación Abiy, que habló de neutralizar la "toxina del odio con inclusividad, civismo y tolerancia".

La presidenta del Comité Noruego, Berit Reiss Andersen, se refirió a Abiy como el "principal arquitecto" de las negociaciones de paz entre ambos países, sin embargo, aclaró que aún falta mucho por

recorrer ya que varios pasos fronterizos continúan cerrados, adicionalmente se debe trabajar en el progreso de áreas culturales, sociales y económicos del acuerdo entre ambos países.

Reiss-Andersen recordó los "múltiples retos" de Etiopía como la falta de desarrollo económico y los millones de desplazados, si bien elogió las iniciativas tomadas para promover la paz y la democracia como la amnistía política, la lucha contra la corrupción, formar un gabinete paritario y el anuncio de elecciones.

Proveniente de una familia humilde, hijo de padre musulmán y madre cristiana, Abiy, defendió los ideales del Medemer, una palabra originaria de la lengua etíope que alude a la convivencia y la unidad basadas en el amor y el perdón.



El líder africano se dio a conocer en el mundo de la política internacional en el 2018 cuando con tan solo tres meses de haber llegado al poder obtuvo la firma de un acuerdo de paz con su país vecino tras un conflicto fronterizo que tenía estacadas a ambas naciones. Posteriormente, sus propuestas también fueron bien recibidas al impulsar la transición democrática en Sudán y la reconciliación en Sudán del Sur.

EL ACADÉMICO UIGUR ILHAM TOHTI, PRESO EN CHINA, PREMIO SÁJAROV 2019

El Parlamento Europeo concedió el jueves 24 de octubre el premio Sájarov a la libertad de conciencia al catedrático de Economía Ilham Tohti, defensor de los derechos de la minoría uigur en China. Tohti permanece encarcelado en el gigante asiático desde que en 2014 fuera condenado a cadena perpetua en un juicio de solo dos días tras ser culpado de "separatismo".

La candidatura victoriosa fue promovida por el grupo liberal Renew Europe. El premio está dotado con 50.000 euros, aunque ante todo es un potente altavoz para dar a conocer en todo el mundo situaciones de injusticia. Los otros aspirantes al galardón eran la candidatura conjunta de tres brasileños: la activista por los derechos de las minorías Marielle Franco y los ambientalistas Raoni y Claudelice Silva dos Santos -promovida por socialdemócratas, izquierda unitaria y verdes-. Y la de un grupo de estudiantes kenianos que desarrollaron una aplicación para combatir la ablación genital femenina, la opción del grupo de los conservadores y reformistas.

El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, anunció oficialmente el jueves 24 de octubre en Estrasburgo el ganador del máximo reconocimiento que otorgan las instituciones comunitarias a personas que se han distinguido por su defensa de los derechos humanos. A la ceremonia de entrega, el 18 de diciembre, Ilham Tohti no podrá asistir por encontrarse injustamente encarcelado. La elección del disidente uigur, premiado también por el Consejo de Europa, envía un mensaje al Gobierno chino, quien criticó duramente al Parlamento Europeo por nominarlo, pero esa presión no surtió ningún efecto en los europarlamentarios. Si en 2018 incomodaron a Moscú por el mismo motivo al otorgar el reconocimiento a Oleg Sentsov, cineasta ucranio preso en Rusia por aquel entonces



-fue liberado en septiembre de 2019-, ahora la mirada se ha desviado hacia el segundo mayor socio comercial de la UE y experto violador de los derechos humanos al igual que Rusia, con el que los Veintiocho han tratado de tejer alianzas en asuntos como el clima. "Con este premio exigimos que sea liberado inmediatamente por las autoridades chinas, y hacemos un llamamiento al respeto de los derechos de las minorías en China", reclamado Sassoli.

Conocido por sus estudios sobre las relaciones entre los uigures y los han (etnia mayoritaria en China) y partidario de conceder autonomía a Xinjiang, las autoridades chinas impusieron a Tohti una condena ejemplarizante con la que transmitir una imagen de mano dura frente al aumento de la violencia étnica en la provincia. Pekín requisó todos los bienes de Tohti y le mantienen encarcelado desde hace cinco años acusado de favorecer el separatismo. El gobernador de Xinjiang, Nur Bekri, lo señaló como uno de los promotores intelectuales de la disidencia, y lo catalogó como un "difusor de rumores y propaganda incendiaria" a través de su portal de noticias Uyghur Online, cerrado y bloqueado en 2008.

Un millón de uigures, la minoría musulmana de origen turcomano, están retenidos -la mayoría sin juicio- en centros de reeducación con



los que Pekín ha sembrado el territorio, según cifras aceptadas por Naciones Unidas. El último caso que trascendió fue el de Abdurehim Heyit, uno de los grandes poetas y músicos contemporáneos de la cultura uigur, que llevaba en paradero desconocido desde 2017. Sus seguidores denunciaron que es uno más de los musulmanes que China ha encerrado en prisiones y campos de reeducación en esa región para combatir el extremismo. "La población uigur ha sido objeto de una represión sin precedentes por parte del Gobierno chino en los últimos años debido a su identidad étnica y a sus creencias religiosas singulares", critican desde el grupo liberal de la Eurocámara.

Tres activistas brasileños y un grupo de estudiantes kenianos resultaron finalistas

A diferencia de los dos últimos años, cuando el ucranio Sentsov y la oposición democrática de Venezuela confirmaron su favoritismo, esta vez no había un candidato claro. Sobre la mesa estaban los nombres de tres activistas brasileños. Marielle Franco nacida y



criada en una favela, cuyo asesinato el año pasado generó una fuerte conmoción en Brasil y la convirtió en un símbolo de la oposición al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por su rechazo a las milicias paramilitares que dominan el Estado de Río. Y los ambientalistas Raoni y Claudelice dos Santos,

implicados en la lucha por la preservación del Amazonas justo en un momento en que la UE mantiene una tensa relación con Bolsonaro sobre la mejor forma de proteger la selva, considerada uno de los grandes pulmones del planeta.

La otra opción era la de los estudiantes kenianos Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng, Mascrine Atieno e Ivy Akiny. Los cinco desarrollaron una aplicación que permite a las jóvenes solicitar ayuda médica y jurídica antes o después de sufrir una ablación genital, una práctica que según la Organización Mundial de la Salud han sufrido más de 200 millones de niñas y mujeres vivas, incluidas 500.000 en Europa.

LA HIJA DE ILHAM TOHTI RECOGE EL PREMIO SÁJAROV EN NOMBRE DE SU PADRE

El Parlamento Europeo entregó el miércoles 18 de diciembre el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a la hija del activista uigur Ilham Tohti, que se encuentra encarcelado en China.

La hija del activista uigur Ilham Tohti, condenada a cadena perpetua por presuntas actividades separatistas en China, recogió el miércoles 18 de diciembre en nombre de su padre el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2019 que concede cada año el Parlamento Europeo, con un llamamiento para que la comunidad internacional también se sume a las críticas al Gobierno chino.



El presidente Sassoli entrega el Premio Sájarov 2019 a la hija del ganador Ilham Tohti, encarcelado en China.

Aseguró al recoger el premio que era un "honor" aceptarlo en nombre de su padre y estar en el Parlamento Europeo: "Agradezco la oportunidad de contar su historia, porque no puede contarla él mismo", remarcó.

Ilham Tohti, economista de profesión, lleva detenido desde 2014 y, según su propia hija, Jewher Ilham, la familia no sabe a día de hoy ni siquiera dónde se encuentra. La última vez que recibieron noticias de él fue en 2017, aunque sigue siendo uno de los símbolos de la lucha por los derechos de una minoría especialmente perseguida en Xinjiang. «Hoy en día, no hay libertad para los uigures en China», subrayó la hija del

activista, agradecida por la «oportunidad» de poder contar la historia de su padre, ya que «no puede contarla él mismo». «Mi padre, como la mayoría de los uigures, ha sido calificado de extremista violento, como si tuviera una enfermedad que hay que curar y necesitase un lavado de cerebro», lamentó.

En este sentido, criticó que bajo esa «falsa etiqueta de extremismo» hayan sido recluidas «en campos de concentración», alrededor de un millón de personas desde 2017. Pekín se refiere a estos enclaves como campos de «reeducación» y en ellos, según Jewher Ilham, «los uigures se ven obligados a renunciar a su religión, idioma y cultura», en ocasiones bajo torturas y con el riesgo de perder la vida.

Desde abril de 2017, más de un millón de uigures han sido detenidos y llevados a campos de internamiento, donde se ven obligados a renunciar a su identidad étnica y creencias religiosas y a jurar lealtad al gobierno chino.

Jewher Ilham aprovechó la recepción formal del galardón para lanzar un mensaje a la comunidad internacional: «¿Ven algún problema con la forma en la que el Gobierno chino trata a la gente uigur? Si ven un problema, busquen una solución».

El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, aplaudió el activismo de



Tohti, que «logró dar voz a los uigures» con un trabajo en favor del «entendimiento mutuo» entre las distintas partes, y ha reclamado a las autoridades chinas su liberación inmediata e incondicional.

Sassoli reconoció que lo que debería haber sido un momento de «alegría», se ha convertido en realidad en «un día triste». «Una vez más, esta silla está vacía, porque en el mundo en que vivimos, ejercer nuestra libertad de pensamiento no siempre significa ser libres», afirmó.

Pidió la liberación inmediata e incondicional de Ilham Tohti, y agregó: "Quiero recordar el destino de muchos otros ganadores del Premio Sájarov, que actualmente están en prisión y están siendo perseguidos por defender los derechos humanos y las libertades fundamentales". Por su parte, el Alto

Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, apuntó en Twitter que «los Derechos Humanos son universales». «Allá donde estén amenazados, siempre estará la UE», escribió en un mensaje, sin aludir expresamente a China, pero «a buen entendedor».....

Ilham Tohti es un firme defensor del diálogo y de la implementación de las leyes de autonomía regional en China. En 2014, fue sentenciado a cadena perpetua por cargos relacionados con el separatismo. A pesar de esto, sigue siendo una voz de moderación y reconciliación.



FEDERICO MAYOR ZARAGOZA ES GALARDONADO POR EL GOBIERNO VASCO CON EL PREMIO RENÉ CASSIN A LOS DERECHOS HUMANOS

El lehendakari Urkullu hace entrega del Premio René Cassin 2019 al ex director general de la Unesco a Federico Mayor Zaragoza en reconocimiento por su «compromiso por la justicia y la paz» de Mayor Zaragoza.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, entregó el martes 10 de diciembre el Premio René Cassin 2019 que reconoce «el compromiso social y político por la justicia y la paz» del ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, cuya voz «se alza y escucha frente a las corrientes neototalitarias, el auge de la extrema derecha o el unilateralismo». El galardón, que concede anualmente el Gobierno vasco, se entregó con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, en un acto celebrado en la sede de Presidencia (Lehendakaritza), en Gasteiz.

Urkullu destacó que el premio a Mayor Zaragoza «nos ayuda a hacer visible toda una trayectoria, una vida de compromiso con los derechos humanos», y subrayó que la «trayectoria, carisma y palabra» del ex director general de la Unesco «representan un compromiso sostenido con un alto valor de ejemplaridad, siempre al servicio del bien común». «Ese compromiso es un



El lehendakari entrega el Premio René Cassin 2019 a Federico Mayor Zaragoza.

auténtico estímulo para la solidaridad, la justicia y la igualdad, un estímulo para reaccionar ante los atropellos y retrocesos en materia de derechos humanos y convivencia, un estímulo para la paz, la alianza de civilizaciones y el diálogo como vía para solucionar los conflictos», señaló.

El lehendakari destacó que la voz del premiado «se alza y escucha frente a las corrientes neototalitarias, el auge de la extrema derecha o el unilateralismo», y señaló que se trata de una voz «autori-

zada ante la insolidaridad, la discriminación y la desigualdad, también frente a la pasividad ante la emergencia climática». «Una voz autorizada y llena de autenticidad. Coherente y positiva en el impulso continuado de un compromiso social y político por la justicia y la paz», insistió.

Por su parte, Mayor Zaragoza emplazó a «proclamar que todos somos iguales en dignidad» para así «favorecer la transición de una cultura de confrontación a una cultura de paz y no violencia». «Este premio me alienta, cuando ya atardece en mi vida, a seguir trabajando sin descanso en favor de la igual dignidad de todos los seres humanos. Este es el principio de todos los dere-





Federico Mayor Zaragoza, con la Nobel de la Paz Rigoberta Menchu, a quien nombro embajadora.

chos humanos. Debemos proclamar que todos somos iguales sea cual sea nuestro género, sensibilidad sexual, ideología, etnia o color de la piel”, señaló. Tener presente esta máxima debe “favorecer la transición de una cultura de confrontación a una cultura de paz y no violencia”. Hasta ahora, explicó, el mundo ha estado “sometido siempre a un poder absoluto mas-



culino, basado en la imposición y en el dominio y se ha aplicado el si quieres paz, prepara la guerra”. Ahora “ha llegado el momento de la transición histórica de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón” y de decir: “Preparemos la palabra, no la fuerza”, afirmó Mayor Zaragoza, que llamó también a cambiar de forma “radical” los estilos de vida y el “concepto de seguridad” que rige las relaciones internacionales, porque actualmente “mueren miles de personas de hambre cada día mientras se invierten más de 4.000 millones de dólares en gastos militares”.

MICHELLE BACHELET: “EL CAMBIO CLIMÁTICO ES LA MAYOR AMENAZA A LOS DERECHOS HUMANOS DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL”

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, la Alta Comisionada de la ONU resaltó el papel de los jóvenes en la lucha para defender estas garantías, en especial ante la crisis climática.



Hemos contraído una deuda de gratitud con millones de niños, adolescentes y adultos jóvenes que han venido defendiendo esos valores y protestando de manera cada vez más sonora por la crisis que afronta nuestro planeta”, expresa en un comunicado oficial. “Son ellos los que tendrán que sufrir las consecuencias de los actos o la inacción de sus mayores que en la actualidad dirigen los Gobiernos y las empresas, encargados de adoptar las decisiones de las que depende el futuro de los países, las regiones y el planeta en su conjunto”, seña-

ló. En su opinión, la tarea de abordar la emergencia climática y demás crisis de derechos humanos que afronta el mundo no se le puede dejar solo a los jóvenes, por lo que se debe actuar en conjunto, de manera solidaria y urgente. “Entre los múltiples retos a los que se han enfrentado los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial, quizás sea la emergencia climática mundial la que representa una amenaza de mayor magnitud. Desde su repercusión sobre el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda, hasta nuestros derechos a vivir sin discriminación, al desarrollo y la autodeterminación, sus efectos se sienten ya en todos los ámbitos”, dijo Bachelet. La máxima encargada de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que un mundo donde estos principios universales estuvieran menoscabados sería un

mundo en regresión hacia un pasado más oscuro, a una época en que los poderosos podían abusar de los indefensos, con poca o ninguna limitación moral o jurídica. Bachelet recordó que ninguna nación ni ninguna comunidad quedará al margen de la emergencia climática, a medida que su intensidad se recrudece, y aseguró que ya países y comunidades han padecido daños terribles. “La gente pierde el hogar, los medios de subsistencia y hasta la vida misma. Las desigualdades se agravan y cada vez son más las personas que quedan desplazadas. Es preciso que actuemos con rapidez y con principios, y velar por que limiten lo más posible los perjuicios que esta situación causa a los seres humanos y al medio ambiente”, declaró.

La Alta Comisionada también aseguró que los estragos del cambio climático no se detendrán en las fronteras, y que las reacciones fundadas en el “nacionalismo



El cambio climático está provocando y provocará aún más, refugiados climáticos, enfermedades y muerte a miles de personas.

hostil” o en consideraciones económicas a corto plazo, no solo fracasarán, sino que además destruir el planeta.

LA ONU FALLA A FAVOR DE LOS DESPLAZADOS POR LA CRISIS CLIMÁTICA

Los refugiados que huyen de los efectos de la crisis climática no pueden ser obligados a regresar a sus países de origen por parte de los países adoptivos, dictaminó un panel de Naciones Unidas, en una decisión histórica que podría abrir la puerta a una avalancha de reclamos legales de personas desplazadas en todo el mundo.



El Comité de Derechos Humanos de la ONU estaba emitiendo un juicio sobre el caso de Ioane Teitiota, quien solicitó protección en Nueva Zelanda por afirmar que su vida estaba en riesgo en su país natal, Kiribati, una isla del Pacífico que corre el riesgo de convertirse en el primer país en desaparecer bajo el mar debido al aumento de su nivel. El comité falló contra Teitiota basándose en que su vida no estaba en riesgo inminente, pero también señaló que los países podrían violar los derechos internacionales de las personas si los obligan a regresar a países donde el cambio climático representa una amenaza inmediata. “Sin esfuerzos nacionales e internacionales sólidos, los

efectos del cambio climático en los Estados receptores pueden exponer a las personas a una violación de sus derechos”, señaló el fallo. Es poco probable que el fallo tenga un impacto en los ciudadanos de otros países, ya que ni siquiera la grave situación de Kiribati alcanzó el umbral para que la demanda de Teitiota tuviera éxito. Pero la decisión podría tener un impacto significativo en futuras reclamaciones, ya que aumenta el número de personas obligadas a abandonar sus hogares

debido a la intensificación de la emergencia climática. Las sequías, la pérdida de cosechas y el aumento del nivel del mar obligarán a millones de personas a trasladarse a otras áreas o países en los próximos años. En su fallo, el comité citó los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho inherente de la persona a la vida. “Dado que el riesgo de que un país entero se sumerja bajo el agua es un riesgo tan extremo, las condiciones de vida en ese país pueden volverse incompatibles con el derecho a la vida con dignidad antes de que el riesgo se realice”, seña- la el fallo

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA / PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ
“NO PODEMOS SEGUIR DEDICANDO 4.000 MILLONES DE EUROS AL DÍA A LA GUERRA Y LA CONFRONTACIÓN”

El premio René Cassin a los Derechos Humanos 2019, Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO (1987-1999) y actual presidente de la Fundación Cultura de Paz, auténtico paradigma de hombre sensato y cabal, se muestra completamente de acuerdo con Michelle Bachelet en su afirmación de que el cambio climático hoy representa la principal amenaza a los derechos humanos desde la II Guerra mundial, y recuerda que “desde hace muchos años se sabía que la Tierra se estaba deteriorando”. “Cuando hablábamos de paz, no solo teníamos que referirnos a la paz entre los habitantes de la tierra, sino también a la paz entre ellos y el medio ambiente, la ecología y la habitabilidad del planeta” - nos recuerda.

- ¿Qué supone para usted la concesión del Premio a los Derechos Humanos René Cassin 2019 que concede el Gobierno vasco cada 10 de diciembre con motivo de este día Internacional?

- Durante muchos años he estado trabajando en favor de la palabra y de la conciliación; en favor de sustituir el “si vis pacem para bellum”, si quieres la paz prepara la guerra, por “si vis pacem para verbum”, si quieres la paz prepara la palabra, porque realmente, lo que no puede ser es que en el siglo XXI sigamos imponiendo nuestros criterios, sigamos dedicando cada vez mayor número de recursos, hasta cuatro mil millones de dólares al día, a la guerra y a la confrontación; a una enorme maquinaria bélica, cuando sabemos que la mayor parte de los problemas podrían haberse resuelto en un sistema multilateral



democrático a través de la paz, a través de la conversación y a través de la conciliación. Por eso, para mí, el premio René Cassin es un estímulo adicional para seguir luchando en favor de la igual dignidad de todos los seres humanos.

- ¿Está usted de acuerdo con Michelle Bachelet quien recientemente ha declarado que el cambio climático puede considerarse como la principal amenaza a los derechos humanos desde la II Guerra Mundial?

- Estoy completamente de acuerdo en que esta es una cuestión adicional de vital importancia. Desde hace muchos años sabíamos que la Tierra se estaba deteriorando y que cuando hablábamos de paz, no solo teníamos que referirnos a la paz entre los habitantes de la tierra, los seres humanos, sino también a la paz entre ellos y el medio ambiente, la ecología y la habitabilidad de la Tierra. Ahora es verdad que la naturaleza se ha deteriorado muchísimo y eso que desde el año 1947, ya en la UNESCO se estableció la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y se establecieron los programas hidroló-



gico, geológico y oceanográfico, y el gran programa El Hombre y la Biosfera. Al cabo de unos años, a principios de los años setenta, Aurelio Peccei fundó el Club de Roma y nos dijo: “ojo, que hay límites al crecimiento”, tenemos que pensar en la gente que va a vivir dentro de unos años en la Tierra. Y nueve años después, en 1979, se alertó la Academia de Ciencias de los Estados Unidos que no sólo aumentaba la emisión de CO2 sino que disminuía la capacidad de recaptura de los océanos. Más adelante logramos poner seis satélites para “vigilar” los océanos, que son los dos tercios de la piel de la Tierra y advertimos de que si se fundía el Ártico, sería irreversible... ¿Te imaginas qué responsabilidad inmensa con las generaciones venideras, dejarles una situación irreversible, que ya no tiene retorno? El Ártico ya no se volverá a constituir, no volverá a haber las condiciones para que exista otra vez un casquete polar, que hacía una gran refracción de los rayos solares. Ya se está empezando a agrietar la Antártida, y todos nosotros mirando hacia otro lado en lugar de seguir las directrices de personas tan sensatas como el ex presidente de los EE.UU, Barack Obama, que en el año 2015 no sólo firmó los acuerdos de París sobre Cambio Climático, sino que lo hizo acompañado de China e



Mayor Zaragoza agradece el galardón, reivindicando una cultura de paz y de respeto al medio ambiente.

India. ¡Y el Papa Francisco!, un Papa que ha escrito una encíclica “ecológica”. Digo todo esto para que veamos que cuando Michelle Bachelet dice ahora esto, tiene toda la razón. Después de estos momentos que fueron como una pausa de serenidad y de esperanza en el año 2015, en la que se firmaron los acuerdos de París sobre Cambio Climático y la resolución de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecida para determinar los cambios que precisa en estos momentos el planeta, llega el Señor Trump y dice que no los va a seguir, y lo acaba de reafirmar en la Cumbre de la Tierra celebrada en Madrid, la COP 25 ¿Pero cómo se puede tolerar esto?, ¿cómo podemos dejar que el mundo siga bajo las directrices de una sola persona, porque todo eso del G-6 y del G-7, del G-8 y del G-20, no son más que excusas, porque en el fondo no hay más que una fuerza política, el Partido Republicano de los Estados Unidos? Y no hay nadie que se atreva a decirle al señor

Trump que no se puede dejar a las generaciones venideras un legado totalmente degradado que comprometa su salud y su desarrollo. Yo espero que sin mayor demora nos daremos cuenta de que esta situación no deben tolerarse.

- La desigualdad es otra de las principales amenazas contra los Derechos Humanos

- No cabe la menor duda de que las desigualdades irán en aumento, si el mundo no reacciona y pasa del neoliberalismo absoluto representado por el Partido Republicano de los Estados Unidos a una democracia a escala mundial y nacional de cada país, porque las desigualdades son cada vez más patentes. Aquí mismo en España, la última crisis ha generado una gran cantidad de multimillonarios al tiempo que se ha originado una enorme brecha social. Hoy hay muchísimas personas que no pueden llegar a fin de mes y viven en condiciones de auténtica pobreza. No nos engañemos, porque el principal reto



que hoy tenemos es erradicar esta desigualdad que existe en todo el mundo y que genera protestas masivas. Fijate en estos momentos en el mundo. Mires donde mires, hay protestas.

- La ONU acaba de alertar sobre ello recientemente
 - ¡Claro!, mira Chile, que era el ejemplo de neoliberalismo en América Latina, cómo está. Y mira en Argentina lo que ha sucedido, ¿Por qué?, pues porque son los mercados los que mandan, son estos grandes consorcios multimillonarios. Oxfam-Intermón informa que no llegan a veinte-, los que imponen sus directrices. Y observa también lo que está sucediendo en Colombia, en Bolivia, en Venezuela... Todo esto lo provocan los mercados que buscan dónde está el gas, el petróleo, el coltán, etc. Lo que tenemos que hacer es cambiar de vida y preocuparnos por nuestros descendientes". Vamos a mirar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a decirles: "no os vamos a decepcionar", "no os vamos a dejar el legado de una vida con una calidad ya deteriorada". Lo que es cierto es que pones el dedo en la llaga cuando dices que lo que en estos momentos estamos haciendo es aumentando la brecha de la desigualdad cuando el principio de todos los derechos humanos es la igualdad de todos los seres humanos sin excepción, la igual dignidad de todos, sea cual sea su ideología, creencia, étnia, sensibilidad sexual o cualquier aspecto que se pueda poner en el trazado de un semblante humano. Todos somos iguales en dignidad, sin excepción. Esto es algo que ahora tenemos que perseguir, y estoy bastante esperanzado porque, a pesar de que los hombres hemos dominado el mundo desde que hay memoria histórica están progresivamente compartiendo, y se puede comprobar que el poder absoluto masculino se está "equilibrando" desde hace 20-25 años. Ya se empieza a apreciar el papel de la mujer, quien será según Nelson Mandela, "la piedra angular de la nueva era". Ojalá, la mujer y la juventud nos den un relevo



Federico Mayor Zaragoza junto a su amigo Nelson Mandela.



Federico junto Yasir Arafat y Shimon Peres tras la firma de la Declaración de Paz para Oriente Próximo

que permita que estas brechas sociales disminuyan y permitan que la conciliación y la palabra sustituyan a la fuerza y la imposición.

- ¿Se podrá alcanzar algún día el ya famoso objetivo del milenio "pasado", que apostaba por la erradicación del hambre en el mundo?

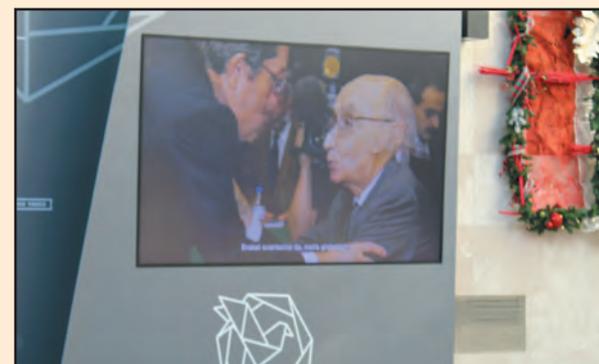
- Repito esto sin cesar, sin cesar: cada día mueren de hambre unas 20.000 personas, la mayoría niñas y niños de uno a cinco años de edad, al mismo tiempo que se invierten en armas y gastos militares 4.000 millones de dólares. ¡Esto no puede ser! Y encima ahora Donald Trump acaba de pedir más dinero para defensa y se lo han dado, todos los países. Porque en el fondo son los grandes productores de armamento los que mandan en el mundo. Lo que tenemos que hacer ahora es decir: "a partir de ahora mandaremos los pueblos", como reza la primera frase del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, que es una maravilla de lucidez, en el año 1945, en la que se afirma: "Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra". Pues ahora les diremos: "Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras una habitabilidad deteriorada y una disminución de la calidad de vida". La gente ya puede expresarse ahora a través de la tecnología digital, ya podemos tomar la palabra, ya no tenemos que esperar a que unos gobernantes, irresponsables la mayoría de ellos, obedezcan ciegamente al señor Trump y a quienes les dan instrucciones en contra de la ecología y de la calidad de vida en la Tierra. Yo por eso tengo la esperanza puesta sobre todo en la mujer y en la juventud.

- ¿Cuándo se creó la Fundación de Cultura de Paz y cuáles son sus objetivos y las actividades que desarrolla?

- La Fundación Cultura de Paz se constituyó a mi regreso de la UNESCO en el año 2000 y tiene la sede en la

Universidad Autónoma de Madrid y representa la continuación lógica de lo que había hecho en la UNESCO durante los años que tuve el honor de representar la dirección general. En el año 1989, en el corazón de África, en la localidad de Yamassoukro, de Costa de Marfil, se inició el gran programa "Cultura de Paz" y se proclamó que "la paz es un comportamiento cotidiano", que no es algo que se decide únicamente entre las naciones, sino que la paz empieza por uno mismo, para que cada día nosotros en nuestro comportamiento diario seamos gente pacífica que utiliza la palabra y no la fuerza, que utiliza la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Diez años después conseguí que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara una resolución sobre la "Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz". Fue la primera vez que el concepto de Cultura de Paz, que algunos ya habían mencionado, como el padre Mc Gregor, establecía que había que cambiar la tradicional cultura de guerra por una cultura de paz. También en Alemania (Tübingen) existía una asociación que abogaba por esta corriente de cambio de mentalidad cultural en favor de la paz. Con la UNESCO ya se estableció a escala mundial, un programa de acción sobre una Cultura de Paz. Y después he continuado trabajando desde la Fundación Cultura de Paz, en Madrid, para ir delineando aquellas acciones relacionadas sobre todo con la educación, una educación que incluya la paz como comportamiento cotidiano, con el desarrollo sostenible y con la responsabilidad que tienen los medios de comunicación.

Otras actividades que se llevan a cabo desde la Fundación Cultura de Paz, son la difusión de documentos como la propia Declaración y Programa de acción sobre una Cultura de Paz o la Carta de la Tierra, que es un gran referente que debería imponerse en todas las escuelas y en todos los grados escolares porque es un documento excepcional como guía, para nuestra hoja de ruta cotidiana. También hay actividades relacionadas con el desa-



Federico Mayor Zaragoza saludando al Premio Nobel de Literatura 1998, José Saramago.



Dos viejos amigos. Kepa Pérez, con Federico Mayor Zaragoza, durante la entrega del premio René Cassin.

rollo y con la igualdad de la mujer y del hombre basadas en la igual dignidad de todos los seres humanos sin excepción. Estos son los grandes ejes programáticos que desarrollamos y que forman parte de la resolución adoptada por Naciones Unidas en 1999.

- ¿Qué futuro augura a los derechos humanos en los próximos años?

- Si continúa esta reacción popular, auguro un futuro muy bueno. Si no la hay, la verdad es que no habría lugar para la esperanza. Pero yo creo que los seres humanos nos daremos cuenta de que no podemos seguir actuando al dictado de los grandes poderes mediáticos que nos dicen que lo que tenemos que hacer es comprar, consumir, viajar, invertir. Y esto es contrario precisamente a la educación. La educación, según decía Don Francisco Giner de los Ríos, es dirigir la propia vida, es ser uno mismo. Por eso cuando hablo de Cultura de Paz hablo de comportamiento cotidiano. Esto es educación. Como establece la UNESCO en su artículo primero, "Educación es ser libres y responsables". Y para esta libertad y responsabilidad, ahora que ya podemos expresarnos y no somos personas temerosas, obedientes y silenciosas, sino que podemos manifestar aquello que queremos. Ya ha llegado, por fin, el momento en el que puede haber grandes clamores populares, tanto presenciales como en el ciberespacio, para que haya una solución, y ésta, para mí, es el multilateralismo democrático. Es decir, que sean todos los países, en este momento 196, y no sólo unos pocos, los más poderosos, que en el fondo es el G-1, los que manden en el mundo. Esta es la única posibilidad que advierto para que los derechos humanos, que son inherentes a cada persona, sean plenamente respetados.

ÍNDICE

PRÓLOGO	4
EDUCANDO PARA ALCANZAR UN MUNDO SIN GUERRAS	5
Fotopalabra. Las consecuencias de la guerra	6
Los menores se convierten en un objetivo de guerra en los conflictos armados.....	12
La falta de agua potable es más mortal que las balas para los niños en las zonas de conflicto.....	12
Siria	
Los sirios que huyeron durante la guerra han empezado a regresar a algunas ciudades, pero solo encuentran ruinas.....	14
Los civiles quedan atrapados en el último reducto de Estado Islámico en Siria.....	16
Los kurdos arrinconan al Estado Islámico en su último bastión sirio.....	17
Termina la guerra contra el califato, sigue la guerra contra el Estado Islámico.....	18
Una semana sangrienta en el olvidado conflicto sirio.....	19
Las sanciones castigan a los enfermos de cáncer sirios.....	20
Erdogan incendia el norte de Siria.....	21
Éxodo de 60.000 civiles sirios para alejarse de la frontera con Turquía.....	23
EEUU deja el norte de Siria en manos de Rusia.....	24
Los kurdos sirios comienzan la retirada de la frontera con Turquía.....	26
Pacto para que Rusia y Siria echen a los kurdos de la frontera turca.....	27
EEUU mata al líder del Estado Islámico en una operación en Siria.....	28
El Estado Islámico anuncia un nuevo líder.....	31
El Pentágono admite que mantiene tropas en Siria para quedarse con el petróleo.....	32
El tío del presidente sirio blanqueó 600 millones en España desde los ochenta.....	33
La llama de Al-Bagdadi guía al yihadismo.....	35
Afganistán	
Atentados talibanes para tensar la negociación de paz.....	36
Matanza yihadista en Kabul en pleno proceso de paz con los talibanes.....	37
Un bombardeo de EEUU mata a 25 afganos que “recogían piñones”.....	38
Al menos 48 muertos en dos ataques suicidas perpetrados por los talibanes en Afganistán.....	39
Irán	
El terror suní vuelve a golpear a la Guardia Revolucionaria de Irán.....	40
Irak	
La ONU confirma 269 muertes en Irak.....	41
Los iraquíes desafían la brutalidad policial para protestar por la corrupción y el paro.....	42
Una sangrienta “primavera árabe” iraquí.....	43
Un mes de protestas en Irak que deja más de 250 muertos.....	44
El Líbano e Irak viven su primavera árabe en contra de la corrupción.....	48
África	
Los países autoritarios africanos privan de internet a su población para evitar la crítica.....	49

África no avanza en el respeto a los derechos humanos.....	51
Marruecos	
El muro marroquí del Sahara Occidental.....	55
La gran dictadura marroquí.....	58
Expulsados del Sahara cuatro parlamentarios vascos.....	62
Aminatou Haidar: “La UE debe hacer algo para evitar la guerra en el Sahara”.....	63
Camerún	
Boko Haram corta las orejas a ocho mujeres en Camerún.....	64
Túnez	
El terror vuelve para desestabilizar Túnez.....	64
Nigeria	
Rescatan a 300 jóvenes torturados en un reformatorio islámico en Nigeria.....	66
Kenia	
Los yihadistas de Al-Shabaab vuelven a golpear el corazón de Nairobi.....	67
Somalia	
La milicia islamista provoca una nueva masacre en Somalia.....	68
El terror de Al-Qaida reaparece en Somalia.....	69
Al menos 92 muertos en un ataque con coche bomba en Mogadiscio.....	70
Mali	
Casi cien muertos por una venganza entre etnias en Mali.....	71
Burkina Faso	
Seis muertos en un ataque contra una iglesia católica en Burkina Faso.....	72
La miseria alimenta el auge yihadista en Burkina Faso.....	72
La violencia en Burkina Faso deja casi 270.000 desplazados en los últimos tres meses.....	74
La violencia intercomunitaria se adueña de Burkina Faso.....	74
Libia	
La guerra de Libia se ceba con los migrantes.....	76
Egipto	
El terror vuelve a golpear Egipto.....	77
Un coche bomba causa más de 20 muertos en El Cairo.....	78
Ruanda	
Ruanda conmemora los 25 años del genocidio tutsi.....	80
Sudán	
La Justicia de Sudán golpea por primera vez contra Al Bashir.....	81
“Terminator” Ntaganda es hallado culpable por la Corte Penal Internacional.....	81
Venezuela	
Al culpa a Maduro de la ejecución selectiva de manifestantes en Venezuela.....	82
Unos 5.000 venezolanos abandonan cada día su país.....	83
El régimen de Maduro asesina a un militar contrario a él.....	85
La ONU atribuye a Maduro 7.000 asesinatos.....	86

El país por la ventana en una boda del chavismo87
 Las sanciones de EEUU vulneran los derechos humanos en Venezuela88
Nicaragua
 La revolución perdida de Nicaragua90
Colombia
 21 muertos en un ataque en Colombia contra una academia de Policía92
 El acuerdo de paz de Colombia en peligro93
 Demasiadas muertes en Colombia.....94
 Dimite el ministro de Defensa de Colombia por ocultar la muerte de ocho menores en un bombardeo ...96
 La muerte de Dilan trae otra jornada de paro nacional.....97
 El Cauca, tierra minada para los líderes sociales en Colombia98
México
 México registra el nivel más alto de violencia en 21 años con 20.135 homicidios en 6 meses99
 La detención del hijo de “El Chapo” desata el caos en Culiacán100
Cuba
 Cuba, otra revolución fracasada.....101
Honduras
 Dos matanzas en cárceles hondureñas dejan 37 muertos104
Chile
 Protestas en Chile: 4 claves para entender la furia y el estallido social en este país105
 La ONU corrobora los abusos policiales en Chile109
Arabia Saudí
 El plan secreto de Bin Salmán para acabar con la disidencia110
 Arabia Saudí ejecuta a 37 acusados de “terrorismo”, uno de ellos crucificado110
 Arabia Saudí crucificará a un joven que se manifestó contra el Gobierno con 10 años111
 Un año sin respuestas sobre el destino de Khashoggi112
 Riad absuelve a los principales acusados del “caso Kashoggi”113
Israel
 La ONU cree que la represión israelí en Gaza podría constituir un crimen de guerra115
 Israel levanta un nuevo muro en la Franja de Gaza116
 Un ataque suicida del EI mata en Irak a un centenar de peregrinos, la mayoría chiíes iraníes.....116
 Israel arrasa decenas de viviendas palestinas tuteladas por la ANP118
 Condenas a la demolición de viviendas palestinas118
 Israel promueve 2.300 casas y legaliza colonias en Cisjordania119
 Los bombardeos israelíes matan a 16 palestinos entre ellos un bebé de 14 meses119
 Israel traslada a Gaza su pulso con Irán.....120
 Israel investiga la muerte de ocho civiles en un bombardeo en Gaza.....122
 Israel, la primera “democracia” en expulsar al representante de Human Rights Watch.....123
 La muerte en vida de Diaa124
 Canadá abandona a Israel en la ONU para apoyar a los palestinos junto a otros 165 países126

Yemen
 La ONU pide a Riad que aclare el ataque más sangriento del año a Yemen126
 El informe que acusa a EEUU, Francia y Reino Unido de ser cómplices de posibles crímenes en el conflicto 127
Yemen
 EEUU fue testigo pasivo de las atrocidades cometidas en Timor Oriental129
Rusia
 El Kremlin desactiva la protesta por Golunov antes de que se convierta en permanente130
 La interferencia rusa en las elecciones de EEUU fue dirigida a los afroamericanos.....131
 Más de mil detenidos en la protesta por unas elecciones libres en Moscú132
 Putin hace pagar a la oposición el castigo en las urnas con registros masivos135
 Rusia planta cara a EEUU y deja el tratado de desarme136
 Rusia advierte del riesgo de una guerra nuclear137
 El Papa Francisco rechaza en Japón las armas nucleares137
 Alemania acusa a Rusia de terrorismo de Estado138
 Rusia pone en servicio su “arma del futuro”139
Hong Kong
 El ataque de los manifestantes sacude Hong Kong140
 Nueva protesta en Hong Kong entre gases lacrimógenos de la Policía141
 Escalada de protestas en Hong Kong143
 La Policía reprime a tiros en Hong Kong.....144
 Parálisis total en Hong Kong145
China
 La nefasta política de natalidad pasa factura a China146
 Crisis de natalidad en China148
Birmania
 Un millón de rohingyas se hacinan en condiciones infrahumanas150
 La ONU denuncia que la violencia sexual contra los rohingyas indica genocidio153
 Unos 100.000 rohingyas reclaman diálogo en el segundo aniversario de la crisis154
 El genocidio de los rohingyas, a juicio por primera vez en La Haya155
EE UU
 Trece niños asesinados en seis meses en San Luis, EEUU156
Ataques del EI en Europa / Reino Unido
 Dos muertos por arma blanca en un ataque terrorista en Londres157
 Dos ataques con cuchillo en el centro de Londres y La Haya159
Ataques del EI en Europa / Holanda
 Un tiroteo con tres víctimas mortales desata la psicosis terrorista en Holanda160
Ataques del EI en Europa / Alemania
 Terror antisemita en el Este de Alemania162
 Berlín califica el ataque de Halle de “ultraderechista” y “antisemita”163
Ataques del EI en Europa / Nueva Zelanda
 49 muertos en un atentado supremacista contra dos mezquitas en Nueva Zelanda164

Ataques del EI en Europa / Nueva Zelanda

Un doble atentado contra una iglesia cristiana en Filipinas deja 20 muertos166

Ataques del EI en Europa / Sri Lanka

Masacre terrorista en el Domingo de Pascua en Sri Lanka167

Los yihadistas de Sri Lanka reviven el horror suicida de los Tigres Tamiles169

Un ataque yihadista en Burkina Faso deja 37 muertos170

EDUCANDO PARA ALCANZAR UN MUNDO MÁS JUSTO E IGUALITARIO.....172

El drama de los refugiados y los emigrantes

La ofensiva turca en Siria desplaza a cien mil personas173

Las políticas de Trump están buscando la crisis de inmigración que buscaba174

Trump se retira del Tratado de Armas de la ONU176

Trump juega con México hasta el final177

El horror de los niños detenidos en la frontera vuelve a sacudir EEUU178

UNICEF denuncia desatención de menores migrantes en EEUU180

Bachelet horrorizada por las condiciones que sufren los migrantes y refugiados en EEUU181

Impotencia e indignación por de la muerte de un padre y su hija en aguas de Río Bravo183

La ONU critica la política migratoria de EEUU184

Trump da poder a Inmigración para ejecutar deportaciones “expres”185

Trump anuncia una ley que permite retener a niños inmigrantes por tiempo indefinido186

Donald Trump aumenta el plazo de arresto de familias migrantes188

EEUU negará el visado a aquellos que no puedan pagar un seguro médico189

Investigan la muerte de migrantes en EEUU190

777 inmigrantes murieron ahogados al intentar llegar a España en 2018.....190

Italia teme otra marea humana Libia191

Más de 80 desaparecidos en el naufragio de un bote hinchable frente a Túnez192

Mueren 1.551 inmigrantes durante el año de puertos cerrados en Italia193

Mueren más de un centenar de migrantes en e peor naufragio del año en el Mediterráneo.....194

Mueren al menos cinco personas al volcar una patera en Lanzarote.....195

Rescatados casi 300 migrantes en el Mediterráneo en apenas dos días.....196

Grecia cerrará los campos de refugiados en las islas y creará centros de detención196

Ascenden a cuatro los muertos en el naufragio de una patera en Melilla197

El número de inmigrantes que llega a la UE desciende a mínimos históricos198

39 muertos en un camión frigorífico de transporte ilegal de inmigrantes a Reino Unido199

Los “trenes de la muerte” toman impulso200

El Vaticano avala el modelo vasco para afrontar el reto migratorio203

La explotación de los trabajadores del envasado de marisco.....205

La explotación de los fabricantes de ladrillos en Bangladesh206

Madagascar, la fiebre de los zafiros208

La impunidad en la trata de personas se hace esclavitud.....211

La crisis alimentaria mundial lleva el hambre a 821,6 personas212

820 millones de habitantes en el mundo padecen hambre.....213

113 millones de personas necesitaron asistencia alimentaria urgente en 2018214

Hambruna en Afganistán215

En Pakistán mueren 42 de cada mil niños al nacer, la tasa más alta del mundo217

Alcohol, drogas y ansiedad:el coste de la crisis para los griegos220

El estallido social en Latinoamérica surge de la corrupción y la desigualdad221

La población sudamericana se rebela contra la desigualdad222

Las protestas en Bolivia dejan nueve muertos y más de un centenar de heridos226

La Policía de Bolivia usa gases lacrimógenos para dispersar una marcha con féretros227

Las protestas en Latinoamérica se extienden a Colombia228

Para evitar las protestas mundiales hay que hacer frente a la desigualdad social230

El desplome de las materias primas es el origen de las movilizaciones sociales233

Argentina: aumento del hambre propio de situaciones de guerra234

Uno de cada seis familias españolas cayó en la pobreza en la crisis y no se ha recuperado236

Cáritas detecta un millón más de españoles en exclusión social que hace una década237

1.557 familias han sido atendidas por pobreza energética en Euskadi240

Más de 1,3 millones de hogares siguen en situación de pobreza energética240

Crece la pobreza en Euskadi y alcanza a 131.000 vascos241

La mitad de los hogares monoparentales está en riesgo de pobreza o de exclusión242

Salarios bajos y ocupaciones parciales hunden en la pobreza al 13% de los trabajadores243

Los datos que miden la pobreza en Euskadi empeoran pese al clima de recuperación.....244

Euskadi logra estabilizar sus niveles de pobreza.....246

Uno de cada cinco hogares monoparentales vascos se encuentra en riesgo de pobreza247

Más de cien mil vascos van a trabajar cada mañana pero sus familias rozan la pobreza247

España tiene 979.000 grandes fortunas tras sumar otras 33.000 en un año249

Los mayores ricos del Estado aumentan su fortuna250

Los altos ejecutivos del Ibex ganan 123 veces más que sus trabajadores250

El 1% más rico de la población mundial posee el doble que 6.900 millones de personas252

El nobel de Economía premia los estudios para reducir la pobreza en el mundo.....254

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, Premio Nobel de la Paz 2019255

El académico Uigur Ilham Tohti, preso en China,Premio Sajarov 2019258

La Hija de Ilham Tohti recoge el Premio Sajarov en nombre de su padre259

Federico Mayor Zaragoza es galardonado por el Gobierno vasco con el Premio René Cassin” ..261

Michelle Bachelet: “El Cambio climático es la mayor amenaza a los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial”262

La ONU falla a favor de los desplazados por la crisis climática263

Federico Mayor Zaragoza / Presidente de la Fundación Cultura de Paz

“No podemos seguir dedicando 4.000 millones de euros al día a la guerra y la confrontación” ..264

ÍNDICE268



A.D.D.H.
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA
DE LA DIGNIDAD HUMANA



DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA
Giza Eskubideen Bulegoa
Negociado de Derechos Humanos